

**Organizadoras**

**Cláudia Cinara Locateli**

**Karem Lorena Gallardo Sejas**

**Thaís Janaina Wenczenovicz**

# Constitucionalismo e Gênero:

## Perspectivas Críticas e Interdisciplinares



**UNOESC**  
Fazendo parte da sua vida



**CAPES**

**EDITORA  
UNOESC**



**COMITÉ DE  
GÊNERO**  
ÓRGANO JUDICIAL DE BOLIVIA Y  
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL

© 2025 Editora Unoesc

Direitos desta edição reservados à Editora Unoesc

É proibida a reprodução desta obra, de toda ou em parte, sob quaisquer formas ou por quaisquer meios, sem a permissão expressa da editora.

Fone: (49) 3551-2065 - www.unoesc.edu.br/editora - editora@unoesc.edu.br

Editora Unoesc

Coordenação  
Tiago de Matia

Agente administrativa: Simone Dal Moro  
Revisão metodológica: Carlos Libman  
Projeto gráfico e capa: Simone Dal Moro  
Diagramação: Simone Dal Moro

Esta obra possui apoio da CAPES.

Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP)

C758	Constitucionalismo e gênero: perspectivas críticas e interdisciplinares / Organizadoras Cláudia Cinara Locateli, Karem Lorena Gallardo Sejas, Thaís Janaina Wenczenovicz. – Joaçaba: Editora Unoesc, 2025. 248 p. : il. ; 23 cm  ISBN e-book: 978-85-8422-254-4 Inclui bibliografias Inclui índice  1. Direitos humanos. 2. Direito do trabalho. 3. Discriminação no emprego. 4. Igualdade. I. Locateli, Cláudia Cinara, (org.). II. Gallardo Sejas, Karem Lorena, (org.) III. Wenczenovicz, Thaís Janaina, (org.).  Dóris 341.12191
------	---

Ficha Catalográfica elaborada pela Biblioteca da Unoesc de Joaçaba

**Universidade do Oeste de Santa Catarina – Unoesc**

Reitor

Ricardo Antonio De Marco

Vice-reitores de Campi

Campus de Chapecó

Carlos Eduardo Carvalho

Campus de São Miguel do Oeste

Vitor Carlos D'Agostini

Campus de Videira

Carla Fabiana Cazella

Campus de Xanxerê

Genesio Téó

Pró-reitora de Ensino  
Jaciney Aparecida Danielli

Pró-reitor de Pesquisa, Pós-  
Graduação, Extensão e Inovação  
Kurt Schneider

Diretor Executivo

Jarlei Sartori

**Conselho Editorial**

Kurt Schneider  
Tiago de Matia  
Aline Pertile Remor  
Marcos Cordeiro Freitas  
Juliano Spuldaro  
Ieda Margarete Oro  
Robison Tramontina

Thaís Janaina Wenczenovicz  
Simone Silveira  
Maurício Vicente Alves  
Rodrigo Geremias  
Marconi Januário  
Marilda Pasqual Schneider  
Camila Rostirola

**A revisão linguística é de responsabilidade dos autores.**

## UM BREVE PRÓLOGO A LA ESPERANZA DEL CONSTITUCIONALISMO FEMINISTA

En un contexto global de reacción neoconservadora, en el que las alianzas entre patriarcado y capitalismo golpean con fuerza -y éxito- las conquistas igualitarias alcanzadas en los sistemas constitucionales, irrumpe esta obra colectiva, un trabajo de resistencia y creatividad feministas. El punto de partida epistémico es común: la convicción de que toda transformación social exige cuestionar las narrativas hegemónicas y recuperar las voces silenciadas, que un enfoque crítico del derecho no hace análisis simples ni busca respuestas cómodas. Por el contrario, exige repensar los fundamentos mismos de nuestras instituciones y prácticas jurídicas.

En este sentido, lejos de posicionamientos teóricos y metodológicos «clásicos», aquellos que siguen defendiendo que el derecho es un sistema autosuficiente, este trabajo pone en diálogo múltiples perspectivas y disciplinas para analizar y combatir la violencia estructural y las desigualdades de género. De hecho, esta es la única forma de evidenciar que la subdiscriminación de las mujeres no es incidental ni residual. Es, más bien, producto de un hecho histórico que hemos sido incapaces de resolver: que el proyecto constitucionalista se asentó sobre varias estructuras de poder, la patriarcal, la colonial y la capitalista, para definir desde ahí sus reglas de funcionamiento.

Desde un feminismo decolonial, anticapitalista e interseccional, los capítulos de esta obra colectiva abordan de lleno las categorías fundantes de los sistemas demoliberales: ciudadanía, poder, dignidad humana, igualdad. El marco teórico de las contribuciones bebe de un constitucionalismo feminista y crítico que, más allá del estudio de los textos jurídicos, atiende a las tensiones entre derecho y realidad social. Desde esta mirada, las constituciones son vistas como campos en disputa y el constitucionalismo pasa de ser un mero relato formal para convertirse en una herramienta política, de resistencia y transformación.



Quiero poner en valor todas estas cuestiones porque, quizá, sean comunes en los contextos académicos de las autoras. Sin embargo, y aquí reside también parte del valor de esta obra colectiva, dichas aportaciones teóricas y metodológicas son especialmente luminosas para la academia constitucionalista comparada y, concretamente, para el contexto jurídico al que pertenezco, el español. No solo nos enseña a incorporar matrices de análisis feminista e interseccional en el estudio del constitucionalismo, algo que sigue siendo marginal en esta academia jurídica, sino a reconocer los límites de la aproximación eurocéntrica al derecho.

Igualmente, no quisiera que pasara inadvertido un hecho que, considero, no es casual. Esta es una obra colectiva fruto de un trabajo concebido, coordinado y escrito íntegramente por mujeres académicas, concretamente pertenecientes a los contextos brasileño y boliviano. Frente a unas academias que han tendido a invisibilizar el pensamiento de las mujeres, que han sido extractivistas de sus tiempos y aportes, este trabajo muestra que las constitucionalistas estamos haciendo otro tipo de investigación y de universidad. Esta apuesta por los conocimientos situados, por entretejer redes horizontales y cooperativas. Pero, además, esta obra colectiva nos recuerda que cuando caminamos juntas y de la mano de las epistemologías y *praxis* feministas, el derecho constitucionalista recobra su fuerza emancipatoria.

En definitiva, quienes se adentren en las páginas de esta obra colectiva encontrarán un llamado no solo a la reflexión, sino también a la acción. Una invitación urgente a dismantelar un sistema de dominación articulado en los ejes del género, la raza y la clase, pero desde la capacidad de agencia de quienes han habitado, y siguen haciéndolo, los márgenes de los sistemas constitucionales.

Alicia Cárdenas Cordón

Córdoba/Espanha, abril de 2025



## PREFACIO DESDE LAS MIRADAS DE MUJERES

Tener la primicia de leer diez informes investigativos cuidadosamente estructurados desde una perspectiva interseccional y con enfoque de género, permite ponderar positivamente que hayan sido elaborados *por mujeres que trabajan para mujeres*, haciendo de este aporte literario y de investigación, un instrumento que expresa los avances y desafíos que se tienen en resguardo de los derechos de sectores en condición de vulnerabilidad en el mundo y particularmente en Brasil.

De la lectura del presente trabajo se advierte que las icónicas barreras que no permitían a todas y todos cambiar de perspectivas, están siendo derribadas a partir de este ejemplo de buenas prácticas acogidas por los países principalmente de Iberoamérica, recordándonos que desde donde nos encontremos debemos coadyuvar con esa lucha incansable para reivindicar los derechos de los sectores desprotegidos dentro los cuales por supuesto, están las mujeres que sufren violencia.

El encuentro con las antinomias planteadas en éste compilado investigativo; les permitirá reflexionar sobre tópicos que convergen a género y la discriminación latente en todo ámbito; pues, quien no ha pensado en la *división del trabajo en una sociedad donde las personas pudieran ser biológicamente "padres" en un momento y "madres" en otro* y pretender un trato igualitario sin discriminación no solo a nivel de Estado sino de la sociedad en su conjunto; coincidiendo así por ejemplo, con las acciones legislativas asumidas por el Poder u Órgano Legislativo de Brasil que persigue mitigar la desigualdad salarial entendida como un tipo de violencia.

Quien no consideró, a la *Madre Tierra y sus derechos* en contraposición a la sociedad consumista constituida en el centro que la sostiene; compartiendo la acción de enfrentar el desafío individual



para reconsiderar la protección del *medioambiente* como prioridad para el desarrollo de una *vida que beneficie a la humanidad*.

Cómo negar que todas y todos nos hemos cuestionado en algún momento como mujeres y juristas, sobre la autonomía de *decisión de la mujer como un argumento en defensa de la despenalización del aborto*; considerando que el Estado que represento -Bolivia-, avanzó positivamente por intermedio de la jurisprudencia en la temática con aristas importantes y debatidas, empero ahora Brasil adentra sus conocimientos especializados mediante un capítulo e informe investigativo que contienen y ha sido realizado considerando la perspectiva de una Bioética Feminista.

La deseada deconstrucción del *patriarcado* y en compatibilidad con el capítulo investigativo sobre la temática, es innegable que se ha constituido en el *portador de la inobservancia de la igualdad y la dignidad humana*.

Una imponente Colonialidad de Género y el pensamiento feminista Decolonial nos hace conscientes de concepciones arraigadas como la del conquistador, que invitan a todas y todos a romper el "*feminismo tradicional destacando las interseccionalidades de raza género sexualidad y clase como elementos esenciales para comprender dinámicas coloniales*" reconociendo sus propias formas de organizarse y de enfrentarse a la opresión, valorando los conocimientos y prácticas de resistencia que han sido históricamente silenciados.

Cómo no imaginarse a las mujeres indígenas y esa doble invisibilidad que enfrentan, ante una evidente violencia dentro sus espacios más íntimos, como el familiar y el de su comunidad, toda vez que a través del apartado investigativo que aborda la temática, se analiza que la violencia sexual se ha constituido en crónica en ese sector; y si bien históricamente se reconocía una *noción de complementariedad* entre el hombre y la mujer, también reconoce las *reacomodaciones en las formas de organización social*, cambiando las relaciones de género e invisibilizando



la interseccionalidad de considerar a la mujer pero también a la indígena, condicionada a una perspectiva multicultural que implica el reconocimiento y respeto de la autonomía de los pueblos originarios; por cuando, con una evidente lealtad a su pueblo que incluye la temeridad de denunciar los hechos y ser obligadas a abandonar su hogar y territorios; así el apartado, invita al lector a reflexionar, que pese a los avances de Brasil que hacen contención de manera transversal a la violencia de las mujeres indígenas en los pueblos, aún es evidente las barreras institucionales estructurales a las que se enfrenta una denuncia de violencia en contra de mujeres indígenas en el Brasil.

El trabajo investigativo que presento; también nos subsume en las necesidades reales de las niñas y niños, que hacen que las mujeres pasemos a tener no solo la carga financiera sino también emocional de las y los hijos; y pese a los avances regulatorios de Brasil, existe según la autoría de éste apartado, una *carencia de enfoque de género e interseccional estructural e institucional* a la hora de considerar judicialmente los pagos de pensión alimenticia, constituyéndose en una *desigualdad, estructural e injusta* y con falta de reflexión crítica que decanta en una violencia sistémica institucional al considerar existentes los *paradigmas injustos que institucionalizan la injusticia* que fragmenta los conjuntos regulatorios más progresistas del mundo y que han sido asumidos por Brasil; lo cual decanta en tomar nota de la negligencia estructural y hacer cambios urgentes y estructurales a nivel de latinoamerica, para combatir contra la inacción institucional.

La mención de que los entornos institucionales y públicos, acogieron al acoso sexual como invisible al no considerar la normativa regulatoria con perspectiva administrativa y prácticas que pretendan prevenir y enfrentar este riesgo psicosocial que provoca enfermedades graves, a pesar de las decisiones legislativas asumidas por Brasil en las gestiones 2022, 2023, 2024 que posibilitan su atención en toda la



administración pública; hicieron que mi atención se sensibilice por éste apartado investigativo que realizó el abordaje del *acoso sexual desde la perspectiva de responsabilidad institucional*, persiguiendo un entorno de *trabajo seguro, saludable, respetuoso para todos* y en especial para las mujeres *promoviendo la igualdad de género, un trabajo decente, con sociedades pacíficas e inclusivas, que contemple una equidad racial con la implementación de acciones y políticas con sesgo inclusivo, igualdad de género y protección de la mujer*, abordados con un *enfoque de derechos humanos* pretendiendo ser positivizados a través de programas sensibles para construir *espacios justos y equitativos institucionalizados* que desafían ese abordaje del acoso sexual mencionado en el exordio de éste párrafo mejorando así, las estrategias de prevención y apoyo a las víctimas.

La subjetivación de género, en el marco de las transformaciones sociales que las estructuran con base a corrientes ideológicas junto a las identidades individuales y las relaciones de poder, motivan adentrarnos a través de este aporte literario en las nuevas concepciones existentes que implica una visión transformada de *uno mismo como el directo responsable de su éxito, instrumentalizando las agendas conservadoras para la estabilidad y el orden social con normas tradicionales de género como la valoración de la familia nuclear y la restricción de los derechos reproductivos de las mujeres con el pretexto de proteger los valores morales y sociales*, el neoliberalismo y neoconservadurismo son asociados y aliados, reforzando *dinámicas que perpetúan la desigualdad* y que según informe investigativo promueve una agenda movilizadora y excluyente de la intersección que desafía los avances progresistas que se ha tenido en la temática.

Y por último; el análisis *teórico jurídico y social* de un apropiado y oportuno tema enfocado en este aporte literario, como una *violación de derechos humanos de la clase trabajadora* en el que se constituye el *sobreendeudamiento*, que es una forma de vida que aqueja a toda la sociedad y es visualizada como expresión de desigualdad en la sociedad,

causadas por las *profundas asimetrías* de relaciones sociales, colocando a las personas en una situación de extrema vulnerabilidad y riesgo social. Es plausible la existencia de un *dispositivo legal de protección al consumidor* en Brasil; sin embargo se necesita a criterio de la autoría de este trabajo, una mejor implementación aspecto que es compartido con la suscrita pues ello no sólo se realiza a través de una mejor interpretación, sino también a través de la educación financiera desde un enfoque de derechos humanos, transversal, pública y privada, individual y popular como *efectiva herramienta* para prevenir el ingreso de las personas a esa condición que las hace no solo *vulnerables* sino *hipervulnerables*.

La lectura de cada una de las páginas de éste compilado investigativo, implica la asunción de compromisos no sólo individuales, sino que pretenden ser institucionales, estructurales de manera pública y privada, para lograr que cada una de las acciones que realizamos las mujeres, sean tal cual lo he mencionado en otros trabajos y espacios, un refuerzo positivo que persigue concebir que: *“La igualdad de trato y oportunidades es la verdadera expresión de libertad entre hombres y mujeres”*.

Sucre, Otoño 2025.

Estado Plurinacional de Bolivia

MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

Magistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional

Presidenta del Comité de Género del Órgano Judicial y Tribunal  
Constitucional Plurinacional





## APRESENTAÇÃO

Esta obra é o resultado de uma colaboração entre o Comitê de Gênero do Tribunal Plurinacional Constitucional da Bolívia e o Programa de Pós-graduação em Direito (PPGD) da Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc), sob a forma cooperativa de diálogos compartilhados efetivados nas atividades do Grupo de Pesquisa Interculturalidade e Intersubjetividade: Gênero, Orientação Sexual, Raça e Etnia, liderado pelas professoras Thaís Janaina Wenczenovicz e Cláudia Cinara Locateli.

O diálogo entre as organizadoras tem início em março de 2023, durante o *Tercer Simposio Internacional de Género*, realizado na cidade de Sucre, Bolívia, com a participação de docentes e pesquisadoras de diversos países da América Latina. Este trabalho conta com o apoio da *Red de Constitucionalismo Crítico de América Latina* (RedCCAL) e da Cátedra Brasil Espanha (Edital n. 35/2023 CAPES). A *Red de Constitucionalismo Crítico de América Latina* (RedCCAL) é um projeto acadêmico que reúne ativistas e estudiosas do Direito Constitucional, do poder, da justiça transicional e do Estado, adotando uma abordagem crítica, comparada, interdisciplinar e pluralista.

Este trabalho resulta e reflete o compromisso das instituições, das organizadoras e das pesquisadoras com a promoção da justiça social, a igualdade de gênero e o fortalecimento dos direitos humanos constitucionalizados, inseridos no contexto do constitucionalismo contemporâneo. Ao abordar questões complexas e interdisciplinares, integra direito, política, economia e bioética, evidenciando as dinâmicas de poder e os desafios da efetivação dos direitos fundamentais.

Neste contexto, destaca-se também que a trajetória da última década do PPGD da Unoesc tem, progressivamente, ajustado seus objetos de pesquisa para discutir demandas sociais e problemas atuais



e emergentes que afetam a vida humana no dia a dia. Diversos são os desafios cotidianos e as evidências que impactam e adentram os debates no fazer científico, e dentre eles destacam-se os reflexos jurídicos da crise climática, a desinformação, os desafios à democracia, a ecodiversidade, as questões de inteligência artificial e tecnológicas, o reconhecimento dos direitos de povos e comunidades tradicionais, a discriminação e o racismo, a decolonialidade e as novas formas plurais de organização da sociedade e dos Estados, entre outros temas de relevância nacional e internacional, muitos deles vinculados à Agenda 2030 e ao gênero.

Assim, destaca-se que a opção no recorte nominado “Constitucionalismo de Gênero” é resultado de atuação das organizadoras no campo de atuação laboral e de agenda de pesquisa, e que a análise e o recorte desse *sopro temático* no PPGD ocorrem simultaneamente a uma de suas atividades mais importantes, que é o estudo crítico da dogmática jurídica e da doutrina como fonte do Direito.

Composta por dez capítulos, a obra fornece uma análise crítica e aprofundada sobre temas centrais da atualidade, como as desigualdades estruturais e o impacto das políticas públicas, e a necessidade urgente de avanços sociais e jurídicos para garantir a equidade de gênero. A partir de uma abordagem que integra as discussões sobre a colonialidade, o neoliberalismo, o machismo estrutural e o neoconservadorismo, os textos apresentados neste livro desvelam as formas como tais forças moldam as subjetividades e restringem o acesso das mulheres aos direitos fundamentais, sobretudo no que diz respeito à violência de gênero, à desigualdade salarial e à precarização da governança feminina.

Particularmente relevante é a análise das desigualdades vivenciadas por mulheres subalternas, indígenas, empobrecidas e racializadas, cujas lutas e demandas se inserem em um contexto de invisibilização histórica e marginalização institucional. Os capítulos propõem uma reflexão sobre como as legislações e as políticas recentes podem ou não contribuir para



a superação desses desafios, além de abordar o impacto do consumo centrista na sustentabilidade social e a importância da administração pública como ferramenta de enfrentamento da transparência dos direitos humanos.

Ao problematizar a invisibilização de grupos historicamente marginalizados e os obstáculos à efetivação plena dos direitos, esta obra se posiciona como uma importante contribuição para o fortalecimento de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. Com uma perspectiva crítica e interdisciplinar, o livro oferece uma reflexão profunda e inovadora sobre os caminhos para a construção de um futuro mais igualitário, onde a justiça social e os direitos humanos estão presentes no centro das políticas públicas, ações afirmativas e práticas sociais.

Cada capítulo da obra oferece uma análise crítica e interdisciplinar sobre temas como desigualdade de gênero, violência estrutural, direitos humanos, políticas públicas e os impactos do neoliberalismo e do machismo na vida das mulheres, com ênfase nas questões enfrentadas por mulheres indígenas e grupos historicamente marginalizados.

O primeiro capítulo intitula-se “Desigualdade salarial como violência de gênero e a política antidiscriminatória na lei n. 14.611/2023” e foi escrito por Beatriz Cardoso Montanhana. O estudo analisa a desigualdade salarial como uma forma de violência de gênero e investiga o impacto do relatório de desigualdade salarial previsto na Lei de Igualdade Salarial, como instrumento de política antidiscriminatória. Busca avaliar como essa medida pode promover maior equidade nas relações laborais, responsabilizando as empresas e orientando a atuação estatal na garantia da igualdade de gênero no trabalho.

O segundo capítulo intitula-se “Direitos da natureza como possibilidade de sustentabilidade na sociedade consumocentrista” e foi escrito por Cleide Calgaro. O capítulo investiga as diretrizes da sustentabilidade na sociedade de consumo centrada a partir dos direitos



da natureza. Analisa as estruturas jurídicas do Brasil e do Equador, o impacto do consumo como eixo central da vida social e os desafios da sustentabilidade.

O terceiro capítulo intitula-se “A bioética feminista e o direito ao aborto no Brasil: comentários a partir da arguição de descumprimento de preceito fundamental 442” e é de autoria de Daniela Zilio. O estudo busca compreender a possibilidade jurídica da descriminalização do aborto no Brasil, com ênfase nos argumentos apresentados na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 442 e na perspectiva da bioética feminista. Para isso, analisa os fundamentos da ação constitucional, da autonomia decisória das mulheres e do tratamento jurídico do aborto em outros países.

O quarto capítulo intitula-se “Governança e mulher: perspectivas de identidade e justiça social” e foi escrito por Êmelyn Linhares e Marlei Ângela dos Santos. O estudo examina a desigualdade social das mulheres, focando na intersecção entre o processo de construção da identidade feminina e o acesso à justiça, com ênfase nas percepções históricas e coloniais que ainda persistem sobre o papel da mulher na sociedade. O objetivo é enfatizar a busca pela justiça social, evidenciando a necessidade de novas abordagens teóricas de justiça e bem-estar social que assegurem a paz e a organização de um Estado democrático de direito, livre das discriminações que marginalizam as mulheres.

O quinto capítulo intitula-se “A colonialidade de gênero e o pensamento feminista decolonial”, de autoria de Geanne Gschwendtner e Uliana Helena Mengarda, e tem por objetivo analisar a colonialidade de gênero a partir da teoria de María Lugones, demonstrando como o sistema colonial não explorou apenas economicamente os territórios, mas também impôs novas posições sociais baseadas na interseccionalidade entre raça, gênero, sexualidade e classe. Critica a universalização da experiência feminina pelo feminismo hegemônico e propõe uma



abordagem feminista decolonial que reconheça as especificidades das mulheres racializadas.

O sexto capítulo intitula-se “Violência contra mulheres indígenas aldeadas no território brasileiro: uma dupla invisibilidade” e foi escrito por Jaqueline Medeiros Silva Calafate e Valeska Zanello. O estudo analisa as violências contra mulheres indígenas a partir dos sistemas de notificação Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) e Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena (SIASI), avaliando as especificidades das violências sofridas por esse grupo. A pesquisa busca compreender a visibilidade e a eficácia dos sistemas de notificação, considerando os desafios no contexto da saúde indígena e a intersecção das violências relacionadas à cultura, ao território e ao patriarcado colonial. Além disso, o estudo objetivo discute a aplicabilidade das políticas públicas, como a Lei Maria da Penha, no contexto indígena, e as barreiras estruturais para a eficácia da proteção e garantia dos direitos dessas mulheres.

O sétimo capítulo intitula-se “Machismo estrutural no Sistema Judiciário Brasileiro: pensões alimentícias como reflexo da desigualdade de gênero e a desconsideração das necessidades reais dos filhos” e foi escrito por Luisa Medeiros Caldeira. O capítulo analisa o impacto do machismo estrutural no sistema judicial brasileiro, com foco nas decisões sobre pensões alimentícias, ausência de tipificação penal para abandonos gestacionais e os impactos psicológicos e sociais das gestantes e dos bebês. O objetivo é destacar a necessidade de reformas estruturais no direito de família, evidenciando a ineficácia da Lei de Alimentos Gravídicos e a postura discriminatória do Poder Judiciário e do Ministério Público, com ênfase na violência institucional contra mães solteiras e mulheres LGBTQIA+.

O oitavo capítulo intitula-se “O compliance na administração pública federal como ferramenta de incremento à prevenção e



enfrentamento ao assédio sexual contra mulheres” e foi escrito por Mariana de Siqueira. O artigo analisa o uso do compliance como ferramenta para proteger os direitos humanos das mulheres na Administração Pública Federal, com foco no assédio sexual. A pesquisa questiona as normas sobre o tema, que tem um recorte de gênero, abordando a necessidade de ações integradas e sistemáticas.

O nono capítulo intitula-se “O neoliberalismo e o neoconservadorismo como forma de subjetivação de gênero no Brasil” e foi escrito por Riva Sobrado de Freitas. O escrito analisa como o neoliberalismo e o neoconservadorismo funcionam como mecanismos de subjetivação de gênero no Brasil contemporâneo. O objetivo é analisar como o neoliberalismo, ao promover uma visão individualista, oculta as desigualdades estruturais que afetam mulheres e minorias de gênero, e como sua aliança com o neoconservadorismo religioso, especialmente cristão, desigualdades legítimas e retrocessos nos direitos da comunidade LGBTQI+, reforçando discriminações históricas.

O décimo capítulo intitula-se “O superendividamento como uma violação dos direitos humanos da classe trabalhadora” e foi escrito por Rosângela da Silva Almeida. Esse capítulo analisa o superendividamento como uma violação dos direitos humanos, destacando sua conexão com as desigualdades sociais, econômicas e jurídicas nas sociedades capitalistas, com ênfase no Brasil. Os objetivos são investigar as causas do superendividamento, particularmente a expansão do crédito direcionado às camadas mais vulneráveis, e discutir a urgência de políticas públicas efetivas e de uma educação em direitos humanos para prevenir e mitigar essas questões. O estudo também aborda as diversas consequências econômicas, sociais e psicológicas que o superendividamento acarreta para os indivíduos, enfatizando o agravamento dessa situação no contexto da pandemia de Covid-19.



Esta obra oferece uma análise crítica e aprofundada das desigualdades de gênero, raça e etnia, com especial atenção às mulheres periféricas, indígenas, racializadas e empobrecidas. Ao longo de seus dez capítulos, são abordados temas sensíveis como as violências, as desigualdades e outros desafios enfrentados pelas políticas públicas e ações afirmativas. A partir de uma perspectiva interseccional, a obra propõe reflexões que visam mudanças estruturais. Seu objetivo é fortalecer os movimentos em prol da equidade de gênero, fornecendo caminhos concretos para enfrentar as desigualdades estruturais e garantir a plena efetivação dos direitos humanos e fundamentais das mulheres.

Chapecó, Brasil, outono de 2025.

Sucre, Bolívia, outono de 2025.

Cláudia Cinara Locateli

Karem Lorena Gallardo Sejas

Thaís Janaina Wenczenovicz





*Eu-mulher  
Uma gota de leite  
me escorre entre os seios.  
Uma mancha de sangue  
me enfeita entre as pernas.  
Meia palavra mordida  
me foge da boca.*

*Vagos desejos insinuam esperanças.  
Eu-mulher em rios vermelhos  
inauguro a vida.  
Em baixa voz  
violento os tímpanos do mundo.  
Antevejo.  
Antecipo.  
Antes-vivo*

*Antes – agora – o que há de vir.  
Eu fêmea-matriz.  
Eu força-motriz.  
Eu-mulher  
abrigo da semente  
moto-contínuo  
do mundo.*

(Conceição Evaristo)

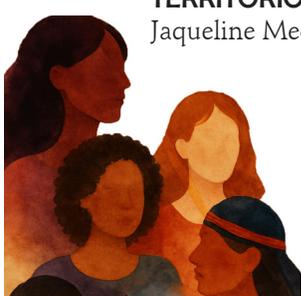
Linguista, pesquisadora-docente universitária e escritora brasileira. Influente literata do movimento pós-modernista no Brasil.





## SUMÁRIO

<b>UM BREVE PRÓLOGO A LA ESPERANZA DEL CONSTITUCIONALISMO FEMINISTA .....</b>	<b>3</b>
<b>PREFACIO DESDE LAS MIRADAS DE MUJERES .....</b>	<b>5</b>
<b>APRESENTAÇÃO.....</b>	<b>11</b>
<b>DESIGUALDADE SALARIAL COMO VIOLÊNCIA DE GÊNERO E A POLÍTICA ANTIDISCRIMINATÓRIA NA LEI N. 14.611/2023.....</b>	<b>23</b>
Beatriz Cardoso Montanhana	
<b>DIREITOS DA NATUREZA COMO POSSIBILIDADE DE SUSTENTABILIDADE NA SOCIEDADE CONSUMOCENTRISTA .....</b>	<b>47</b>
Cleide Calgaro	
<b>A BIOÉTICA FEMINISTA E O DIREITO AO ABORTO NO BRASIL: COMENTÁRIOS A PARTIR DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 442 .....</b>	<b>67</b>
Daniela Zilio	
<b>GOVERNANÇA E MULHER: PERSPECTIVAS DE IDENTIDADE E JUSTIÇA SOCIAL.....</b>	<b>93</b>
Émelyn Linhares, Marlei Ângela dos Santos	
<b>A COLONIALIDADE DE GÊNERO E O PENSAMENTO FEMINISTA DECOLONIAL .....</b>	<b>113</b>
Geanne Gschwendtner, Uliana Helena Mengarda	
<b>VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES INDÍGENAS ALDEADAS NO TERRITÓRIO BRASILEIRO: UMA DUPLA INVISIBILIDADE.....</b>	<b>131</b>
Jaqueline Medeiros Silva Calafate, Valeska Zanello	



**MACHISMO ESTRUTURAL NO SISTEMA JUDICIÁRIO BRASILEIRO:  
PENSÕES ALIMENTÍCIAS COMO REFLEXO DA DESIGUALDADE DE  
GÊNERO E A DESCONSIDERAÇÃO DAS NECESSIDADES REAIS DOS  
FILHOS.....157**

Luisa Medeiros Caldeira

**O COMPLIANCE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL COMO  
FERRAMENTA DE INCREMENTO À PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO  
AO ASSÉDIO SEXUAL CONTRA MULHERES .....181**

Mariana de Siqueira

**O NEOLIBERALISMO E O NEOCONSERVADORISMO COMO FORMA DE  
SUBJETIVAÇÃO DE GÊNERO NO BRASIL ..... 203**

Riva Sobrado de Freitas

**O SUPERENDIVIDAMENTO COMO UMA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS  
HUMANOS DA CLASSE TRABALHADORA .....233**

Rosângela da Silva Almeida



# DESIGUALDADE SALARIAL COMO VIOLÊNCIA DE GÊNERO E A POLÍTICA ANTIDISCRIMINATÓRIA NA LEI N. 14.611/2023

Beatriz Cardoso Montanhana<sup>1</sup>

## INTRODUÇÃO

Como seria uma sociedade constituída por pessoas andróginas? Ou, mais especificamente, como seria a divisão de trabalho em uma sociedade em que as pessoas pudessem ser biologicamente em um momento “pais” e em outro “mães”? Sim, a mesma pessoa vivenciando a experiência de corporificar os dois sexos biológicos. Esse é o cenário surpreendente da novela de ficção científica, “The Left Hand of Darkness”, de Ursula K. Le Gun. E mais um dado surpreendente: Ursula é uma escritora em um gênero literário marcadamente formado por homens.

O presente estudo versa sobre a desigualdade de gênero em matéria salarial, questionando como o relatório de desigualdade salarial previsto na Lei n. 14.611, de 03 de julho de 2023 – denominada Lei da Igualdade Salarial - pode ser considerado um instrumento de política contra violência de gênero. O objetivo é caracterizar a desigualdade em matéria salarial como violência de gênero e discutir a relevância do relatório de desigualdade salarial da Lei n. 14.611/2023 para avaliação do compromisso das empresas na promoção de políticas antidiscriminatórias

<sup>1</sup> Graduada, mestre e doutora em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo; Professora do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade do Oeste de Santa Catarina; Pesquisadora do Grupo de Pesquisa REDESS - Regulação do desenvolvimento social sustentável. E-mail: beatriz.cardoso@unoesc.edu.br.



e como parâmetro para atuação estatal na garantia da igualdade nas relações de trabalho.

O estudo é baseado em pesquisa bibliográfica e documental, aplicando método dedutivo a partir de premissas iniciais que consideram a desigualdade salarial como violência de gênero e a necessidade de instrumentos/medidas para implementação de políticas antidiscriminatórias nas relações de trabalho. Parte-se de uma análise de gênero binário, face aos dados disponíveis na fonte utilizada (Relatório Anual Socioeconômico da Mulher – RASEAM), sem desconsiderar a urgência da ampliação do debate sob uma perspectiva ampla de gênero. Em razão da necessidade de limitar o presente estudo, questões relativas à interseccionalidade (a exemplo da raça e origem), decolonialidade e trabalho reprodutivo/produtivo não serão enfrentadas, reforçando a imprescindibilidade da abordagem desses temas em pesquisas juslaborais.

Constata-se nesse breve estudo que a desigualdade salarial, além do aspecto econômico, expõe o cenário de exploração do trabalho da mulher, por meio de conduta discriminatória em razão do gênero. Essa condição de subvalorização do trabalho feminino caracterizaria uma das formas de violência de gênero praticadas nas relações de trabalho, já prevista como prática discriminatória e limitativa de direito, conforme artigo 1º da Lei n. 9.029, de 13 de abril de 1995. Nesse contexto, verifica-se que a Lei n. 14.611, de julho de 2023, quando disciplina esse aspecto específico de discriminação de gênero - a desigualdade salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens -, apresenta medidas que devem ser implementadas pelas empresas e cria também um instrumento para verificação dessas medidas no caso de pessoas jurídicas de direito privado com 100 (cem) ou mais empregados: o relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios (art. 5º, caput).

Conclui-se, portanto, que a Lei da Igualdade Salarial traz mecanismos jurídicos para adoção de políticas de combate a uma das



formas de violência de gênero no trabalho, materializada em padrões de remuneração injustificadamente discriminatórios entre homens e mulheres. Enfim, busca-se a superação da desigualdade salarial motivada por critério de gênero. Embora o universo sem definição de gênero de Ursula K. Le Guin permaneça na ficção científica, objetiva-se que as mulheres possam vivenciar a experiência de ocupar, em termos salariais, as mesmas posições dos homens.

**Palavras-chave:** salarial; discriminação; violência de gênero; desigualdade.

## 1 DESIGUALDADE SALARIAL COMO VIOLÊNCIA DE GÊNERO NO BRASIL

A desigualdade salarial é um dado mensurável. Trata-se de realidade exposta em dados, cuja análise independeria de abordagem a partir de critérios qualitativos. Contudo, essa realidade demanda atenção para além dos números, pois os reflexos da desigualdade extrapolam a avaliação quantitativa e não se compensam mediante a reposição do valor que foi subtraído da remuneração.

O questionamento sobre o valor do trabalho feminino salta aos olhos no dia a dia de convívio com mulheres trabalhadoras seja no próprio ambiente de trabalho, em conversas entre vizinhos, conhecidos, amigos, reuniões sociais ou mesmo em casa. Afinal, quanto vale o trabalho de uma mulher? Essa questão, por si só, traz em seu bojo o dilema da divisão sexual de trabalho; aqui o foco é o trabalho remunerado realizado por mulheres, e não o trabalho não remunerado. O recorte é indispensável, dada a outra face da realidade do trabalho feminino: a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado por mulheres:



O “cuidar da casa” (ou “tomar conta da casa”), assim como “cuidar das crianças” (ou “tomar conta das crianças”), ou até mesmo “cuidar do marido” ou “dos pais” têm sido tarefas exercidas por agentes subalternos e femininos, as quais (talvez por isso mesmo) no léxico brasileiro têm estado associadas com a submissão, seja dos escravos (inicialmente), seja das mulheres, brancas ou negras (posteriormente) (Guimarães; Hirata, 2020, p. 31).

Embora o objeto do estudo não seja o trabalho de cuidado, é necessário apontar que a desvalorização econômica dessa forma de trabalho – que não é remunerado - repercute na concepção de valor do trabalho produtivo feminino<sup>2</sup>. O trabalho reprodutivo está associado às necessidades do corpo biologicamente considerado, como limpeza e alimentação. Vincular o atendimento dessas atividades ao gênero feminino acaba por associá-las às características do corpo da mulher, em uma relação entre gênero e sexo, que resulta na desvalorização da mão de obra feminina. E não foi o sistema de fábricas com sua reestruturação da divisão sexual ou o surgimento de uma organização de livre mercado de serviços ou produtos que construiu a noção de corpo sexuado, diria Laqueur, porque o sexo é situacional, “explicável apenas dentro do contexto da luta de gênero e poder” (Laqueur, 2001, p. 23).

Essa indissociabilidade sexo-gênero repercute na divisão sexual do trabalho, que determina o modelo de exploração da força de trabalho – ou seja, do corpo - feminino:

[...] a divisão sexual do trabalho como relação entre dois gêneros traz embutida hierarquia social entre estes dois gêneros. Assim, a divisão sexual do trabalho não cria a subordinação e a desigualdade das mulheres no mercado

---

<sup>2</sup> “[...] nossa condição de não assalariadas em casa é a principal causa de nossa fragilidade no mercado de trabalho. [...] Como o trabalho doméstico e a feminilidade se mesclaram, carregamos para qualquer emprego que ocupamos essa identidade e as ‘habilidades domésticas’ adquiridas desde o nascimento. Isso significa na estrada rumo ao salário quase sempre nos conduz a mais trabalho doméstico.” (Federici, 2021. p. 34).



de trabalho mas recria uma subordinação que existe também nas outras esferas do social. A divisão sexual do trabalho mostra que a relação de trabalho é uma relação sexuada porque é uma relação social. [...] a divisão sexual do trabalho se constrói como estratégia de gestão da força de trabalho através de representações e de linguagem do capital, tanto quanto como estratégia de resistência das mulheres e dos homens nas relações com o trabalho e em suas práticas sociais (Souza-Lobo, 2021, p. 69-70).

As diferenças biológicas entre homem e mulher não estão em questão quando se trata de igualdade salarial; a premissa é clara: igual salário para igual trabalho. A exploração da mão de obra feminina em desigualdade de condições reforça, assim, a tecnologia de dominação, modelado por “um conjunto arbitrário de regulações inscritas nos corpos”, que justificam a atribuição natural de papéis a um ou outro gênero (Preciado, 2022, p. 37). As relações de poder e a distinção entre características culturais atribuídas a cada um dos sexos e a suas peculiaridades biológicas se relacionam direta e intrinsecamente com o gênero, de sorte que “as características de gênero se fundam na hierarquia e na desigualdade de lugares sexuais” (Minayo, 2006, p. 93).

Surge, assim, um problema socioeconômico atrelado a essa discussão: as chamadas “profissões femininas”. Elas são menos valorizadas, exatamente por estarem atreladas à ideia de trabalho de cuidado, suporte, auxílio, e não de protagonismo na atividade laboral. Sem contar com outra questão pungente, que aparece nos dados que serão apresentados a seguir: a desigualdade salarial também é marcada pelos fatores interseccionais, como a cor e raça. Fatores interseccionais em países do Sul Global determina um quadro de maior de opressão de uma parcela da população, a exemplo da população negra no Brasil. Daí a relevância de estudos sob a perspectiva decolonial, porque a formação e a consciência dos/as trabalhadores/as brasileiros não poderiam ser contemporâneas –



dados os longos anos de escravatura no Brasil – tampouco se explicam pelos parâmetros históricos, políticos e socioeconômicos do Norte Global<sup>3</sup>.

Essas questões, no âmbito dos estudos juslaborais, podem – e devem – reiteradamente ser enfrentadas. Apesar da inquietação que elas provocam – como aqui apontadas, “trabalho de cuidado”, “profissões femininas/de mulher”, “interseccionalidade”, “decolonialidade” – o objetivo ora visado não as alcança. A presente abordagem pode ser considerada preambular. Pretende-se reconhecer que a desigualdade salarial entre mulheres e homens se manifesta por meio de condutas discriminatórias, que materializam uma prática de violência de gênero nas relações de trabalho. São exemplos: falta de acesso à mesma remuneração no momento da admissão, restrição a promoções, estabelecimento de metas não atingíveis por mulheres mães no período de amamentação etc. Essas condutas discriminatórias concretizam o referencial econômico amparado no privilégio do gênero masculino:

Economicamente, homens e mulheres constituem como que duas castas; em igualdade de condições, os primeiros têm situações mais vantajosas, salários mais altos, maiores possibilidades de êxito do que suas concorrentes recém-chegadas. Ocupam, na indústria, na política etc., maior número de lugares e os postos mais importantes (Beauvoir, 1980, p. 17).

---

<sup>3</sup> “La colonialidad es uno de los elementos constitutivos y específicos del patrón mundial de poder capitalista. Se funda en la imposición de una clasificación racial/étnica de la población del mundo como piedra angular de dicho patrón de poder, y opera en cada uno de los planos, ámbitos y dimensiones, materiales y subjetivas, de la existencia cotidiana y a escala social. [...] El eurocentrismo, por lo tanto, no es la perspectiva cognitiva de los europeos exclusivamente, o sólo de los dominantes del capitalismo mundial, sino del conjunto de los educados bajo su hegemonia.” (Quijano, 2019, p. 151 e 153).



Reforça-se que o trabalho ora analisado é o remunerado, considerado produtivo<sup>4</sup>, sem distinção de sua natureza – como urbano ou rural –, tampouco abarca fatores interseccionais. O trabalho remunerado decorre da exploração da mão de obra humana como fator de produção essencial para o sistema de produção capitalista. Esse modelo implantou na sociedade umas das formas mais efetivas de controle e perda de autonomia da pessoa humana, explicitada pela teoria marxista, e também reproduziu práticas de violência de gênero, como a desigualdade salarial. Não é demais lembrar que essa opressão extrapola, em um cenário geral das relações de trabalho, as questões de gênero. Discussões relacionadas à teoria da mais-valia e alienação do/a trabalhador/a apontam para desapropriação da natureza humana na exploração do trabalho de mulheres e homens na organização capitalista.

Sob a ótica do pensamento colonial, os primados de revolucionários franceses, inspirados por um discurso de direitos do homem – e de desconsideração do gênero feminino<sup>5</sup> –, contribuíram para a justificação da supremacia da racionalidade burguesa e da lógica do capital emergente. Afinal, nas relações de exploração do trabalho humano, a liberdade e a igualdade são postas em xeque, e, ainda, a possibilidade de solidariedade. De toda forma, o foco não estaria no conteúdo, e sim na forma. Se o conteúdo é a produção de bens e serviços a serem comercializados, a partir da adoção de uma política de preços em um mercado competitivo, o questionamento repousa na forma como os detentores trabalho humano

<sup>4</sup> “O *trabalhador* que realiza *trabalho produtivo* é *produtivo*, e é *produtivo* o *trabalho* que cria imediatamente *mais-valor*, isto é, *valoriza* o capital. [...] Só é produtivo o trabalhador cujo processo de trabalho é = ao *processo de consumo produtivo* da capacidade de trabalho – o portador desse trabalho – pelo capital e pelo capitalista” (Marx, 2023, p. 108-109).

<sup>5</sup> A Declaração dos direitos da mulher e da cidadã de Olympe de Gouges é o manifesto contra a desconsideração do papel das mulheres na proclamada República Francesa, muitas delas, inclusive, revolucionárias: “Homem, tu és capaz de ser justo? É uma mulher que te faz essa pergunta; pelo menos desse direito tu não a privarás. Diz-me, quem te concedeu o poder supremo de oprimir meu sexo? Tua força? Teus talentos? Observa o Criador em Sua sabedoria; percorre a natureza em toda a sua grandeza da qual aparentas querer aproximar-te, e dai-me, se tu ousas, um exemplo desse império tirânico.” (Gouges, 2021, p. 37).



são inseridos nesse contexto. A propriedade emoldura a forma como os elementos das relações capitalistas se organizam. Caso os trabalhadores alcancem a liberdade para, respeitado o reconhecimento da igualdade entre eles, organizar a forma como a sua mão de obra será utilizada, não haveria por que se opor ao conteúdo das relações capitalistas.

O único entrave nessa lógica é o alicerce estrutural do capitalismo: a geração de lucro, a partir exatamente da exploração da mão de obra humana, sob uma política de assalariamento. A mão de obra é, nesse contexto, um produto a ser precificado conforme as regras econômicas, como oferta e procura. Os trabalhadores teriam de se reapropriar da sua natureza humana, por meio de organizações de trabalho, capazes de encontrar espaço de atuação dentro da própria dinâmica do sistema capitalista, como ocorreu – e ocorre - com a representação sindical. No caso da exploração do trabalho das mulheres no modelo capitalista de produção, a valorização da sua mão de obra depende de uma discussão anterior: a apropriação do reconhecimento da sua natureza como trabalhadora produtiva, e não apenas reprodutiva, e com direito à igualdade de remuneração devida como fruto do trabalho realizado. Mas a lógica do capital é racional, e não contempla o que não gera riqueza – leia-se – capital.

Ao avaliar a contribuição da Escola de Chicago, precisamente destacando a contribuição de Gary Becker, Katrine Marçal traz as conclusões dos economistas a partir do referencial do homem econômico:

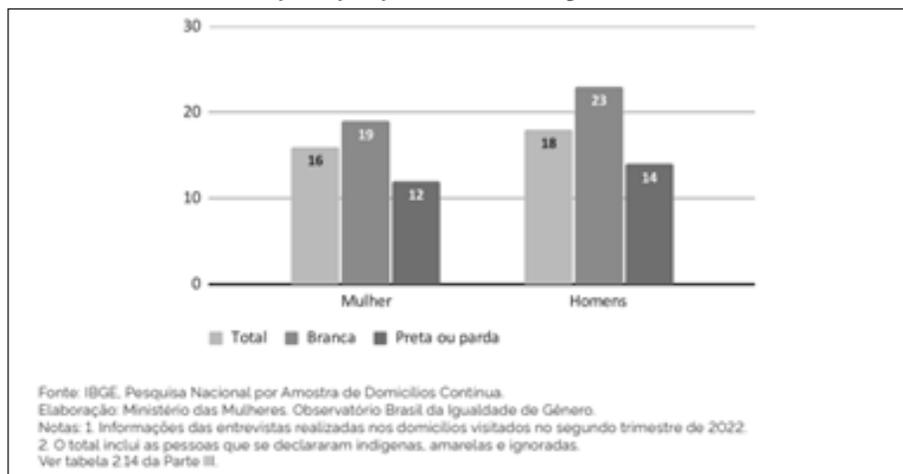
Se as mulheres ganhavam menos, devia ser porque mereciam ganhar menos, racionalizaram. O mundo era um lugar racional e o mercado sempre estava certo - se o mercado decidiu que as mulheres devem ganhar menos deve ser isso que elas merecem. A tarefa dos economistas era simplesmente explicar por que a avaliação do mercado mesmo nesse caso, estava correta. Os salários mais baixos das mulheres eram resultado de elas serem menos



produtivas, concluíram os economistas. Elas não eram preguiçosas nem menos talentosas, mas simplesmente não era racional que uma mulher fizesse o mesmo esforço no trabalho que um homem. Afinal ela tiraria uma licença por alguns anos para dar à luz final não havia motivo para estudar mais vou tentar tanto final assim as mulheres investiram menos em suas carreiras que, portanto, ganhavam menos (Marçal, 2022, p. 41).

O papel da força do patriarcado (Lerner, 2022; Saffioti, 2013) permite identificar a legitimação social de um discurso de desigualdade salarial entre mulheres e homens. A análise do dado do Relatório Anual Socioeconômico da Mulher - RASEAM, publicado em abril de 2024, a cargo do Ministério das Mulheres (Brasil, 2024), sob responsabilidade da equipe do Observatório Brasil da Igualdade de Gênero<sup>6</sup>, comprova a desigualdade salarial entre homens e mulheres, conforme gráfico abaixo:

Gráfico 1 – Rendimento-hora médio habitual real da população ocupada de 14 anos ou mais de idade no trabalho principal, por cor ou raça, segundo o sexo – Brasil – 2022



Fonte: RASEAM, (2024, p. 21).

<sup>6</sup> O RASEAM está disponível na página do Observatório Brasil de Igualdade de Gênero, do Ministério das Mulheres, com acesso no endereço <https://www.gov.br/mulheres/pt-br/observatorio-brasil-da-igualdade-de-genero/raseam>.



Concluiu-se a partir dos dados do gráfico que:

Mesmo quando as mulheres estão ocupadas no mercado de trabalho, as desigualdades aparecem em sua menor remuneração. O rendimento-hora médio das mulheres era de R\$ 16 no segundo trimestre de 2022, abaixo do estimado para os homens, de R\$ 18. Homens brancos ganhavam em média R\$ 23 por hora, e as mulheres brancas, R\$ 19. Na comparação entre homens e mulheres de cor preta ou parda, a diferença era um pouco menor, R\$ 2 por hora em média (Brasil, 2024, p. 21).

Essa realidade marcada pela discriminação de gênero resulta em violência de gênero. Entende-se por violência de gênero “um tipo de dominação, de opressão e de crueldade estruturalmente construído nas relações entre homens e mulheres, reproduzido na cotidianidade e subjetivamente assumido, atravessando classes sociais, raças, etnias e faixas etárias” (Minayo, 2006, p. 94). Segundo Minayo, “violência de gênero vitimiza a mulher por razões conjugais, sexuais ou culturais”, sendo que uma das formas é a violência social, cujo exemplo trazido pela autora é “oferecer menor salário que ao homem, para o mesmo trabalho” (2006, p. 96 e 98).

A desigualdade salarial como uma forma de violência de gênero não está prevista expressamente na Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, concluída em Belém do Pará, em 9 de junho de 1994, e promulgada no Brasil por meio do Decreto nº 1.973, de 1º de agosto de 1996. A Convenção de Belém do Pará – como ficou conhecida – classifica a violência contra a mulher como sendo a física, sexual e psicológica (art. 2º, caput). Todavia, com a Convenção n. 190, da Organização Internacional do Trabalho, aprovada na 108ª Sessão da Conferência Internacional do Trabalho, realizada em



21 de junho de 2019, em vigor internacionalmente desde 25 de junho de 2021, ampliou-se o alcance do conceito de violência, para incorporar aquela capaz de gerar dano econômico:

Artigo 1º

1. Para efeitos da presente Convenção:

(a) o termo “violência e assédio” no mundo do trabalho refere-se a um conjunto de comportamentos e práticas inaceitáveis, ou de suas ameaças, de ocorrência única ou repetida, que visem, causem, ou sejam susceptíveis de causar dano físico, psicológico, sexual ou econômico, e inclui a violência e o assédio com base no gênero;

(b) o termo “violência e assédio com base no gênero” significa violência e assédio dirigido às pessoas em virtude do seu sexo ou gênero, ou afectam de forma desproporcionada as pessoas de um determinado sexo ou gênero, e inclui o assédio sexual (Organização Internacional do Trabalho, 2019).

Categorizar a desigualdade salarial como violência de gênero de natureza social (Minayo) e econômica (Convenção n. 190) expõe as mazelas e os reflexos deletérios da banalização da discriminação socioeconômica feminina pela disseminação histórica de concepções desiguais de gênero. Juridicamente, reconhecer que a desigualdade salarial configura uma forma de violência de gênero é possibilitar uma interpretação das normas de proteção que vai muito além da composição do equilíbrio econômico entre os sujeitos envolvidos, via recomposição do padrão remuneratório. Propõe-se, então, uma hermenêutica parametrizada pelos direitos fundamentais, com efeitos irradiantes nas instâncias normativas juslaborais, o que, inclusive, permite fomentar o questionamento acerca da implementação de políticas de repressão, de reparação à violência sofrida, e, acima de tudo, de prevenção das práticas discriminatórias contra a mulher.



O Brasil iniciou o processo de ratificação da Convenção n. 190 em 13 de março de 2023, com a apresentação da Mensagem n. 86/2023, pelo Poder Executivo à Câmara dos Deputados. A publicação da Lei n. 14.611, em julho do mesmo ano, representa um avanço no ordenamento nacional para a categorização da desigualdade salarial como violência de gênero de natureza econômica. E, com a ratificação da Convenção n. 190, mais elementos normativos constituirão o alicerce de proteção ao direito à igualdade salarial entre homens e mulheres.

## 2 OBRIGATORIEDADE DO RELATÓRIO DA IGUALDADE SALARIAL: A LEI 14.611/2023 COMO INSTRUMENTO DE POLÍTICA CONTRA VIOLÊNCIA DE GÊNERO

A dicotomia trabalho produtivo/trabalho reprodutivo classifica o papel do trabalho feminino, desqualificando-o, na medida em que estaria intrinsecamente associado à reprodução, e não produção (Castilho; Melo; Di Sabatto, 2015). Ao não atribuir valor econômico às atividades realizadas majoritariamente por mulheres, a díade reprodução/produção gera desigualdade material, estereotipa a condição da mulher<sup>7</sup> e, por conseguinte, o valor do trabalho feminino.

No âmbito do trabalho remunerado, há de se considerar a formalização ou informalização desse trabalho. Segundo dados do RASEAM, “em 2022, enquanto a taxa de informalidade das mulheres era de 37,9%, a dos homens era de 40,6%” (Brasil, 2024, p. 22). Ainda que as mulheres ocupadas mantenham maior percentual de trabalho formal em relação aos homens ocupados, o percentual é alarmante: mais de um

---

<sup>7</sup> Estereótipos de gênero “podem ser compreendidos como a repetição automática e mecânica de ideias e comportamentos sobre os papéis socialmente estabelecidos aos homens e mulheres, reproduzindo acriticamente e conceitos ou imagens preconcebidas pelo senso comum, normalmente usadas para justificar e julgar moralmente determinados comportamentos” (Pimentel; Mendes, 2024, p. 64.).



terço dessa população feminina não se encontra sob o amparo do sistema normativo de proteção do trabalho.

O direito à não discriminação, por certo, não alcança apenas quem mantém vínculos de trabalho formais, mas determina o nível de proteção juslaboral, incluindo a aplicação da Lei n. 14.611, de 2023. A referida lei traz normas de Direito Antidiscriminatório (Moreira, 2020), com a finalidade de combater a desigualdade salarial entre mulheres e homens. Salário é a contraprestação devida a trabalhadores em razão do trabalho realizado a empresas, em regime de subordinação, pessoalidade e não eventualidade, isto é, em uma relação de emprego. A Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, aprovada pelo Decreto-lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943, em seu artigo 76, conceitua salário-mínimo como a

contraprestação mínima devida e paga diretamente pelo empregador a todo trabalhador, inclusive ao trabalhador rural, sem distinção de sexo, por dia normal de serviço, e capaz de satisfazer, em determinada época e região do País, as suas necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte (Brasil, 1943).

Desse conceito legal extrai-se claramente regra não discriminatória por motivo de sexo, que aqui é também interpretado como discriminação por motivo de gênero. Regra celetista não discriminatória em relação ao salário consta também expressamente no artigo 5º da CLT: “A todo trabalho de igual valor corresponderá salário igual, sem distinção de sexo.”

Tanto o artigo 5º como o 76 da CLT são originais da publicação do diploma legal de 1º de maio de 1943. Isso significa que há mais de 80 anos o Brasil reconhece o direito à igualdade salarial entre mulheres e homens no sistema juslaboral. Pouco menos de vinte anos após a publicação do texto celetista, em 25 de junho de 1957, foi promulgada a Convenção



nº 100, da OIT sobre Igualdade de Remuneração de Homens e Mulheres Trabalhadores por Trabalho de Igual Valor (Decreto nº 41.721).

A Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988) afirma a igualdade como um direito fundamental individual (art. 5º, caput). E no artigo 7º, inciso XXX, a igualdade salarial entre homens e mulheres é reconhecida como direito fundamental social, com a “proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo”. Em 13 de abril de 1995, ou seja, há trinta anos, foi publicada a Lei n. 9.029, que proibiu a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de trabalho, ou de sua manutenção, por motivo de sexo (art. 1º). A referida lei previu sanções de natureza administrativa: multa administrativa de dez vezes o valor do maior salário pago pelo empregador, elevado em cinquenta por cento em caso de reincidência (art. 3º, I); e proibição de obter empréstimo ou financiamento junto a instituições financeiras oficiais (art. 3º, II). Sem prejuízo da indenização por dano moral, a lei assegurou o direito à reintegração em caso de dispensa por ato discriminatório ou, a critério do/a trabalhador/a, uma indenização correspondente ao dobro da remuneração do período de afastamento, corrigida monetariamente e acrescida dos juros legais (art. 4º, incisos).

O Brasil ainda ratificou o Protocolo Facultativo da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (Decreto nº 4.316, de 2002), que reconhece e estabelece os meios de atuação do Comitê sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher (art. 1º).

Não seria despropositado, por conseguinte, indagar: se havia sólido arcabouço normativo que previa proteção contra a desigualdade salarial, qual a relevância da Lei n. 14.611?

As condutas que promovem a desigualdade salarial constituem violência de gênero, pois correspondem a práticas ou comportamentos que visam, causam ou sejam suscetíveis de causar dano econômico, conforme definição de violência do artigo 1º da Convenção n. 190,



supracitada. No sistema juslaboral brasileiro, não há uma definição de violência. E, embora o Brasil não tenha ratificado ainda a Convenção n. 190, a Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, adotada em 1998, apesar de não ser cogente,

2. Declara que todos os Membros, ainda que não tenham ratificado as Convenções, têm um compromisso derivado do simples fato de pertencer à Organização de respeitar, promover e tornar realidade, de boa fé e de conformidade com a Constituição, os princípios relativos aos direitos fundamentais que são objeto dessas Convenções.

A Convenção n. 190 da OIT dispõe sobre direito fundamental - eliminação da discriminação em matéria de emprego e ocupação - e é instrumento normativo do sistema internacional de direitos humanos, portanto, pode ser adotada como parâmetro para interpretação das normas internas<sup>8</sup>. Ademais, a violência de gênero é uma questão de saúde pública, ampliando a perspectiva sobre direitos fundamentais para além do direito à igualdade e não discriminação, para incluir o direito à saúde (Minayo, 2006, p. 94). Conforme Minayo (2006, p. 8), a “violência, em si, não é um tema da área de saúde, mas a afeta porque acarreta lesões, traumas e mortes físicas e emocionais”. Mas a violência é tema jurídico, cujos contornos e direitos violados precisam ser delimitados para sua melhor compreensão, prevenção, repressão e reparação.

São as práticas discriminatórias que obstam ou limitam exercícios de direitos fundamentais, em sua essência, práticas de violência. E, quando envolvem a questão salarial, a violência provoca danos socioeconômicos. A desvalorização do trabalho feminino reflete não apenas na esfera individual da mulher tratada desigualmente em relação ao homem, mas

<sup>8</sup> Nesse sentido, decisão do Tribunal Superior do Trabalho, no AIRR-21056-50.2019.5.04.0014, 7ª Turma, Relator Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte, publicado em DEJT 26/03/2024.



compromete o equilíbrio socioeconômico. No Brasil, dados do Censo de 2022 indicam o aumento percentual dos lares sob responsabilidade das mulheres: 49,1% dos lares, um acréscimo de mais de 10% em comparação ao Censo de 2010, que apontou um percentual de 38,7% (Brasil, 2025a). E a violência no trabalho, materializada na desvalorização do trabalho da mulher, compromete o bem-estar biopsicossocial da trabalhadora, pois como explica Margarida Barreto:

Sentir-se humilhado é sentir-se inútil, incapaz, inferior, fracassado, um “lixo”, um “ninguém”, um “zero”. Esse sentimento obstaculiza o “normal”, impondo novos “modos de andar a vida” que transtornam sua existência, impedindo-o de responder plasticamente às exigências e às “infidelidades do meio”. Essas são reflexões que vão de encontro à concepção de saúde como um processo biopsicossocial (Barreto, 2003, p. 51).

Conforme os dados apresentados, os riscos ao equilíbrio socioeconômico estão expostos: mais mulheres são responsáveis pela manutenção dos lares com a força de seu trabalho, e são vulneradas<sup>9</sup> por políticas salariais discriminatórias praticadas por seus empregadores. Diante desse quadro, retoma-se a questão: se havia sólido arcabouço normativo que previa proteção contra a desigualdade salarial, qual a relevância da Lei n. 14.611?

Como mencionado no item anterior, a Lei n. 14.611, de 2023 constitui um marco para a promoção da igualdade de gênero, que

---

<sup>9</sup> O termo “vulneradas” foi ora adotado, conforme lição de Soraia da Rosa Mendes. A autora afirma que o termo vulnerável e vulnerabilidade são concepções estabelecidas a partir da métrica do sujeito neoliberal, separando perdedores e vencedores, com o “condão de obscurecer as causas das vulnerabilidades que afetam as pessoas denominadas vulneráveis”. Assim, apontar a mulher como vulnerável é uma forma de esconder “que, econômica, social, cultural e politicamente, não existem, ontologicamente vulnerabilidades, mas vulnerações. Pessoas não são vulneráveis, mas, sim, vulneradas”, entendendo-se por “vulnerar” “[...] o ato de ferir, de machucar” (p. 75). Assim, “[m]ulheres não são vulneráveis, são vulneradas. E esse é o sentido político e jurídico em razão do qual devemos nos referir a elas como vítimas de violência e não como sobreviventes da violência ou em situação de violência” (Mendes, 2024, p 78).



ultrapassa os limites da recomposição remuneratória à mulher lesada. A lei institui medidas e um instrumento de transparência de informações sobre a observância da igualdade salarial – Relatório de Transparência Salarial (art. 5º, §1º), prevendo a apresentação e implementação de plano de ação para mitigar da desigualdade, com a participação das entidades sindicais das categorias econômica e profissional. É a afirmação do ordenamento jurídico sobre a necessidade de combater a discriminação de gênero, não apenas e estritamente em seu aspecto econômico com medidas de reparação também econômica, mas identificando a demanda por adoção de políticas de prevenção e de repressão pelos particulares e pelo Poder Público.

A Lei n. 14.611, de 2023 estabelece parâmetros para verificação da efetividade dos direitos fundamentais à saúde e à igualdade das mulheres, uma vez reconhecido que a desigualdade salarial configura violência de gênero social e econômica, praticada por meio de condutas discriminatórias com comprometimento da saúde da mulher. Um dos principais instrumentos é o Relatório de Transparência Salarial, obrigatório para as empresas com mais de cem empregados. Por óbvio, o alcance limitado da norma se refere à obrigação de envio do Relatório de Transparência Salarial, sendo que todos os empregadores devem adotar medidas de promoção de igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens.

A regulamentação da Lei n. 14.611 veio com o Decreto n. 11.795, de 23 de novembro de 2023, para disciplinar os mecanismos de transparência salarial e de critérios remuneratórios, precisamente o Relatório de Transparência Salarial e de Critérios Remuneratórios e o Plano de Ação para Mitigação da Desigualdade Salarial e de Critérios Remuneratórios entre Mulheres e Homens (art. 1º), aplicável, então, às pessoas jurídicas de direito privado com cem ou mais empregados que



tenham sede, filial ou representação no território brasileiro, constituídas de fato ou de direito (art. 1º, parágrafo único).

O Decreto n. 11.795, de 2023 atribui a verificação da desigualdade salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens ao Ministério do Trabalho e Emprego. Pela Portaria MTE n. 3.714, de 24 de novembro de 2023, regulamentou-se o Decreto N° 11.795/2023, estabelecendo que a definição do protocolo de fiscalização contra a discriminação salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens, bem como a disponibilização de canais específicos para denúncias de discriminação salarial, fica a cargo da Secretaria de Inspeção do Trabalho, sem prejuízo dos procedimentos fiscais decorrentes da Lei n° 9.029, de 13 de abril de 1995. A Inspeção do Trabalho, por meio das Auditoras e Auditores-Fiscais do Trabalho, tem a atribuição de fiscalizar a regularidade da publicação dos relatórios e identificar eventuais práticas discriminatórias.

Pode-se, portanto, asseverar que a Lei n. 14.611, de 2023, disciplina uma relevante política antidiscriminatória, impondo a adoção de medidas e instrumentos de:

- prevenção, por meio de relatórios autodeclaratórios, que exigem dos empregadores uma autoavaliação da política salarial adotada internamente;
- repressão: os relatórios passam por fiscalização da sua regularidade por agentes públicos (Auditoras e Auditores-Fiscais do Trabalho), no exercício de política pública de verificação de efetividade de direitos fundamentais do trabalho, como o direito à igualdade e à não discriminação, sob pena de imposição de multa administrativa;
- reparação: a lei assegura o direito da vítima a pleitear indenização por danos sofridos com a conduta discriminatória.



No que se refere a medidas repressivas, a Lei n. 14.611 prevê aplicação de multa para as empresas que não apresentarem o relatório de transparência salarial, “sem prejuízo das sanções aplicáveis aos casos de discriminação salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens” (art. 5<sup>a</sup> § 3<sup>o</sup>). A desigualdade salarial constitui uma prática discriminatória, que atrairia a aplicação da Lei n. 9.029, de 1995, no que tange à vedação de financiamentos empréstimos em instituições financeiras oficiais (art. 3<sup>o</sup>, II). Trata-se de uma cláusula social, ora imposta por força de lei. Exemplo de cláusula social não prevista em lei é a incluída pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), desde fevereiro de 2008, como condição prévia para contratação de financiamentos, em que são vetadas práticas de discriminação de raça ou de gênero, de trabalho infantil e de trabalho escravo no Brasil. Em caso de violação aos direitos fundamentais, “o BNDES pode, de forma transparente e mais ágil, suspender ou exigir o vencimento antecipado do contrato de financiamento, impondo o pagamento imediato dos desembolsos efetuados” (Brasil, 2025). Com a previsão legal, o Relatório de Transparência Salarial passa a ser um dos instrumentos transparentes e de fácil acesso para caracterização de conduta discriminatória e de descumprimento do direito à igualdade salarial, o que resultaria, por força do disposto na Lei n. 9.029, a proibição de obter empréstimo ou financiamento junto a instituições financeiras oficiais, a exemplo da política adotada pelo BNDES.

A discriminação de gênero em matéria salarial, como forma de violência de gênero socioeconômica, é um risco psicossocial relacionado ao trabalho<sup>10</sup>. Assim sendo, a partir de maio de 2025, a discriminação

<sup>10</sup> A NR 1 não traz um conceito de riscos psicossociais e não é objeto desse estudo abordar a distinção entre os conceitos de fatores e de riscos psicossociais, bem como suas repercussões. Entretanto, a fim de permitir o entendimento do que está sendo proposto, apresentamos o conceito de fatores psicossociais do trabalho da Organização Internacional do Trabalho, segundo o qual esses fatores “consisten en interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y



de gênero deve ser incluída na avaliação de riscos psicossociais a serem identificados e gerenciados pelos empregadores, de acordo com o disposto na Norma Regulamentadora (NR) n. 1, com a Redação dada pela Portaria MTE n.º 1.419, de 27 de agosto de 2024<sup>11</sup>. De acordo com a referida NR, a organização deverá abranger os riscos relacionados aos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho (NR 1, item 1.5.3.1.4). Uma vez identificados os riscos, há de se adotar um plano de ação, como parte do programa de gerenciamento de riscos – PGR<sup>12</sup>. Nos termos do Decreto n. 11.795, de 2023, caso verificada a desigualdade salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens pelo Ministério do Trabalho e Emprego, as empresas com cem ou mais empregados deverão elaborar

---

las condiciones de su organización, por una parte, y por la otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, pueden influir en la salud y en el rendimiento y en la satisfacción en el trabajo.” (Organização Internacional do Trabalho. **Factores psicossociales en el trabajo:** Naturaleza, incidencia y prevención. 1984. Disponível em <http://www.factorespsicossociales.com/wp-content/uploads/2019/02/FPS-OIT-OMS.pdf> Acesso em: 10 mar 2025.) Os riscos psicossociais representariam o dano, resultado da ação dinâmica dos fatores de risco no meio ambiente do trabalho. As condutas discriminatórias, como práticas de violência que podem comprometer a saúde, são fatores de riscos psicossociais: “Discriminações sociais – gênero, cor/raça, etnia, origem, orientação sexual, idade, entre outros, deficiências, entre outras, tornam certos trabalhadores mais vulneráveis a sofrer violências que outros. Então quando falamos de riscos psicossociais, todos estes temas podem aparecer sob o guarda-chuva desta mesma expressão.” Ou seja, “[a]s discriminações sociais de gênero, orientação sexual, raça, classe social, entre outras, atuam no ambiente de trabalho, na organização do trabalho, e por vezes são também geradas por elas. A expressão ‘riscos psicossociais no trabalho’ também é utilizada para designá-las.” (Oliveira, J. A. Riscos psicossociais no trabalho: uma discussão necessária (Preprints, 2024).

<sup>11</sup> Norma Regulamentadora n. 1. 1.5.3.1.4 O gerenciamento de riscos ocupacionais deve abranger os riscos que decorrem dos agentes físicos, químicos, biológicos, riscos de acidentes e riscos relacionados aos fatores ergonômicos, incluindo os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. [...].

1.5.3.2.1 A organização deve considerar as condições de trabalho, nos termos da NR-17, incluindo os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. [...].

1.5.4.4.5.3 Para a probabilidade de ocorrência das lesões ou agravos à saúde decorrentes de fatores ergonômicos, incluindo os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, a avaliação de risco deve considerar as exigências da atividade de trabalho e a eficácia das medidas de prevenção implementadas.

<sup>12</sup> Norma Regulamentadora n. 1. 1.5.4.2.1.3 Quando na fase de levantamento preliminar de perigos e riscos não for possível adotar medidas imediatas para reduzir ou controlar o risco ocupacional evidente, as medidas devem ser inseridas no plano de ação e o risco registrado no inventário de riscos. [...].

1.5.4.4.3 Após a determinação dos níveis de risco, os riscos ocupacionais devem ser classificados para fins de identificar a necessidade de adoção ou manutenção de medidas de prevenção e elaboração do plano de ação. [...].

1.5.5.2.1 A organização deve elaborar plano de ação, indicando as medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas, conforme o subitem 1.5.4.4.3.



e implementar Plano de Ação para Mitigação da Desigualdade Salarial e de Critérios Remuneratórios entre Mulheres e Homens, que deverá estabelecer as medidas a serem adotadas, as metas e os prazos e a criação de programas, por exemplo, a capacitação de gestores, lideranças e empregados a respeito do tema da equidade entre mulheres e homens no mercado de trabalho (art. 3º, incisos).

Pode-se considerar, dessa forma, que o Plano de Ação para Mitigação da Desigualdade Salarial e de Critérios Remuneratórios entre Mulheres e Homens constitui parte integrante do Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR, como medida a prevenir danos à saúde das trabalhadoras, garantindo a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança, como previsto constitucionalmente (art. 7º, XXII).

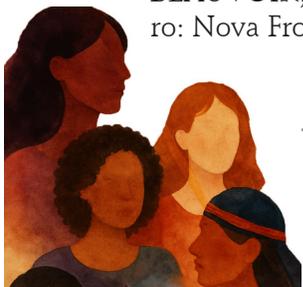
Portanto, as reflexões apresentadas permitem concluir que a Lei n. 14.611, de 2023, institui uma política antidiscriminatória de promoção da igualdade salarial entre mulheres e homens, para combater a violência de gênero, garantindo os direitos fundamentais à não discriminação de gênero e à saúde das trabalhadoras.

## REFERÊNCIAS

OLIVEIRA, Juliana Andrade. Riscos psicossociais no trabalho: uma discussão necessária. **SciELO Preprints**, 2024. Disponível em: <https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/view/9871>. Acesso em: 14 mar. 2025.

BARRETO, Margarida. **Violência, saúde e trabalho** – uma jornada de humilhações. São Paulo: Educ, 2003.

BEAUVOIR, Simone de. **O Segundo Sexo**. Fatos e Mitos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980.



BRASIL. Ministério das Mulheres. **Relatório Anual Socioeconômico da Mulher**. RASEAM. 1ª Impressão. Brasília: Ministério das Mulheres Abril, 2024, 468 p.

BRASIL. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. BNDES. **Cláusula social**. 2025. Disponível em: <https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/desenvolvimento-sustentavel/pratica/clientes/financiamentos-direta-indireta-nao-automatica/contratacao-acompanhamento-socioambiental/clausula-social#:~:text=Desde%20fevereiro%20de%202008%2C%20os,ao%20trabalho%20escravo%20no%20Brasil>. Acesso em: 3 mar. 2024.

BRASIL. Lei n. 14.611, de 3 de julho de 2023. Dispõe sobre a igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens; e altera a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. 1, 4 jul. 2023. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2023-2026/2023/lei/L14611.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/lei/L14611.htm). Acesso em: 20 ago. 2023.

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, n. 191-A, p. 1, 5 out. 1988. Legislação Informatizada – Constituição de 1988 – Publicação Original. Disponível em: [w2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1988/constituicao-1988-5-outubro-1988-322142-publicacaooriginal-1-pl.html](http://w2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1988/constituicao-1988-5-outubro-1988-322142-publicacaooriginal-1-pl.html). Acesso em: 20 ago. 2023.

BRASIL. Agência Gov. **Mulheres são responsáveis por chefiar quase a metade dos lares brasileiros**. 2025a. Disponível em <https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202410/censo-2022-em-12-anos-proporcao-de-mulheres-responsaveis-por-domicilios-avanca-e-se-equipara-a-de-homens>. Acesso em: 1 mar. 2025.

BRASIL. Decreto-Lei n. 5.452, de 1 de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. **Diário Oficial da União**, Rio de Janeiro, RJ, p. 11937, 9 ago. 1943.



CASTILHO, Marta; MELO, Hildete Pereira de; DI SABBATTO, Alberto. Trabalho produtivo e reprodutivo na vida das operárias manauaras. **Revista Gênero**. Niterói, v. 6, n. 1, p. 133-153, 2º sem. 2015.

FEDERICI, Silvia. **O patriarcado do salário** – notas sobre Marx, gênero e feminismo. São Paulo: Boitempo, 2021.

GUIMARÃES, Nadya Araújo; HIRATA, Helena Sumiko. **O gênero do cuidado** – desigualdade, significações e identidades. Cotia: Ateliê Editorial, 2020.

GOUGES, Olympe de. **Declaração dos direitos da mulher e da cidadã e outros textos**. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2021. (Coleção vozes femininas). Disponível em: [https://bd.camara.leg.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/40672/declaracao\\_direitos\\_gouges.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://bd.camara.leg.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/40672/declaracao_direitos_gouges.pdf?sequence=1&isAllowed=y). Acesso em: 11 mar. 2025.

LAQUEUR, Thomas. **Inventando o sexo** – corpo e gênero dos gregos a Freud. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2001.

LERNER, Gerda. **A criação da consciência feminista**: a luta de 1.200 anos das mulheres para libertar suas mentes do pensamento patriarcal. São Paulo: Cultrix, 2022.

MARX, Karl. **Capítulo VI** (Inédito) – manuscritos de 1863-1867, o Capital – Livro I. São Paulo: Boitempo, p. 108-109, 2023.

MARÇAL, Katrine. **O lado invisível da Economia** – uma visão feminista do capitalismo. 2ª. ed. São Paulo: Ed. Alaúde, 2022.

MENDES, Soraia da Rosa. **Lawfare de gênero** – violência processual, violência institucional e violência política contra as mulheres. São Paulo: Saraivajur, 2024.



MINAYO, M. C. S. **Violência e saúde** [online]. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2006. Temas em Saúde collection. Disponível em: <https://static.scielo.org/scielobooks/y9sxc/pdf/minayo-9788575413807.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2025.

MOREIRA, Adilson. **Tratado de Direito Antidiscriminatório**. São Paulo: Contracorrente, 2020.

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. OIT. **Convenção (no 190) sobre Violência e Assédio**, 2019. Tradução não oficial. Disponível em [https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@europe/@ro-geneva/@ilo-lisbon/documents/genericdocument/wcms\\_729459.pdf](https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@europe/@ro-geneva/@ilo-lisbon/documents/genericdocument/wcms_729459.pdf). Acesso em: 1 mar. 2025.

PIMENTEL, Silvia; MENDES, Maria. **Estereótipos de gênero I – como são julgados os crimes de estupro e demais violências sexuais contra as mulheres?** 2ª. ed. São Paulo: Matrioska Editora, 2024.

PRECIADO, Paul B. **Manifesto contrassexual** – práticas subversivas de identidade sexual. Rio de Janeiro: Zahar, 2022.

QUIJANO, Aníbal. **Ensayos en torno a la colonialidad del poder**. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Del Signo, 2019.

SAFFIOTI, Helena. **A mulher na sociedade de classes: mito e realidade**. São Paulo: Expressão Popular, 3ª ed., 2013.

SOUZA-LOBO, Elisabeth. **A classe operária tem dois sexos – Trabalho, dominação e resistência**. 3ª ed. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, Ed. Expressão Popular, 2021.



# DIREITOS DA NATUREZA COMO POSSIBILIDADE DE SUSTENTABILIDADE NA SOCIEDADE CONSUMOCENTRISTA

Cleide Calgareo<sup>1</sup>

## INTRODUÇÃO

O presente capítulo analisa a sociedade consumocentrista e a possibilidade de se viabilizar a sustentabilidade através do estudo dos direitos da natureza. Para tal estudo será utilizado o método analítico tendo como base o estudo de doutrina e legislações constitucionais.

Inicia-se o assunto com o estudo das estruturas constitucionais brasileiras e equatorianas a fim de verificar como a natureza é vista e qual a percepção que se tem desses direitos na sociedade atual. Posteriormente, examina-se a sociedade consumocentrista e o seu impacto na sociedade contemporânea, onde o consumo se torna o centro da mesma. O consumo também torna-se centro da vida dos indivíduos, os quais são alienados, docilizados e adestrados, mesmo que de forma inconsciente a não perceberem os problemas socioambientais existentes.

Após, examina-se a sustentabilidade e seus pilares para entender como a mesma pode ser implementada nessa sociedade consumocentrista tendo como um caminho os direitos da natureza e sua visão da mãe terra

<sup>1</sup> Doutora em Ciências Sociais, em Filosofia e em Direito. Pós-Doutora em Filosofia e em Direito. Atualmente é Professora da Graduação e Pós-Graduação - Mestrado e Doutorado - em Direito na Universidade de Caxias do Sul - UCS. É Líder do Grupo de Pesquisa "Metamorfose Jurídica". Membro do Comitê Assessor de Ciências Humanas e Sociais da FAPERGS: Membro Titular (2019-2022/2022-2024). Presidenta do Conselho Consultivo Internacional da Escuela Interdisciplinar de Derechos Fundamentales Praeeminentia Iustitia - Perú. Socióloga, Pedagoga e Psicanalista. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1840-9598>. CV: <http://lattes.cnpq.br/8547639191475261>. E-mail: [ccalgareo1@hotmail.com](mailto:ccalgareo1@hotmail.com).



como portadora de direitos, ressignificando o paradigma de consumo e de percepção legislativa.

Conclui-se que é importante ressignificar e repensar a sociedade de consumo e a forma como se vive no planeta, a fim de proteger as pessoas e o meio ambiente para que todos possam ter uma sociedade digna, justa, solidária e ecologizada.

## 1 ESTRUTURAS CONSTITUCIONAIS DO BRASIL E DO EQUADOR

Ao analisar-se as estruturas constitucionais do Brasil e do Equador se observa percepções diferentes sobre a forma de tratar a natureza e os cidadãos. O que é um fator importante para que se insira a sustentabilidade dentro de uma sociedade que se pauta no consumo como centro da mesma, ou seja, numa sociedade consumocentrista.

Inicia-se com uma breve reflexão acerca da Constituição do Brasil de 1988, sendo que no art. 225, declara que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida”, incumbindo “ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (Brasil, 1988). Pelo exposto no artigo, pode-se refletir se o meio ambiente considerado como um “bem de uso comum do povo” não reforça a manutenção desses bens a partir de uma visão antropocêntrica, onde os mesmos estariam a serviço da sociedade dentro da percepção de dominação e expropriação. Também se observa que a Constituição apresenta uma preocupação com as gerações futuras, na busca de um princípio intergeracional, mas os sujeitos de direitos são seres humanos, isso faz refletir se os seres não humanos como a natureza e o seu valor intrínseco também não poderiam ser considerados sujeitos de direitos.



Sabe-se que há avanços significativos em nosso texto constitucional de 1988, como o estímulo a participação da sociedade e do poder público na consecução de um meio ambiente que seja ecologicamente equilibrado, mas, ainda, necessita-se de maior proteção dentro da sociedade consumocentrista. Na visão de Derani acerca da ordem econômica que inicia no art. 170 afirma que

a necessidade de assegurar a base natural da vida (natureza) coloca novos matizes na política econômica. É, na verdade, o grande desafio das políticas econômicas. A obviedade da necessidade de uma relação sustentável entre o desenvolvimento industrial e meio ambiente é exatamente a mesma da irreversibilidade da dependência da sociedade moderna dos seus avanços técnicos e industriais. Assim, qualquer política econômica deve zelar por um desenvolvimento da atividade econômica e de todo seu instrumental tecnológico ajustado com a conservação dos recursos naturais e com uma melhora efetiva da qualidade de vida da população (Derani, 2008, p. 239).

É preciso pensar acerca dessa visão constitucional e o impacto que a mesma possui no contexto de proteção ambiental e social, para que tanto a natureza como as pessoas mais vulneráveis possam ser protegidas e respeitadas em sua integralidade.

Já, na Constituição Equatoriana de 2008 também conhecida como Constituição de Montecristi, há uma preocupação com a proteção da Mãe Terra, tida como *Pachamana* e do bem viver, conhecido como *Sumak Kawsay*<sup>2</sup>. Essa visão permite que se ressalte que a natureza possui bens que são esgotáveis e que precisam de proteção, bem como, os

<sup>2</sup> A proposta do bem viver provém de um sujeito histórico, cujos vínculos com a terra e a natureza não estão quebrados, mesmo apesar de todo o sofrimento histórico, do despojo e da destruição da natureza: os índios. O bem viver, para eles, é mais do que viver melhor, ou viver bem: o bem viver é viver em plenitude. De fato, o termo utilizado não é “*alli kawsay*” (*alli* = bem; *Kawsani* = viver), mas sim “*sumak Kawsay*” (*sumak* = plenitude; *kawsani* = viver). (MARTÍNEZ, 2010. Entrevista especial com Esperanza Martinez. Revista do Instituto Humanista Unisinos. [on line]. Disponível em: <http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/34622>).



cidadãos. Com isso se admite uma lógica de preservação socioambiental e/ou socioecológica que pode ser uma alternativa para que se efetive a sustentabilidade.

A visão equatoriana traz uma concepção ecocêntrica de pensamento ao afirmar que a natureza deve ser respeitada, como o local em que a vida se realiza e se concretiza, devendo ser reconhecida e aceita como *sujeito de direitos*<sup>3</sup>, como se extrai do art. 10 - *“Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizado sem la Constitución y en los instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución”* (Ecuador, 2008). Isso expressa-se também no art. 71 que determina:

Art. 71- La naturaleza o Pacha Mama<sup>4</sup>, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observaran los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda.

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema (Ecuador, 2008).

---

<sup>3</sup> “El reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza permite convertirla en sujeto de derechos, donde ésta vale por sí misma, independientemente de la posible utilidad o uso humano. Ésta es una postura biocéntrica, donde se debe asegurar la sobrevivencia de especies y ecosistemas. Por lo tanto, no implica una naturaleza intocada, sino que es posible seguir aprovechando los recursos naturales, pero mientras se mantengan los sistemas de vida” (Acosta; Gudynas, 2011, p. 108).

<sup>4</sup> Na visão de Martínez a Pachamama é “una especie de dualidad con base en la cual se sustenta la existencia misma, es divino al mismo tiempo que terrenal, es la espiral que simboliza la vida y la muerte. La Pachamama es lo que sostiene la existencia de este tipo de pueblos tanto en el ámbito humano como en el sagrado” (Martínez, s.a).



Além disso, no artigo 83 da Constituição Equatoriana são trazidos os deveres e as responsabilidades atribuídas ao povo, entre eles, no item 3 do citado artigo, tem-se a atribuição de “*defender la integridad territorial del Ecuador y sus recursos naturales*” (Ecuador, 2008). No mesmo artigo, no item 6, a atribuição de “*respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible*” (Ecuador, 2008). Já, no item 7, a atribuição de “*promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, conforme al buen vivir*” (Ecuador, 2008).

Ao se observar o artigo 83 e outros da Constituição equatoriana, averigua-se que houve uma manifestação popular que visa o respeito a natureza como ente e não somente como bem, isso permite que exista o respeito ao patrimônio cultural e ambiental, em todas as suas esferas e que a tomada das decisões se pautem numa percepção ecocêntrica de natureza. Para Gudynas e Acosta:

La dimensión ambiental es, en cambio, más intensa en Ecuador, donde se reconocieron por primera vez los Derechos de la Naturaleza (artículos 71 a 74, destacándose el Artículo 72 donde se establecen los derechos a la restauración de la naturaleza). Esto consolida la dimensión ambiental del Buen Vivir, mientras que el texto boliviano es más ambiguo, en tanto algunos artículos defienden el mandato del Estado de industrializar los recursos naturales. El reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza permite convertirla en sujeto de derechos, donde ésta vale por sí misma, independientemente de la posible utilidad o uso humano. Ésta es una postura biocéntrica, donde se debe asegurar la sobrevivencia de especies y ecosistemas. Por lo tanto, no implica una naturaleza intocada, sino que es posible seguir aprovechando los recursos naturales, pero mientras se mantengan los sistemas de vida (Gudynas; Acosta, 2011, p. 108).



Essa Constituição parte do pressuposto de que a natureza deve ser tratada como sujeito de direitos e que os povos originários possam participar e contribuir na sociedade, saindo de uma visão estruturalmente consumocentrista e buscando uma visão mais ecologizada, o que pode gerar transformações legislativas e jurisprudenciais não somente no Equador, mas no mundo, como é o caso de várias ações que busca essa lógica como, por exemplo, no Brasil com o caso do Rio Doce (2017)<sup>5</sup> e da Lagoa da Conceição (2021)<sup>6</sup>, entre outras situações que trazem essa possível mudança de racionalidade. É importante perceber que a sustentabilidade está atrelada a mudanças de comportamento, de racionalidade tanto sociais quanto ambientais, e, principalmente econômicas, pois é difícil na sociedade consumocentrista equacionar esses tripés.

Se ressalta o respeito a natureza em toda a sua integralidade permitindo que a mesma seja elevada a sujeito de direitos. Se entende que o Equador possui uma série de problemas estruturais, mas o mesmo trouxe uma nova concepção para o tratamento da Mãe Terra e dos seus cidadãos, o que pode ser uma forma diferenciada de pensamento para se atingir a sustentabilidade dentro de uma sociedade que é caracterizada pelo consumo e exploração. Por isso na ótica de Martínez Dalmau *“La evolución constitucional responde al problema de la necesidad. Los grandes cambios constitucionales se relacionan directamente con las necesidades de la sociedades posean sobre las posibilidades del cambio de sus condiciones de vida que, en general, en América Latina no cumplen con las expectativas esperadas en los tiempos que transcurren”* (Martínez Dalmau, 2008c, p. 22).

---

<sup>5</sup> Consultar em: ONG PACHAMAMA. Disponível em: <https://www.ongpachamama.org/single-post/2017/11/07/uma-a%C3%A7%C3%A3o-pelos-rios-como-sujeitos-de-direito>.

<sup>6</sup> O ingresso do MPSC como assistente litisconsorcial na ação civil pública em defesa da Lagoa da Conceição – ajuizada pela Associação Pachamama, ONG Costa Legal e União Florianopolitana das Entidades Comunitárias (UFECO), além do Grupo de Pesquisa Direito Ambiental e Ecologia Política na Sociedade de Risco da UFSC – foi requerido pela 32ª Promotoria de Justiça da Comarca da Capital (FloripAmanhã, 2016).



O repensar e o refletir os problemas socioambientais<sup>7</sup> através das Constituições permite uma ressignificação das formas de consumo e das maneiras de considerar a natureza e as pessoas trazendo assim, uma visão mais plural do direito.

## 2 A SOCIEDADE CONSUMOCENTRISTA E SEUS REFLEXOS NA CONTEMPORANEIDADE

O consumo regrado e necessário não é o problema na sociedade atual, mas quando esse consumo se torna desregrado, destruidor e alienador se começa a perceber o quanto o mesmo pode ser prejudicial aos seres humanos e aos não humanos.

Na atualidade o consumo passa a ser o elemento principal das atividades humanas, deslocando o “ser” para o “ter” ou “parecer”, ou seja, se precifica o ser humano e valoriza os bens, invertendo-se a cadeia de valores éticos. Esse apego aos bens se torna um fetichismo da mercadoria e isso acaba sendo “como instrumento mediador das relações sociais (coisificação), constitui uma realidade específica e aparentemente intransponível para quem vive sob o capitalismo moderno.” (Almeida, 2015, p. 307). Na visão de Bauman

os membros da sociedade de consumidores são eles próprios mercadorias de consumo que os torna membros autênticos dessa sociedade. Tornar-se e continuar sendo uma mercadoria vendável é o mais poderoso motivo de preocupação do consumidor, mesmo que geral latente e quase nunca consciente (Bauman, 2008, p. 63-64).

<sup>7</sup> Nesse caso tem-se a junção de problemas sociais, como a fome, a pobreza, a desigualdade social e, problemas ambientais, tais como: desmatamento, mudanças climáticas, poluição entre outros.



Na ótica de Lipovetsky o mundo do consumo acaba se imiscuindo na vida e nas relações das pessoas e, ao se misturar na vida, se torna o centro de tudo. Para o autor:

Todos os dias parecem que o mundo do consumo se imiscui em nossas vidas e modifica nossas relações com os objetos e com os seres, sem que, apesar disso e das críticas que se formulam a respeito dele, consiga-se propor um contramodelo crível. E, para além da postura crítica, seriam raros aqueles que desejariam mesmo aboli-lo em definitivo. É forçoso constatar que seu império não pára de avançar: o princípio de *self-service*, a busca de emoções e prazeres, o cálculo utilitarista, a superficialidade dos vínculos parece ter contaminado o conjunto do corpo social, sem que nem mesmo a espiritualidade escape disso (Lipovetsky, 2004, p. 33).

Hodiernamente essa sociedade de consumo passa a ser uma sociedade consumocentrista, ou seja, se caracteriza pelo fato de o consumo estar no centro da vida das pessoas, sendo que se tem um consumo dirigido, onde existe o adestramento, a docilização e a alienação – mesmo que inconsciente - dos consumidores para comprarem e usufruírem de bens e serviços de que, muitas vezes, não necessitam. Esse fato apresenta, cada vez mais, a individualização das pessoas, onde a preocupação desses indivíduos não está na sociedade e no meio ambiente, mas sim, em si mesmo.

O consumocentrismo se concretiza pelo fetichismo da compra de produtos que vão servir para satisfazer as necessidades individuais, sem a preocupação de como são feitos e de quem é explorado para a fabricação dos mesmos. Não se reflete os modelos de produção e os problemas socioambientais advindos do consumo desregrado, somente se tem o fascínio do consumo se conjugando com o vazio e o espetáculo que essa sociedade apresenta.



O consumidor vê os problemas como não seus e sua satisfação está no espetáculo de adquirir e demonstrar aos outros o que se aparenta “ter” e não o que se “é”. Debord (1997) demonstra que se vive numa sociedade espetáculo, na qual se é levado a uma catarse de felicidade momentânea que constrói o mundo do consumo e destrói o mundo social através de uma edificação configurada na superficialidade, na individualidade e num esteticismo banais.

Aponta-se que o mundo do consumo acaba se mesclando com a vida e as relações das pessoas, se tornando o centro de tudo. Como se pode depreender o consumocentrismo se caracteriza pelo fato do consumo estar no centro da vida das pessoas, isso faz com que as mesmas entendam os problemas socioambientais como não seus, ou seja, como um filme ou uma série de TV e, por consequência, não precisam se preocupar e buscar fazer uma reflexão do seu papel na sociedade e no mundo. Pereira (2016) *et al.* demonstram que sociedade já está adiante do hiperconsumo, trazendo o conceito de sociedade consumocentrista, sendo que o consumo passa a ser o elemento central da atividade humana como se pode observar abaixo.

Entende-se que se ultrapassou a denominada sociedade hiperconsumista, dando azo a uma sociedade consumocentrista. Nesse viés, o consumo passa a ser o elemento principal das atividades humanas, deslocando o ser para o ter e, posteriormente, para o aparentar. Dessa forma, o consumo se torna o centro da sociedade contemporânea, onde o consumidor vai buscar todas as possibilidades de sua nova razão de viver. Consumir é existir (Pereira; Calgaro; Pereira, 2016, p. 267).

Para Pereira e Calgaro “na atualidade, as pessoas não consomem mais por necessidade, mas sim pelo prazer de comprar, seja para satisfazer suas futilidades, ou simplesmente, por consumir” (Pereira; Calgaro, 2015,



p. 16). Assim sendo as pessoas voltam sua felicidade, seus sonhos e sua vida à arte do consumo e esse consumo acaba sendo o centro da vida e das atenções dentro do contexto social.

Nesse sentido Pereira e Calgaro (2014, p.14) assinalam que “essa cultura consumista se desenvolve, também, a partir de uma educação que cria o desejo pelo consumo, pelo descarte, pela valorização do novo. O velho se torna ultrapassado e sem sentido. Porém, as consequências dessas atitudes não têm qualquer proeminência para o “ser consumidor””. Portanto, “consumir se torna a palavra mágica, capaz de transformar a vida do indivíduo, alçando-o ao patamar de detentor de *status* e de poder no mundo, fazendo com que este se sinta grandioso, o “deus” de possibilidades e de oportunidades” (Pereira; Calgaro, 2014, p. 14).

A armadilha capitalista e de consumo determina uma complexa inversão de padrões, por isso, é necessário compreender o consumocentrismo para não cair na sua armadilha. É essencial verificar o papel dos governantes, pois os mesmos, através de políticas públicas de Estado, podem minimizar os impactos socioambientais e buscar a sustentabilidade. Também não se deve criar mais legislações, mas, sim, tornar efetiva as que há no sistema jurídico, além disso, o Poder Judiciário deve tomar suas decisões de forma justa e equânimes.

Faz-se necessário repensar e ressignificar essa forma consumocentrista para se procurar a sustentabilidade, isso porque, o ser humano está sistemicamente ligado à natureza. Esta interligação demanda à proteção da natureza como elemento fundamental em si própria e, também, como possibilidade de sobrevivência da espécie humana. Dessa maneira, viver de forma sustentável é um caminho para uma mudança.



### 3 A SUSTENTABILIDADE E OS DIREITOS DA NATUREZA NA SOCIEDADE CONSUMOCENTRISTA

É necessário repensar a forma de vida na sociedade<sup>8</sup> e se há uma busca pela sustentabilidade. Na visão de Leff (2001, p. 15)<sup>9</sup> essa visão do ser humano e sua ligação com o progresso e o desenvolvimento econômico acaba sendo um problema. O mesmo adverte que “a visão mecanicista da razão cartesiana converteu-se no princípio constitutivo de uma teoria econômica que predominou sobre os paradigmas organicistas dos processos da vida”, fato que legitimou a falsa ideia de “progresso da civilização moderna”. O autor demonstra que “a racionalidade econômica banuiu a natureza da esfera da produção, gerando processos de destruição ecológica e degradação ambiental”. Destarte, é preciso ir além do equilíbrio entre crescimento econômico e conservação da natureza, pois

a possibilidade de mobilizar o potencial ecotecnológico, a criatividade cultural e a participação social para construir formas diversas de um desenvolvimento sustentável, igualitário, descentralizado e autogestionário, capaz de satisfazer as necessidades básicas das populações,

<sup>8</sup> Edward Wilson (2002, p. 97) elucida uma visão do provável mundo de 2100, caso as tendências atuais continuem, salientando que a herança mais memorável do século XXI será a era da Solidão que aguarda a humanidade. Segundo o autor, o testamento deixado a este mundo poderia ser escrito mais ou menos assim: “Nós vos deixamos as selvas do Havái e algumas árvores raquíticas onde outrora existiu a prodigiosa floresta Amazônica, juntamente com pequenas ilhas de vegetação nativa que não chegamos a destruir totalmente. Vosso desafio será criar novas formas de plantas e animais por engenharia genética e de alguma forma integrá-las em ecossistemas artificiais auto-sustentáveis. Comprendemos que talvez isto se revele impossível. Estamos certos de que, para alguns de vós, a simples idéia de fazer algo semelhante causará repugnância. Desejamos-lhes boa sorte. Se conseguireis sucesso, lamentamos que vossa obra jamais possa ser tão satisfatória quanto à criação original. Aceitai nossas desculpas e esta biblioteca audiovisual que mostra quão maravilhoso costumava ser o nosso mundo”.

<sup>9</sup> “Veremos más adelante cuan alejado de este mundo ideal de una intersubjetividad basada en un ‘saber de fondo’ está la visión de una racionalidad ambiental conformada por matrices de racionalidad que no unifican sus visiones, cogniciones e interpretaciones en ninguna totalidad, y cuyos consensos no disuelven las diferencias que alimentan la productividad del diálogo de los saberes que en ellas se inscriben. En todo caso, el saber de fondo que establece las condiciones de consenso no sólo deriva de una racionalidad instrumental o a una pretensión de verdad preestablecida” (Leff, 2003, p. 17).



respeitando sua diversidade cultural e melhorando sua qualidade de vida (Leff, 2001, p. 87).

E Leff adverte que “la sustentabilidad posible será la resultante de estas tensiones – y sus vías políticas de resolución –, más que de una solución anticipada por la vía de un consenso a través de una racionalidad comunicativa que orienten la construcción de un ‘futuro común’” (Leff, 2003, p. 19).

Dessa forma, a sustentabilidade é vista como o cuidado com o planeta e a sociedade, relação essa, que pressupõe uma ligação sistêmica, com a finalidade de se procurar a preservação da natureza e, ademais, o equilíbrio social, reduzindo as desigualdades, a pobreza e outros problemas motivados pela ação humana. Além desses aspectos, é necessário se preocupar com os assuntos econômicos, para haja a redução da poluição, dos desmatamentos e das mudanças climáticas, por exemplo. Portanto, a sustentabilidade seria a capacidade de sustentação e conservação do sistema para que exista estabilização entre os pilares econômico, social e ambiental. A ideia de sustentabilidade é multifacetada, isso porque, a mesma acaba trazendo em seu bojo uma preocupação com a natureza, com as pessoas que vivem em sociedade e com o crescimento econômico que deve ser realizado de forma ordenada, equitativa e justa.

Leff (2001, p. 409) aponta que a sustentabilidade “confrontam-se os tempos da degradação entrópica, os ciclos da natureza e as crises econômicas, a inovação tecnológica e as mudanças institucionais”, com isso, faz-se necessária “a construção de novos paradigmas de conhecimento, comportamentos sociais e racionalidades produtivas”.

Para Nalini (2001, p. 138-139), a sustentabilidade “importa em transformação social, sendo conceito integrador e unificante”. O autor, ainda, “propõe a celebração da unidade homem/natureza, na origem e no destino comum e significa um novo paradigma. Não há necessidade de



se renunciar ao progresso para a preservação do patrimônio ambiental”. Vai adiante afirmando que “serviu-se a humanidade da natureza como se fosse um supermercado gratuito. Tudo estava a serviço e à disposição do senhor da Terra”, e destaca que “essa irresponsabilidade está prestes a chegar ao fim. Depois de verificar a finitude dos bens naturais, o comprometimento e a deterioração daquilo que restou, o ser pensante precisa se reciclar”.

Portanto, a sustentabilidade não pode ser somente um slogan, mas deve ser a busca do equilíbrio entre os pilares social, ambiental e econômico, sendo que os mesmos devem se complementar e, não o pilar econômico se sobressair aos demais. Agir de forma sustentável com responsabilidade socioambiental e/ou socioecológica permite almejar as nossas necessidades e, ao mesmo tempo, preservar os recursos naturais para as presentes e futuras gerações, além de manter o mínimo de dignidade aos cidadãos.

A sustentabilidade deve ser vista como o cuidado com o planeta e a sociedade a partir de uma relação sistêmica, pois assim se efetiva uma proteção e preservação da natureza em seu valor intrínseco e, também, o equilíbrio social com a diminuição da pobreza e das desigualdades. Por isso, a sustentabilidade vai além da racionalidade econômica, a mesma permite que haja uma ecologização do econômico, do social e do ambiental dentro de uma sociedade cujos modos de consumo devem ser ressignificados e revistos por todos.

Importante a visão de Caillé e Chaniel trazida pelo movimento convivialista<sup>10</sup> de que é essencial “uma arte de viver juntos (conviver)

<sup>10</sup> O movimento convivialista surgiu com a relação do colóquio de julho de 2011, o qual foi planejado por Ivan Illich e aberto por Allain Caillé, Patrick Viveret e Serge Latouche, seguido da publicação da obra *Manifeste Convivialiste: Déclaration d'interdépendance*, divulgada em 19 de junho de 2013, sendo que essa publicação reuniu 64 pesquisadores franceses que propuseram os ideais, os quais se concentram em, pelo menos, seis assuntos basilares (Caillé; Chaniel, 2014, p. 5-6, tradução nossa). En juin 2013, paraissait (au Bord de l'eau) un petit livre intitulé Manifeste convivialiste. Déclaration d'interdépendance. Signé par soixante-quatre intellectuels français ou étrangers (rejoint par une cinquantaine d'autres depuis), il a déjà été traduit, au moins sous sa forme



que valoriza o relacionamento e a cooperação e permite a oposição sem o massacre, cuidando dos outros e da natureza” (Caillé; Chaniel, 2014, p. 10, tradução nossa)<sup>11</sup>. Apontam que existem cinco questões essenciais e quatro princípios basilares que são a base do movimento convivialista. As questões são morais, política, ecológica, econômica e religiosa ou espiritual<sup>12</sup>. A questão moral compreende ao que é permitido aos indivíduos e do que devem se abster. Na questão política, avalia-se quais são as comunidades políticas legítimas. E, na questão ecológica, compete a pergunta de o que se pode tirar da natureza e o que se deve a ela devolver. Já, a questão econômica, questiona-se que quantidade de riqueza material é possível produzir, e como permanecer consistente com as respostas dadas para as questões morais, políticas e ecológicas. Por fim, na questão religiosa ou espiritual, está o assunto do significado (Caillé; Chaniel, 2014, p. 10, tradução nossa).

É importante o alerta do Papa Francisco (2015) afirmando que “a cultura ecológica não se pode reduzir a uma série de respostas urgentes e parciais para os problemas que vão surgindo à volta da degradação ambiental, do esgotamento das reservas naturais e da poluição”. Dessa maneira “deveria ser um olhar diferente, um pensamento, uma política, um programa educativo, um estilo de vida e uma espiritualidade que oponham resistência ao avanço do paradigma tecnocrático.” Afirma

---

abrégée, dans une dizaine de langues. Son premier mérite est d'exister. Sa parution montre qu'avec de la volonté il est possible de surmonter les clivages, trop nombreux et qui nous condamnent à l'impuissance, qui séparent encore tous ceux qui, partout à travers le monde, s'opposent pratiquement ou intellectuellement au règne du néolibéralisme et du capitalisme rentier et spéculatif en dessinant les contours d'un monde postnéolibéral”.

<sup>11</sup> “Le convivialisme comme la pensée ou la recherche ‘d’un art’ de vivre ensemble (con-vivere) qui valorise la relation et la coopération, et permette de s’opposer sans se massacrer, en prenant soin des autres et de la Nature”.

<sup>12</sup> “La question morale: qu’est-il permis aux individus d’espérer et que doivent-ils s’interdire? La question politique : quelles sont les communautés politiques légitimes? La question écologique : que nous est-il permis de prendre à la nature et que devons-nous lui rendre? La question économique : quelle quantité de richesse matérielle nous est-il permis de produire, et comment, pour rester en accord avec les réponses données aux questions morale, politique et écologique? Libre à chacun d’ajouter à ces quatre questions, ou pas, celle du rapport à la surnature ou à l’invisible: la question religieuse ou spirituelle. Ou, dit autrement, la question du sens”.



o pontífice que “caso contrário, até as melhores iniciativas ecologistas podem acabar bloqueadas na mesma lógica globalizada. Buscar apenas um remédio técnico para cada problema ambiental que aparece, é isolar coisas que, na realidade, estão interligadas e esconder os problemas verdadeiros e mais profundos do sistema mundial.” (Papa Francisco, 2015, §51).

Por fim, se faz necessário que a sociedade busque um viés mais sustentável de vida e repense a forma consumocentrista, sendo que a visão do constitucionalismo latino-americano é um avanço nesse pensamento, mas é preciso que todos – Estado, governo, sociedade (cidadão) e poder econômico – possam ter atitudes mais categóricas e fáticas.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

A sustentabilidade deve ser compreendida como um direito, a fim de que todas as pessoas possam acessá-la. Isso quer dizer que os pilares econômico, social e ambiental devem caminhar juntos para que a mesma se concretize, a fim de que os problemas socioambientais possam ser minimizados na sociedade consumocentrista.

É importante se repensar e ressignificar o modo de consumo e a forma predatória como o mesmo vem sendo executado em nossa sociedade. O consumo como centro da sociedade representa o lucro das grandes corporações que prejudicam não somente o meio ambiente, mas as populações. Pensar o papel de cada cidadão, de cada governo, de cada Estado e de cada universidade é primordial para se atingir os objetivos de sustentabilidade.

Pensar globalmente, agir localmente é um caminho e um desafio na concretização da sustentabilidade e da formação de um novo



pensamento crítico que ressignifique o consumo e a forma de se agir em sociedade.

Por fim, é preciso discutir os problemas que assolam nossos países e verificar o real papel do Estado na sociedade consumocentrista. A ressignificação do consumo, a perspectiva sistêmica, a empatia dos sujeitos, a cooperação social entre Estados é um caminho para se concretizar os direitos fundamentais catalogados pelas nossas constituições e, conseqüentemente, se buscar a sustentabilidade.

## REFERÊNCIAS

ACOSTA, Alberto; GUDYNAS, Eduardo. El buen vivir o la disolución de la idea del progreso. *In*: ROJAS, Mariano (coord.). **La medición del progreso y bienestar**: propuestas desde América Latina. México: Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 2011.

ALMEIDA, Roberto Ribeiro de. A coisificação do sujeito de direito e os limites da humanização: uma análise de “História e consciência de classe” (1923) de György Lukács. *In*: ALMEIDA, Guilherme Assis de; PRADO, Alessandro Martins; SEVERO, Thais Lara Marcozo (org.). **A constituição do sujeito de direitos humanos**. Curitiba: Editora CRV, v. 1, cap. 17, p. 307, 2015.

BAUMAN, Zigmunt. **Vida para consumo**: a transformação das pessoas em mercadoria. Trad. Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: J. Zahar, p. 63-64, 2008.

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, n. 191-A, p. 1, 5 out. 1988. Legislação Informatizada – Constituição de 1988 – Publicação Original. Disponível em: [w2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1988/constituicao-1988-5-outubro-1988-322142-publicacaooriginal-1-pl.html](http://w2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1988/constituicao-1988-5-outubro-1988-322142-publicacaooriginal-1-pl.html).



CAILLÉ, Alain; CHANIAL, Philippe. **Présentation. Revue Du Mauss**, Paris, v. 01, n. 43, p. 05-22, jan. 2014. Disponível em: <https://www.cairn.info/revue-du-mauss-2014-1.html>.

DERANI, Cristiane. **Direito ambiental econômico**. São Paulo, Sarai-va, 2008.

DEBORD, Guy. **A sociedade do espetáculo**. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997.

ECUADOR. **Constitución del Ecuador de 2008**. Constitución de la República del Ecuador. Disponível em: [http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion\\_de\\_bolsillo.pdf](http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf).

FLORIPAMANHÃ. **Justiça cria Câmara Judicial de Proteção da Lagoa da Conceição e atende pedido do MPSC para atuar como assistente em ação ajuizada por entidades civis**. Disponível em: <http://floripamanha.org/2021/06/justica-cria-camara-judicial-de-protecao-da-lagoa-da-conceicao-e-atende-pedido-do-mpsc-para-atuar-como-assistente-em-acao-ajuizada-por-entidades-civis/>.

GUDYNAS, Eduardo; ACOSTA, Alberto. **El buen vivir o la disolución de la idea del progreso**. México, p. 108, 2011. Disponível em: <http://www.gudynas.com/publicaciones/capitulos/GudynasAcostaDisolucionProgresoMx11r.pdf>.

LEFF, Enrique. **Racionalidad ambiental y diálogo de saberes: sentidos y senderos de un futuro sustentable**. Desenvolvimento e Meio Ambiente, n. 7, p. 13-40, Editora UFPR, jan./jun. 2003.

LEFF, Enrique. **Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade e poder**. Tradução Lúcia M. E. Orth. Rio de Janeiro: Vozes, 2001.



LIPOVETSKY, Gilles. **Os tempos hipermodernos**. São Paulo: Baccarolla, 2004.

MARTÍNEZ DALMAU, Rubén. **Assembleas constituintes e novo constitucionalismo en America Latina**. Tempo Exterior, n.17, jul./dez. 2008c.

MARTÍNEZ, Esperanza. **Pachamama y Sumak Kawsai**. Disponível em: <http://www.sicsal.net/reflexiones/CentenarioProanhoEMartinez.pdf>.

MARTÍNEZ, Esperanza. **Sumak kawsay**. Nem melhor, nem bem: viver em plenitude. 2010. Entrevista especial com Esperanza Martinez. Revista do Instituto Humanista Unisinos. [on line]. Disponível em: <http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/34622>.

NALINI, José Renato. **Ética Ambiental**. Campinas: Millennium, 2001.

ONG PACHAMAMA. **Em ação judicial inédita no Brasil, o Rio Doce, representado pela Associação Pachamama, pede o recon**. Disponível em: <https://www.ongpachamama.org/single-post/2017/11/07/uma-a%C3%A7%C3%A3o-pelos-rios-como-sujeitos-de-direito>.

PAPA FRANCISCO. **Carta Encíclica Laudato Si' do Santo Papa Francisco sobre o Cuidado da Casa Comum**. 2015. Disponível em: [http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/pa-pa-francesco\\_20150524\\_encyclica-laudato-si.html](http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/pa-pa-francesco_20150524_encyclica-laudato-si.html).

PEREIRA, Agostinho Oli Koppe; CALGARO, Cleide; PEREIRA, Henrique Mioranza Koppe. Consumocentrismo e os seus reflexos socioambientais na sociedade contemporânea. In: **Revista Direito Ambiental e Sociedade**, v. 6, n. 2, Caxias do Sul, RS, 2016. Disponível em: <http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/direitoambiental/article/view/4682/2605>.



PEREIRA, Agostinho Oli Koppe; CALGARO, Cleide. A modernidade e o hiperconsumismo: políticas públicas para um consumo ambientalmente sustentável. *In*: PEREIRA, Agostinho Oli Koppe; HORN, Luiz Fernando Del Rio (org.). **Relações de consumo**: políticas públicas. Caxias do Sul, RS: Plenum, 2015. ISBN: 97-885-885-1264-1.

PEREIRA, Agostinho Oli Koppe; CALGARO, Cleide. Os riscos ambientais advindos dos resíduos sólidos e o hiperconsumo: a minimização dos impactos ambientais através das políticas públicas. *In*: PEREIRA, Agostinho Oli Koppe; CALGARO, Cleide; HORN, Luiz Fernando Del Rio (org.). **Resíduos sólidos**: consumo, sustentabilidade e riscos ambientais. Caxias do Sul, RS: Plenum, 2014.

WILSON, Edward Osborne. **O futuro da vida**: um estudo da biosfera para a proteção de todas as espécies, inclusive a humana. Tradução Ronaldo Sérgio de Biasi. Rio de Janeiro: Campus, 2002.





# A BIOÉTICA FEMINISTA E O DIREITO AO ABORTO NO BRASIL: COMENTÁRIOS A PARTIR DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 442

Daniela Zilio<sup>1</sup>

## INTRODUÇÃO

O direito ao aborto é tema persistente juridicamente falando. Em tempos atuais, tem tomado proporções significativamente maiores, tendo em vista ser pauta discutida pela Suprema Corte Brasileira. Não há que se questionar, portanto, a imprescindibilidade do debate acadêmico do tema que, embora como relacionado, é persistente, mas ainda não tem perspectiva de que se torne incontroverso. Socialmente isso nem parece ser possível. Juridicamente os argumentos levantados são fortíssimos para que se torne efetiva no Brasil a descriminalização da conduta. O estudo pretende contribuir ao debate, desta vez a partir do caso específico da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 442.

Assim, o objetivo geral proposto no estudo é entender a possibilidade de um direito ao aborto, no ordenamento jurídico brasileiro, sobretudo a partir dos argumentos levantados na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 442, levando-se em consideração, também, o olhar da bioética feminista. Os objetivos específicos são, sequencialmente: tratar da bioética feminista; explicitar

<sup>1</sup> Doutora e Mestra em Direito pelo Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade do Oeste de Santa Catarina; Especialista em Direito Civil e Direito Processual Civil e especialista no Novo Sistema Processual Civil Brasileiro pela Universidade do Oeste de Santa Catarina; Especialista em Direito Constitucional com ênfase em Direitos Fundamentais pela Faculdade CERS; Professora do Curso de Direito da Universidade do Oeste de Santa Catarina; *Campus* de São Miguel do Oeste e de Pinhalzinho; Advogada; Membro do Grupo de Estudos e Pesquisa “Interculturalidade e intersubjetividade: gênero orientação sexual, raça e etnia”, vinculado ao Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade do Oeste de Santa Catarina. E-mail: danielazilio@yahoo.com.br.



a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 442, em seus argumentos; abordar, pela inevitável interface, o direito ao aborto no estrangeiro; e por fim, entender a autonomia decisória como argumento em defesa da descriminalização do aborto, na perspectiva da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 442. O problema de pesquisa coaduna-se no questionamento seguinte: pode ser possível a descriminalização do aborto até a décima segunda semana de gestação, no ordenamento jurídico brasileiro, levando-se em consideração os argumentos levantados em sede da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 442?

A tese proposta é a seguinte: há que se considerar a descriminalização do aborto nas primeiras doze semanas de gestação, no ordenamento jurídico brasileiro, mediante o acolhimento dos argumentos levantados em sede da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 442.

Para tanto, o estudo foi estruturado para que, em cada uma de suas seções, um dos objetivos específicos da pesquisa seja alcançado. Primeiramente será tratada a bioética feminista; em sequência será abordada a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 442; após será contemplado o direito ao aborto no direito estrangeiro e, por fim, o estudo apresentará a autonomia decisória da mulher, arguida, também, na demanda.

O ensaio segue o método de pesquisa dedutivo. A técnica de pesquisa empregada é a documentação indireta em que os dados possuem natureza bibliográfica. A pesquisa é qualitativa.

## 1 A BIOÉTICA FEMINISTA E O ABORTO

O tema do presente artigo certamente é debatido em termos de ideais feministas e é, igualmente, uma das principais pautas de discussão



persistente em bioética. A denominada bioética feminista, inclusive, tem como uma das suas pautas a divergência acerca do tema da interrupção voluntária da gestação e, igualmente, sua possível legalização.

Para contextualizar a bioética feminista, colaciona-se aqui as palavras de Débora Diniz e Dirce Guilhem (1999) sobre o assunto. Segundo as autoras, de maneira formal, a bioética que se considera de inspiração feminista teve nascedouro no início da década de 1990, momento em que se iniciaram as primeiras pesquisas acerca do assunto, em que pese, de acordo com o que relatam, as reflexões sobre ética feminina e feminista existam desde a década de 1960. Denota-se que a bioética feminista não esteve restrita à incorporação do feminismo aos ideais bioéticos imperantes. Frisam as autoras que a bioética de inspiração feminista manteve seu foco no olhar crítico naquilo que tange às desigualdades sociais, sobretudo quando se fala em assimetria de gênero.

Assim, a bioética crítica abordada é a verificação das questões inerentes à bioética, como inevitavelmente é a questão do aborto, com o viés do compromisso compensatório de interesses das pessoas e também dos grupos socialmente vulneráveis (Diniz; Guilhem, 1999). Entende-se claro que é nítida a necessidade de atuação do movimento feminista na bioética, “[...] dentre outros motivos, objetivando superar a velha ética” (Oliveira, 1995, p. 76). De acordo com Oliveira (1995), tal ética se mostrou inicialmente racista, machista e até contra as mulheres. Há a necessidade crescente de se assegurar a construção de uma ética que seja não sexista, antirracista e libertária, como prescreve.

Ainda sobre o tema, vale comentar-se as ideias trazidas por Débora Diniz e Dirce Guilhem no ano de 2008 sobre o tema aborto naquilo que se relaciona à pauta da bioética feminista, neste caso, especialmente na América Latina, e que a despeito do decurso do tempo, podem ser consideradas atuais:



[...] Ao contrário do debate bioético estadunidense sobre aborto, em que se avança em uma argumentação razoável sobre o estatuto do embrião e do feto, na América Latina o marco teórico do debate é ainda a necessidade de laicização do Estado para o debate público sobre questões reprodutivas, ou seja, ao mesmo tempo que muito precocemente se estruturaram os laços acadêmicos internacionais entre pesquisadoras feministas latino-americanas e pesquisadoras de países centrais da bioética, também se promoveu um espírito crítico e plural diante das estratégias argumentativas. Uma possível consequência desse exercício argumentativo sensível às particularidades culturais talvez seja a aproximação crescente de jovens pesquisadoras oriundas das humanidades para a bioética latino-americana (Diniz; Guilhem, 2008, p. 606-607).

Sobre as contribuições das mulheres na América Latina em um esforço de permanência e alargamento de fronteiras, mencionam Diniz e Guilhem (2008) que se destaca o reconhecimento de espaços argumentativos e estratégias de diálogo que ultrapassam a esfera acadêmica. Os movimentos sociais e as interlocuções públicas são exemplo quando se fala nas pesquisadoras feministas da área da bioética. Pensa-se que na discussão permeada no presente artigo, as articulações dentro e fora da universidade são imprescindíveis para o alargamento do debate, hoje pautado inclusive para julgamento perante o judiciário.

É claro que, percebe-se também a clara necessidade da discussão acadêmica do tema na esfera bioética. De acordo com Bandeira e Almeida (2008), também no continente europeu, principalmente quando se trata da França e da Alemanha, o debate se faz presente desde o final dos anos 1970, com a interface entre a bioética e o feminismo, mesmo que inicialmente separados um campo do outro. Desde o momento citado, o fluxo entre os objetos de pesquisa e os resultados do diálogo entre a bioética e o feminismo foram se desenvolvendo e estreitando as esferas



de convergência. Nesse momento, muitas interlocuções existentes entre a bioética e o feminismo foram colocadas em andamento, a despeito de “[...] as especificidades de abordagens e de esquemas conceituais que as ancoravam nem sempre tivessem afinidades” (Bandeira; Almeida, 2008, p. 174). A interrupção voluntária da gestação conduz a convergência da pesquisa no âmbito bioético e feminista, indubitavelmente.

Logo, a pauta relacionada ao aborto tem lugar de necessária discussão a seara jurídica, como fica claro quando se trata da possibilidade de descriminalização, e, igualmente, como debate bioético, que tem inegável interface com o direito, como bem se verificará a partir da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 442 e seus argumentos.

## 2 A ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 442

Inicialmente, pondera-se com Hogemann, Bastos e Rangel (2023) que a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental é ferramenta constitucional capaz de arguir em prol de um preceito fundamental. Assim, com a Constituição Federal de 1988, surgiram algumas garantias constitucionais que conduzem à proteção dos direitos sociais e civis, resguardando também a própria incolumidade da Constituição Federal. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, prevista na Carta Magna de 1988, e também regulamentada pela Lei 9.882/99, é, assim, instrumento firme em prol da defesa dos direitos e da própria ordem constitucional.

A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 442 foi proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade, no ano de 2017. Em audiência pública, no ano de 2018, o tema foi debatido com especialistas



e representantes de entidades governamentais e da sociedade civil (Relatora vota pela..., 2023).

O pedido gira em torno da declaração da não recepção parcial dos artigos 124<sup>2</sup> e 126<sup>3</sup> do Código Penal (Brasil, 1940), de modo a excluir de seu âmbito de incidência a interrupção da gestação induzida e voluntária nas doze primeiras semanas, tendo em vista sua incompatibilidade com o princípio da dignidade da pessoa humana e a cidadania das mulheres e também seu antagonismo em face da promoção da não discriminação.

Apontou-se ainda a violação de direitos fundamentais das mulheres, como o direito fundamental à vida, à integridade física e psicológica, à igualdade de gênero, à proibição de tortura ou tratamento desumano ou degradante, à saúde e planejamento familiar. Demandou-se, assim, pela garantia às mulheres ao direito constitucional de interromper a gestação, de acordo com sua autonomia decisória, sem que haja para tanto a permissão específica do Estado, garantindo-se ainda aos profissionais da saúde o direito de realizar o procedimento descrito, tal qual se depreende da própria petição inicial, assinada pelas advogadas Luciana Boiteux, Luciana Genro, Gabriela Rondon e Sinara Gumieri.

Percebe-se que a contenda gira em torno da constitucionalidade relativa à criminalização da interrupção voluntária da gestação nas doze primeiras semanas, que traz evidente choque e possíveis violações a direitos fundamentais das mulheres, conforme a relatora Rosa Weber (Brasil, 2023).

Ainda, de acordo com Hogemann e Oliveira (2023), a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 442 está sustentada no fundamento de que há manifesta inconstitucionalidade nos tipos penais

---

<sup>2</sup> Art. 124 - Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lho provoque: Pena - detenção, de um a três anos.

<sup>3</sup> Art. 126 - Provocar aborto com o consentimento da gestante: Pena - reclusão, de um a quatro anos.



124 e 126 do Código Penal brasileiro, por criminalizarem a interrupção voluntária da gestação quando realizada nas doze semanas iniciais.

A base do argumento utilizado, reforçam as autoras, reside na violação dos marcos da cidadania, da liberdade, da igualdade, da saúde, do planejamento familiar e da proibição de tortura ou tratamento desumano ou degradante, além da clara ausência de contexto hodierno para as razões jurídicas que levaram à criminalização ainda no ano de 1940, quando da edição do diploma penal brasileiro. A violação ao princípio da dignidade humana na criminalização da interrupção voluntária da gestação reforça ainda as desigualdades no Brasil, vez que evidentemente a parcela da população que mais sofre com a criminalização são as mulheres pobres, negras e indígenas (Hogemann; Oliveira, 2023).

Até a confecção do presente estudo, um importante movimento foi realizado em sede da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 442. Trata-se do voto da relatora, ministra Rosa Weber, que votou pela descriminalização da interrupção voluntária da gestação nas primeiras doze semanas. Após o ato decisório, o julgamento foi suspenso por pedido de destaque do ministro Luís Roberto Barroso, devendo ser levado a julgamento em sessão presencial no Plenário, em data a ser definida (Relatora vota pela..., 2023).

No voto, a ministra Rosa Weber esclareceu a multidisciplinariedade do tema, bem como as discussões recorrentes em diversos âmbitos. Evidentemente, como não se pode deixar de elencar, o tema causa discussões na área jurídica, mas também na bioética, na medicina, na filosofia e na religião, à guisa de exemplo.

Ainda, foi esclarecido pela relatora que a questão é de saúde pública, vinculada aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Importante destacar, conforme Zilio (2023, p. 70) que:



A contenda aqui permeada gira em torno da possibilidade de que, legalmente, a interrupção da gestação possa existir, uma vez que à margem da legalidade ela já é realidade. [...].

Fala-se, então, da reinserção dos domínios do corpo nos limites da proteção da privacidade pessoal [...].

Sobre ser o aborto uma indiscutível questão de saúde pública, Herzog e Quintana (2023) relatam que no caso do Brasil, isso pode acontecer inclusive porque as instituições não realizam o procedimento quando necessário (mesmo o aborto sendo legal), e também porque há limitações claras em sua permissão. Como consequência do fato, mulheres podem optar pela busca de alternativas para a realização, de modo que assim acontecem os abortos ilegais, inseguros e clandestinos.

De acordo com as autoras, ainda, o aborto é considerado um grave problema de saúde pública no Brasil tendo em vista a sua extensão e as várias possíveis consequências na vida das mulheres e na violação dos seus direitos, uma vez que a realização do procedimento de forma incorreta pode causar problemas de saúde e até mesmo a morte. Além disso, os gastos ao sistema de saúde pública com as possíveis e prováveis complicações de um procedimento mal feito devem ser levados em consideração.

Segundo aduzem, então, o aborto precisa ser visualizado como um problema de saúde pública que deve ser enfrentado urgentemente, de modo a que se evitem novas violações aos direitos das mulheres, assegurando a elas a saúde e a segurança em um possível procedimento, de forma legal. As autoras citam ainda que o aborto permitido no Brasil carece de informações, de políticas públicas apropriadas e com a ausência de atendimentos adequados. Por sua vez, o aborto inseguro é prática recorrente em termos nacionais, mesmo sendo conduta criminalizada, o que gera mais dor, sofrimento e mortes (Herzog; Quintana, 2023).



No mesmo sentido, argumenta Oliveira (2023) que limitar ou retirar do ordenamento jurídico o direito ao aborto legal e pelo SUS é tentativa de retrocesso ao direito à saúde da mulher. Para a autora, é “[...] necessário questionar a legitimidade de iniciativas tendentes a limitar ou até mesmo a eliminar o exercício de direitos fundamentais sociais, como o direito ao aborto legal e seguro” (Oliveira, 2023, p. 316).

Note-se ainda que, de acordo com Almeida *et al.* (2023), a autonomia reprodutiva corresponde a um dos elementos que constituem a dignidade da pessoa humana, que é um elemento de estruturação do raciocínio jurídico em casos considerados difíceis, em que existam lacunas, princípios colidentes ou no momento em que uma gama de conceitos entra em desacordo entre si (Barroso, 2014).

A demanda relatada pautou o pedido da descriminalização do aborto especificamente até a décima segunda semana de gestação. Isso tendo-se em vista também as teorias do início da vida<sup>4</sup> estudadas principalmente pela bioética. Acerca das teorias do início da vida, verifica-se do próprio voto da ministra Rosa Weber que não há consenso quanto a elas no campo da filosofia, da religião e da ética. Segundo a ministra, não por outra razão as questões relativas à vida humana, tais quais a pena de morte, a eutanásia, a fertilização *in vitro*, causam intensos debates, sem que a discussão tenha um fim ou um consenso (Brasil, 2023).

Sobre o assunto:

O aspecto concretamente controvertido não é em que momento se inicia o processo vital, pois não é difícil admitir que este ocorre, nas formas de reprodução sexuada, no momento da união dos gametas, cuja consolidação ocorre com a implantação ou nidação uterina. Entretanto, essas considerações biológicas, mas não especificamente

<sup>4</sup> De forma breve, sobre as teorias do início da vida, pode-se com efeito relatar que as principais são: teoria da fecundação/biológica, teoria da nidação, teoria encefálica/neurológica, teoria ecológica; teoria do nascimento (com vida)/fisiológica.



humanas, afirmam a presença de um processo que é diagnosticado com base no cumprimento de etapas do desenvolvimento embrionário. A questão de fundo é determinar se os processos do início da vida são paralelos e idênticos ao aparecimento da vida humana, inclusive, para alguns, da vida pessoal (Kottow, 2005, p. 22).

No mesmo sentido, esclarece-se que o campo da reprodução humana carrega consigo paradigmas no sentido do desenvolvimento inclusive de uma bioética como ética aplicada, fazendo referência, de um norte, ao desenvolvimento das teorias em torno do início da vida humana, e tendo, de outro ponto, influência também no estudo das práticas de reprodução humana assistida, mediante técnicas complexas e sofisticadas que buscam uma fundamentação ética no sentido da continuidade da investigação e no desenvolvimento de caminhos que a imaginação humana ainda não compreende completamente (Kottow, 2005).

O autor reflete igualmente que o início da vida é assunto recorrente no pensamento humano no decorrer das épocas. “A curiosidade especulativa e científica tem-se interessado por discorrer sobre como se iniciou a vida em geral e quais são os mecanismos que se encontram no começo da gestação de todos os seres vivos, particularmente os da vida humana” (Kottow, 2005, p. 19). Note-se que tanto o início da vida humana quanto o fim da vida humana necessitam de conceitos do que são propriamente a vida, a vida humana e inclusive a vida pessoal. Ocorre que, a partir do momento em que a o fim da vida/a morte passa a ser um dilema bioético, a partir do momento em que a medicina passou a intervir de forma ativa no processo de morrer, tal qual já explicitado por Ariès (2014), as contendas em torno do início da vida em outro vértice tem sido objeto “[...] de uma preocupação pública mais permanente” (Kottow, 2005, p. 19).



Por fim, esclarece-se que não é o intuito do presente ensaio debater se o judiciário é ou não a via adequada para a descriminalização do aborto, apenas deixa-se muito clara a imprescindibilidade de que o controle de constitucionalidade seja perfectibilizado em um Estado Democrático de Direito. O Supremo Tribunal Federal, instado, tem o dever precípua de se manifestar, sendo o poder judiciário inerente e imprescindível à existência da democracia.

Então, como esclarecem Hogemann e Oliveira (2023), sabe-se que o processo de tomada de decisão política é designado pela Constituição Federal ao Poder Legislativo, uma vez que esse é o poder democrático intrinsecamente privado de prerrogativas de promoção de discussões. O que ocorre é que o Poder Legislativo vem se privando de decisões que digam respeito à interrupção voluntária da gestação, de modo que nos últimos 10 (dez) anos, unicamente um projeto de lei foi proposto com o intuito de descriminalização do aborto, o Projeto de Lei 882/2015. Posteriormente, tal Projeto de Lei foi anexado ao Projeto de Lei 313/2007, que trata acerca da lei de planejamento familiar, sem que tenha sido discutida a questão do aborto. O Congresso conta, ainda, com diversos projetos em tramitação versando, por outro lado, acerca da inviolabilidade do direito à vida desde o momento da concepção. Ante o estado atual, o Poder Judiciário, para as autoras, tornou-se uma via alternativa para a discussão do tema.

### 3 O ABORTO NO DIREITO ESTRANGEIRO: NECESSÁRIA INTERFACE

Para início do debate acerca do aborto no direito estrangeiro, a Argentina foi o país escolhido. De acordo com Hogemann e Oliveira (2023), o Congresso argentino evitou discussões sobre a descriminalização



do aborto durante anos, não votando diversos projetos sobre o tema. A Campanha Nacional pelo Direito ao Aborto Legal, Seguro e Gratuito apresentou ao Congresso argentino o primeiro projeto para descriminalização e legalização, em 2007. Tal projeto nem chegou a ser discutido. Em 2018, novamente, a Campanha Nacional apresentou (pela sétima vez) um projeto de lei sobre a descriminalização e a legalização da interrupção voluntária da gestação, que contou com o apoio de deputadas e deputados. Dessa vez, ocorreu debate aberto no Congresso.

A mobilização feminista foi intensa e o debate foi difundido socialmente a partir de 2018 no país, assim como, por consequência, em outros países da América Latina. Conforme Hogemann e Oliveira (2023), o projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados por 129 votos a favor e 125 contrários, mediante um acordo entre mulheres representantes de partidos políticos opostos que conseguiram a “meia sanção” da lei. No Senado, o projeto foi vetado por 38 votos contra, 31 a favor e 2 abstenções. A interrupção voluntária da gestação até a décima quarta semana foi legalizada no país no final de 2020. A lei foi aprovada pelo Congresso e promulgada pelo Presidente no início de 2021. O acesso ao aborto se dá até a décima quarta semana, sem que haja condicionantes, no prazo de 10 (dez) dias corridos depois do pedido com assinatura do consentimento. Ainda assim, os desafios persistem no país para que o pleno exercício dos direitos sexuais e reprodutivos sejam praticados, sendo por vezes reprimidos por instâncias do próprio Estado (Hogemann; Oliveira, 2023). Aduzem muito bem Hogemann e Oliveira (2023, p. 118):

Ainda assim, a garantia ao aborto legal encontra obstáculos, uma vez que alguns agentes sociais, institucionais e, por vezes, o próprio Estado, formam um dispositivo de controle biológico/biopolítico para impedir a efetivação de direitos e insistem em pautar o tema sob debates pretensamente éticos, morais e religiosos.



No México, o direito à interrupção voluntária da gestação também é pauta recorrente. Terra, Faria e Souza (2023) aduzem que uma das conquistas mais recorrentes e importantes sobre os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres se deu no dia 7 de setembro de 2021, quando a Suprema Corte de Justiça e da Nação decidiu pela descriminalização do aborto no país tendo em vista a invalidação do artigo 196 do Código Penal de Coahuila.

Em nível nacional, o aborto foi descriminalizado em 6 de setembro de 2023, quando a Suprema Corte declarou inconstitucional a proibição do procedimento. Assim, a interrupção voluntária da gestação não poderá ser punida caso seja praticada em instituições de saúde administradas pelo governo federal. Até o momento da decisão, 10 (dez) estados mexicanos já permitiam em suas legislações o aborto, em sua maioria até a décima segunda semana (Justiça do México..., 2023).

Sobre o tema, discorrem Terra, Faria e Souza (2023) no sentido de que no México seriam os próprios entes estatais que teriam a prerrogativa de definição das legislações e constituições. Sendo dessa forma, para que a interrupção voluntária da gestação fosse descriminalizada e legalizada em todo o país, seria preciso mais do que as decisões da Suprema Corte de Justiça e da Nação, de modo que far-se-ia necessário que todos os legislativos regionais promovessem legislações nesse sentido. Entretanto, as decisões da Suprema Corte foram abrindo precedentes, o que culminou na descriminalização reportada acima.

A Irlanda, no ano de 2018, segundo Maia (2023), revogou a oitava emenda constitucional que mantinha a proibição da interrupção da gestação por escolha da mulher. De acordo com o que apresenta a autora, os primeiros anos da experiência relatam que a atuação dedicada dos profissionais da medicina é crucial para o sucesso dos atendimentos ocorridos nos casos pautados.



Nos Estados Unidos da América, desde o ano de 1973, com o caso *Roe versus Wade*, precedente norte-americano de 1973, houve o reconhecimento do direito ao abortamento com supedâneo no direito de privacidade da mulher (Zilio, 2016) (enquanto indivíduo) ao verificar-se que somente a gestante em sua condição de indivíduo pode tomar a decisão de levar a gestação adiante, ou não (Dworkin, 2003). Entretanto, em 2022, a Suprema Corte dos Estados Unidos da América suspendeu a decisão, de modo que a sustentação é a de que não há mais um direito constitucional ao aborto no país (Suprema Corte dos..., 2022). Ficaria desde então a cargo de cada estado a prerrogativa de legislar sobre o assunto.

Ainda, de acordo com a CNN Brasil, o aborto é legalizado em 77 (setenta e sete) países mediante solicitação. Cada país regulamenta o limite gestacional para a realização do procedimento, podendo chegar a vinte semanas, como é o caso da Tailândia. A maioria dos países, no entanto, tem como marco entre a décima e a décima quarta semana de gestação. Além dos setenta e sete países em que é possível a realização do procedimento, em outras 12 (doze) nações há a possibilidade, com restrições por questões sociais ou econômicas. Em outros 47 (quarenta e sete), o aborto só é permitido para preservar a saúde da gestante. Em 43 (quarenta e três), só há a permissão em caso de risco de morte, e em outros 22 (vinte e dois), ele é totalmente proibido, mesmo quando haja risco de morte (Aborto é legalizado ..., 2023).

Note-se que a pauta é controversa em termos mundiais, como não poderia deixar de ser. Tanto quanto a interdisciplinaridade do tema, a recorrência da discussão traz luz ao que precisa de relevância no debate jurídico do tema. Há avanços e retrocessos. Há que se restar atento. A partir do momento que segue, logo, verificar-se-á a contenda no Brasil sob o ponto de vista da autonomia feminina, na perspectiva daquilo que tem sido levantado em sede da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 442.



## 4 A AUTONOMIA DECISÓRIA COMO ARGUMENTO EM DEFESA DA DESCRIMINALIZAÇÃO DO ABORTO E A ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 442<sup>5</sup>

Ter autonomia para decidir significa ter privacidade para ancorar o seu discernir em caminhos da própria personalidade. A proteção jurídica conferida à personalidade humana abarca a privacidade inclusive em seu viés de autonomia decisória, ou seja, em seu viés de privacidade para tomada de decisões. Parte-se do ideal, assim, de que o direito à privacidade constitucionalmente protegido deve ser considerado indispensável a qualquer concepção atual de liberdade (Warren; Brandeis, 1890). Sem a liberdade reprodutiva, assegurada ao menos em parte por tal direito, as mulheres restam privadas do bem para o qual os direitos à privacidade foram concebidos, em que a proteção deve ser garantida a todas as pessoas (Cohen, 2012, p. 170).

A Convenção de Belém do Pará (Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, 1994), concluída em Belém do Pará, em 9 de junho de 1994, em seu artigo 4, assim, claramente identifica que toda mulher tem direito ao reconhecimento, desfrute, exercício e proteção de todos os direitos humanos e liberdades consagrados em todos os instrumentos regionais e internacionais relativos aos direitos humanos. Dentre os direitos humanos citados, deve-se ter em mente o seu direito à liberdade (aqui compreendida na perspectiva de sua

<sup>5</sup> Ao tempo em que foi construído o presente artigo, um Projeto de Emenda Constitucional foi protocolado com assinatura de 175 deputados federais. A chamada PEC do equilíbrio entre os poderes, busca alterar o artigo 49 da Constituição Federal, para permitir que o Congresso Nacional possa derrubar, por maioria qualificada, decisões do Supremo Tribunal Federal que possam, segundo alegam, “extrapolar os limites constitucionais” (PEC que permite..., 2023). Aqui a intenção é somente informar, sem, entretanto, comentar ou atribuir juízo de valor.



autonomia decisória, viés de seu direito à privacidade); o direito a não ser submetida a torturas; e o direito ao respeito de sua dignidade.

A Constituição Federal brasileira (Brasil, 1988) assegura, do mesmo modo, tanto a igualdade formal, no sentido do *caput* do artigo 5º, que proclama que todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza<sup>6</sup>, assim como no sentido do inciso I<sup>7</sup> do artigo 5º, que proclama que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos da própria Carta Magna, quanto a igualdade material ou substancial, que preconiza o tratamento dos desiguais na medida de suas desigualdades, resguardando as vulnerabilidades e empoderando quem quer se encontre em eventual posição de subjugação.

De acordo com a médica Melanie Maia (2023), o Brasil acumula implicações de sua legislação restritiva, bem como de uma agenda incompleta na garantia das mulheres ao aborto legal. Segundo aduz, com o cenário político que se desenhou há alguns anos, as investidas contrárias aos direitos sexuais e reprodutivos mostraram a imprescindibilidade de que se assuma uma postura vigilante na busca por tais direitos, para que não haja, ao invés de avanços, retrocessos.

A discussão quanto à interrupção voluntária da gestação, então, gira em torno, principalmente, dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, de seu direito ao próprio corpo e a autonomia para decidir acerca de sua identidade. Pensando-se a autonomia decisória como substrato de edificação da autocompreensão humana, sustenta-se a ideia de que o corpo físico corresponde ao âmbito protetivo conferido à personalidade humana inclusive no cerne das decisões pessoais. A propósito:

---

<sup>6</sup> Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes [...].

<sup>7</sup> I – [...] homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição [...].



Discutir-se o aborto, ou a interrupção voluntária da gestação, é traçar um árduo, mas necessário caminho de empoderamento do próprio corpo, não como uma propriedade objetificável (sequer pelo próprio titular), mas como modo de acesso [...] à própria identidade. O direito de proteção da privacidade permite com que tal acesso ocorra a despeito da existência de fatores obviamente externos referentes ao Estado e à sociedade (Zilio, 2023, p. 70-71).

Em outra passagem da mesma autora, colhe-se que:

Luta-se pela descriminalização do aborto sob o argumento de que isso protegeria a vida e a liberdade da mulher, além do que, punir a prática não impediria que novos abortos acontecessem, mas impulsionaria a sua realização de forma clandestina e insegura, de modo que a permissão ao direito de abortar seria uma questão de saúde pública. Note-se que as mulheres [...] buscam a concretização do direito de interromper a gestação, se assim desejarem, mediante o forte argumento de que a criminalização do aborto faz com que as mulheres busquem esse tipo de serviço de forma clandestina, o que tem levado muitas delas a padecerem de consequências seriíssimas, sendo a morte a pior delas (Zilio, 2016, p. 123).

Há que se pensar acerca da proteção das esferas de individualidade em meio a uma privacidade para decidir que não pode ser vislumbrada senão mediante o acolhimento do direito de decisão de cada mulher, desde que a ela seja conferido um importante direito correlato e indispensável, que é o direito de ser informada. As escolhas demandam conhecimento e informação.

Sobre o tema, a ministra do Supremo Tribunal Federal, relatora da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 442, Rosa Weber, pontuou em seu voto o que segue de forma literal:



O processo de conhecimento, formação e expansão da personalidade pressupõe, necessariamente, autonomia para, de acordo com a consciência individual e singular de cada um, realizar as escolhas fundamentais para o desenvolvimento de sua vida.

É preciso reconhecer que a autonomia, entendida como a capacidade das pessoas de se autodeterminarem, ou seja, capacidade dos indivíduos de definirem as regras de regência de sua própria vida particular, consubstancia o núcleo essencial e inviolável do direito à liberdade, que se inclui a liberdade reprodutiva.

A autonomia, associada à própria liberdade, é, pois, a aptidão para tomar decisões, escolher os caminhos e direções da própria vida, adotar concepções ideológicas, filosóficas ou religiosas. Em outras palavras, definir, sob os mais diversos ângulos, as características básicas e individuais de cada um, bem como o itinerário a seguir, segundo a consciência particular e única em busca do que se considera viver bem, sem a possibilidade de interferências indevidas por parte de terceiros (seja particulares, seja o Estado) (Brasil, 2023, p. 50-51).

Em outra passagem do voto, colhe-se ainda:

Nesse contexto, o sistema de justiça social reprodutiva decorre da premissa da proteção à saúde pública em matéria de direitos à saúde sexual e reprodutiva da mulher, considerada sua liberdade na construção do projeto de vida digna que lhe pareça coerente. Sistema, pois, edificado na oferta acessível, de qualidade dos bens, programas, serviços e estabelecimentos de saúde que promovem a tutela preventiva informacional e educacional a respeito da sexualidade e da reprodução. Associada à disponibilização e qualidade dos medicamentos e procedimentos médicos necessários à formulação do planejamento familiar, como os métodos contraceptivos e o aborto legal, em conformidade com a liberdade e a autonomia da mulher (Brasil, 2023, p. 81).



No contraponto dos direitos angariados, Hogemann e Vicente (2023) relatam que mesmo após as conquistas de 1988, são possíveis discursos que apontam para a restrição de direitos das mulheres e buscam, para tanto, tornarem-se legislações vigentes no Brasil. Trazem, as autoras, para relatar o argumentado, as leis como discursos e os discursos como relações. Para corroborar o exposto, relatam que a relevância de se pensar as formações dos discursos na contemporaneidade relaciona-se diretamente ao entendimento de que a linguagem é muito mais do que uma simples comunicação de informações entre dois ou mais sujeitos, ou de uma ponte entre o que se pensa e o que se fala. A linguagem é, sim, uma forma de relação de poder em que é consabido que nem tudo o que for dito por alguém produzirá os mesmos efeitos a qualquer tempo.

A interrupção voluntária da gestação, esclarece-se, envolve uma série de entendimentos e de perfis. Tratar o aborto como um tabu não resolve o problema, trazendo gravíssimas consequências, principalmente para as mulheres mais vulneráveis (Oliveira, 2023), mas também para o Estado, daí o entendimento de ser a sua descriminalização uma questão que passa pelo viés da saúde pública sem sombra de dúvidas.

Assim, relatam Almeida *et al.* (2023, p. 264):

Então fica o questionamento – caracterizada a ocorrência das hipóteses descriminalizadoras, a quem uma mulher deve recorrer para realizar em condições de segurança e amparada pela lei um aborto legal? No ordenamento jurídico brasileiro a Constituição Federal de 1988 trouxe a previsão do direito à saúde, que deveria ser prestado como serviço público e universal, a partir do marco constitucional e democrático, o aborto deixou de ser uma prática exclusivamente punitivista – normatizada apenas pelo Código Penal para entrar no âmbito da saúde pública. E no ano seguinte à promulgação da Carta Constitucional, surgiu a primeira normativa de



uma unidade da federação que autorizava a execução do serviço e o atendimento às mulheres que buscavam auxílio para a realização do procedimento no estado de São Paulo.

Há que se ficar, assim, em constante vigilância à proteção dos direitos já conquistados pelas mulheres ao longo de inúmeros avanços históricos advindos de lutas (muitas vezes injustas), restando-se vigilantes também à necessidade de que se impeçam retrocessos a esses direitos. Há que se cuidar, também, dos certamente direitos vindouros, fruto de tantas outras conquistas hodiernas.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluindo-se o estudo, que teve como objetivo geral entender a possibilidade de um direito ao aborto (ou interrupção voluntária da gestação) no ordenamento jurídico brasileiro, sobretudo a partir dos argumentos levantados na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 442, levando-se em consideração, também, o olhar da bioética feminista, pode-se concluir que:

a) A bioética feminista une a discussão de temas bioéticos e do ideal feminista, contribuindo com o debate de dilemas sociais e de discussão jurídica, como é o caso da descriminalização do aborto.

b) A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 442 tem discussões indubitavelmente relevantes do ponto de vista jurídico, bioético e social, e busca a descriminalização da interrupção voluntária da gestação até a décima segunda semana, sob os argumentos, em síntese, da autonomia decisória e direito ao próprio corpo da mulher, dignidade humana e direitos inerentes.



c) A controvérsia acerca da possibilidade de interrupção voluntária da gestação também é recorrente em outros ordenamentos jurídicos, com avanços do ponto de vista da descriminalização e legalização, mas também com pontos de possíveis retrocessos a direitos conquistados, que demandam atenção e cuidado.

d) Também, amalhando-se a autonomia decisória como argumento em prol do direito à realização da interrupção voluntária da gestação, sobretudo a partir dos argumentos levantados em sede da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 442, percebe-se que sendo a autonomia decisória aquela que dá supedâneo à construção da identidade pessoal da mulher, não há que se confrontar o ideal de que ela deve ser levada em consideração inclusive quando da eventual possibilidade de concretização da descriminalização/legalização do aborto. Há que se aguardar, contudo, o posicionamento do pleno do Supremo Tribunal Federal acerca da controvérsia.

Nesta senda, os objetivos específicos da pesquisa, pontuados na fase introdutória, foram concluídos, uma vez que em cada uma das quatro seções do texto foram abordadas as proposições, em ordem sequencial: tratada a bioética feminista; explicitada a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 442, em seus argumentos; abordado, pela inevitável interface, o direito ao aborto no estrangeiro; e por fim, entendida a autonomia decisória como argumento em defesa da descriminalização do aborto, na perspectiva da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 442.

A tese proposta na seção introdutória foi a que segue: há que se considerar a descriminalização do aborto nas primeiras doze semanas de gestação, no ordenamento jurídico brasileiro, mediante o acolhimento dos argumentos levantados em sede da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 442. A tese restou evidenciada pelos resultados encontrados, já que a descriminalização do aborto nas primeiras doze



semanas de gestação, no ordenamento jurídico brasileiro, mediante o acolhimento dos argumentos levantados em sede da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 442, deve ser considerada. Assim é, porque, há que se pensar na preservação dos direitos inerentes às mulheres, sobretudo em condições de vulnerabilidade, resguardando o seu direito à saúde, à autonomia decisória, ao direito ao próprio corpo, à proibição à tortura e/ou ao tratamento desumano ou degradante e igualmente sua dignidade pessoal. Resta, no entanto, aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal em tema tão interdisciplinarmente polêmico e de necessária reflexão.

## REFERÊNCIAS

ABORTO É LEGALIZADO em 77 países mediante apenas solicitação; confira quais. **CNN Brasil**, 2023. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/aborto-e-legalizado-em-77-paises-mediante- apenas-solicitacao-confira-quais/>. Acesso em: 2 out. 2023.

ALMEIDA, Eliane Vieira Lacerda *et al.* “Não posso passar essa informação”: o direito ao aborto legal no Brasil. In: Hogemann, Edna Raquel *et al.* (org.). **Aborto legal e seguro: perspectivas interdisciplinares**. Belo Horizonte: Letramento, p. 264-280, 2023.

ARIÈS, Philippe. **O homem diante da morte**. Tradução Luiza Ribeiro. 1. ed. São Paulo: Editora Unesp, 2014. Tradução de: *L’homme devant la mort*.

BANDEIRA, Lourdes; ALMEIDA, Tânia Mara Campos de. Bioética e feminismo: um diálogo em construção. **Revista Bioética**, Brasília, v. 16, n. 2, p. 173-189, 2008. Disponível em: [https://revistabioetica.cfm.org.br/revista\\_bioetica/article/view/66/69](https://revistabioetica.cfm.org.br/revista_bioetica/article/view/66/69). Acesso em: 22 jan. 2024.



BARROSO, Luís Roberto. **A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo**: a construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. 3. reimp. Belo Horizonte: Fórum, 2014.

BRASIL. Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. **Diário Oficial da União**, p. 23911, 31 dez. 1040. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto-lei/del2848.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm). Acesso em: 28 set. 2023.

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, n. 191-A, p. 1, 5 out. 1988. Legislação Informatizada – Constituição de 1988 – Publicação Original. Disponível em: [w2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1988/constituicao-1988-5-outubro-1988-322142-publicacaooriginal-1-pl.html](http://w2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1988/constituicao-1988-5-outubro-1988-322142-publicacaooriginal-1-pl.html).

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 442**. Relatora: Ministra Rosa Weber. Proc. n. ADPF 442. Voto em 21 set. 2023. Brasília, 2023.

Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5144865>. Acesso em: 29 set. 2023.

COHEN, Jean L. Repensando a privacidade: autonomia, identidade e a controvérsia sobre o aborto. **Revista Brasileira de Ciência Política**, Brasília, n. 7, 2012. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbcpol/n7/a09n7.pdf>. Acesso em: 28 set. 2023.

CONVENÇÃO INTERAMERICANA PARA PREVENIR, PUNIR, E ERADICAR A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. 1994. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto/1996/d1973.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1996/d1973.htm). Acesso em: 2 out. 2023.



DINIZ, Débora; GUILHEM, Dirce. Bioética feminista na América Latina: a contribuição das mulheres. **Revista Estudos Feministas**, Florianópolis, v. 16, n. 2, p. 599-612, 2008. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ref/a/hFScd4DfPPhm7nVH3wZn8Ks/?lang=pt>. Acesso em: 22 jan. 2024.

DINIZ, Débora; GUILHEM, Dirce. Bioética feminista: o resgate político do conceito de vulnerabilidade. **Revista Bioética**, Brasília, v. 7, n. 2, p. 181-188, 1999. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-299173>. Acesso em: 22 jan. 2024.

DWORKIN, Ronald. **Domínio da vida**: aborto, eutanásia e direitos individuais. Tradução Jefferson Luiz Camargo. 1. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 362 p. Tradução de: *Life's Dominion*.

HERZOG, Luíse Pereira; QUINTANA, Stéffani das Chagas. Aborto inseguro no Brasil: um problema de saúde pública e violação de direitos. *In*: Hogemann, Edna Raquel *et al.* (org.). **Aborto legal e seguro**: perspectivas interdisciplinares. Belo Horizonte: Letramento, p. 135-149, 2023.

HOGEMANN, Edna Raquel; BASTOS, Verônica Azevedo Wander; RANGEL, Lucas Rocha. Remédios jurídicos alternativos à descriminalização do aborto. *In*: Hogemann, Edna Raquel *et al.* (org.). **Aborto legal e seguro**: perspectivas interdisciplinares. Belo Horizonte: Letramento, p. 348-368, 2023.

HOGEMANN, Edna Raquel; OLIVEIRA, Beatriz Mattos da S. A legalização do aborto, movimentos sociais e o político: um estudo comparado entre Brasil e Argentina. *In*: Hogemann, Edna Raquel *et al.* (org.). **Aborto legal e seguro**: perspectivas interdisciplinares. Belo Horizonte: Letramento, p. 101-122, 2023.



HOGEMANN, Edna Raquel; VICENTE, Laila Maria Domith. Direito e poder: o rumo dos direitos das mulheres às avessas do marco constitucional de 1988. In: Hogemann, Edna Raquel *et al.* (org.). **Aborto legal e seguro**: perspectivas interdisciplinares. Belo Horizonte: Letramento, p. 184-204, 2023.

JUSTIÇA DO MÉXICO descriminaliza aborto: o que acontece agora? **BBC Brasil**, 2023. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c3gl75ez5q0o>. Acesso em: 2 out. 2023.

KOTTOW, Miguel. A bioética do início da vida. In: SCHRAM, FR.; BRAZ, M. (org). **Bioética e saúde**: novos tempos para mulheres e crianças? Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, p. 19-38, 2005. Disponível em: <https://books.scielo.org/id/wnz6g/pdf/schramm-9788575415405-02.pdf>. Acesso em: 7 out. 2023.

MAIA, Melanie. Oferta de aborto legal na atenção primária à saúde: uma chamada para ação. In: Hogemann, Edna Raquel *et al.* (org.). **Aborto legal e seguro**: perspectivas interdisciplinares. Belo Horizonte: Letramento, p. 321-331, 2023.

OLIVEIRA, Fatima. Feminismo, luta anti-racista e bioética. **Cadernos Pagu**, Campinas, n. 5, p. 73–107, 1995. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu/article/view/1775>. Acesso em: 23 jan. 2024.

OLIVEIRA, Stella Rodrigues. O princípio da vedação do retrocesso no debate sobre o aborto e a PEC 181/2015. In: Hogemann, Edna Raquel *et al.* (Org.). **Aborto legal e seguro**: perspectivas interdisciplinares. Belo Horizonte: Letramento, p. 305-320, 2023.

PEC QUE PERMITE derrubada de decisões do STF é protocolada com apoio de 175 deputados. **CNN Brasil**, 2023. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/politica/pec-que-permite-derrubada-de-decisoes-do-stf-e-protocolada-na-camara/>. Acesso em: 29 set. 2023.



RELATORA VOTA PELA descriminalização do aborto até 12 semanas de gestação. **Supremo Tribunal Federal**, 2023. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=514619&ori=1>. Acesso em: 28 set. 2023.

SUPREMA CORTE DOS EUA suspende decisão que garantia direito ao aborto. **CNN Brasil**, 2022. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/suprema-corte-dos-eua-reverte-decisao-que-garantia-direito-ao-aborto/#:~:text=Suprema%20Corte%20dos%20EUA%20suspende%20decis%C3%A3o%20que%20garantia%20direito%20ao%20aborto,-A%C3%A7%C3%A3o%20transformar%C3%A1%20&text=A%20Suprema%20Corte%20dos%20EUA,direito%20constitucional%20federal%20ao%20aborto>. Acesso em: 7 out. 2023.

TERRA, Bibiana; FARIA, Gabriela Maria Barbosa; SOUZA, Larissa Faria de. A descriminalização do aborto na Argentina e no México e como isso fortalece a luta das brasileiras pelo reconhecimento desse direito. *In*: Hogemann, Edna Raquel *et al.* (org.). **Aborto legal e seguro: perspectivas interdisciplinares**. Belo Horizonte: Letramento, p. 41-55, 2023.

WARREN, Samuel D.; BRANDEIS, Louis D. The right to privacy. **Harvard Law Review**, Boston, vol. IV, n. 5, p. 193-220, 1890.

ZILIO, Daniela. A privacidade e a construção da identidade pessoal da mulher: considerações acerca da autonomia decisória em casos de interrupção voluntária da gestação. *In*: FREITAS, Riva Sobrado de; WENCZENOVICZ, Thaís Janaína (org.). **Interculturalidade, intersubjetividade de gênero e personalidade**. Joaçaba: Editora Unoesc, p. 63-77, 2023. Disponível em: <https://www.unoesc.edu.br/wp-content/uploads/2023/05/Interculturalidade-Intersubjetividade.pdf>. Acesso em: 27 set. 2023.

ZILIO, Daniela. O aborto: análise a partir da privacidade decisória da mulher. *In*: FREITAS, Riva Sobrado de; ZILIO, Daniela. **Série Ensaios: Ensaios sobre a Constitucionalização dos Direitos Fundamentais Civis**. Joaçaba: Editora Unoesc, p. 117-143, 2016.



# GOVERNANÇA E MULHER: PERSPECTIVAS DE IDENTIDADE E JUSTIÇA SOCIAL

Émelyn Linhares<sup>1</sup>  
Marlei Ângela dos Santos<sup>2</sup>

## INTRODUÇÃO

O artigo elucidava o tema de importância que é a busca identitária da mulher e o enfrentamento dos efeitos da colonialidade e da trajetória histórica de forte influência burguesa, capitalista, quando a mulher foi condicionada à submissão e ao domínio dos costumes impostos pelo patriarcalismo. Nos dias atuais, tal contexto suportado em outro tempo, guarda um sentido antagônico a percepção democrática de direito, carregando a inobservância da igualdade e a dignidade humana, fato que as sociedades atuais almejam o aprimoramento de um bem-estar e justiça social.

<sup>1</sup> Doutoranda em Direitos Fundamentais/UNOESC; Bolsista PROSUC/CAPES no curso de Doutorado em Direito (2023-Atual); Pós-graduada em Gestão do Conhecimento da Magistratura/ESMESC; Mestra em Ciências Humanas/UFFS; Bolsista do Programa de Demanda Social Capes, para o Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas - UFFS; Especialista em Direito Público/FURB; Especialista em Direito Penal e Processo Penal/Fac. Santa Rita; Bacharel em Direito - Facisa/Funoesc. E-mail: emy\_dr@outlook.com.br.

<sup>2</sup> Doutoranda em Direito pela Universidade do Oeste de Santa Catarina; Bolsista no curso de Doutorado do Programa PROSUC/CAPES; Bolsista de Doutorado Sanduíche do Programa Cátedra Brasil na Universidade de Salamanca (Edital 35/2023, CAPES. Nov/24 a 08/25); Editor-Assistente da Revista Espaço Jurídico: Journal of Law [EJLL] (Qualis Capes A1); Parecerista da Gavagai - Revista Interdisciplinar de Humanidades (2022 - Atual); Mestra em Direitos Fundamentais Civis - Universidade do Oeste de Santa Catarina (2020), Bolsista no curso de Mestrado do Programa UNIEDU - FUMDES; Membro do Grupo de Estudos e Pesquisa Interculturalidade e intersubjetividade: gênero, orientação sexual, raça e etnia/PPGD UNOESC; Pós-graduação na área de concentração Dimensões Materiais e Eficácia dos Direitos Fundamentais, Linha de Pesquisa: Direitos Fundamentais Sociais. Especialista em Direito Civil, Processo Civil e Docência na Educação Superior (Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas-FACISA; Especialista em Gestão, Licenciamento e Auditoria Ambiental (Universidade do Norte do Paraná; Especialista em Direito Ambiental - Centro Universitário Leonardo da Vinci; Especialista em Direito Público e Privado: Material e Processual - Universidade do Oeste de Santa Catarina; Módulo I do Curso de Preparação para a Magistratura do Estado de Santa Catarina - Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina. Bacharel em Direito pela Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas - FACISA; Tecnóloga em Gestão Ambiental - Universidade Norte do Paraná. E-mail: marlei.ange.adv@hotmail.com.



A crença de inferioridade da mulher tem sido questionada nas últimas décadas, emergindo a compreensão de que a teoria adotada por uma evolução global dentro do ideário eurocêntrico, que nada mais é que um sistema implantado pela ideologia de racionalidade de um saber e poder do sistema hegemônico europeu<sup>3</sup> nas relações domésticas e sociais. À dominação sexual que este preconceito produz chamamos patriarcado e ao senso comum que o alimenta e reproduz, cultura patriarcal (Santos, 2011, p. 12).

Evidentemente, que a compreensão de novas epistemologias e teorias de justiça se tornam uma necessidade constante para a emancipação da mulher desde a individualidade até o convívio social. A adoção de um sistema inovador de teorias de justiça é elementar para atender o bem-estar social com base nos direitos fundamentais em sua essência e não apenas no discurso que legitime um sistema de proteção e regulação necessário dentro de uma estrutura social que não é estática.

O artigo divide-se em três partes: Colonialidade e Mulher: a trajetória desigualdade; Mulher e Emancipação: aspectos democráticos; Discutindo Justiça Social do Ponto de Vista da Mulher, utilizamos o procedimento metodológico bibliográfico-investigativo com ênfase nos estudos do grupo multidisciplinar de estudos subalternos e epistemologias do Sul, que teve como ponto de partida o Manifesto Inaugural<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Hegemonia significa preponderância de alguma coisa sobre outra. É a supremacia de um povo sobre outros povos, ou seja, a superioridade que um país tem sobre os demais, tornando-se assim um Estado soberano. Disponível em: <https://www.significados.com.br/hegemonia/> Acesso em 23/10/2019.

<sup>4</sup> De acordo com o Manifesto inaugural, foi possível pensar outras formas de conceituar o colonialismo, bem como interligá-lo com diversas perguntas até o momento sem respostas pelos pesquisadores as diversas questões acerca da América Latina. O grupo que discorria sobre as sociedades plurais, inferiorizadas pelo pensamento europeu, exotizada em contraste com as sociedades desenvolvidas, tendo como seu grande expoente crítico o argentino Walter Mignolo. Sua perspectiva crítica e divergências o fazem fundar em 1998, o Grupo Modernidade/ Colonialidade, e desagregar o grupo latino, alegando que os estudos subalternos não rompem de maneira suficiente com os autores eurocêntricos (Ballestrin 2012).



## 2 COLONIALIDADE E MULHER: A TRAJETÓRIA DE DESIGUALDADE

A colonialidade se reproduz pela lógica subjacente da civilização ocidental desde a conquista da América pelos colonizadores gerando efeitos no pós-colonial. O termo colonialidade é compreendido e citado inicialmente pelo sociólogo peruano Anibal Quijano, por definição do grupo multidisciplinar de estudos de epistemologias do Sul<sup>5</sup>, em seguida tal termo é concebido e explorado dentro de uma compreensão de modernidade/racionalidade que foi imposta pelo movimento europeu hegemônico de poder e do saber.

A “colonialidade” já é um conceito “descolonial”, e projetos descoloniais podem ser traçados do século XVI ao século XVIII. E, por último, a “colonialidade” (por exemplo, el patrón colonial de poder, a matriz colonial de poder – MCP) é assumidamente a resposta específica à globalização e ao pensamento linear global, que surgiram dentro das histórias e sensibilidades da América do Sul e do Caribe. É um projeto que não pretende se tornar único (Mignolo, 2017, p. 2).

O movimento da colonialidade foi implantado pelo processo de globalização que se iniciou na América pela chegada dos colonizadores, quando foi fixada uma ideologia de conquista moldada na modernidade capitalista, eurocêntrica, burguesa, que se expandiu pelo sistema mundo, determinando o modelo de classificação social dos povos pela ideia de raça, divisão, controle do trabalho e do capital. Inevitavelmente, a ideia de raça superior atrelada ao padrão colonial fixou uma construção mental de dominação global pelo poder e saber eurocêntrico que se tornaram legítimos por sua produção e reprodução em alta escala ao longo da

<sup>5</sup> Uma epistemologia do Sul assenta em três orientações: aprender que existe o Sul; aprender a ir para o Sul; aprender a partir do Sul e com o Sul. (Meneses, 2008).



trajetória histórica na América pela utilização do trabalho escravo, codificação de raça, ressignificação de identidades, lugares e papéis determinados aos indivíduos introduzidos no sistema hegemônico dos dominantes sobre os dominados.

A América constituiu-se como o primeiro espaço/tempo de um padrão de poder de vocação mundial e, desse modo e por isso, como a primeira id-entidade da modernidade. Dois processos históricos convergiram e se associaram na produção do referido espaço/tempo e estabeleceram-se como os dois eixos fundamentais do novo padrão de poder. Por um lado, a codificação das diferenças entre conquistadores e conquistados na ideia de raça, ou seja, uma supostamente distinta estrutura biológica que situava a uns em situação natural de inferioridade em relação a outros. Essa ideia foi assumida pelos conquistadores como o principal elemento constitutivo, fundacional, das relações de dominação que a conquista exigia (Quijano, 2005, p. 117).

Pela ideologia da colonialidade implantada, os indivíduos conquistados foram colocados em posição natural de subalternidade<sup>6</sup>, atreladas à definição de raça, situação que também foi determinada a desigualdade da mulher no contexto individual e coletivo, movido pelo modelo do patriarcalismo e das estruturas associadas que se reproduziram mutuamente pela dependência de um sistema de subalternidade ao senhorio e a geração e circulação do capital em prol do dominante. Dentro desta lógica, a mulher foi configurada por muito tempo na história, como indivíduo frágil com capacidade física, intelectual e laboral inferior ao homem, o corpo da mulher é tido como objeto de satisfação sexual,

---

<sup>6</sup> Segundo dicionário de língua portuguesa: Diz-se subalterno da pessoa que está sob ordens de outra; sem importância; secundário; que se sente inferior a outra pessoa ou a outras coisas; que se sente obrigado a realizar os desejos de uma outra pessoa; submisso. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/subalternos/>.



reprodução biológica, prestação de serviços domésticos e de cuidados pela imposição natural de tais tarefas.

El mundo que el frente colonial y, más tarde, el frente colonial-estatal intervienen e invaden es un mundo en el que los géneros ocupan dos espacios diferentes de la vida social. En ese sentido, como se ha dicho muchas veces, la estructura de ese mundo es dual y conducida por una reciprocidad férrea vinculante. Lo dual es una de las variantes de lo múltiple, y entre los términos de una dualidad hay tránsitos y es posible la conmutabilidad de posiciones. En el mundo dual, ambos términos son ontológicamente plenos, completos, aunque puedan mantener una relación jerárquica. No hay englobamiento de uno por el otro: el espacio público, habitado por los hombres con sus tareas, la política y la intermediación (los negocios, la parlamentación y la guerra), no engloba ni subsume el espacio doméstico, habitado por las mujeres, las familias, y sus muchos tipos de tareas y actividades compartidas (Segato, 2016, p. 93).

Quijano (2005), trata que historicamente, isso significou uma nova maneira de legitimar as já antigas ideias e práticas de relações de superioridade/inferioridade entre dominantes e dominados. Desde então, demonstrou ser o mais eficaz e durável instrumento de dominação social universal, pois dele passou a defender outro igualmente universal, no entanto mais antigo, o intersexual ou de gênero: os povos conquistados e dominados foram postos numa situação natural de inferioridade, e, conseqüentemente, também seus traços fenotípicos, bem como suas descobertas mentais e culturais. Desse modo, raça converteu-se no primeiro critério fundamental para a distribuição da população mundial nos níveis, lugares e papeis na estrutura de poder da nova sociedade. Em outras palavras, no modo básico de classificação social universal da população mundial pela adoção de uma modernidade.



A Modernidade, como novo paradigma de vida cotidiana, de compreensão da história, da ciência, da religião, surge ao final do século XV e com a conquista do Atlântico. O século XVII já é fruto do século XVI; Holanda, França e Inglaterra representam o desenvolvimento posterior no horizonte aberto por Portugal e Espanha. A América Latina entra na Modernidade (muito antes que a América do Norte) como a outra face, dominada, explorada, encoberta. Se a Modernidade tem um núcleo racional *ad intra forte*, como saída da humanidade de um estado de imaturidade regional, provinciana, não planetária, essa mesma Modernidade, por outro lado, *ad extra*, realiza um processo irracional que se oculta a seus próprios olhos. Ou seja, por seu conteúdo secundário e negativo mítico, a Modernidade é justificativa de uma práxis irracional de violência (Dussel, 2005, p. 28-29).

Para Lander (2005, p. 8), na obra *Debate Ciências Sociais*: “saberes coloniais e eurocêntricos, a compreensão da expressão mais potente e da eficácia do pensamento científico moderno especialmente em suas expressões tecnocráticas e neoliberais hoje hegemônicas é o que pode ser literalmente descrito como a naturalização das relações sociais, a não de acordo com a qual as características da sociedade chamada moderna são a expressões das tendências espontâneas e naturais do desenvolvimento histórico da sociedade”.

Neste sentido, entendemos que pelo advento da colonialidade deu-se a fixação hegemônica do saber e poder, ou seja, o eurocentrismo<sup>7</sup> quando foram implantadas as ciências sociais como inquestionáveis e a classificação social da população mundial pela imposição de raça, divisão do trabalho e a desigualdade violência simbólica em face da mulher, negros e povos indígenas.

---

<sup>7</sup> O eurocentrismo é um termo utilizado para designar a centralidade e superioridade da visão europeia sobre as outras visões de mundo. Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/eurocentrismo/> Acesso em: 23/10/2019.



Lo que importa para entender la violencia masculina es este colocar a las mujeres bajo el poder real y simbólico de los varones. Insisto en poder que es tanto real como simbólico que da legitimidad a esta manera de existencia de los sexos, las mujeres deben estar en manos de los varones. Todas las religiones y todos los discursos validantes han explicado esta misma verdad, que no sólo esto ocurre, sino que es bueno que ocurra. Puede haberlo hecho mediante el recurso a un mito origen (que nos diga que las mujeres fueron entregadas a este poder viril porque no supieron hacer uso del poder que previamente tenían, por ejemplo, porque son las causantes del mal originario) y así sucede en las Regiones del Libro, o pueden adoptar las formas de oración, consejo o ley (Quirós, 2008. p. 403).

Mignolo (2017, p. 5), cita Quijano em sua formulação original por “patrón colonial de poder” (matriz colonial de poder) foi descrito como quatro domínios interrelacionados: controle da economia, da autoridade, do gênero e da sexualidade, e do conhecimento e da subjetividade. Os eventos se desdobraram em duas direções paralelas. Uma foi a luta entre Estados imperiais europeus, e a outra foi entre esses Estados e os seus sujeitos coloniais africanos e indígenas, que foram escravizados e explorados. O que sustenta as quatro “cabeças”, ou âmbitos interrelacionados de administração e controle (a ordem mundial), são as duas “pernas”, ou seja, o fundamento racial e patriarcal do conhecimento (a enunciação na qual a ordem mundial é legitimada).

El patriarcado es un sistema basado en el prejuicio sexista de la inferioridad natural del sexo femenino que da lugar a relaciones sociales asimétricas y jerárquicas entre hombres y mujeres. Estas relaciones se apoyan en buena medida, en la práctica de diferentes formas de violencia, desde aquellas consideradas legítimas porque están naturalizadas y que por consiguiente, son invisibles, a las que se ven como ilegítimas. Dar visibilidad a estas



formas de violência física, simbólica y sexual ejercida contra las mujeres em la literatura antigua requiere una lectura no androcéntrica, una interpretación realizada a partir de la teoría y la crítica, ma interpretación realizada a partir de la teoría y la crítica feminista, y una buena dosis de empatía feminina, ya que conductas que no resultan visibles em uma época, porque forman parte de la estructura de dominacion considerada normal, son consideradas delictivas em otras (Font, 2006, p. 41).

Castells (2000), escreve que o patriarcalismo é uma das estruturas sobre as quais se assentam todas as sociedades contemporâneas. Caracteriza-se pela autoridade, imposta institucionalmente, do homem sobre mulheres e filhos no âmbito familiar. Para que essa autoridade possa ser exercida, é necessário que o patriarcalismo permeie toda a organização da sociedade, da produção e do consumo à política, à legislação e à cultura. Os relacionamentos interpessoais e conseqüentemente, a personalidade, também são marcados pela dominação e violência que tem sua origem na cultura e instituições do patriarcalismo.

Desde que o mundo é mundo humano, a mulher sempre foi discriminada, desprezada, humilhada, coisificada, objetificada, monetarizada. Ninguém duvida que a violência sofrida pela mulher não é exclusivamente do agressor. A sociedade ainda cultiva valores que incentivam a violência, o que impõe a necessidade de se tomar consciência de que a culpa é de todos. O fundamento é cultural e decorre da desigualdade no exercício do poder e que leva a uma relação de dominante e dominado. Essas posturas acabam sendo referendadas pelo Estado. Daí o absoluto descaso de que sempre foi alvo a violência doméstica. O Brasil guarda cicatrizes históricas da desigualdade, inclusive no plano jurídico (Dias, 2008, p. 15-16).



Neste sentido, o enfrentamento da desigualdade derivada do patriarcalismo pelo ideário da colonialidade fez emergir resistência por parte da mulher nas últimas décadas, seguindo dia a pós dia como um exercício para a emancipação, aquela negada por muito tempo que na atualidade guarda sentido antagônico ao direito fundamental nos ambientes domésticos e sociais. Contudo, para alcançar a emancipação almejada para efetivação da justiça social é necessário que as escolhas sejam feitas dentro de uma democracia, por indivíduos livres, representando uma soma de utilidade que impreterivelmente não sejam aquelas em outro tempo impostas.

## 2.1 MULHER E EMANCIPAÇÃO: ASPECTOS DEMOCRÁTICOS

A emancipação da mulher tem sido um processo constante na esfera democrática, mesmo que as teorias de justiça adotadas não estejam atentas a solução de problemas relacionados a identidade da mulher, consideramos dentro desta ótica como medida de cuidado a elucidação de teorias que respeitem a necessidade de justiça sensível à evolução social democrática.

A maioria das teorias de justiça da tradição ocidental, por exemplo, não tem estado atenta às demandas das mulheres por igualdade e aos muitos obstáculos que se colocavam, e se colocam no caminho da igualdade. Suas abstrações, apesar de alguma maneira válidas, dissimulavam um fracasso em confrontar um dos problemas mais sérios do mundo. O tratamento adequando ao problema da justiça de gênero possui amplas consequências teóricas, uma vez que envolve o reconhecimento de que a família é uma instituição política, não parte de uma “esfera privada” imune à justiça (Nussbaum, 2013, p. 2).



Na atualidade são perceptíveis transformações ocorridas em favor da mulher, ademais, a existência de um Estado democrático responsável pela criação de legislação e regulação da ordem e bem-estar social por meio de ações de promovam a igualdade entre os indivíduos é elemento preponderante para se alcançar uma equalização de direitos e deveres almejando uma concepção de igualdade social.

Ao longo de todo esse tempo de luta, as mulheres têm conseguido algumas conquistas que lhes garantem melhor posição na sociedade. A educação cumpriu e ainda cumpre um papel fundamental nesse processo, pois é através dela que as mulheres têm conseguido compreender e reagir ao status inferior à que são submetidas. Como já apontado pelas precursoras feministas, as mulheres foram culturalmente orientadas à submissão ao sexo oposto. Sendo assim, através da consciência de que essa submissão era uma premissa do discurso patriarcal, as mulheres tiveram e continuam tendo a oportunidade de, através do conhecimento e da reflexão crítica, remodelar sua condição na sociedade (Leão, 2010, p. 2-3).

Segundo Beltrão (2002), relata que se tem presenciado, nessas últimas décadas, uma considerável melhora na situação da mulher na maior parte dos países. O nível educacional das mulheres aumentou significativamente, e sua presença no mercado de trabalho também. No entanto, no futuro, parte do caminho a ser trilhado deve incluir a eliminação das desigualdades de gênero, no que se refere a direitos, recursos e voz.

Nas últimas décadas, a posição relativa de mulheres e homens modificou-se profundamente no Brasil e em outras partes do mundo. Houve transformações na vivência e na compreensão dos papéis de gênero e das relações em que estes ganham realidade. Nos debates



teóricos e no ativismo, foi desafiado o binário feminino-masculino, com as características e os valores associados a cada um de seus termos. E isso não se deu apenas no âmbito da sexualidade. A identidade do grupo mulheres vêm sendo postas em questão de maneira sistemática pelas feministas negras e pala feministas socialistas, ao menos desde os anos 1960 (Biroli, 2018, p. 9).

Dias (2013), relata que a emancipação jurídica da mulher forçou o declínio da sociedade conjugal patriarcal. Assumindo a mulher a condição de “sujeito de desejo”, o princípio da indissolubilidade do casamento ruiu, uma vez que a histórica resignação feminina é que sustentava os casamentos. Hoje a mulher, na plenitude de sua condição feminina, é parte fundante da estrutura social e passou a exercer funções relevantes para a emancipação pessoal e profissional para a sociedade e para a família.

A mulher tem alcançado longevidade superior ao homem e vem se fazendo representada desde cargos de chefia, secretarias e ministérios de Estado, também em cargos do poder judiciário e do ministério público. Além disso é possível identificar a figura da mulher representada nas mais diversas profissões e cargos desde o nível profissionalizante mais alto até os níveis operacionais, laborais, domésticos e de cuidados.

Saffioti (2001), colabora escrevendo que do ponto de vista biológico, o organismo feminino é muito mais diferenciado que o masculino, estando já provada sua maior resistência. Tanto assim é que as mulheres, estatisticamente falando, vivem mais que os homens. A sobrevida feminina em relação aos homens já alcançou oito anos nos Estados Unidos, estando entre cinco e seis no Brasil.

Imperiosa é a observância que a mulher continua evoluindo dia após dia, negando desigualdade imposta em outro tempo, situação que convida para uma profunda argumentação e ação para a obtenção de



justiça no contexto social baseada na liberdade de indivíduo dotado de personalidade e direito.

### 3 DISCUTINDO JUSTIÇA SOCIAL DO PONTO DE VISTA DA MULHER

Para discutir sobre justiça social, a premissa é inevitavelmente aquela que engloba um cruzamento do desenvolvimento econômico e o interesse relacionado à construção de uma moral coletiva. Partindo deste princípio, compreendemos que os indivíduos convivem em uma sociedade que almeja um ambiente de bem-estar, justiça social e adoção constante de um posicionamento de solidariedade coletiva, baseada na igualdade e democracia.

Ó reconhecimento da igualdade e, conseqüentemente, a identidade de gênero, pode ser entendida como uma forma de liberdade natural especificada pelo reconhecimento de gênero feminino livre de imposição e dominação do gênero masculino, e das percepções rígidas herdadas da colonialidade, que inviabiliza a paridade, inclusive no mercado de trabalho e na obtenção salarial. “As partes do contrato social são primeiro de tudo, livres quer dizer, ninguém é dono de outrem. O postulado da liberdade natural é uma parte muito importante do ataque da tradição a várias formas de hierarquia e tirania” (Nussbaum, 2013, p. 35).

Baseando-se no pensamento que os direitos individuais estão intimamente ligados com a identidade dos indivíduos no âmbito existencial e que todas as ações humanas dentro de um Estado democrático de direito visam alcançar emancipação pessoal e social, mas que variam de acordo com os fins particulares pretendidos, a afirmação vai de encontro a invisibilidade suportadas pelas mulheres pelo efeito da

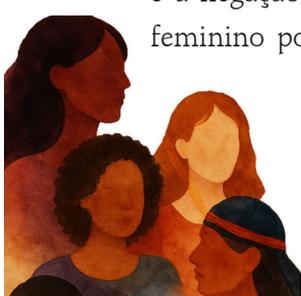


colonialidade. Nesse sentido, guardamos a necessidade de solidariedade e de enfrentamento de falsa liberdade buscando aquela que seja a mais justa e com reconhecimento recíproco.

A solidariedade (ou eticidade), última esfera de reconhecimento, remete à aceitação recíproca das qualidades individuais, julgadas a partir dos valores existentes na comunidade. Por meio dessa esfera, gera-se a autoestima, ou seja, uma confiança nas realizações pessoais e na posse de capacidades reconhecidas pelos membros da comunidade. A forma de estima social é diferente em cada período histórico: na modernidade, por exemplo, o indivíduo não é valorizado pelas propriedades coletivas da sua camada social, mas surge uma individualização das realizações sociais, o que só é possível com um pluralismo de valores (Salvadori; Honneth, 2003, p. 191).

Para Dias (2013), para que o direito possa aprender a ideia de justiça, é necessário compreender a subjetividade feminina. Essa foi a grande contribuição da psicanálise para o direito trazida por Rodrigo da Cunha Pereira. É preciso desfazer a confusão de que a igualdade é possível sem considerar que o campo da subjetividade perpassa pelas subjetividades masculina e feminina. Mister que saudáveis e naturais diferenças entre homens e mulheres sejam tratadas dentro do privilégio da igualdade implementar a igualdade não é conceder à mulher o tratamento privilegiado de que os homens sempre desfrutaram, sob pena de se reconhecer que o modelo é o masculino. É importante lançar um olhar mais detido sobre a condição da mulher para aferir se realmente há igualdade ou se esta é apenas formal.

Verdadeiramente o reconhecimento da identidade da mulher é a negação da afirmação preponderante do gênero masculino sobre o feminino por naturalidade, devendo ser um exercício diário para uma



evolução e obtenção de identidade emancipatória da mulher como sujeito membro da sociedade com revelação da justiça em nível de eticidade.

A eticidade, portanto, é o conjunto de práticas e valores, vínculos éticos e instituições, que formam uma estrutura intersubjetiva de reconhecimento recíproco. Por meio da vida boa, há uma conciliação entre liberdade pessoal e valores comunitários. A identidade dos indivíduos é formada pela socialização, ou seja, é formada na eticidade, inserida em valores e obrigações intersubjetivas. Portanto, não há como pensar a existência de um contrato para o surgimento da sociedade, mas nas transformações das relações de reconhecimento (Salvadori; Honneth, 2003, p. 191).

A aceitação coletiva para a efetivação de direitos, sejam emancipatórios da mulher ou qualquer direito do contexto individual ou coletivo, depende necessariamente de estar assegurada pela ordem jurídica do Estado de direito, elaborada pela vontade democrática dos indivíduos que participam do processo legislativo por representação social, como é conferida a autonomia e participação política para solução dos dilemas sociais e sucessivamente pela imposição do poder jurídico.

O sujeito é uma questão crucial para a política, e particularmente para a política feminista, pois os sujeitos jurídicos são invariavelmente produzidos por via de práticas de exclusão que não “aparecem”, uma vez estabelecida a estrutura jurídica da política. Em outras palavras, a construção política do sujeito procede vinculada a certos objetivos de legitimação e de exclusão, e essas operações políticas são efetivamente ocultas e naturalizadas por uma análise política que toma as estruturas jurídicas como seu fundamento. O poder jurídico “produz” inevitavelmente o que alega meramente representar; conseqüentemente, a política tem de se preocupar com essa função dual do poder: jurídica e produtiva (Butler, 2003, p. 17).



Fraser (2009), coopera escrevendo que o Estado moderno territorial como a unidade apropriada, e os cidadãos como os sujeitos concernidos, tais argumentos se dirigiam ao que precisamente esses cidadãos deviam uns aos outros. Aos olhos de alguns, era suficiente que os cidadãos fossem formalmente iguais perante a lei; para outros, a igualdade de oportunidades era também requerida; para outros, ainda, a justiça demandava que todos os cidadãos tivessem acesso aos recursos e ao respeito de que eles precisavam para serem capazes de participar em paridade com os demais, como membros integrais da comunidade política.

Dessa análise, pode-se afirmar que a justiça nas relações entre mulheres e homens é uma questão de igualdade e a injustiça é a desigualdade. A lei deve considerar apenas as partes como iguais. O justo é um meio termo, para restabelece a igualdade.

Para pensar a cidadania, hoje, há que se substituir o discurso da igualdade pelo discurso da diferença homens e mulheres são diferentes, mas são iguais em direitos. Alcançada a igualdade jurídica, não se pode afastar as diferenças. Desconhecê-las acaba por levar à eliminação das características femininas. Certas discriminações são positivas, pois, na verdade, constituem preceitos compensatórios como solução para superar as diferenças. Mesmo que o tratamento isonômico já esteja na lei, ainda é preciso percorrer um longo caminho para que a família se transforme em espaço de igualdade. O grande desafio é compatibilizar as diferenças com o princípio da igualdade jurídica, para que não se retroceda à discriminação em razão do sexo, o que a Constituição veda (Dias, 2013, p. 103).

Nussbaum, (2013), relata que a justiça tem sentido onde quer que haja seres humanos. Os seres humanos querem viver juntos e querem viver juntos bem, o que inclui, assim entendem, o viver em acordo com



a justiça. Não precisam estar posicionados de maneira semelhantes a fim de que tais questões surjam, tampouco maneira semelhante a fim de que tais questões surjam, tampouco precisam encontrar-se em uma situação de escassez moderada.

A afirmação de novas teorias baseadas na adoção de um enfoque de reconhecimento da desigualdade suportada pela mulher pelo efeito da colonialidade é o ponto de partida para a afirmação definitiva emancipatória da mulher que pretende se afirmar com sujeito de direito na sociedade. O reconhecimento da liberdade e igualdade com o estabelecimento de condições adequadas para o desenvolvimento digno da personalidade e identidade da mulher é essencial para o reconhecimento existencial, porém, a justiça social só pode ser alcançada pelo bem viver, com respeito às capacidades de cada indivíduo e adoção de novos saberes epistemológicos, baseados em vários tipos de conhecimento sejam: sociais e humanos e também exercício diário de indivíduos capazes e evoluídos socialmente.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluimos que a trajetória de desigualdade e exclusão da mulher, entendida como um indivíduo submisso desde os efeitos da colonialidade, foi rompida nas últimas décadas pela compreensão social que almeja bem-estar coletivo. Por esta lógica, muitas reivindicações da mulher no campo democrático: social, laboral, doméstico e jurídico foram travadas na busca da emancipação enquanto sujeito de direito e capacidade. Entendemos que o enfrentamento ao padrão hegemônico de desigualdade da mulher não se encaixa com contexto atual, próspero e evolutivo no campo das liberdades, fato que a igualdade se torna medida de justiça individual e social.



Dessa forma, a adoção de novas teorias que não aquelas herdadas do ideário da colonialidade, mas sim, novas epistemologias advindas de uma sociedade evoluída que adota teorias com base no direito fundamental e humano, aberto ao mundo, com habilidade para melhorar situações, sabendo que a democracia exige que pensemos que toda vida é valiosa, e a exigência e a capacidade tanto intelectual como física de pensar e agir podem gerar mudanças na estrutura, utilizando do argumento de poder fazer escolhas e distinguir as boas e más escolhas que refletem no ambiente público e privado.

Por fim, compreendemos que foram transbordados patamares e rompidas barreiras direcionadas a uma melhor relação e adoção entre teorias de justiça e a necessidade de justiça social sensível à coletividade e à evolução social de todos os indivíduos livres, pelo reconhecimento da identidade emancipatória da mulher e assegurada como direito natural.

## REFERÊNCIAS

BALLESTRIN, Luciana. **O giro decolonial e a América Latina**. 36º Encontro Anual da Anpocs: Águas de Lindóia, 2012. Disponível em: <http://portal.anpocs.org/portal/>. Acesso em: 10 maio 2019.

BELTRÃO, Kaizô Iwakami. **Acesso à Educação**: diferenciais entre os sexos. 2002. IPEA Instituto de Pesquisa Aplicada. Disponível em: [http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td\\_0879.pdf](http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_0879.pdf). Acesso em: 26 out. 2019.

BIROLI, Flávia. **Gênero e desigualdade**: os limites da democracia no Brasil. 1 ed. – São Paulo: Boitempo, 2018.



BUTLER, Judith. **Problemas de gênero**: feminismo e subversão da identidade. tradução, Renato Aguiar. — Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. Disponível em: <file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Trabalho%20Conclusão/DIRECIONADO/butler-problemasdegenero-ocr.pdf>. Acesso em: 20 out. 2018.

CASTELLS, Manuel. **O poder da identidade**. Vol. II, São Paulo: Paz e Terra, 2000.

DIAS, Maria Berenice. **A Lei Maria da Penha na justiça**: a efetividade da Lei 11.340/2006 de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher/Maria Berenice Dias. 2 tir. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008.

DIAS, Maria Berenice. **Manual de direito das famílias**. 9 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013.

DUSSEL, Enrique. **Europa, modernidade e eurocentrismo. A colonialidade do saber**: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino americanas. Edgardo Lander (org.). Colección Sur Sur, CLACSO, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Setembro 2005. Disponível: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar>. Acesso em: 20 out. 2019.

FONT, Maria Dolors Molas. **Las violências contra las mujeres em la poesia griega**: Homero a Eurípides. Capítulo II. La violencia de género em la antigüedad. Instituto de la Mujer. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Madrid. 2006.

FRASER, Nancy. **Reenquadrando a justiça em um mundo globalizado**. Lua Nova, São Paulo, n. 77, p. 11-39, 2009. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ln/n77/a01n77.pdf>. Acesso em: 20 out. 2019.



LANDER, Eduardo. **Ciências sociais**: saberes coloniais e eurocêntricos. A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino americanas. Edgardo Lander (org.). Colección Sur Sur, CLACSO, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Setembro 2005. Disponível: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar>. Acesso em: 20 out. 2019.

LEÃO, J. A. O. Condição feminina. In: OLIVEIRA, D.A.; DUARTE, A.M.C.; VIEIRA, L.M.F. **Dicionário**: trabalho, profissão e condição docente. Belo Horizonte: UFMG/Faculdade de Educação, 2010. CDROM. Acesso em: 21 out. 2018.

MENESES, Maria Paula. Epistemologias do Sul, **Revista Crítica de Ciências Sociais [Online], 80 | 2008, publicado a 01 outubro 2012. Disponível em: <http://journals.openedition.org/rccs/689>. DOI: <https://doi.org/10.4000/rccs.689>. Acesso em: 10 maio 2025.**

MIGNOLO, Walter D. **Colonialidade**: O lado mais escuro da modernidade. Walter D. Mignolo Tradução de Marco Oliveira Duke University, Durham, NC, EUA. E-mail: [wmignolo@duke.edu](mailto:wmignolo@duke.edu). Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), Rio de Janeiro – RJ, Brasil, 2017. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v32n94/0102-6909-rbcsoc-3294022017.pdf>. Acesso em: 15 out. 2019.

NUSSBAUM, Martha. **Fronteiras da Justiça**: deficiência, nacionalidade, pertencimento à espécie. São Paulo: Martins Fontes, 2013.

QUIJANO, Anibal. **A colonialidade do saber**: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latinoamericanas. Edgardo Lander (org.). Colección Sur Sur, CLACSO, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, setembro 2005. **Disponível em: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/>.** Acesso em: 15 out. 2019.

QUIRÓS. Amelia Valcárcel Bernaldo de. **La Violencia Contra las mujeres**: La valoración del daño en las víctimas de la violencia de género. Consejo General Del Poder Judicial c/ Marqués de la Ensenada, 8 28071 Madrid. 2008.



SAFFIOTI, Heleieth. **O poder do macho**. São Paulo: Moderna, 2001. (Coleção polêmica). Disponível em: [file:///C:/Users/Usuario/Desktop/saffiotti\\_heleieth\\_o\\_poder\\_do\\_macho.pdf](file:///C:/Users/Usuario/Desktop/saffiotti_heleieth_o_poder_do_macho.pdf). Acesso em: 27 ago. 2019.

SALVADORI, Mateus; HONNETH, Alex. **Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais**. Trad. De Luiz Repa. São Paulo: Ed. 34, 2003. Disponível em: <file:///C:/Users/Usuario/Downloads/HONNETH,%20Axel.pdf>. Acesso em: 28 out. 2019.

SANTOS, Boaventura de Sousa. **A persistência Histórica do Patriarcado**. Instituto Humanitas Unisinos – ADITAL. Artigo publicado no jornal p.12, 18-04-2011. Tradução Cepat. Disponível em: <http://www.ihu.unisinos.br/noticias/42686-a-persistencia-historica-do-patriarcado>. Acesso em: 27 out. 2019.

SEGATO, Rita Laura. **La guerra contra las mujeres**. Traficantes de Sueños. Cofás SA Calle de Juan de la Cierva, 58, 28936 Móstoles, Madrid. diciembre de 2016. Disponível em: [https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/map45\\_segato\\_web.pdf](https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/map45_segato_web.pdf). Acesso em: 20 out. 2019.

TODA MATÉRIA: **Significado de Eurocentrismo, 2011-2025**. Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/eurocentrismo/>. Acesso em: 23 out. 2019.

TODA MATÉRIA SIGNIFICADOS: **Significado de Hegemonia 2011-2025**. Disponível em: <https://www.significados.com.br/hegemonia/>. Acesso em: 23 out. 2019.



# A COLONIALIDADE DE GÊNERO E O PENSAMENTO FEMINISTA DECOLONIAL

Geanne Gschwendtner<sup>1</sup>  
Uliana Helena Mengarda<sup>2</sup>

## INTRODUÇÃO

O Brasil, assim como os demais países latino-americanos, possui uma construção social dentro de um processo colonizatório, nesse sentido, o filósofo Enrique Dussel realiza uma crítica a falácia eurocêntrica do descobrimento dos países do Sul, desvelando a realidade e teorizando sobre a necessidade da desconstrução do chamado ‘nascimento da modernidade’.

A chamada ‘conquista’ então, foi uma relação entre as pessoas, mas também política, militar, uma práxis de dominação na qual o objetivo primordial era o controle dos corpos através de sua pacificação, sendo uma figura jurídico-militar desde 718 na Espanha. A figura do conquistador é associada na modernidade ao homem ativo, que impõe sua individualidade violenta ao outro.

Assim, a colônia passou a ser uma figura econômica e política na qual terras e culturas eram dominadas pelo Império cujo idioma era o latim, e a América Latina tornou-se a primeira colônia da Europa moderna.

<sup>1</sup> Professora de Direito na Universidade Sociedade Educacional de Santa Catarina; Mestre em Direito pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da Fundação Universidade Regional de Blumenau; Pós-graduada *laio sensu* em Criminologia, Política Criminal e Justiça Restaurativa pelo Centro Universitário - Católica de Santa Catarina; Advogada. E-mail: geanne62499@oab-sc.org.br.

<sup>2</sup> Mestre em Direito pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da Fundação Universidade Regional de Blumenau. E-mail: umengarda@gmail.com.



O domínio dos corpos se deu de forma pedagógica, cultural, política, econômica, com apropriação das culturas, corpos, trabalhos e instituições, numa total dominação do outro. Em uma estrutura de domesticação e colonização do ‘modo’ de ser/estar no mundo dos outros. Ademais, o ego europeu era extremamente vinculado à sexualidade, um ego ‘fálico’ que exerceu uma violência erótica para com a população indígena, o filho ‘bastardo’ passou a ser o mestiço, crioulo. E o ouro e prata na Europa eram fruto do sangue latino.

Nesse sentido, a autora María Lugones trabalha o conceito de ‘colonialidade de gênero’, para explicitar o modo particular que, para além da colonização dos povos, as relações de poder exercidas pelo patriarcado sobre o gênero também foram relevantes para a desigualdade desde os primórdios da colonização. Assim as implicações particulares das mulheres ocorreram de forma interseccional entre as opressões vivenciadas pelos povos originários, mulheres, negros escravizados, dentre outros grupos classificados como ‘o Outro’.

Portanto, dentro da construção do pensamento teórico feminista, a recente ‘classificação’ da perspectiva de teorias feministas em um viés ‘decolonial’ com autoras como María Lugones, Oyèrónkí Oyíwùmí, Lélia Gonzalez, Yuderkys Espinosa Miñoso, entre outras que trazem aos estudos de gênero uma necessidade de compreender ao que responde o aumento desse exercício de pensar a partir do próprio local, quer seja o espaço físico, quer seja o campo teórico. Abordando as temáticas afetas às mulheres com o olhar individualizado das particularidades vivenciadas ao longo e em decorrência de um processo colonizatório, rechaçando os conceitos universalizantes, levando em conta as contribuições que tendem a ampliar as discussões teóricas sobre as propostas dos movimentos feministas.

Diante desse contexto, surge o problema de pesquisa: de que maneira a teoria da colonialidade de gênero de María Lugones rompe



com as concepções da teoria feminista tradicional, ampliando o debate para incluir as múltiplas opressões resultantes do colonialismo? Parte-se da hipótese de que a colonialidade de gênero oferece um olhar ampliado sobre as relações de poder, ao integrar diversas dimensões de opressão que foram historicamente invisibilizadas pelo feminismo tradicional eurocentrado. Assim, argumenta-se que a desconstrução das estruturas patriarcais e coloniais requer uma abordagem interseccional, que considere as múltiplas camadas de marginalização vivenciadas por mulheres racializadas e subalternizadas.

O objetivo deste estudo, portanto, é analisar como a teoria da colonialidade de gênero, concebida por María Lugones, contribui para o rompimento com o feminismo tradicional, evidenciando as interseccionalidades de raça, gênero, sexualidade e classe como elementos essenciais para a compreensão das dinâmicas coloniais e patriarcais ainda presentes na sociedade. Pretende-se, com isso, ampliar o repertório teórico das discussões feministas, especialmente sob a perspectiva decolonial, que ainda carece de maior produção acadêmica.

Para alcançar tais objetivos, adota-se a metodologia hipotético-dedutiva, com abordagem qualitativa, do tipo descritiva e exploratória. O estudo baseia-se essencialmente em pesquisa bibliográfica, analisando as contribuições teóricas de María Lugones e de outras autoras feministas decoloniais, buscando aprofundar o debate acerca das intersecções entre colonialidade e gênero no campo do pensamento crítico feminista.

## 1 A COLONIALIDADE DE GÊNERO E O SISTEMA COLONIAL: CONTRIBUIÇÕES DE MARÍA LUGONES

O chamado ‘encontro de dois mundos’, é segundo Dussel (1993) romantizado nas narrativas e acaba por ocultar a violência e



dominação, o choque, o conflito e o genocídio que geraram um trauma, assim o processo colonizatório como exploratório é negado. A relação assimétrica constituída na qual o mundo do ‘outro’ é negado e excluído da racionalidade em um total desprezo pelo que já existia.

Dussel (1993) atenta para como os critérios de superioridade foram traçados como premissas para o desenvolvimento a partir da eurocentralidade, culpabilizando a vítima pela sua própria vitimação, na qual o sujeito moderno seria um inocente que estaria realizando um ato sacrificial pelo ‘Outro’.

Existe assim, três posições teórico-argumentativas de inclusão do ‘Outro’: a Emancipação, que consistiria dentro do processo violento de inversão do papel, na qual a vítima se torna culpada, e o culpado se torna vítima, as civilizações foram utilizadas como instrumento e o sofrimento justificado na ‘razão moderna’, impactando inclusive na saúde da ‘barbárie’; a Utopia, sendo o ideário de uma sociedade cristã, com tecnologia de produção, cultivo agrícola, arquitetura, animais etc., como mundo utópico da ‘monarquia indiana’, extremamente criticado pelos colonos europeus/hispânicos; e a Crítica do ‘mito da modernidade’, em que nada legitima a violência exercida, a qual sempre utiliza da pregação do cristianismo e posteriormente a propagação da democracia, livre comércio etc. como pretexto para a chamada ‘guerra injusta’.

Cumprе ressaltar, que Dussel (1993) aponta como o continente já estava humanizado, quando Colombo chegou, e ‘América’ não é um nome autóctone. Nessa perspectiva também abordada por Francesca Gargallo Celentani (2014) que traz a ideia de Abya Yala como o nome do território antes da colonização e Lélia Gonzalez (2020) que conceitua a coletividade brasileira como pertencente a chamada América Ladina.

Há o entendimento de três graus de desenvolvimento cultural dos povos americanos: 1º grau seriam os nômades do sul e do norte, 2º grau os plantadores das cordilheiras do sul e sudeste (dos incas aos amazônicos,



caribe, pradarias, sudoeste do que hoje são os Estados Unidos) e em 3º grau a América nuclear (Mesoamérica, Colômbia, do Equador ao Chile e Argentina).

Forma assim, um pleno de humanização, história e sentido que foram negados pelos que vieram depois. A reciprocidade dos povos foi algo que não foi cogitada, assim, sem abertura para a comunicação pela falta de tradução, a imposição de vontades do colonizador se deu através da violência, no conceito de Tupac Amaru, houve a invasão de um continente (Dussel, 1993)

María Lugones (2014) desenvolveu o conceito de ‘colonialidade de gêneros’ para demonstrar como o discurso da modernidade colonial foi utilizado não apenas para impor a exploração econômica aos povos originários, mas transformar suas relações sociais, e instituir uma hierarquia de gênero binária e racializada.

Isso porque, “somente homens e mulheres civilizados são humanos; povos indígenas das Américas e escravos africanos eram classificados como não humanos – animais, incontrolavelmente sexuais e selvagens” (Lugones, 2010, p. 370).

Além de impor a dicotomia homem/mulher, baseada em um modelo europeu, os colonizadores negaram o gênero às pessoas colonizadas que “se tornaram machos e fêmeas; machos se tornaram não humanos-como-não-homens, e fêmeas colonizadas se tornaram não humanas-como-não-mulheres” (Lugones, 2010, p. 371).

Neste sentido, “a consequência semântica da colonialidade dos gêneros é que a categoria “mulher colonizada” é vazia: nenhuma mulher é colonizada; nenhuma fêmea colonizada é mulher” (Lugones, 2010, p. 375).

Isto é, a colonialidade dos gêneros não apenas oprimiu mulheres racializadas, mas impediu que elas fossem vistas como ‘mulheres’ dentro dos parâmetros do patriarcado colonial.



María Lugones não se opõe ao feminismo de maneira genérica, mas ao feminismo eurocêntrico tradicional, que frequentemente ignora as especificidades das mulheres racializadas. A autora afirma que “a crítica das mulheres de cor e do Terceiro Mundo ao feminismo universalista coloca como central o fato de que a intersecção de raça, classe, sexualidade e gênero extrapola as categorias da modernidade” (Lugones, 2010, p. 369).

Portanto, sua ruptura com o feminismo tradicional se dá na rejeição da visão homogênea de opressão de gênero e na ênfase na diferença colonial, isto é, na forma como mulheres racializadas e colonizadas experienciam o gênero de maneira distinta das mulheres brancas ocidentais.

A estrutura de domínio também se consolidou na constituição do Estado moderno, marcado por cicatrizes profundas do processo colonial. A administração realizada do Norte para o Sul perpetuou a ideia de superioridade, enquanto o discurso da modernidade igualitária revelou-se uma mera retórica frente à lógica capitalista e racista que a sustenta (Segato, 2021, p. 71).

O cristianismo foi utilizado como ferramenta hegemônica de dominação, que promoveu um apagamento histórico das práticas culturais e espirituais das populações que já habitavam os territórios propriamente ‘des-cobertos’.

A instrumentalização da natureza foi central para o capitalismo e a concepção de gênero como distinção ‘naturalizada’, de modo que o sistema moderno colonial de gênero promoveu um descolamento de quem seria o ‘ser’ propriamente dito, exercendo a Colonialidade do Ser (Lugones, 2014)

Assim, a opressão das mulheres subalternizada foi realizada de modo interseccional, passando uma combinação de racialização, colonização, exploração capitalista e heterossexualismo. Diante disso, os



estudos de gênero estão estritamente ligados a perspectivas multifatoriais, em um estudo de teoria e práxis da construção da sociedade moderna.

Desse modo a dicotomia e o binarismo constituem um fator elementar para a manutenção das estruturas hierárquicas e opressoras. A relação binária compreende a ideia de ‘suplementar’ em uma universalidade que não é representativa (Segato, 2012).

## 2 FEMINISMO DECOLONIAL E O ROMPIMENTO COM O FEMINISMO TRADICIONAL

Com a compreensão do processo de colonização e as implicações nas estruturas de opressão construídas socialmente, é possível conceber que os movimentos feministas e a leitura a partir da teoria feminista se distinguem dos pensamentos hegemônicos advindos do Norte-Global. De tal modo, que emergem reflexões que visam pensar as estruturas e relações sociais a partir do Sul-Global, considerando a complexidade da perspectiva que a construção da ideia de imposição e autoridade do colonizador sobre o colonizado teve.

Nesse contexto, a elaboração do ‘o Outro’, como descreve Dussel (1993), sempre foi construída na distinção, em um afastamento. Márcia Tiburi (2021, p. 83) irá dizer que “(...) O fato de que muitas vezes não somos capazes de nos referir ao outro reconhecendo-o como um semelhante é o problema que devemos enfrentar (...)”.

Portanto, para encarar as dificuldades que nossa sociedade enfrenta na contemporaneidade, o pensamento feminista foi e continua sendo, eu sua essência um movimento de altíssima importância. Segundo a autora Bell Hooks,



O feminismo é a luta para acabar com a opressão sexista. Seu objetivo não é beneficiar apenas um grupo específico de mulheres, uma raça ou classe social de mulheres em particular. E não se trata de privilegiar a mulher em detrimento do homem. Ele pode transformar nossas vidas de um modo significativo. E o mais importante: o feminismo não é um estilo de vida, nem uma identidade pré-fabricada ou um papel a ser desempenhado em nossas vidas pessoais (Hooks, 2019, posição 731).

Ocorre que, conforme destaca a autora Françoise Vergès (2021, p. 15), desde 1970 existem alguns feminismos com perspectivas anti-imperialistas e antirracistas, com a defesa de um feminismo radical e libertário, outros com visões reformistas, em que pese haja conexões entre os diversos feminismos, o feminismo radical segue se posicionando contra qualquer aliança para com o Estado.

Assim, o movimento feminista, propriamente como movimento de posicionamento político que se relaciona com o movimento dos trabalhadores possui dinâmicas que foram sendo elaboradas através da própria construção social, vez que, reflexões de raça, gênero e classe foram se interpelando ao longo dos anos e mesmo entre os movimentos sociais (Arruzza, 2019).

Desse modo, ativistas afro-americanas questionaram duramente o feminismo universalista, que ignorava as diferentes experiências de mulheres negras e brancas na sociedade. Como argumenta María Lugones (2010), a modernidade organizou o mundo em categorias homogêneas e separáveis, que excluí a existência de identidades interseccionais. Essa abordagem eurocêntrica contribuiu para o apagamento das experiências de mulheres indígenas, negras e de outros grupos marginalizados, que não se encaixavam nos padrões de feminilidade ocidentais.

A colonialidade dos gêneros imposta pelo colonialismo não apenas negou o gênero às pessoas colonizadas, mas também estruturou as



relações sociais de forma hierárquica, que desconsiderou completamente as experiências de gênero das mulheres racializadas. Lugones critica essa abordagem universalista e defende a necessidade de um feminismo que compreenda a complexidade das interseccionalidades e das opressões que transcendem as categorias eurocentradas.

Além da imposição da colonialidade dos gêneros, outra crítica central do feminismo decolonial é a forma como as categorias de sexo e gênero foram naturalizadas para manter estruturas de dominação. Nesse sentido, Monique Wittig irá fazer críticas no que diz respeito a sexualidade e a perspectiva da heterossexualidade como compulsória ao afirmar que “descrevo a heterossexualidade não como instituição, mas como regime político apoiado na submissão e na apropriação de mulheres” (Wittig, 2022, p. 17).

Portanto, aponta para como a categoria sexo é um produto de uma sociedade heterossexual, que se apropria da condição de produção e reprodução próprios das mulheres para criar um sentido de normalidade, validado através da instituição nomeada casamento. De modo que a categoria ‘mulheres’ também é excludente nas relações de sexualidade e assim, também possuem particularidades que não são respondidas através do feminismo heteronormativo. Reforçando-se assim a crítica ao universalismo nas mais diversas formas que ele se expressa dentro dos movimentos feministas.

Assim, o feminismo eurocêntrico é arduamente criticado quando afirma que a centralidade da dominação patriarcal é universal, negando em certo modo, os efeitos da modernidade que a colonização buscou impor às sociedades pré-coloniais (Segato, 2021, p. 77-78).

Diferente do feminismo tradicional, que foca na relação entre gênero e patriarcado, o feminismo decolonial destaca que raça, classe e colonialidade são dimensões inseparáveis da opressão estrutural vivida por mulheres racializadas.



Essa abordagem rejeita uma visão homogênea do feminismo e propõe reconstruir saberes silenciados pela modernidade e pelo colonialismo, reconhecendo que a opressão se manifesta de forma interseccional e múltipla.

Além de questionar o apagamento histórico das mulheres racializadas, o feminismo decolonial propõe formas de resistência enraizadas em suas experiências e no reconhecimento de epistemologias contra-hegemônicas.

Bell Hooks (2019) aponta que o feminismo precisa expandir-se para além das elites cultas e atingir verdadeiramente aquelas que são afetadas pela desigualdade. Essa crítica é central para o feminismo negro, que por muito tempo denunciou a falta de diálogo do feminismo branco com mulheres racializadas.

É perceptível que as pautas reivindicadas pelos diferentes movimentos feministas surgem a partir de diferentes olhares e com diferentes propósitos. Sendo indissociável que por diversas vezes o feminismo branco foi beneficiário de direitos e garantias que seguem sendo negados às feministas negras e a demais grupos vulnerabilizados como a população LGBTQIA+.

Essa perspectiva é reforçada por Yuderkys Espinosa Miñoso, ao destacar que

A pergunta sobre como nos tornarmos as feministas que somos e o que feministas na América Latina estão fazendo ao fazer o que fazem será respondida por uma sujeita produzida entre mundos: essa que sempre será habitada pelo bairro de gente negra e empobrecida de onde veio; essa que viu o mundo dos brancos ricos na televisão, no cinema, no padrão, no grupo de meninas brancas-mestiças de classe alta que zombavam dela na escola; essa que, ao chegar à universidade e ao feminismo – lugares privilegiados definidos em termos de raça e classe –, pôde terminar de conhecer essa sensação



peculiar, citada por Du Bois, “de olhar a si mesmo sempre através dos olhos dos outros” (Miñoso *In: Varejão et al.*, 2020, posição 1966).

Diante desse cenário, o pensamento feminista decolonial propõe que a organização racializada do gênero e dos corpos, ao categorizar de maneira estática entre ‘homem’ e ‘mulher’, é prejudicial ao desenvolvimento teórico do feminismo, pois nega diversas perspectivas essenciais para a compreensão de fenômenos sociais complexos.

O enfrentamento da violência contra as mulheres é considerado uma das maiores frentes das pautas feministas, assim, o enfrentamento da violência estatal e do capitalismo que mantém a impunidade também acaba por ser um objetivo enquanto movimento social (Vergès, 2021, p. 118-119).

Assim, os corpos objetificados os quais são alvos da violência, criando uma diferenciação e hierarquia, com os dualismos entre público e privado, masculino e feminino, são distanciados e assim, colocados em uma dinâmica de poder (Oyèwùmí, 2021, p. 35).

Porém, em que pese essa diferenciação ocorra é necessário compreender que essas narrativas ocorrem a partir de uma experiência ocidental, portanto, o determinismo reforça-se nas narrativas das culturas em que o corpo tem seu caráter valorativo a partir dos pressupostos biológicos. Assim há por parte da cultura ocidental uma negação de outras possibilidades, e uma insistência na categoria ‘gênero’ como construção social (Oyèwùmí, 2021, p. 37).

Nesse ponto, é perceptível que a saída da lógica Norte-Global possibilita a expansão de uma visão eurocêntrica, que abre espaço para outros campos de ser/existir no mundo. Com o aumento de estudos que visam desconstruir as estruturas vigentes, percebe-se que os conceitos construídos pelos feminismos eurocêntricos e ocidentais são altamente



problemáticos e com sérias falhas, sendo passíveis de questionamentos por parte dos feminismos decoloniais.

Lélia Gonzalez (2020, p. 109) destaca que a sociedade, sustentada pelo racismo e sexismo, impõe uma ideologia de dominação, faz que negros e mulheres como ‘menos’, logo, a carga de discriminação que é imposta a mulher negra é muito mais árdua do que se possa mensurar.

É inegável que o sofrimento e os enfrentamentos das mulheres negras são distintos das mulheres brancas, sendo as mais oprimidas e exploradas dentro do contexto da sociedade brasileira, em decorrência da ideologia do branqueamento (Gonzalez, 2020, p. 109-131).

Além disso, como bem explicita Francesca Gargallo Celentani (2014), a ideia de dominação universal masculina passa a ser compreendida como produto da construção da modernidade cruzando com o patriarcado católico e colonial, e assim, após a superação de um feminismo excludente e com vistas a ideia de ‘progresso’ reforçada pelo neoliberalismo.

As categorias teóricas de gênero, raça, classe e sexualidade estão em constante mutação, e para tanto necessitam compreender as complexidades desenvolvidas por quem inicialmente conceituou tais termos e por quem busca revisitá-los constantemente.

Portanto, é imprescindível compreender que os movimentos sociais, em específico os movimentos feministas, não possuem uma verdadeira universalidade, e dialogam em diferentes frentes, sendo primordial a compreensão das interseccionalidades para o avanço e a busca por um desenvolvimento dos saberes a partir do Sul-Global, que leva em conta as experiências e vivências dos povos originários, inclusive das mulheres.



## CONSIDERAÇÕES FINAIS

A aspiração da colonização como um projeto de modernização de uma sociedade a partir da imposição de uma cultura de dominação foi crucial para a configuração dos modelos de capitalismo e patriarcado que seguem perpetuando desigualdades na América Latina, e em específico no Brasil.

A colonialidade do gênero estruturou não apenas as relações sociais, mas também as formas de organização política e cultural dos povos colonizados, impondo um modelo eurocêntrico que marginalizou epistemologias e práticas de resistência. Essa imposição foi reforçada pelo feminismo tradicional, que muitas vezes desconsiderou as múltiplas camadas de opressão vivenciadas por mulheres racializadas.

A ‘razão moderna’ como única forma de saber e a construção social de hierarquias entre raça, gênero, classe e sexualidade foram fatores determinantes para os dilemas e enfrentamentos sociais hoje vivenciados na contemporaneidade.

Nesse sentido, o feminismo tradicional, ao se basear em uma perspectiva eurocêntrica e universalizante, negligenciou a realidade das mulheres racializadas, trata a opressão de gênero como uma experiência homogênea. Esse modelo desconsiderou as especificidades das mulheres indígenas, negras e de outros grupos subalternizados, o que invisibiliza suas experiências e ignora as interseccionalidades que permeiam suas vidas.

Desse modo, o estudo traz a reflexão dos paradigmas criados pelos próprios movimentos sociais, em específico, dos movimentos feministas, que se constituíram nas sociedades ao longo do tempo.

Em que pese as lutas feministas voltavam-se para a autodeterminação e autonomia dos corpos das mulheres, a insistência na dualidade, os argumentos de uma naturalização entre categorias como



‘homem’ e ‘mulher’, bem como conceituações de heterossexualidade como padrão normativo necessitaram ser repensados ao longo do tempo tendo em vista seu caráter de exclusão das diversidades.

Dessa forma, os movimentos feministas decoloniais surgem como resposta às limitações do feminismo tradicional, ao buscar resgatar a influência das relações de colonialidade, capitalismo e patriarcado na construção das desigualdades sociais.

A teoria da colonialidade de gênero, conforme desenvolvida por María Lugones, continua sendo um referencial fundamental para compreender as múltiplas camadas de opressão que afetam mulheres racializadas. No contexto contemporâneo, essa perspectiva tem sido mobilizada em debates sobre políticas públicas e ações afirmativas que buscam reduzir desigualdades estruturais. A compreensão da interseccionalidade entre raça, gênero, classe e sexualidade permite um olhar mais crítico sobre a persistência de práticas coloniais na marginalização de grupos subalternizados, especialmente na América Latina, onde os efeitos do colonialismo seguem profundamente enraizados nas dinâmicas sociais e institucionais.

No entanto, o feminismo decolonial enfrenta desafios significativos tanto no campo acadêmico quanto nos movimentos sociais. A resistência à sua incorporação nos estudos de gênero e feminismo reflete a hegemonia de um pensamento eurocêntrico que, por vezes, desconsidera as especificidades das mulheres racializadas. Além disso, dentro dos próprios movimentos feministas, ainda há tensionamentos entre perspectivas universalistas e abordagens interseccionais que buscam dismantelar estruturas patriarcais e coloniais de forma mais ampla. O reconhecimento da colonialidade como uma dimensão central da opressão de gênero ainda encontra barreiras, exigindo esforços contínuos para ampliar esse debate e consolidar epistemologias contra-hegemônicas.



A luta das mulheres indígenas e negras na América Latina demonstra que a emancipação não se dá apenas pela inclusão em modelos ocidentais, mas pelo reconhecimento de suas próprias formas de organização e enfrentamento das opressões. O feminismo decolonial propõe não apenas a denúncia das estruturas coloniais e patriarcais, mas também a valorização dos saberes e práticas de resistência que foram historicamente silenciadas. Esse movimento se opõe ao apagamento das experiências das mulheres racializadas e exige que suas vozes sejam colocadas no centro das discussões feministas e acadêmicas.

Nesse contexto, as epistemologias decoloniais surgem como ferramenta essencial para a desconstrução das hierarquias de conhecimento impostas pela modernidade. O deslocamento do eixo epistêmico para o Sul Global possibilita a valorização dos saberes ancestrais e das vivências das mulheres que historicamente foram marginalizadas pelo colonialismo. Isso implica não apenas a aceitação de novas formas de conhecimento, mas também a revisão das narrativas dominantes que sustentam a opressão estrutural.

Além disso, o feminismo decolonial questiona a forma como o capitalismo globalizado continua a explorar as mulheres racializadas, principalmente em países periféricos. O trabalho precário, a informalidade e a desigualdade no acesso a direitos básicos são reflexos da intersecção entre colonialidade, capitalismo e patriarcado. A crítica feminista decolonial, portanto, não se limita a questões de gênero, mas busca compreender como a exploração econômica está diretamente vinculada às dinâmicas raciais e coloniais.

Diante desse cenário, é essencial que o feminismo decolonial avance não apenas como um campo teórico, mas também como um movimento político capaz de influenciar mudanças estruturais. A valorização dos saberes das mulheres indígenas, negras e de outros grupos historicamente marginalizados representa um passo fundamental para construir um



feminismo verdadeiramente plural e alinhado às realidades do Sul Global. A luta pela equidade de gênero deve considerar as especificidades de cada contexto e buscar estratégias que rompam com as lógicas coloniais de exclusão e dominação.

Ao desafiar as narrativas universalistas, o feminismo decolonial propõe uma reconstrução do conhecimento baseada nas experiências de quem sempre esteve à margem da história oficial. Assim, ao ampliar as discussões sobre gênero, raça e colonialidade, é possível vislumbrar alternativas mais inclusivas e transformadoras para a construção de uma sociedade menos desigual. A desconstrução das estruturas coloniais e patriarcais exige um compromisso contínuo com a valorização das vozes subalternizadas e a criação de espaços onde esses saberes possam ser legitimados e incorporados às lutas por justiça social.

Por fim, entende-se que a superação da colonialidade de gênero não pode ser realizada sem uma ruptura profunda com as concepções hegemônicas impostas pela modernidade ocidental. O feminismo decolonial nos convida a questionar não apenas as estruturas de poder, mas também os próprios fundamentos do conhecimento que sustentam essas desigualdades. A luta por um feminismo verdadeiramente inclusivo passa pelo reconhecimento de que a opressão não é homogênea e que as respostas para essas desigualdades devem partir das próprias experiências das mulheres racializadas.

Essa perspectiva implica um deslocamento do centro epistemológico para o Sul Global, permitindo que as narrativas de mulheres indígenas, negras e outras identidades subalternizadas sejam reconhecidas como protagonistas na formulação de alternativas ao modelo hegemônico de opressão. O feminismo decolonial, portanto, não apenas critica as estruturas impostas, mas reivindica novas formas de ser, saber e resistir, construindo um horizonte político onde a justiça de gênero esteja verdadeiramente conectada à justiça racial, epistêmica e econômica.



## REFERÊNCIAS

ARRUZZA, Cinzia. **Ligações Perigosas**: casamentos e divórcios entre marxismo e feminismo. São Paulo: Usina, 2019.

DUSSEL, Enrique. **1492. O encobrimento do Outro** – A origem do mito da modernidade. Tradução: Jaime A. Clasen. Petrópolis, RJ, Vozes: 1993.

CELENTANI, Francesca Gargallo. **Feminismos desde Abya Yala**. Ideias y proposiciones de las mujeres de 607 pueblos en nuestra América. Editorial Corte y Confección, Ciudad de México, 2014. Disponível em: <http://francescagargallo.wordpress.com/>. Acesso em: nov. 2022.

GONZALEZ, Lélia. **Por um feminismo afro-latino-americano**: ensaios, intervenções e diálogos. (org.) Flavia Rios, Márcia Lima. 1ª ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2020.

HOOKS, Bell. **Teoria feminista (Estudos)**. Editora Perspectiva S/A. Edição do Kindle, 2019.

LUGONES, María. **Rumo a um feminismo descolonial**. Estudos Feministas, Florianópolis, v. 22, n. 3, p. 935-952, 2014.

MIÑOSO, Yuderkys Espinosa. **Pensamento feminista hoje**: perspectivas decoloniais. Bazar do Tempo. Edição do Kindle.

OYĚWŪMÍ, Oyèrónkẹ́. **A invenção das mulheres**: construindo um sentido africano para os discursos ocidentais de gênero. tradução Wanderson flor do nascimento. 1. ed. – Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2021.

SEGATO, Rita Laura. **Crítica da colonialidade em oito ensaios**. Bazar do Tempo. Edição do Kindle. 2021.



SEGATO, Rita Laura. **Gênero e colonialidade**: em busca de chaves de leitura e de um vocabulário estratégico descolonial. E-cadernos ces, 2012. Disponível em: <http://eces.revues.org/1533>. Acesso em: jun. 2022.

TIBURI, Márcia. **Complexo de vira-lata**: análise da humilhação brasileira. 2ª ed. Editora Civilização Brasileira: Rio de Janeiro, 2021.

VAREJÃO, Adriana. *et al.* **Pensamento feminista hoje**: perspectivas decoloniais. Bazar do Tempo. 2020. Edição do Kindle.

VERGÈS, Françoise. **Uma teoria feminista da violência**. São Paulo: UBU Editora, 2021. Versão Kindle.

WITTIG, Monique. **O pensamento hétero e outros ensaios**. Autêntica Editora. Edição do Kindle, 2022.



# VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES INDÍGENAS ALDEADAS NO TERRITÓRIO BRASILEIRO: UMA DUPLA INVISIBILIDADE

Jaqueline Medeiros Silva Calafate<sup>1</sup>

Valeska Zanello<sup>2</sup>

## INTRODUÇÃO

Segundo o Atlas da Violência publicado em 2020, o Brasil teve um aumento de 25% nos homicídios de mulheres por arma de fogo dentro das residências, elevando o Brasil da 7ª posição para 5ª posição em feminicídio no mundo. O feminicídio é apenas a ponta visível do “iceberg” das violências de gênero sofridas pelas mulheres brasileiras. Somente em 2018, foi apontado que, em média, 367 mulheres sofreram violência doméstica a cada hora no país. Além disso, o número de estupros subnotificados, tendo o espaço doméstico como principal cenário, também assume um caráter preocupante (Ipea, 2020).

Conforme informações do Ministério da Saúde, solicitadas via e-SIC e acrescentando dados disponibilizados pelo IPEA, a probabilidade de uma situação de violência sexual decorrer em gestação é entre 5% e 7%. A chance aumenta para 15% quando se trata de crianças e adolescentes

<sup>1</sup> Doutora em Psicologia Clínica e Cultura pela Universidade de Brasília e Pós Doutora em Psicologia pela Universidade Federal de Sergipe; A pesquisa relatada foi financiada pela bolsa de doutorado da primeira autora Jaqueline M. S. Calafate (Capes, No. Processo 53001010); A pesquisadora é referencia nacional do programa de saúde mental e povos indígenas por meio da Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. E-mail: jaquelinecalafate@hotmail.com.

<sup>2</sup> Doutora em Psicologia; Pesquisadora na área de Saúde Mental e Gênero; Professora Associada 4 do departamento de Psicologia Clínica da Universidade de Brasília; Orientadora de mestrado e doutorado no Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura (PPG-PSICC); Coordena o grupo de pesquisa “Saúde Mental e Gênero” (foco em mulheres) no CNPq. E-mail: valeskazanello@gmail.com.



entre 10 e 14 anos, em razão da defasagem de educação sexual e reprodutiva, da irregularidade do ciclo menstrual comum nesta faixa etária, da situação de violência sexual crônica – sobretudo intrafamiliar – e da frequência de ameaça e chantagem do ofensor contra a vítima.

Infelizmente, a violência contra um grupo específico de mulheres, as indígenas, não fica para trás neste triste cenário. Elas têm maiores chances de serem estupradas do que outras mulheres: mais de 1 em cada 3 mulheres deste grupo são estupradas ao longo da vida, como aponta relatório da Organização das Nações Unidas (ONU, 2010).

De forma geral, o ato ou conduta violenta praticada contra uma mulher é a tradução real do poder historicamente exercido por homens dentro de sistemas patriarcais – seja de baixa ou de alta intensidade – este último sendo conhecido como o sistema colonial e pós-colonial europeu, marcado pelas relações capitalistas, da divisão sexuada do trabalho e pela hierarquia enrijecida dos gêneros (Segato, 2012).

Práticas tidas como violentas contra mulheres indígenas dentro de suas comunidades vão muito além do âmbito familiar restrito e quase nunca podem ser lidas e compreendidas apenas como atos individuais. Alguns desses povos funcionavam através da divisão de tarefas e as atividades entre homens e mulheres não tinham como base o binarismo (o feminino sendo o outro do masculino), mas uma noção de complementariedade, na qual atividades relacionadas às mulheres eram reconhecidas como tendo valor em si mesmas. Segato (2012) define tais sociedades como possuidoras de um patriarcado de “baixo impacto”.

De acordo com a autora, o contato com o mundo não indígena e, conseqüentemente, com o patriarcado de alto impacto, trouxe rearranjos nessas formas de organização social (de hierarquias de baixo impacto), de modo que, ainda que as mesmas tenham conseguido manter sua linguagem e muitos de seus costumes, viram suas relações entre homens e mulheres reenquadradas sob certos valores e uma hierarquia bem mais



enrijecida no que diz respeito às relações de gênero. Para Segato (2012), uma das razões seria a eleição, pelos “brancos”, de quem seria a “ponte” entre ambas as culturas, assumindo as negociações entre os povos e o recebimento de benefícios tais como postos de trabalho e dinheiro. Nesse caso, sobretudo os homens, e muito raramente, e talvez apenas recentemente, as mulheres indígenas (Paredes, 2008).

Stavenhagen<sup>3</sup> (2007) também aponta historicamente o estabelecimento de violências específicas contra as mulheres indígenas, na sua relação com os colonizadores europeus. Trata-se de uma intersecção de hierarquias: como mulher e como “indígena”. Alguns exemplos são apontados pelo autor, tais como: o ato de ter de entregar um filho ou uma filha para a adoção (a despeito de seu querer), o casamento forçado (no Brasil, era comum caçar mulheres indígenas no laço, para se casarem), a destruição de suas propriedades, a insegurança alimentar, a limitação de seus territórios e a violação de seus corpos (estupro) ao longo do processo colonizatório.

Santos (2017) dividiu as violências vividas pelas mulheres Macuxi, por exemplo, em três tipos: domésticas; “riscos de violência por ser mulher” – que sinalizam os limites do feminino Macuxi, que ocorrem quando se extrapola o padrão feminino tradicional, levando a terem que lidar com ameaças físicas à sua integridade; e por fim, a violência sexual pelos não indígenas, em razão do conflito de terra.

Quanto a esse último item, Segato (2003) sublinha que, após iniciado o contato com a sociedade envolvente, e à medida em que se tornou mais intenso, a mulher indígena sofreu de todos os problemas e desvantagens de ser uma mulher na sociedade brasileira. Além disso, soma-se à cobrança inegociável de lealdade ao povo a que pertence. Ou seja, há sempre a preocupação de que suas demandas e bandeiras não

<sup>3</sup> Relator especial para os Direitos Humanos e as Liberdades Fundamentais dos Povos Indígenas do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas.



sejam maiores do que as do movimento indígena como um todo, como é o caso do direito à terra. Em outras palavras, as violências sofridas por elas acabam permanecendo, em geral, em segundo, terceiro ou quarto plano. Segundo Soares (1994) isso leva essas mulheres a se preocuparem em não criar um movimento paralelo, e a reforçar a luta do seu povo, embora reconheçam que nem sempre suas reivindicações são acolhidas no movimento indígena nacional.

Como pôde ser observado na 1ª Marcha das Mulheres Indígenas ocorrida em 2019 no 15º Acampamento Terra Livre em Brasília – DF, a bandeira levantada pelo movimento tinha como tema central a defesa da “mãe de todas as lutas, o território”, com os dizeres: “Território, nosso corpo, nosso espírito” (Castilho; Guimarães, 2021). A luta contra o patriarcado e a violência para essas mulheres passa, necessariamente, pela garantia de uma vida plena em seus territórios. Nesse sentido, o patriarcado está atrelado ao capital por ameaçar o direito à terra, tensionando com isso corpos e vulnerabilizando ainda mais essas mulheres (Castilho; Guimarães, 2021).

É interessante notar que, se no processo de colonização, homens brancos delegaram sobretudo a homens indígenas o papel de mediadores e representantes de suas respectivas comunidades, estamos assistindo uma reorganização dessa distribuição, e de alcance de projeção e poder político, através de um movimento de emancipação de mulheres indígenas. Esse movimento não é uniforme e nem tem se dado da mesma maneira em todas as 305 etnias presentes no território brasileiro hoje. Em carta produzida pelas mulheres indígenas, reunidas na 1º Conferência Livre de Saúde das Mulheres Indígenas, de 2017, foram elencadas nove questões que, segundo elas, afetam suas vidas, dentre elas, saúde mental e prevenção de violências contra mulher indígena.

Tal contextualização torna evidente duas questões precípuas: a necessidade de se levar em conta a própria definição de violência presente



no grupo étnico e, ao mesmo tempo, os desdobramentos da resignificação desse conceito pelo contato histórico (ocorrido, a depender do grupo, em momentos diferentes), com a cultura envolvente. Isso nos leva a questionar, por exemplo, quais seriam as aplicações, e seus limites, de Leis implementadas no mundo branco em relação ao tema da violência contra as mulheres, como é o caso da Lei Maria da Penha, promulgada em 2006 (Rodrigues, 2019).

Partindo do feminismo decolonial de Segato (2012) e do feminismo comunitário de Guzmán e Paredes (2014), a autora conclui que uma política pública sobre gênero que faça sentido para as mulheres indígenas, deve ser “aquela que contempla as diferenças e as complementaridades dos gêneros, suas posições e seus papéis na sociedade a que pertence” (Rodrigues, 2019, p. 65-66). Suas diretrizes deveriam, segundo ela, buscar devolver a estas mulheres o seu poder e prestígio enfraquecidos no contato com uma sociedade patriarcal de alta intensidade e impactado em modos de operar os gêneros e seus papéis (Segato, 2012).

Quanto à eficácia da Lei Maria da Penha, para Rodrigues, ainda que a sua discussão tenha contribuído para evidenciar e visibilizar o sofrimento e a opressão vivida pelas mulheres em situação de violência e, através disso, levantar importantes discussões e realização de ações, tais como os Seminários sobre a Lei Maria da Penha que contaram com a presença de diferentes representantes de mulheres indígenas, ainda há muito o que se discutir quanto ao seu esclarecimento dentro das comunidades bem como sua viabilidade/aplicabilidade nesse contexto (Rodrigues, 2019).

Verdum (2008) organizou uma importante coletânea de artigos a respeito desse tema no qual foi abordado, sobretudo, o desafio de debater os direitos humanos e suas violações, neste caso as violências contra mulheres indígenas, a partir de uma perspectiva multicultural que reconheça e respeite a autonomia dos povos originários. A autora destaca, tal como



Rodrigues (2019), a necessidade de um maior esclarecimento da Lei Maria da Penha junto às comunidades, sabendo-se que muitas mulheres indígenas possuem o receio de que, com a denúncia, sejam obrigadas a deixar suas casas e territórios, e assim levadas para casas-abrigos. Nesse sentido, Santos (2017) acrescenta a dificuldade de, ao ter de recorrer ao sistema jurídico estatal, essas mulheres precisarem deslocar-se às delegacias localizadas nos municípios fora de suas aldeias. Esse deslocamento implica, muitas vezes, na impunidade do agressor, visto a dificuldade de fazê-lo ou de encontrar apoio institucional que o faça.

Outra preocupação apontada por Kaxuyana e Silva (2008) diz respeito aos agressores: embora as mulheres reconheçam sofrerem com violências, em particular, com aquilo que denominamos de violência doméstica, questionam se os seus companheiros e filhos denunciados seriam presos nas cidades em cadeias com os brancos. Preocupam-se sobre quem irá caçar, pescar e ajudar na roça, ou seja, manter possível a sobrevivência. Nesse sentido, para muitas dessas mulheres a denúncia quase nunca é uma opção para a resolução deste tipo de conflito. Na maioria das comunidades, as lideranças tentam resolver tais situações internamente – porém nem sempre com sucesso. Em outras palavras, não basta existir a Lei: para que haja aplicabilidade em relação a esses povos, é fundamental garantir a existência de diálogos interétnicos, de modo que possam ser criadas políticas específicas que atendam também suas necessidades nessa aplicação.

Em relação à violência contra as mulheres, e especificamente as indígenas, cabe ressaltar e enumerar marcos relevantes referentes à relação do Estado brasileiro com o tema. Primeiro, a implementação do sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA) em 2006, o qual teve o objetivo de analisar a tendência e descrever o perfil das violências e acidentes atendidos em unidades de urgência e emergência (em território nacional). Já em 2009 foi implantada, junto ao VIVA, a ficha



de notificação e investigação de casos individuais de violência doméstica, sexual e/ou outras violências, associada ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Porém, foi somente em 2011 que a notificação se tornou de fato obrigatória a todos os serviços de saúde através da portaria MS n. 104 (Brasil, 2011). Por fim, os anos de 2014 e 2017 tiveram como marco relevante, a publicação da Portaria nº 344 (Brasil, 2017) de 01 de fevereiro, na qual o quesito raça/cor/etnia foi regulamentado nos formulários e sistemas de informação, tornando-se obrigatório aos profissionais atuantes nos serviços de saúde. Ou seja, é recente a portaria que permite, na notificação e na construção dos dados epidemiológicos, a visibilidade da violência contra mulheres indígenas.

De outra parte, especificamente no âmbito da saúde indígena, 2013 foi especialmente importante. De um lado, por se tratar do ano no qual foram realizadas diversas capacitações por meio da SESAI (Secretaria Especial de Saúde Indígena) sobre violência, com os profissionais que trabalham em campo; por outro, pelo lançamento nacional do Documento Técnico, contendo proposta de Material Orientador sobre Atenção e Acolhimento às situações de Violência nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) da SESAI, para todos os Distritos existentes. Neste momento, foi incluída também a ficha complementar de notificação, o SIASI (Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena), a qual passou a exigir do profissional que atua com as comunidades indígenas uma maior descrição dos fatos, informando questões relevantes acerca das práticas culturais daquela etnia, assim como percepções da comunidade acerca deste fenômeno. Ou seja, paralelamente ao SINAN, foi criado um sistema específico para as violências que ocorressem nas aldeias.

Em casos de violência em geral, e especificamente violência contra a mulher indígena aldeada, qualquer profissional de saúde (médico, enfermeiro, psicólogo etc.) é orientado e deve preencher tanto as fichas de notificação do SINAN, como a ficha complementar do SIASI. Então



deve encaminhá-las ao Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) do qual faz parte, a fim de que as informações sejam inseridas no SIASI e, por outro lado, sejam enviadas ao Sistema de Saúde Municipal, para que então sejam inseridas no sistema nacional do SINAN. Ou seja, o fluxo é longo e complexo, e muitos problemas podem ocorrer nesse traslado de informação: primeiro, a não notificação por parte dos profissionais, que acabam reportando apenas os casos mais graves; segundo, as grandes distâncias entre aldeias e Polo Base/DSEI e a ausência de internet nas aldeias, ou seja, as informações quando circulam, demoram a chegar e demandam grande esforço para que isso aconteça; terceiro, pela demanda de trabalho, as notificações ficam estancadas nos DSEIs, muitas sem nem mesmo serem inseridas no SIASI, menos ainda reportadas ao SINAN.

Um outro obstáculo importante, é que em denúncias de casos de violências ocorridos dentro das aldeias, estas sempre serão reportadas à Polícia Federal, uma vez que as terras indígenas são de propriedade da União, segundo o que dispõe o art. 20, inciso XI da Constituição Federal de 1988. A Polícia Federal é o órgão subordinado ao Ministério da Justiça, portanto, à União (Monteiro; Beltrão, 2006). Essa situação institucional, em muitos casos, acaba por desmotivar os indígenas a acessarem as delegacias e os poderes judiciários e penais. Há também muita confusão de papéis das instituições que deveriam ser retaguarda aos indígenas nesses casos. As Delegacias de Defesa da Mulher, por exemplo, possuem dificuldade de se verem como integrantes dessa rede de proteção, sendo necessário acionar, por vezes, a FUNAI, a fim de garantir o diálogo junto à rede, e permitir o acesso dessas mulheres às mesmas.

Levando em consideração o modo como têm sido produzidos os dados epidemiológicos sobre violência contra mulheres, e especificamente as indígenas aldeadas, em nosso país, bem como a necessidade de visibilização e reflexão sobre os mesmos, o presente artigo teve como



objetivo analisar as informações do SINAN e do SIASI no que diz respeito às notificações de violência contra essas mulheres.

## 1 MÉTODO

Foi realizado um levantamento dos dados de violência contra mulheres indígenas disponíveis nos sistemas Viva/SINAN e SIASI. A análise foi dividida em duas fases: 1. Análise das notificações de violências contra os povos indígenas (especificamente contra as mulheres indígenas) no SINAN e comparação com a população total; e 2. Discussão dos dados do SIASI e relação com o SINAN.

Para a obtenção dos dados do SINAN foi necessário realizar a solicitação dos mesmos por meio do Sistema Eletrônico de Informações ao Cidadão (e-SIC), o qual foi desenvolvido pela Controladoria-Geral da União (CGU) e permite aos cidadãos fazerem pedidos de informações públicas. Os dados do SINAN solicitados inicialmente referiam-se ao período de 2006 a 2023, no entanto, foi informado que os registros começaram a ser publicados somente em 2007.

A fim de qualificar a informação, para além da análise das notificações por violências contra indígenas no período 2006 a 2017, já realizada e publicada pela área técnica da SESAI a esse respeito (Brasil, 2019a), os dados foram discriminados por tempo da ocorrência; local onde ocorreu a violência; perfil do agressor e da vítima (faixa etária, se indígena ou não-indígena, escolaridade, sexo, idade, ocupação e etc.) e características do agravo (suspeita de uso de álcool ou outras drogas, tipo de violência, recorrência e relação com o agressor).





devidamente esse dado (BRASIL, 2019b). Ou seja, possivelmente casos de violência contra a mulher indígena foram retratados nos dados das mulheres em geral, invisibilizando sua especificidade. Embora o percentual de “ignorados” tenha sido reduzido de 20,8% para 9,7% entre 2011 e 2018, a aplicabilidade desta variável ainda é limitada. A variável raça/cor do agressor não está disponível no Viva/SINAN.

Fazendo uma retrospectiva do registro de casos de violência contra mulher indígena no SINAN desde 2006, observa-se que os três primeiros registros ocorrem somente em 2007, com 636 nos próximos 3 anos e saltando para 634 apenas no ano de 2011. Esse aumento de registros em 2011 se deve à publicação da Portaria MS/GM nº 104 que tornou a notificação de violência interpessoal/compulsória, fazendo com que os números se tornem significativos e apareçam discriminados pela categoria raça/cor.

Além disso, é possível notar uma maior intensificação de registros no contexto da saúde indígena, a partir de 2013, possivelmente decorrente da criação do documento orientador sobre violência no contexto indígena produzido pela SESAI neste mesmo ano, bem como a criação da ficha complementar de notificação de violência que demandou esforços no fortalecimento das notificações nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), além da mudanças de definição de caso e inclusão da “unidade de saúde indígena” como unidade notificadora ocorrida em 2014.

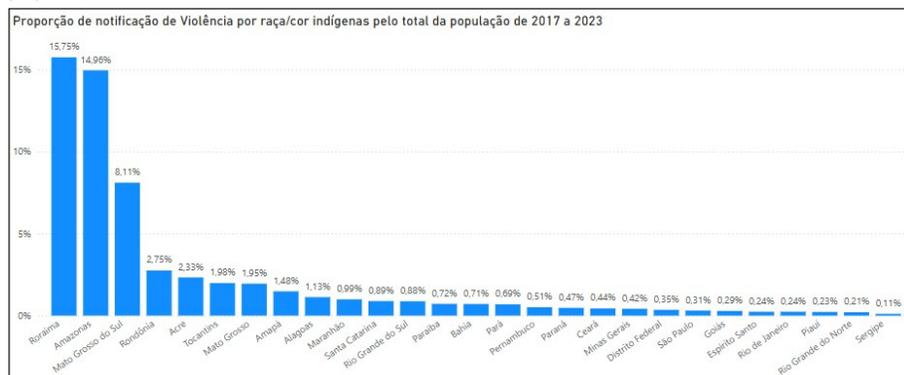
Um avanço importante na notificação específica da violência contra indígenas, foi a publicação da Portaria nº 344 que dispõe sobre o preenchimento do quesito raça/cor na “Ficha de notificação/investigação de violência doméstica, sexual e/ou outras violências”, em 2017. Pode-se ver um dos impactos, já em 2018, e apesar dos dados incompletos, dessa inclusão. Além disso, houve também a adição da “unidade de



saúde indígena” como unidade notificadora, o que tem ampliado substancialmente a identificação de violências contra indígenas.<sup>5</sup>

A incidência da violência notificada contra as mulheres brasileiras, em geral, ficou percentualmente acima quando comparada com aquelas sofridas pelas mulheres indígenas. Porém, faz-se mister lembrar, que até 2017 muitos casos eram notificados como violência contra mulher no geral, sendo observado, portanto, a necessidade de um investimento maior em ações de orientação acerca da importância de preencher o quesito raça/cor.

Gráfico 2 – Proporção de notificação de Violência por raça/cor indígenas pelo total da população de 2017 a 2023.



Fonte: Viva/Sinan/MS, 2023.

Mais de 1/3 dos prováveis agressores das mulheres indígenas eram parceiros íntimos (cônjuge, ex-cônjuge, namorado e ex-namorado). No entanto, não é possível afirmar que se trata de agressores indígenas, uma vez que a ficha de notificação só inclui o quesito raça/cor para a

<sup>5</sup> Alguns dos Polo Base Indígena foram transformados em unidades notificadoras, ou seja, poderiam eles próprios inserir os dados da notificação de violências no sistema SINAN. Porém, em muitos deles ou inexistia a internet ou ela não funcionava direito, especialmente na região amazônica, de modo que ainda seria necessário enviar os dados para a secretaria de saúde municipal, a fim de que essa inserção no sistema SINAN fosse efetivada. Importante destacar que a inserção dos dados no SIASI continuou a ser realizada pelo DSEI.



vítima de violência. Sendo a maior parte dos casos de violência contra mulher indígena ocorridos em contexto rural, os seus agressores podem ser indígenas ou não-indígenas vivendo em contexto de comunitário e/ou de aldeamento.

A maioria dos casos de violência contra indígenas notificados foram registrados em áreas rurais. A quantidade relevante de casos de mulheres registrados na “zona urbana”, indica uma migração ou fluxo desse gênero para as cidades próximas às suas comunidades e o risco e vulnerabilidade advindos disso. De acordo com Nascimento e Vieira (2015) é possível observar o aumento dessa migração desde o censo do IBGE de 2000, com uma maior incidência de indígenas do sexo feminino (200.122) em detrimento do sexo masculino (183.177). Porém, o Censo de 2022 apontou um crescimento populacional indígena no Brasil significativo, sobretudo em seus territórios. Segundo Nascimento e Vieira (2015), a redução da população indígena nas cidades estaria ocorrendo devido aos processos de negação das identidades indígenas, à perda de vínculos com seus parentes e territórios, somado ao preconceito vivenciado por esses grupos em especial às mulheres.

Gráfico 3 – Dados Gerais de Violência contra indígenas aldeados - SIASI



Fonte: SESAI/MS.



Gráfico 4 – Ocorrências de Violência ao longo dos anos (2015-2023)



Fonte: Viva/Sinan/MS, 2023.

No que tange ao local de ocorrência de violência, percebeu-se pouca diferença na comparação entre indígenas e população geral, sendo na maioria dos casos a residência. O local da ocorrência corrobora com o que diz Segato (2012), ao tratar dos efeitos do contato com a cultura do branco, que interferiu diretamente na separação entre público e privado, reconfigurando a forma como são vividas e interpretadas pelos grupos atos de violência, como é o caso, por exemplo, da violência doméstica. A violência em via pública, bar ou similar, comércio ou serviço, lugares de práticas esportivas, aconteceu majoritariamente contra homens, não diferentemente do que ocorre com a população não-indígena.

Já em relação ao tipo de violência praticada contra pessoas indígenas, as mulheres foram, em sua maioria, vítimas em violência sexual, seguido de violência psicológica/moral. O tipo de violência mais notificada é a física. No caso dos homens, a violência física perfaz a sua



grande maioria dos casos, porém cometida por terceiros, da sociedade envolvente, e não pelas mulheres indígenas, sobretudo pelos conflitos pela posse de terra (CIMI, 2018).

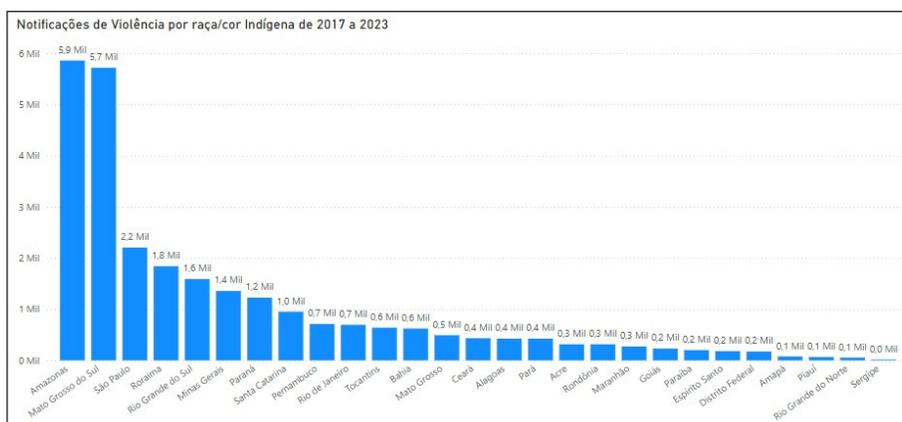
É preciso levar em consideração que há registros indevidos de violência sexual (estupros) devido a gestações em menores de 14 anos, nos quais considerou-se apenas o que diz o art. 217-A do Código Penal, não tendo sido observada a cultura daquele povo. Os povos indígenas possuem diferentes visões de mundo com relação aos ciclos de vida, matrimônio e início da maternidade, temas já amplamente debatidos nos estudos etnográficos a esse respeito (Rodrigues, 2019; Santos, 2017). Embora a ficha complementar tenha sido criada com esse objetivo, essa perspectiva não tem sido levada em conta nas notificações. Essa informação deve ser vista, portanto, com cautela, para não criminalizar as comunidades indígenas e promover situações que as vulnerabilize ainda mais, criando mais preconceito e, por fim, dificultando o acesso aos serviços de saúde.

Como apontado, é preciso ter cautela e ser minuciosa a análise desses dados. Por um lado, é importante destacar o aumento de violência sexual pelo contato com a cultura branca, e cometido, sobretudo, por homens da sociedade envolvente. Os Guarani Mbya, por exemplo, que vivem em guerra constante por território, Mapa de Conflitos (Fiocruz, 2014), atingiram, neste sentido, 6,1% de casos de violência sexual registrados, conforme dados do SINAN. Já os Uru-eu-wau-wau (Jupaú), que foram contatados pela Funai há menos de 40 anos, registraram 33,3% de casos, se comparado com a média nacional no mesmo período (2007 a 2017), que é de 3,1%. Por outro lado, é preciso levar em consideração os costumes de cada etnia. Por exemplo, entre os Krahô, o índice “detectado” de violência sexual foi muito elevado, de 12,1%, porém, para esse povo, é comum que as mulheres se casem logo após a menarca (SIASI, 2021).



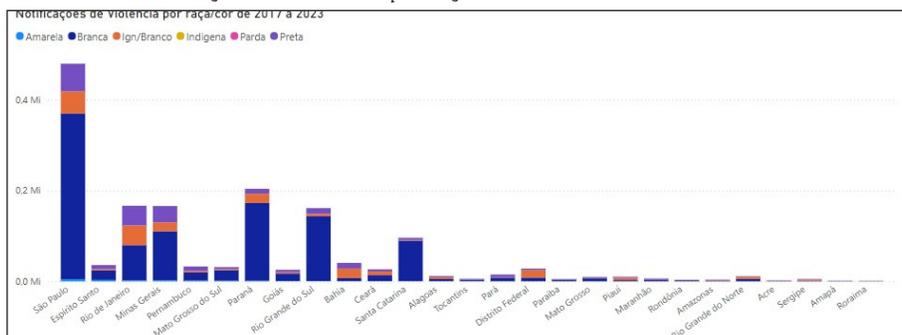
Entre os estados que mais notificaram casos de violências contra mulheres indígenas no período entre 2017 e 2023 estão Amazonas, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Roraima, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Pernambuco:

Gráfico 5 – Notificações de Violência por raça/cor Indígena de 2017 a 2023



Fonte: SESAI/SIASI/MS.

Gráfico 6 – Notificações de Violência por raça/cor de 2017 a 2023



Fonte: SESAI/SIASI/MS.

A força corporal/espancamento e ameaça foi o principal meio de agressão contra mulheres indígenas. Já contra homens indígenas,



os meios mais comuns de agressão foram objetos perfurocortantes e armas de fogo. O uso abusivo de álcool também apareceu como uma das principais causas relacionadas aos casos de violência contra as mulheres nas aldeias.

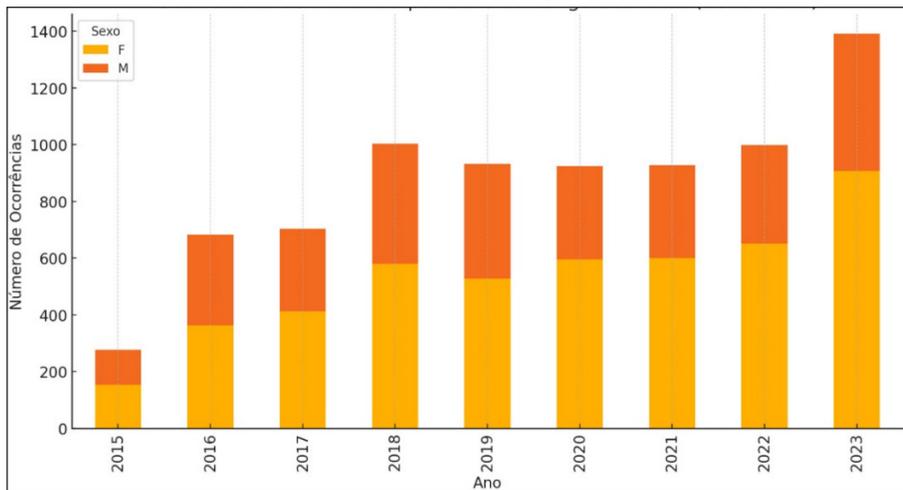
Sobre os dados do SIASI, ou seja, dos indígenas em aldeamento, observa-se um aumento de notificações a partir de 2015. Enquanto o SINAN registrava no mesmo ano 2.212 casos de violência com populações indígenas, o SIASI registrou apenas 453 casos em aldeias. Os dados totais mostram um pico em 2016, com 391 casos de mulheres em situação de violência para 336 homens.

Em relação às violências sexuais parece haver uma clara subnotificação dos casos registrados dentro das aldeias. Em 2017, foram somente 22 casos registrados, considerando o ano de maior notificação (2012 e 2013, zero casos; 2015, 5 casos; 2015, 4 casos; 2016, 6 casos) em todas as etnias em território brasileiro. É importante notar que esses dados destoam de levantamento previamente realizado com 34 profissionais ou ex-profissionais RT da psicologia, responsáveis por receber as notificações nos DSEIs (e que estavam atuando no período entre 2007 a 2018). Segundo grande parte desses profissionais (93,8% dos entrevistados), a violência contra mulheres era um dos principais problemas encontrados nas aldeias (Calafate; Zanello, 2024) e apenas 28,1% deles nunca se depararam com algum relato de estupro ocorrido no território (21,9% se depararam com 6 a 20 casos de estupros, e 9,4% com mais de 20 estupros). Abaixo, segue o gráfico, que retrata os dados obtidos do SIASI.

No período de 2015 a 2023 observou-se variações no número de registros, podendo indicar períodos de maior ou menor incidência de violência nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI). Eventuais picos podem estar associados a mudanças em políticas de notificação, aumento da violência ou maior acesso aos serviços de saúde.



Gráfico 7 – Ocorrências de Violência por Sexo ao longo dos anos (2015-2023)



Fonte: SESAI/SIASI/MS.

O gráfico acima ilustra a distribuição das ocorrências de violência entre homens (M) e mulheres (F) ao longo dos anos (2015-2023). Podemos observar se há diferenças significativas na incidência de violência entre os sexos e se existem tendências crescentes ou decrescentes ao longo do tempo.

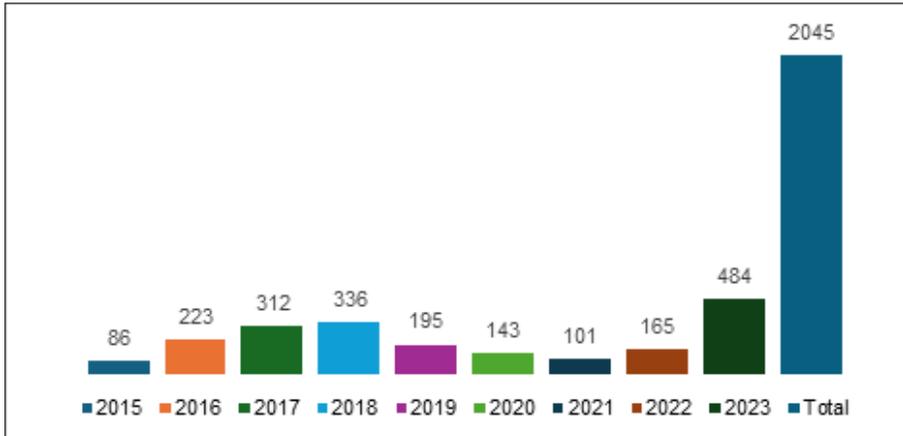
O gráfico revelou ainda, que há diferenças entre os sexos no número de ocorrências registradas. Dependendo do padrão observado, pode-se inferir se homens ou mulheres são mais afetados por determinadas formas de violência. Caso haja um maior número de registros para mulheres, isso pode estar relacionado à violência de gênero, incluindo violência doméstica e outras formas de agressão direcionadas.

Ainda segundo o SIASI, foram registrados em 2012, 128 casos de agressões físicas contra mulheres indígenas aldeadas; porém nenhuma notificação foi registrada nos anos de 2013 e 2014. Conforme observado



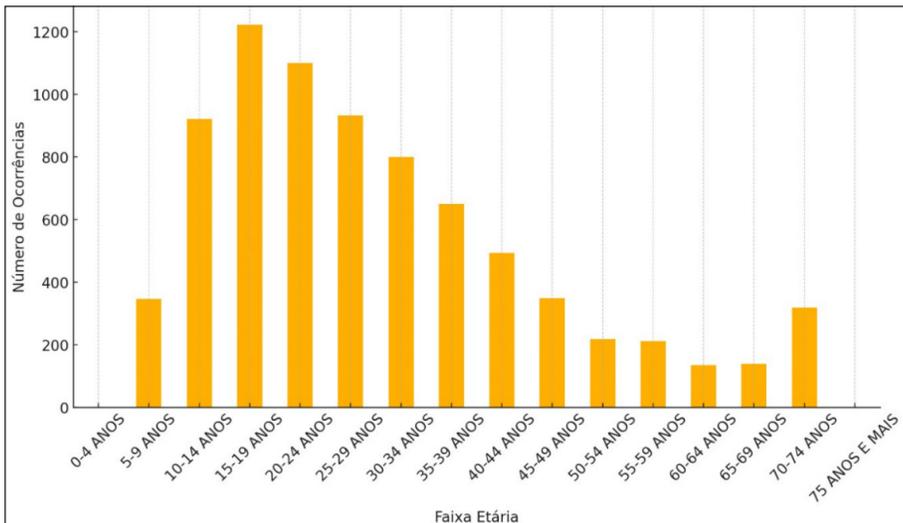
no gráfico abaixo há um aumento de registros entre 2017 e 2018 e um retorno de notificações em 2023.

Gráfico 8 – Números absolutos de casos notificados no SIASI



Fonte: SESAI/SIASI/MS.

Gráfico 9 – Distribuição das Ocorrências de Violência por Faixa Etária (2015-2013)



Fonte: SESAI/SIASI/MS.



O gráfico acima mostra a distribuição das ocorrências de violência por faixa etária ao longo dos anos (2015-2023), é possível identificar padrões com maior incidência entre jovens, adultos ou idosos. Em relação à incidência das violências contra população indígena nas diferentes faixas etárias, de acordo com o sexo, temos que é mais comum entre as mulheres, que ela ocorra dos 10 aos 19 anos, como pode ser constatado.

Se houver uma concentração em jovens e adultos, pode indicar que esses grupos são mais expostos a contextos de risco, como conflitos interpessoais ou violência comunitária. A presença significativa de registros em idosos ou crianças pode sugerir questões como violência doméstica, negligência ou outras formas de abuso.

Comparando os dados do SINAN com os do SIASI, pode-se perceber uma zona cinzenta, na qual se torna impossível saber se há ou não repetição de dados (do SIASI) ou invisibilização das mulheres indígenas aldeadas no SINAN. Desse modo, o SINAN apontou que os casos de violência contra mulher indígena no período analisado ocorreram em zona rural. Sob a rubrica de “rural”, presente no SINAN, fica difícil saber se se trata de mulheres indígenas aldeadas (cujos dados devem estar no SIASI também), ribeirinhos ou mesmo de povoados anexos aos municípios. Da mesma forma, segundo dados de pesquisa realizada anteriormente, há uma dissonância entre a percepção dos RTs, responsáveis por receber as notificações das aldeias sobre a presença e a relevância dos casos de violência contra mulheres indígenas e os números encontrados no SIASI (Calafate; Zanello, 2024). Como exemplo, podemos citar as violências sexuais, que se somadas (de acordo com o número apontado pelos profissionais como aqueles referentes aos casos com os quais já se depararam no território), daria um número muitas vezes superior aos notificados em todo o período<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> As ações a serem desenvolvidas pela saúde devem abordar a identificação e vigilância dos casos; a definição de fluxos de encaminhamento para a rede de proteção às vítimas de violência; e a capacidade de acolhimento e identificação dos casos por parte das EMSI.



## CONSIDERAÇÕES FINAIS

As mulheres indígenas compõem uma parte significativa da população culturalmente diferenciada, a qual demanda da saúde pública a gestão de políticas que sejam adequadas às suas especificidades, realidades e contextos. Os dados apresentados aqui são somente a “ponta da lança” de todo o cenário de violência vivida por esses grupos de mulheres, no entanto a sistematização dessas informações, bem como seu registro contribuem de forma ímpar para a visibilidade dessa realidade. Sem os sistemas de registro SINAN e o SIASI, a única fonte de informações disponíveis a esse respeito, seriam os relatórios de violências contra os povos indígenas do Brasil publicados anualmente desde 1996 pelo Conselho Indigenista Missionário (CIMI).

É notório que a violência tem crescido dentro das comunidades indígenas no território brasileiro, e nem sempre é cometida por quem vem de fora dela (CIMI, 2018; IPEA, 2020). Os dados disponíveis mostraram que a maior parte das violências cometidas contra as mulheres são físicas (e, destas, 20,5% são sexuais), com boa parte delas ocorrendo dentro de suas residências, sendo o agressor, em sua maioria, homem e parceiro íntimo, tendo o álcool como fator agravante. Embora não se possa afirmar se tratar de indígenas (pois este fator não é apontado na notificação, no SINAN), os dados sinalizam que, em sua maioria, são parceiros íntimos de dentro de suas comunidades (Calafate; Zanello, 2024).

Alguns apontamentos sobre as especificidades dessas notificações são necessários. Primeiro, há casos em que o que se notifica não representa devidamente o ocorrido, como é o caso de “violência sexual” notificada em situações de gestantes menores de 14 anos, cujo casamento está prescrito nos costumes de certas etnias, demonstrando falta de diálogo



interétnico. Por outro lado, há problemas nos dois maiores sistemas de notificação da violência contra as mulheres indígenas, bem como uma grave e profunda desconexão entre eles: o SINAN (que serve também a toda a população brasileira) e o SIASI (criado especificamente para as populações indígenas aldeadas).

No caso do SINAN, o problema da invisibilidade da violência específica contra mulheres indígenas passou a ser melhor contornado com a criação e obrigatoriedade de preenchimento do quesito “cor/raça”, em 2017. Isso impactou visivelmente a notificação desses casos. Restam ainda englobar alguns dados fundamentais que possibilitem dar melhor contorno ao problema da violência contra mulher indígena, como por exemplo, a raça/cor do agressor. Seria também importante, especificamente nesses casos, o preenchimento da etnia à qual a mulher pertence, bem como do agressor, caso ele seja indígena.

Em relação ao SIASI os problemas são ainda mais graves. Primeiro, as longas distâncias e o isolamento de grande parte de aldeias, bem como a inexistência de internet disponível para os profissionais de saúde, o que torna necessário que a notificação seja encaminhada fisicamente para o polo-base indígena e, posteriormente, para a SESAI. Essa comunicação por terra ou barco é esporádica e custosa, leva tempo, o que pode fazer com que as notificações simplesmente não sejam feitas, ou apenas sejam notificados os casos considerados mais graves. Segundo, cabe ao polo-base encaminhar a notificação tanto para o sistema de saúde do município, para que seja inserida no SINAN, quanto para a SESAI, para que seja inserida no SIASI. As demandas dos polos-base são muitas e algumas de grande gravidade (tal como epidemias de suicídio, alcoolismo, conflitos de terra, violências, controles endêmicos, alcance de indicadores de saúde, entrada e retirada dos profissionais dentro das áreas indígenas, logística de insumos e medicamentos, entre outras), o que leva muitas vezes a notificação a ficar arquivada, ou ser encaminhada apenas para a SESAI,



ou seja, não ser devidamente inserida no SINAN. Terceiro, somente na SESAI é que a notificação será inserida no SIASI, o que pode levar muito tempo. Assim, ao passar por vários setores, a notificação, quando feita, pode não chegar ao devido lugar e nem ser adequadamente inserida no sistema de notificação. A subnotificação dos casos de violência contra mulheres indígenas aldeadas é, assim, uma presença e ameaça constante.

Por fim, a não conexão adequada de SINAN e SIASI invisibilizam e deixam muito pouco claro o quadro de violência real contra as mulheres indígenas brasileiras, sobretudo, as que vivem em aldeamento. Há uma zona cinzenta na qual se torna impossível saber quais são os casos que foram notificados tanto no SIASI quanto no SINAN, ou se há casos de violência contra mulher indígena aldeada notificados apenas no SINAN ou apenas no SIASI. Portanto, a invisibilidade apontada aqui é dupla, por se tratar de dois registros – SINAN e SIASI – que evidenciaram, por razões diferentes, uma carência de informações a esse respeito. Isso leva a uma ausência de atenção a esses casos pois o que não é informado epidemiologicamente, supostamente não existe e, portanto, faz-se escasso o investimento em ações de enfrentamento, intervenção e/ou capacitações.

## REFERÊNCIAS

BRASIL. Análise das notificações por violências contra indígenas no período 2006 a 2017. In: **Saúde indígena**: análise da situação de saúde no SasiSUS/Ministério da Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, p. 79-85, 2019a.

BRASIL. **Atenção psicossocial aos povos indígenas**: tecendo redes para promoção do bem viver. Ministério da Saúde, Secretaria Especial de Saúde Indígena, Departamento de Atenção à Saúde Indígena. Brasília: Ministério da Saúde, 2019b.



BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Especial de Saúde Indígena. **Relatório de indicadores de saúde indígena**: dados do SIASI 2021. Brasília: Ministério da Saúde, 2021.

BRASIL. Portaria n. 104, de 25 de Janeiro de 2011. Define as terminologias adotadas em legislação nacional, conforme o disposto no Regulamento Sanitário Internacional 2005 (RSI 2005), a relação de doenças, agravos e eventos em saúde pública de notificação compulsória em todo o território nacional e estabelece fluxo, critérios, responsabilidades e atribuições aos profissionais e serviços de saúde. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. 37, 25 jan. 2011. Disponível em: [https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt0104\\_25\\_01\\_2011.html](https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt0104_25_01_2011.html).

BRASIL. Portaria n. 344, de 01 de Fevereiro de 2017. Dispõe sobre o preenchimento do quesito raça/cor nos formulários dos sistemas de informação em saúde. **Diário Oficial da União**, seção 1, Brasília, DF, p. 1, nº 24 e fev. 2017. Disponível em: <https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=62&data=02/02/2017>.

CALAFATE, Jaqueline; ZANELLO, Valeska. **Psicologia na Saúde Indígena**: Atuação em casos de violência contra mulheres indígenas brasileiras. *Revista Políticas Públicas e Cidades*, v.13, n.2, p. 1-19, 2024.

CASTILHO, Mariana Wiecko Volkmer de; GUIMARÃES, Sílvia. **Corpo político e crítica decolonial**: a 1ª Marcha das Mulheres Indígenas. *Per-Cursos*, Florianópolis, v. 22, n. 48, p. 319 – 353, 2021.

CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO. CIMI. **Relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil**. 2018. Disponível em: <https://cimi.org.br/wp-content/uploads/2019/09/relatorio-violencia-contra-os-povos-indigenas-brasil-2018.pdf>. Acesso em: 05 nov. 2021.



FIOCRUZ. **Mapa de Conflitos Envolvendo Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil**. 2014. Disponível em: <http://mapadeconflitos.ensp.fiocruz.br/conflito/es-povos-tupinikim-e-guarani-depois-de-expostos-a-verdadeiro-genocidio-expulsos-e-humilhados-ainda-lutam-contra-a-burocracia-para-ter-seus-direitos-garantidos/>. Acesso em: 03 out. 2021.

GUZMAN, Adriana; PAREDES, Julieta. **El tejido de la rebeldia**: ¿Que es el feminismo comunitario? Comunidad mujeres creando comunidad. *La Paz*, Bolivia, 2014.

KAXUYANA, Valéria Paye Pereira; SILVA, Suzy Evelyn de Souza e. A Lei Maria da Penha e as mulheres indígenas. *In*: VERDUM, Ricardo. (org). **Mulheres Indígenas, Direitos e Políticas Públicas**. Brasília: INESC, 2008.

MONTEIRO, Alisson Gomes; BELTRÃO, Jane Felipe. **Povos indígenas e segurança policial**: os Tembé do Alto Rio Guamá (PA). 2006. Disponível em: [http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/manaus/estado\\_dir\\_povos\\_alisson\\_g\\_monteiro\\_e\\_jane\\_beltrao.pdf](http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/manaus/estado_dir_povos_alisson_g_monteiro_e_jane_beltrao.pdf). Acesso em: 25 out. 2021.

NASCIMENTO, Adir Casaro; VIEIRA, Carlos Magno Naglis. **O índio e o espaço urbano**: breves considerações sobre o contexto indígena na cidade. *Cordis. História: Cidade, Esporte e Lazer*, São Paulo, n. 14, p. 118-136, jan./jun. 2015.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. **Relatório de Desenvolvimento Humano 2010**: A verdadeira riqueza das nações – Caminhos para o desenvolvimento humano sustentável, 2010. Disponível em: <https://idis.org.br/wp-content/uploads/2014/0>.

PAREDES, Julieta. *Hilando Fino*. **Desde el feminismo comunitario**. *La Paz*: CEDEC, 2008.



RODRIGUES, Léia do Vale. **Mulheres indígenas, gênero e diversidade cultural**: A institucionalização da temática de gênero na FUNAI, a partir da Perspectiva Auto etnográfica. Brasília. 95 f, 2019.

SANTOS, Iranilde Barbosa dos. **Violência contra mulheres indígenas Macuxi**: de experiências narradas a soluções coletivo. 129 f. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social). Manaus: Universidade Federal do Amazonas, 2017.

SEGATO, Rita Laura. **Uma agenda de ação afirmativa para as mulheres indígenas no Brasil**. Série Antropologia, n. 326. Brasília: Departamento de Antropologia. Universidade de Brasília, 2003.

SEGATO, Rita Laura. **Gênero e colonialidade**: em busca de chaves de leitura e de um vocabulário estratégico descolonial. *e-cadernos ces* [Online], 18, 2012.

SOARES, Vera. **Movimento feminista**: Paradigmas e Desafios. Estudos Feministas, Ano 2, 1994.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. IPEA. **Atlas da Violência**. Brasília: Ministério da Economia, 2020.

STAVENHAGEN, Rodolfo. **Addendum**: general considerations on the situation of human rights and fundamental freedoms of indigenous peoples in Asia. UN Human Rights Council. Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights and Fundamental Freedoms of Indigenous People. A/HRC/6/15/Add.3, 2007.

VERDUM, Ricardo (org.). **Mulheres indígenas, direitos e políticas públicas**. Brasília: INESC, p. 87, 2008.



# MACHISMO ESTRUTURAL NO SISTEMA JUDICIÁRIO BRASILEIRO: PENSÕES ALIMENTÍCIAS COMO REFLEXO DA DESIGUALDADE DE GÊNERO E A DESCONSIDERAÇÃO DAS NECESSIDADES REAIS DOS FILHOS

Luisa Medeiros Caldeira<sup>1</sup>

## INTRODUÇÃO

O sistema judiciário brasileiro, embora se apresente como imparcial, reflete as desigualdades estruturais da sociedade, especialmente nas decisões sobre pensões alimentícias, abandono gestacional e negligência paterna. Há uma tendência reiterada de minimizar a responsabilidade do genitor e transferir integralmente a carga financeira e emocional para a mãe, perpetuando um ciclo de desigualdade e vulnerabilização da maternidade solo. Esse comportamento institucional não ocorre por acaso, mas é fruto de um machismo estrutural enraizado na cultura jurídica, que relativiza as necessidades das crianças, desconsidera a importância da assistência pré-natal paterna e favorece economicamente os homens em litígios de família.

Apesar de o Brasil possuir um arcabouço legislativo avançado, que inclui a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) para combater violências patrimonial e psicológica, a Lei de Alimentos Gravídicos, Lei nº 11.804 (Brasil, 2008), para garantir suporte à gestante e a criminalização do abandono material de incapazes (art. 244 do Código Penal), a prática

<sup>1</sup> Graduada em Direito pela Faculdade de Direito de Vitória; Voluntária do Instituto Últimos Refúgios há 5 anos; Vice-Presidente e Coordenadora Jurídica do Instituto Ecomares, organização sem fins lucrativos de grande relevância, dedicada à defesa dos direitos ambientais, quilombolas e populações primárias. E-mail: luisamedcaldeira@gmail.com.



judicial frequentemente ignora esses dispositivos ou os aplica de maneira ineficaz, criando um abismo entre a norma e a realidade social.

Na teoria, a legislação brasileira prevê medidas protetivas robustas para mulheres e gestantes em situação de vulnerabilidade, reconhecendo o direito da criança a um suporte material e emocional compatível com o padrão de vida dos pais. Contudo, na prática, o Ministério Público e o Judiciário atuam de forma ineficaz, especialmente quando há viés machista e homofóbico na interpretação da aplicação da lei. O mero questionamento da paternidade pelo genitor frequentemente leva o Judiciário a postergar medidas protetivas, enfraquecendo inclusive regras objetivas como a presunção de veracidade da mulher casada e criando obstáculos artificiais ao acesso a direitos fundamentais. Essa postura não apenas contraria o princípio da proteção integral da criança e do nascituro (art. 227 da Constituição Federal), mas também escancara o preconceito estrutural contra mães solo, principalmente aquelas que fogem do modelo heteronormativo tradicional, como as mulheres assumidamente bissexuais.

A filósofa Hannah Arendt alerta, em suas reflexões sobre burocracia e totalitarismo, que a manutenção cega de estruturas injustas e a falta de reflexão crítica sobre os paradigmas vigentes perpetuam a violência sistêmica e institucional. Segundo Arendt, “o maior mal não é cometido por indivíduos fanáticos ou violentos, mas por burocratas que seguem ordens sem questionar a moralidade de suas ações” (Arendt, 1963). Essa análise se encaixa perfeitamente na postura do Judiciário brasileiro e do Ministério Público em casos de abandono gestacional e negligência paterna. Ao se limitarem a uma aplicação engessada e formalista da lei, utilizando a morosidade judicial como mecanismo e ferramenta do patriarcado, sem considerar seu propósito social e constitucional, os operadores do direito reforçam padrões machistas e omissivos, permitindo que a estrutura patriarcal siga se reproduzindo impunemente.



Arendt também aponta que as sociedades que não rompem com paradigmas injustos acabam institucionalizando a injustiça, tornando-a parte da cultura jurídica e política do país. Esse fenômeno pode ser observado no Brasil e em diversos países da América Latina, onde a simples negativa da paternidade pelo genitor tem sido suficiente para enfraquecer a aplicabilidade da legislação protetiva, contrariando o espírito das normas e consolidando a presunção de veracidade da palavra masculina em detrimento da mulher.

A frouxidão na aplicabilidade das normas protetivas no Brasil já representa uma violação de direitos fundamentais, mas a situação torna-se ainda mais alarmante quando analisamos o cenário latino-americano. Muitos países da região não possuem sequer legislações semelhantes à Lei Maria da Penha ou à Lei de Alimentos Gravídicos, tornando a defesa dos direitos das gestantes e das mães solo ainda mais morosa e complexa. A experiência brasileira, ainda que problemática na sua aplicação prática, poderia servir como modelo para países vizinhos que carecem de proteções jurídicas mínimas. Contudo, se a própria estrutura jurídica brasileira segue falhando na implementação de suas próprias normas, a possibilidade de um avanço regional se torna ainda mais remota.

Dessa forma, o debate sobre a necessidade de romper com paradigmas patriarcais e homofóbicos dentro do sistema jurídico se torna ainda mais essencial. O direito da mulher à maternidade digna e à proteção contra violências patrimoniais e psicológicas não pode depender da discricionariedade subjetiva de juízes e promotores, mas sim ser tratado como um princípio absoluto, com aplicação uniforme e garantida por mecanismos eficazes de fiscalização e responsabilização.

O Brasil possui um dos conjuntos normativos mais progressistas do mundo em relação à proteção da mulher e da infância, mas sua aplicação fragmentada e condicionada a subjetividades judiciais enfraquece o potencial dessas normas. O caso analisado neste capítulo exemplifica essa



contradição, pois para não configurar abandono alimentar, se estabeleceu uma pensão alimentícia extremamente desproporcional e protetista ao genitor que recusou a paternidade, baseado em um critério que o genitor não atendia: trabalhador brasileiro médio.

Apesar da existência da Lei de Alimentos Gravídicos, a negativa do genitor em reconhecer a paternidade foi suficiente para retardar qualquer medida efetiva de proteção à gestante, forçando-a a enfrentar toda a gestação sem suporte financeiro ou emocional. Da mesma forma, o Ministério Público, ao atuar com viés machista e homofóbico, falhou na sua função de fiscal da lei, ao invés de garantir a proteção integral da criança e da mãe, protegeu o genitor e praticou escancarado preconceito e atuou de forma omissa e manifestamente contrária as provas dos autos, anulando a palavra da vítima e emponderando a negativa de paternidade e omissões escancaradas de renda e responsabilidade do genitor.

Arendt alerta que a burocratização da injustiça se torna ainda mais perigosa quando o Estado cria leis que não são efetivamente aplicadas, pois gera uma falsa sensação de proteção legal, mascarando a realidade opressiva vivida pelos grupos vulneráveis. Esse é precisamente o cenário do direito de família no Brasil: um arcabouço normativo avançado, mas uma execução falha e permeada por preconceitos estruturais.

Dessa forma, o presente capítulo se propõe a analisar como o sistema jurídico, ao aplicar suas normas de maneira ineficaz e enviesada, contribui para a perpetuação da violência contra a mulher e para a fragilização dos direitos da criança. Por meio de uma abordagem teórica e de um estudo de caso real, será demonstrado como a negligência estrutural do Judiciário e do Ministério Público compromete a efetividade da legislação existente, tornando urgente a implementação de mudanças estruturais no direito de família brasileiro e latino-americano.



## 1 A FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL DA PENSÃO ALIMENTÍCIA

O direito à pensão alimentícia encontra respaldo na Constituição Federal de 1988, que, em seu artigo 227, estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária (Brasil, 1988).

Já o Código Civil, nos artigos 1.694 a 1.710, dispõe que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (Brasil, 2002). O artigo 1.694, §1º, estabelece que “os alimentos devem ser fixados de maneira a garantir a subsistência do alimentando, levando em consideração a capacidade econômica do alimentante e as reais necessidades daquele que os recebe”.

Além disso, o Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), em seu artigo 528, determina que, caso o devedor de alimentos não cumpra com a obrigação alimentar estabelecida judicialmente, o credor poderá requerer a execução da dívida com a possibilidade de prisão civil (Brasil, 2015). Esse mecanismo visa assegurar a efetividade do direito à pensão alimentícia, garantindo a proteção integral da criança e do adolescente.

Entretanto, a aplicação prática dessas normas muitas vezes revela um viés de gênero, com decisões que: a) Desconsideram o real padrão de vida do genitor, fixando pensões mínimas mesmo quando há provas de altos rendimentos; b) Negligenciam os custos reais de criação de uma criança, impondo um ônus desproporcional às mães solo; c) Favorecem economicamente os homens, permitindo acordos financeiros injustos e omissões deliberadas; d) Estipulam a pensão alimentícia baseada em



percentual do salário mínimo, no caso de país autônomos ou empresários estrangeiros sem renda no Brasil.

Essa situação demonstra como a interpretação enviesada do Judiciário pode enfraquecer a efetividade das normas protetivas, resultando na perpetuação da desigualdade de gênero.

## 1.1 A VALIDADE DA PROVA DOCUMENTAL NA COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE

A prova documental desempenha um papel fundamental na aferição da real capacidade financeira do alimentante, especialmente quando há indícios de ocultação de renda ou tentativa de minimizar artificialmente seus rendimentos para reduzir o valor da pensão alimentícia. O Código de Processo Civil, em seu artigo 369, dispõe que “as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa”. Assim, documentos como extratos bancários, declarações de renda, contratos de trabalho, negociações contratuais milionárias e registros de patrimônio são elementos probatórios válidos e imprescindíveis para a fixação de uma pensão alimentícia condizente com o padrão de vida do genitor.

A jurisprudência brasileira tem reconhecido a necessidade de análise de provas indiretas quando há suspeita de ocultação patrimonial. O entendimento dos tribunais superiores é de que, em ações de alimentos, a capacidade econômica do alimentante deve ser aferida não apenas por seus rendimentos declarados formalmente, mas também pelo seu estilo de vida e seus bens aparentes. Segundo Rolf Madaleno (2022), “a presunção de veracidade das informações prestadas pelo alimentante não pode



prevalecer quando existem provas materiais que indicam uma realidade econômica discrepante daquela alegada nos autos”. Assim, prints de declarações de renda em redes sociais, movimentações financeiras incompatíveis com os valores informados no processo e registros de bens de luxo são amplamente aceitos pelos tribunais para fins de fixação ou revisão da pensão alimentícia.

A omissão dessas provas por parte do Judiciário pode resultar na fixação de valores incompatíveis com o real padrão de vida do alimentante, violando o artigo 1.694 do Código Civil, que determina que a pensão alimentícia deve ser fixada conforme as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. De acordo com Cristiano Chaves de Farias (2021), “a justiça alimentar exige que o princípio da proporcionalidade seja aplicado de forma rigorosa, sob pena de perpetuar desigualdades e descumprir a finalidade da obrigação alimentar”. A falta de análise adequada da prova documental contribui para a perpetuação da vulnerabilidade do alimentando, contrariando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança.

Outro aspecto crítico na fixação de pensões alimentícias envolve a prática recorrente de estipular valores baseados em um percentual do salário mínimo quando o alimentante é autônomo ou empresário estrangeiro sem renda formal declarada no Brasil. Tal manobra jurídica encontra respaldo na interpretação restritiva do artigo 1.703 do Código Civil, que dispõe que “se o alimentante não possuir bens ou rendimentos suficientes, poderá ser compelido a prover alimentos de acordo com suas possibilidades”. Essa interpretação limitada ignora os dispositivos constitucionais e legais que garantem que a pensão deve refletir o padrão de vida do alimentante, independentemente da ausência de vínculos empregatícios formais no Brasil. Como ressalta Maria Berenice Dias (2020), “a vinculação da pensão ao salário-mínimo em casos de ocultação



de renda não apenas desconsidera a realidade econômica do genitor, mas também compromete o direito da criança à subsistência digna”. Assim, ao optar por essa fixação arbitrária, o Judiciário acaba desconsiderando os demais meios de prova e violando a finalidade da obrigação alimentar.

## 1.2 OMISSÃO DOLOSA DE RENDA, INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E NEGLIGÊNCIA MINISTERIAL NA FIXAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA

A ocultação dolosa de renda por parte do alimentante configura não apenas fraude processual, mas também lesão direta ao direito fundamental da criança a uma subsistência digna, conforme previsto no artigo 227 da Constituição Federal. O Código de Processo Civil, em seu artigo 373, §1º, prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova quando a parte requerente se encontrar em situação de desvantagem probatória, sendo esta uma medida essencial nos casos de alimentos em que o alimentante omite dolosamente sua real capacidade financeira. Segundo Maria Berenice Dias (2020), “a inversão do ônus da prova na ação de alimentos deve ser aplicada sempre que houver indícios de ocultação patrimonial, cabendo ao alimentante demonstrar sua alegada insuficiência financeira”. Dessa forma, a inércia judicial na aplicação desse dispositivo favorece a impunidade e compromete o princípio do melhor interesse da criança.

Além da inversão do ônus da prova, a ocultação de renda por meio de manobras patrimoniais pode ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, conforme previsto no artigo 50 do Código Civil, que autoriza a extensão da responsabilidade patrimonial a bens e rendimentos ocultados por meio de pessoas jurídicas. No âmbito processual, o artigo 133 do Código de Processo Civil introduziu o incidente de desconsideração da



personalidade jurídica, permitindo que bens e receitas empresariais sejam atingidos para a efetivação da obrigação alimentar. Arnaldo Rizzardo (2021) pontua que “a desconsideração da personalidade jurídica no âmbito do direito de família tem sido amplamente admitida para coibir fraudes patrimoniais e garantir a eficácia da prestação alimentar”. A ausência dessa medida nos casos em que há fortes indícios de ocultação patrimonial configura falha grave do Poder Judiciário e do Ministério Público.

A jurisprudência também tem consolidado o entendimento de que a ocultação de renda justifica a quebra de sigilo bancário e fiscal do alimentante. O artigo 1º, §4º, da Lei Complementar nº 105 (Brasil, 2001) permite a quebra de sigilo bancário para fins de investigação de ilícitos civis, enquanto o artigo 198, §1º, do Código Tributário Nacional (Brasil, 1966) permite o compartilhamento de dados fiscais para a devida apuração da capacidade contributiva do alimentante. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (2022) reforçam que “a decretação da quebra de sigilo bancário em ações de alimentos deve ser deferida sempre que houver indícios de ocultação dolosa de renda, uma vez que o direito à informação, nesses casos, se sobrepõe ao sigilo bancário do devedor de alimentos”. A inércia judicial e ministerial na aplicação dessas medidas compromete o direito da criança à pensão compatível com o padrão de vida do genitor, gerando uma inaceitável desigualdade de tratamento entre alimentante e alimentando.

Portanto, a omissão dolosa de renda no processo judicial de alimentos não pode ser admitida sem uma resposta firme do Judiciário e do Ministério Público. A inversão do ônus da prova, a desconsideração da personalidade jurídica e a quebra de sigilo bancário e fiscal são medidas indispensáveis para garantir a efetividade da obrigação alimentar e impedir que o genitor se utilize de manobras fraudulentas para reduzir artificialmente o valor da pensão.



### 1.3 O ABANDONO GESTACIONAL E A LACUNA NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

A legislação brasileira não tipifica o abandono gestacional como crime, criando uma lacuna legal que isenta os pais de qualquer responsabilidade financeira antes do nascimento (Brasil, 2008). A Lei de Alimentos Gravídicos (Lei nº 11.804/2008) prevê que o genitor deve prover assistência financeira à gestante durante a gravidez, mas a aplicação dessa norma é limitada pela necessidade de comprovação prévia da paternidade, o que gera entraves burocráticos e contribui para a vulnerabilização da mulher grávida.

A ausência de criminalização do abandono gestacional contraria os princípios da proteção integral da criança e do nascituro, previstos na Constituição Federal e em tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário.

### 1.4 O DIREITO INTERNACIONAL E A PROTEÇÃO À CRIANÇA E À MULHER GESTANTE

No âmbito internacional, o Brasil é signatário de diversos tratados e convenções que estabelecem a obrigação do Estado de garantir proteção especial às crianças e às mulheres gestantes.

A Convenção sobre os Direitos da Criança (1989), ratificada pelo Brasil, determina que “todas as crianças têm direito a um padrão de vida adequado ao seu desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral e social” (ONU, 1989). O artigo 27 desse tratado reforça que os pais são os principais responsáveis por garantir esse padrão de vida, cabendo ao Estado auxiliar na sua concretização por meio de legislações eficazes.



Além disso, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW, 1979), também ratificada pelo Brasil, estabelece em seu artigo 16 que os Estados devem “assegurar igualdade de direitos e responsabilidades entre homens e mulheres no que se refere à criação e educação dos filhos” (ONU, 1989).

Entretanto, a frouxidão na aplicabilidade dessas normas e a falta de responsabilização eficaz do genitor durante a gestação demonstram o descompasso entre a legislação internacional e sua implementação no Brasil.

## 1.5 A NECESSIDADE DE REFORMA LEGISLATIVA PARA GARANTIR A PROTEÇÃO EFETIVA

A aplicação da pensão alimentícia no Brasil enfrenta desafios estruturais que afetam diretamente a mulher gestante e a criança, especialmente nos casos em que a concessão dos alimentos gravídicos é postergada até a realização do exame de DNA, em flagrante violação ao princípio do melhor interesse da criança, previsto no artigo 227 da Constituição Federal. Esse princípio confere proteção prioritária à infância e à maternidade, garantindo que todas as decisões judiciais e administrativas considerem, acima de tudo, o bem-estar do nascituro e da gestante. No entanto, a prática judicial tem distorcido essa norma fundamental, privilegiando a palavra do suposto genitor e criando entraves burocráticos que inviabilizam o suporte financeiro essencial durante a gestação.

A Lei nº 11.804 (Brasil, 2008), que regula os alimentos gravídicos, dispõe expressamente que, havendo indícios de paternidade, o juiz deve fixar alimentos que perdurarão até o nascimento da criança. O artigo 6º da referida lei é categórico ao estabelecer que a obrigação alimentar deve ser imposta com base em provas mínimas que apontem o vínculo biológico presumido, sendo



desnecessária a comprovação absoluta da paternidade para a concessão da pensão. Apesar dessa diretriz legal, o que se observa no âmbito do Judiciário é a adoção de um formalismo exacerbado, que condiciona a fixação dos alimentos gravídicos à comprovação inequívoca da paternidade por meio de exame de DNA, contrariando a própria lógica da norma.

Além disso, a jurisprudência pátria tem adotado entendimento contraditório sobre a questão. Embora existam decisões que reconhecem a necessidade de fixação imediata da pensão gravídica com base em indícios de paternidade, há julgados que relativizam essa obrigação, condicionando-a a uma futura confirmação do vínculo biológico. Tal postura gera insegurança jurídica e fragiliza a efetividade da norma, permitindo que genitores se eximam de suas responsabilidades até que haja um reconhecimento formal da paternidade, o que pode levar meses ou anos, deixando a gestante em situação de extrema vulnerabilidade.

## 1.6 O FORMALISMO JUDICIAL E A DESCONSIDERAÇÃO DO PADRÃO DE VIDA DO GENITOR

Outro problema recorrente na aplicação dos alimentos gravídicos no Brasil é a fixação da pensão em valores irrisórios, muitas vezes baseados no salário-mínimo, sem qualquer consideração pelo padrão de vida real do genitor. Essa prática viola frontalmente o artigo 1.694 do Código Civil, que determina que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos do alimentante. Ocorre que, na maioria dos casos, o juiz fixa valores arbitrários e desproporcionais à realidade financeira do requerido, sobretudo quando este é autônomo, empresário ou possui rendimentos no exterior.

Essa distorção decorre, em grande parte, da falta de fiscalização e transparência na comprovação da capacidade econômica do genitor,



que muitas vezes oculta sua renda ou declara ganhos abaixo da realidade para reduzir suas obrigações alimentares. O Código de Processo Civil, em seu artigo 373, inciso II, estabelece que o ônus da prova acerca da sua condição financeira cabe ao genitor, mas essa regra frequentemente é subvertida nos tribunais, impondo à gestante o ônus de provar que o requerido possui patrimônio e rendimentos suficientes para custear os alimentos gravídicos.

No entanto, autores como Rolf Madaleno (2021) defendem que a ocultação dolosa de rendimentos e patrimônio pelo alimentante deve ser combatida com a inversão do ônus da prova, bem como com a adoção de medidas rigorosas, como a quebra do sigilo bancário e fiscal. Segundo Madaleno, “a fraude alimentar é uma das formas mais perversas de abuso de direito, pois compromete diretamente a dignidade e o desenvolvimento da criança, que tem o direito inalienável de ser sustentada conforme os recursos disponíveis do pai e da mãe”.

Além disso, a Súmula 358 do STJ (Brasil, 2012) determina que, nos casos em que houver indícios de omissão dolosa da renda do alimentante, é possível determinar a quebra do sigilo bancário e fiscal para apuração da real capacidade financeira do genitor. Essa medida é essencial para evitar que pais negligentes utilizem artifícios jurídicos para burlar suas obrigações, prejudicando não apenas a gestante, mas também a criança, que terá seu direito de sustento gravemente comprometido.

Diante dessas falhas estruturais na aplicação dos alimentos gravídicos, torna-se essencial reformar a legislação brasileira e fortalecer a fiscalização das decisões judiciais, assegurando uma proteção mais eficaz à mulher gestante e ao nascituro. Algumas medidas urgentes incluem: a) Criminalização do abandono gestacional: A ausência de suporte à gestante durante a gravidez deve ser tipificada como crime, estabelecendo sanções para os pais que se recusam a prestar assistência necessária. Essa medida reforçaria a responsabilidade paterna desde a concepção e desestimularia



condutas de evasão patrimonial por parte do genitor; b) Presunção legal de paternidade para fixação de alimentos gravídicos: A adoção de uma presunção legal de paternidade, baseada em indícios suficientes, permitiria a fixação imediata de alimentos gravídicos proporcionais à renda do suposto pai, alinhando-se ao princípio do melhor interesse da criança e ao artigo 227 da Constituição Federal; c) Ampliação dos mecanismos de fiscalização: O Poder Judiciário deve adotar ferramentas mais eficazes para apuração da real capacidade financeira do alimentante, incluindo a obrigatoriedade de apresentação de extratos bancários, declaração de Imposto de Renda e movimentações financeiras antes da fixação do valor da pensão; d) Criação de um banco de dados nacional para controle de pensões alimentícias: Uma base de dados nacional com informações financeiras dos genitores poderia minimizar fraudes e garantir maior controle sobre o cumprimento das obrigações alimentares, prevenindo a prática de ocultação de bens e rendimentos.

A implementação dessas reformas fortaleceria a proteção jurídica da gestante e do nascituro, combatendo a perpetuação de desigualdades de gênero no direito de família e garantindo que a pensão alimentícia seja fixada de forma justa, proporcional e célere, em conformidade com os princípios constitucionais e normativos aplicáveis.

## **2 IMPACTOS PSICOLÓGICOS DO ABANDONO GESTACIONAL E DA NEGLIGÊNCIA PATERNA**

A ausência do genitor durante a gestação e nos primeiros anos de vida da criança tem consequências psicológicas severas para a mãe e o bebê, impactando o desenvolvimento emocional e a estabilidade da relação materno-infantil. O suporte emocional e financeiro durante a



gestação não é um mero detalhe, mas um fator determinante para o bem-estar da gestante e do futuro recém-nascido.

Segundo Maria Tereza Maldonado, em sua obra *Psicologia da Gravidez, Parto e Puerpério*, “a gestação é um período de intensa reorganização psíquica, no qual a mulher precisa lidar com mudanças hormonais, emocionais e sociais. Quando há suporte afetivo e estabilidade, a adaptação ocorre de maneira mais equilibrada. Contudo, quando a mulher se sente abandonada ou negligenciada, o impacto emocional pode ser profundo, desencadeando estados depressivos e ansiosos que podem comprometer sua relação com o bebê” (Maldonado, 2018).

A perspectiva de Maldonado se alinha diretamente ao caso analisado neste estudo, em que a genitora foi abandonada na fase inicial da gestação, sem qualquer apoio emocional ou material por parte do genitor, que não apenas negou sua responsabilidade, mas utilizou de manobras jurídicas para evitar o reconhecimento imediato da paternidade e retardar a prestação de assistência financeira.

A negligência paterna não afeta apenas a gestante, mas repercute diretamente na saúde mental e no desenvolvimento da criança. Maldonado aponta que “o bebê é altamente sensível às condições emocionais da mãe durante a gravidez. O estresse materno crônico, causado pelo abandono ou pela falta de segurança emocional e financeira, pode afetar os padrões de apego, aumentando os riscos de dificuldades emocionais e comportamentais na infância” (Maldonado, 2018).

Nesse sentido, a ausência do pai antes e após o nascimento não é apenas um problema financeiro, mas uma forma de violência psicológica, que perpetua ciclos de insegurança e sofrimento emocional para mãe e filho. O caso analisado ilustra como o sistema judiciário falhou ao não reconhecer essa dimensão do abandono parental, tratando a questão apenas sob um viés econômico, sem considerar os danos psicológicos irreversíveis para ambos.



Além disso, a postergação do reconhecimento da paternidade e a imposição do exame de DNA como condição para a fixação de uma pensão digna intensificaram o sofrimento da genitora, forçando-a a vivenciar dois anos de incerteza e instabilidade, mesmo diante de provas objetivas da relação do genitor com a criança. Como destaca Maldonado, “o período pós-parto e os primeiros anos de vida da criança exigem uma rede de apoio sólido para garantir a segurança emocional materna e a construção de um vínculo saudável entre mãe e bebê” (Maldonado, 2018).

Ao ignorar essa realidade, o Judiciário e o Ministério Público negligenciaram princípios fundamentais do melhor interesse da criança, tratando a questão de maneira reducionista, como se o abandono gestacional fosse apenas um impasse burocrático e não um problema de saúde mental e desenvolvimento infantil.

A análise deste caso real, à luz dos estudos de Maldonado, demonstra como o abandono gestacional deve ser reconhecido como um fator de risco grave para o bem-estar materno e infantil, e não apenas como um conflito financeiro. O Judiciário, ao falhar em garantir assistência precoce à gestante e ao bebê, reforça ciclos de vulnerabilidade e omissão institucional, que perpetuam a desigualdade de gênero e a negligência estrutural em relação às crianças nascidas fora de um contexto de família tradicional.

### **3 ESTUDO DE CASO: O MACHISMO ESTRUTURAL NO JUDICIÁRIO E A NEGAÇÃO DO DIREITO DA CRIANÇA**

O caso analisado neste capítulo refere-se à experiência vivida pela própria autora, que, mesmo possuindo conhecimento jurídico e tendo contratado assessoria especializada, não conseguiu se proteger dos efeitos



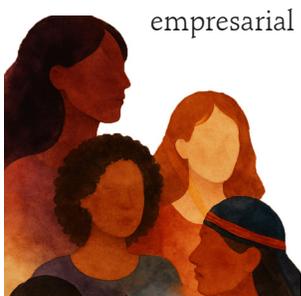
do machismo e da homofobia estrutural enraizados no Sistema Judiciário Brasileiro.

À época, a autora, uma mulher de 30 anos, profissional do direito, engravidou e teve sua filha dentro do regime de casamento. No entanto, foi abandonada pelo cônjuge quando estava com apenas dois meses de gestação, sob alegações infundadas de traição que jamais existiram, e que não existia nenhum fato ou prova ou suspeita sem ser a palavra do genitor que quis se furtar da responsabilidade financeira paterna.

O genitor, detentor de cidadania americana e elevado padrão de vida tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, não prestou qualquer assistência à gestante durante o período gravídico. Apesar da legislação brasileira garantir o direito à assistência material à gestante, o ordenamento jurídico falhou em garantir a efetividade dessa proteção, expondo a autora a um cenário de vulnerabilidade financeira e emocional, passando por gravidez complexa e sendo internada diversas vezes em determinado período da gravidez, o que impedia seu labor e realização das atividades que realizava antes da gestação, causando grave impacto financeiro a sua qualidade de vida, sem qualquer assistência material e ainda sendo vítima de violência psicológica e dano a sua imagem e honra social.

O processo judicial evidenciou graves falhas estruturais e a atuação de um machismo institucional. O genitor se evadiu para os EUA, ocultando sua renda no Brasil por meio de fraudes empresariais, alienação fraudulenta de bens e transferência da titularidade de suas empresas para familiares.

Além disso, empregou manobras jurídicas e empresariais para evitar a comprovação de seus rendimentos, ocultando sua renda principal nos EUA. A genitora apresentou contratos sociais, contratos particulares e comerciais da empresa brasileira, os quais comprovavam a atividade empresarial do requerido, bem como negociações milionárias e provas



documentais que demonstravam seu elevado padrão de vida tanto no Brasil quanto nos EUA.

Entretanto, o Judiciário ignorou tais elementos e fixou a pensão em apenas 20% do salário-mínimo brasileiro, sob a justificativa de ausência de vínculo empregatício formal CLT do Requerido no Brasil por consulta aos sistemas da Previdência Social. Essa decisão desconsiderou a realidade econômica do genitor e a jurisprudência consolidada que orienta a fixação da pensão alimentícia com base não apenas na renda declarada, mas no padrão de vida do alimentante, e toda a característica específica do caso e dos envolvidos.

Em audiência, a vítima, que sofreu exposição vexatória e teve sua imagem pessoal e profissional prejudicada devido às acusações de traição e à omissão da paternidade pelo genitor, foi submetida a violência psicológica e patrimonial, inclusive registrou boletim da lei Maria da Penha, dias antes do genitor sair do País.

A atuação do Judiciário intensificou o sofrimento da vítima, ao presumir a veracidade das alegações do genitor, sem exigir prova mínima da exclusão da presunção legal de paternidade. As medidas legais previstas em lei não foram adotadas, e somente após o nascimento da criança foi realizada a audiência, sem que houvesse majoração da pensão, sob a justificativa de que se aguardaria a realização do exame de DNA.

O genitor ainda tentou violar o direito à identidade da criança, requerendo judicialmente o cancelamento do registro de nascimento, em flagrante afronta ao ordenamento jurídico brasileiro, que presume a paternidade da criança nascida na constância do matrimônio.

A gestante, que à época encontrava-se em período de lactação, foi vítima de violência patrimonial novamente, psicológica e do machismo estrutural, visto que o Judiciário acolheu as alegações do genitor de não majorar os alimentos na conversão para pensão alimentícia até a realização do exame de DNA, ainda que inexistisse qualquer prova que



afastasse a presunção legal de paternidade e diante de clara irregularidade na estipulação dos alimentos.

Neste ponto, destaca-se que o exame de DNA logrou resultado positivo, e não ocorreu a majoração por meses, e apenas foi majorado, novamente, considerando apenas a palavra do genitor e com base em suposta renda não comprovada, mínima no Brasil, ignorando sua renda principal e labor nos EUA, e a transferência das pessoas jurídicas durante o curso do processo.

A morosidade do processo judicial impediu que houvesse qualquer suporte financeiro durante toda a gestação, obrigando a genitora a arcar sozinha com todas as despesas médicas, psicológicas e estruturais decorrentes da gravidez, e permaneceu após o nascimento com vida e a realização do exame de DNA.

O representante do Ministério Público, em claro ato que escancara machismo, opinou ainda pelo depósito dos 20% do salário-mínimo de verba alimentar em conta judicial até o resultado do exame, sem que a genitora tivesse acesso, o que viola toda base constitucional e sistema legal brasileiro.

Apenas quase dois anos após o nascimento da criança, foi proferida nova decisão judicial, determinando uma majoração irrisória da pensão para 70% do salário-mínimo brasileiro, desconsiderando todas as provas nos autos que atestavam a renda superior do genitor, bem como o reconhecimento expresso do próprio requerido de que sua principal fonte de renda estava nos Estados Unidos.

Além disso, a fixação da majoração foi abusivamente estipulada com base exclusivamente nos rendimentos declarados pelo requerido no Brasil, e não comprovados, ignorando-se os documentos e demais provas produzidas pela genitora, e a própria declaração do genitor que confessa e assume a existência de patrimônio e rendimentos substanciais no exterior.



Outro aspecto alarmante foi a atuação do Ministério Público, que ignorou o princípio do melhor interesse da criança e opinou favoravelmente ao genitor, mesmo diante de provas incontestáveis de sua capacidade financeira.

O promotor, desconsiderando a presunção legal de paternidade, condicionou a majoração da pensão à realização do exame de DNA, em frontal violação aos direitos da criança e da mãe. Essa conduta corroborou um viés discriminatório e revitimizador contra a genitora, reforçando a estrutura patriarcal e LGBTfóbica do sistema judiciário, por se tratar de pessoa assumidamente bissexual.

Diante da morosidade processual, da conduta discriminatória e da revitimização imposta pelo sistema judiciário, a genitora foi forçada a desistir da busca por justiça, dado que o desgaste emocional e financeiro se tornou insustentável, e simplesmente comunicou ao judiciário que iria fazer o acordo de pensão de um salário-mínimo que estava sendo coagida pelo genitor que sempre afirmou que não lograria êxito e confiava na atuação do Promotor do caso.

O caso retrata como o sistema jurídico brasileiro falha na aplicação de suas próprias normas, consolidando desigualdades de gênero e aprofundando a vulnerabilidade das mães solo.

O impacto dessa experiência levou a autora a aceitar o convite para escrever este capítulo, como forma de expor e denunciar publicamente as falhas estruturais do sistema judiciário brasileiro.

Além disso, este estudo pretende contribuir para a evolução do direito de família no país e fomentar debates na América Latina sobre a necessidade de reformas estruturais que garantam a efetividade da legislação de proteção à mulher e à criança.



## CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo de caso apresentado demonstra que a morosidade do sistema judiciário, aliada ao machismo estrutural e à ineficiência da aplicação da lei, compromete os direitos das crianças e das mães solo.

O abandono parental e a negligência institucional por parte do Judiciário e do Ministério Público não são exceções, mas sim reflexos de um sistema que ainda privilegia os interesses masculinos e desconsidera as necessidades reais da infância e da maternidade solo. A falta de responsabilização efetiva dos genitores perpetua desigualdades financeiras, psicológicas e sociais, empurrando as mulheres para a vulnerabilidade e permitindo que os pais evitem suas obrigações legais com impunidade.

Aceitar escrever este capítulo foi uma forma de alcançar um senso de justiça, ainda que fora do âmbito judicial, ao expor publicamente a realidade do sistema brasileiro. Além de denunciar as falhas e as violências institucionais sofridas, esta análise busca contribuir para a evolução do direito de família e fomentar debates essenciais em toda a América Latina.

É fundamental destacar que não basta a existência de legislações amplas e progressistas, como as do Brasil. Se essas leis não forem aplicadas de forma efetiva, a proteção das mulheres e crianças continuará sendo apenas uma ilusão legal.

Para que mudanças concretas ocorram, é indispensável que haja treinamento obrigatório e contínuo para juízes, promotores e órgãos fiscalizadores. O combate ao machismo estrutural, à LGBTfobia e à permissividade em relação às violências patrimoniais e psicológicas deve ser tratado como uma prioridade dentro do sistema jurídico.

Recomenda-se que cursos e capacitações sejam tornados obrigatórios para todos os aplicadores da lei e órgãos fiscalizadores



na América Latina, garantindo que a interpretação da legislação seja feita de forma técnica e isenta de vieses discriminatórios. Isso é ainda mais crucial para casos que envolvem gestantes vítimas de violência psicológica ou abandono parental, pois a gravidez é um período de extrema vulnerabilidade, independentemente da condição social ou profissional da mulher.

Este estudo reforça a importância da exposição pública dessas falhas para pressionar por mudanças reais, tanto no Brasil quanto nos países vizinhos. A denúncia, o debate e a conscientização são ferramentas essenciais para garantir que o direito de família cumpra seu papel protetivo, sem discriminação e com verdadeira equidade de gênero.

## REFERÊNCIAS

ARENDDT, Hannah. **Eichmann em Jerusalém**: um estudo sobre a banalidade do mal. Rio de Janeiro: Editora Record, 1963.

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, n. 191-A, p. 1, 5 out. 1988. Legislação Informatizada – Constituição de 1988 – Publicação Original. Disponível em: [w2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1988/constituicao-1988-5-outubro-1988-322142-publicacaooriginal-1-pl.html](http://w2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1988/constituicao-1988-5-outubro-1988-322142-publicacaooriginal-1-pl.html).

BRASIL. Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 11 jan. 2002.

BRASIL. Lei n.º 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 17 mar. 2015.



BRASIL. Lei nº 11.804, de 5 de novembro de 2008. Dispõe sobre os alimentos gravídicos e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 6 nov. 2008.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. STJ. **Súmula 358**. Resolução do Superior Tribunal de Justiça, a. 6, (31): 331-396, outubro 2012. Disponível em: [www.stj.jus.br/docs\\_internet/revista/electronica/stj-revista-sumulaa-2012\\_31\\_capSumula358.pdf](http://www.stj.jus.br/docs_internet/revista/electronica/stj-revista-sumulaa-2012_31_capSumula358.pdf)www.stj.jus.br. Acesso em: 16 mar. 2025.

BRASIL. Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001. Dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 11 jan. 2001.

BRASIL. Código Tributário Nacional. Lei n.º 5.172, de 25 de outubro de 1966. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 27 out. 1966.

DIAS, Maria Berenice. **Manual de Direito das Famílias**. 12. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CNJ. Recomendação Geral nº 35 sobre violência de gênero contra as mulheres do Comitê para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher (**CEDAW, 1979**). Brasília: CNJ, 2019.

FARIAS, Cristiano Chaves de. **Direito de Família Contemporâneo**. 7. ed. Salvador: Juspodivm, 2021.

MADALENO, Rolf. **Direito de Família e o Novo Código de Processo Civil**. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022.

MADALENO, Rolf. **Curso de Direito de Família**. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2021.

MALDONADO, Maria Tereza. **Psicologia da Gravidez, Parto e Puerpério**. 17. ed. Petrópolis: Vozes, 2018.



NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. **Código de Processo Civil Comentado**. 17. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2022.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. ONU. **Convenção sobre os Direitos da Criança**. 20 de novembro de 1989.

RIZZARDO, Arnaldo. **Direito de Família**: Aspectos Cíveis e Processuais. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021.



# O COMPLIANCE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL COMO FERRAMENTA DE INCREMENTO À PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ASSÉDIO SEXUAL CONTRA MULHERES

Mariana de Siqueira<sup>1</sup>

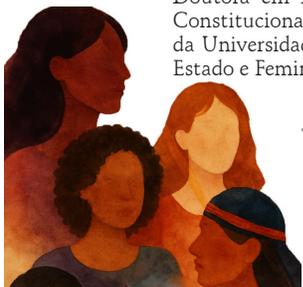
## INTRODUÇÃO

O assédio sexual no ambiente institucional, durante décadas, foi assunto pouco debatido e até mesmo invisibilizado. Não era comum haver a institucionalização de práticas buscando explicitamente enfrentá-lo e preveni-lo, tampouco era usual que se normatizasse a respeito do tema em perspectiva administrativa. Se aprofundamos a análise dessa omissão histórica e se a especificamos adotando recorte de gênero com atenção aos direitos humanos das mulheres, a gravidade do silenciamento mencionado é ainda mais acentuada.

A despeito do silenciamento histórico do tema, nos últimos anos, mais precisamente a partir de 2022, uma mudança de perspectiva pôde ser percebida no Direito brasileiro. A partir dela, houve a publicação sequencial de algumas normativas que se voltam a enfrentar e prevenir o assédio sexual no âmbito da Administração Pública.

A Medida Provisória n. 1.140 de 2022 foi a normativa responsável por inaugurar, de forma mais precisa, esse movimento, mediante a instituição temporária do Programa de Prevenção e Combate ao Assédio

<sup>1</sup> Doutora em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco; Mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Professora do Curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Coordenadora do Grupo de Pesquisa Direito, Estado e Feminismos – DEFEM; Advogada. E-mail: marianadesiqueira@gmail.com.



Sexual no âmbito dos sistemas de ensino federal, estadual, municipal e distrital. A princípio, o foco dessa Medida Provisória estava na rede pública de ensino e, após a sua conversão em lei n.º 14.540 (Brasil, 2023a), houve a ampliação do seu objeto, passando a abarcar toda a administração pública e não somente o espaço educacional.

Hoje, além da Lei n.º 14.540, de 3 de abril de 2023, temos o Decreto n.º 12.122, de 30 de julho de 2024, que institui o Programa Federal de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

Como o foco de análise do presente estudo está na Administração Pública federal, este decreto é normativa de destaque para a presente pesquisa. Ela, considerando o federalismo brasileiro, a sua complexidade e as especificidades de estados e municípios, se concentrou no âmbito da União e da Administração Pública Federal.

A partir do exposto, é relevante dizer que o movimento de mudança normativa mencionado é o fato que justifica o presente estudo, destacando também a sua relevância e atualidade.

No ambiente institucional público, o assédio sexual é risco psicossocial que, se não gerido, enfrentado e prevenido, provoca severo adoecimento das pessoas que dão vida ao ambiente público, ocasionando significativa diminuição da qualidade de vida. O assédio sexual representa grave violação aos direitos humanos, especialmente das mulheres, já que são elas as suas vítimas mais frequentes. No ambiente institucional, essa prática é contrária ao interesse público e verdadeiro obstáculo à equidade de gênero na Administração Pública brasileira.

Justamente por isso, por envolver aspectos institucionais estruturais, o movimento de mudança que começa a ser direcionado à Administração Pública Federal vai além do que é convencional e não aborda o assédio sexual apenas como questão ligada à vítima e ao seu agressor. Tal movimento, impreterivelmente, também analisa e concebe



o assédio sexual na perspectiva da responsabilidade institucional. Qual a parte que compete à Administração Pública na gestão, enfrentamento e prevenção a esse grave ilícito?

É exatamente na abordagem do fazer institucional que o tema do compliance aparece em associação à prevenção e repressão ao assédio sexual. As ações e políticas propostas e pensadas pela Administração Pública para prevenção e enfrentamento ao assédio sexual em seu âmbito interno devem se estruturar e se instrumentalizar em perspectiva de compliance, com planejamento, diagnóstico, diálogo interdocumental e sistematização de ações e políticas. As iniciativas não devem se estruturar como fatos tópicos, criados ocasionalmente em respostas a crises específicas e sem planejamento no curto, médio e longo prazo.

A implementação de políticas de compliance no âmbito do enfrentamento e prevenção ao assédio sexual não apenas contribui para a governança e integridade institucional, como também é crucial para assegurar que o ambiente de trabalho seja seguro, saudável e respeitoso para todos, especialmente para as mulheres.

O compliance, outrora estruturado como ferramenta essencial para assegurar a integridade e a governança no setor público no que tange a fraudes e corrupção, agora é visto como assunto que deve ir além do combate a tais práticas, adentrando o campo da promoção dos direitos humanos das mulheres e da diversidade institucional.

Além disso, o compliance pode ser um mecanismo estratégico para a concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente o ODS 5, que trata da igualdade de gênero, o ODS 8, que cuida do trabalho digno, o ODS 16, que visa promover sociedades pacíficas e inclusivas e o ODS 18, que cuida da equidade racial. Mediante uma adequada estrutura de compliance é possível proporcionar efetivo acesso à justiça no cotidiano institucional mediante a existência de instituições eficazes, respeitosas com as pessoas e socialmente responsáveis.



Atualmente no Brasil, diversas instituições públicas têm implementado ações e políticas com viés inclusivo, visando à equidade de gênero e à proteção das mulheres no ambiente de trabalho. A presente pesquisa mencionará algumas delas analisando no que tange especificamente ao tema do assédio sexual. O foco de tal análise, juntamente com o estudo da normativa atualmente vigente outros documentos, será responsável por obter respostas para as seguintes perguntas: as normas direcionadas à Administração Pública Federal em matéria de assédio sexual tem recorte de gênero quanto às mulheres? Elas mencionam a necessidade de abordagem integrada de suas ações? A perspectiva sistemática de um compliance é uma realidade atual ou há o predomínio de ações pontuais

Para encontrar respostas precisas para as perguntas levantadas, a metodologia adotada neste estudo foi de ordem qualitativa, com predomínio de análise documental de normativas governamentais, políticas e relatórios institucionais e revisão bibliográfica de publicações acadêmicas.

## **1 O CONCEITO LEGAL DE ASSÉDIO SEXUAL E SEU ATUAL ENFRENTAMENTO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL BRASILEIRA**

O assédio sexual é tipificado no Código Penal Brasileiro (art. 216-A) como ato de “constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função”.

No âmbito administrativo, por não estar previsto na legislação disciplinar federal como ilícito administrativo expreso, a análise das



alegações de assédio sexual em casos concretos e o seu conseqüente enquadramento legal passam por desafios. Na medida em que a Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990 (Brasil, 1990), responsável por instituir o regime jurídico dos servidores públicos federais e por tratar de suas infrações funcionais, não traz o termo “assédio sexual” ou uma infração funcional que o aborde de forma explícita, predomina o uso prático do conceito contido no Código Penal como guia para a compreensão da conduta em âmbito administrativo, o que é importantíssimo.

Em sede de processos administrativos disciplinares, o enquadramento das condutas violadoras da liberdade sexual das vítimas na Lei 8112 de 1990 costuma variar e envolver incisos e dispositivos com redação mais abrangente, o que é uma fragilidade em termos de tipicidade e legalidade punitiva. São exemplos dos incisos e dispositivos utilizados em tais casos os que se seguem:

Art. 2º. São deveres dos servidores públicos civis:

[...]

VIII - manter conduta compatível com a moralidade pública;

[...]

Art. 5º São faltas administrativas, puníveis com a pena de demissão, a bem do serviço público:

I - valer-se, ou permitir dolosamente que terceiros tirem proveito de informação, prestígio ou influência, obtidos em função do cargo, para lograr, direta ou indiretamente, proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública;

[...]

Art. 116. São deveres do servidor:

[...]

IX - manter conduta compatível com a moralidade administrativa;



[...]

XI - tratar com urbanidade as pessoas;

[...]

Art. 132. A demissão será aplicada nos seguintes casos:

[...]

V - incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição;

[...]

VII - ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem;

Haver tamanha diversidade na possibilidade de enquadramento da prática do assédio sexual na Administração Pública Federal é fato ensejador de insegurança jurídica. Dados divulgados pela Controladoria Geral da União e produzidos a partir da análise de processos administrativos da seara correicional revelaram, na prática, pelo menos doze enquadramentos distintos (Brasil, 2020). Uma mudança textual em tal normativa para contemplar expressamente o assédio sexual seria medida importante.

De todo modo, mesmo diante da atual variedade de enquadramentos, é sabido que o servidor público federal que comprovadamente pratica assédio sexual acaba sendo enquadrado em algum dos dispositivos mencionados e, a partir disso, recebe responsabilização.

Hoje, por determinação expressa e vinculante da Advocacia Geral da União dada em Parecer datado de agosto de 2023 (Parecer n. 00001/2023/PG-ASSEDIO/SUBCONSU/PGF/AGU) (Brasil, 2023b), os casos comprovados de assédio sexual na Administração Pública Federal deverão resultar em pena de demissão. O servidor assediador, portanto, perderá o seu vínculo funcional com a Administração Pública Federal, caso haja a comprovação de que efetivamente praticou assédio sexual.



Este Parecer vinculante da Advocacia Geral da União direciona aos casos de assédio sexual na Administração Pública Federal a pena máxima do direito administrativo disciplinar. Anteriormente a ele, diferentemente, as sanções eram variáveis e, conforme dados disponibilizados pela Controladoria Geral da União (CGU), oscilavam entre pena de suspensão, demissão e advertência.

Dados divulgados pela CGU em 2020 demonstraram que 42,10% das sanções decorrentes dos processos de assédio sexual resultaram em suspensão, seguidas da pena de demissão, com 31,58%, e por fim, de advertência, com 26,32%. Em relação à penalidade de suspensão, ali foi possível notar uma acentuada variação na dosimetria da pena aplicada, sendo o número médio de dias de suspensão de 40,25 dias. A pesquisa também constatou que 18 processos de assédio sexual restaram arquivados, dentre os 83 que compuseram a amostra, o que equivale a 36,73% do total analisado. Predominaram os casos de arquivamento ocorridos em virtude da absolvição sem indiciamento (77,79%), seguido da absolvição com indiciamento, cujo percentual de incidência é de 11,11% (Brasil, 2020). Esses dados, em especial os de arquivamento, geravam um sentimento coletivo de impunidade e tolerância.

Como o sentimento coletivo predominante era o da tolerância com o assédio sexual na Administração Pública Federal, diante dos avanços históricos recentes e do movimento das novidades legislativas, foi produzido pela AGU o parecer aqui mencionado incrementando o rigor no trato do assunto. Se antes havia a aparência de algum indício de tolerância quanto ao assédio sexual, agora o que resta explícito em texto de Parecer é a tolerância zero com essa prática.

Saindo da abordagem da punição com a sanção de demissão e migrando para a perspectiva da prevenção e da organização de políticas internas, é indispensável mencionar os conteúdos da Lei nº 14.540, sancionada em 2023, e do Decreto nº 12.122/2024, publicado no início



de 2024. Ambas as normativas são inovações significativas na proteção contra o assédio sexual por buscarem estruturar, com ações diversas, a perspectiva da prevenção à prática e do planejamento de ações.

A Lei nº 14.540 (Brasil, 2023a), direcionada à toda a Administração Pública em todos os níveis federados, estabelece o dever de a Administração implementar políticas de prevenção e combate ao assédio sexual em seus quadros funcionais, criando mecanismos de denúncia acessíveis, eficientes e confidenciais. O seu artigo 5º determina a realização de treinamentos periódicos para servidores públicos, com o intuito de sensibilizar sobre a gravidade do assédio sexual e suas consequências jurídicas e sociais. Se existe algo que a prática demonstra dia a dia, é a relevância e imprescindibilidade de tais treinamentos. O tema da compreensão dos limites jurídicos do assédio e de suas consequências é complexo e precisa ser constantemente ensinado.

Compreender a conduta, como se configura, o que fazer para se proteger e como denunciar é essencial para a efetividade da lei. Esta também lei busca garantir que casos de assédio sexual sejam tratados com celeridade e rigor, assegurando o seu acompanhamento adequado e a proteção não só das vítimas, mas também dos servidores que atuaram na apuração do caso. Evitar revitimização e perseguição é importantíssimo.

São diretrizes legais impostas pela Lei nº 14.540 (Brasil, 2023a), em seu art. 5º, para as ações de prevenção e enfrentamento ao assédio sexual as seguintes:

- a) esclarecimento sobre os elementos que caracterizam o assédio sexual e demais crimes contra a dignidade sexual e as formas de violência sexual, aqui entram os imprescindíveis treinamentos e campanhas educativas;



- b) fornecimento de materiais educativos e informativos com exemplos de condutas que possam ser caracterizadas como assédio sexual ou outro crime contra a dignidade sexual, neste espaço estão as cartilhas e guias orientativos;
- c) implementação de boas práticas para a prevenção ao assédio sexual e demais crimes contra a dignidade sexual, aqui se destacam os protocolos internos e códigos de conduta;
- d) divulgação da legislação pertinente e de políticas públicas de proteção, de acolhimento, de assistência e de garantia de direitos às vítimas, nesse item se ressalta a importância de serem pensadas estratégias de comunicação e divulgação assertivas, pois pouco adianta possuir normativas e ações e não possibilitar aos seus destinatários o conhecimento amplo de tal existência;
- e) divulgação de canais de denúncia da prática de assédio sexual;
- f) estabelecimento de procedimentos para o encaminhamento de reclamações e denúncias de assédio sexual;
- g) criação de programas de capacitação, na modalidade presencial ou a distância, que abranjam os seguintes conteúdos mínimos:
  - i) causas estruturantes do assédio sexual e demais crimes contra a dignidade sexual e da violência sexual; ii) consequências para a saúde das vítimas; iii) meios de identificação, modalidades e desdobramentos jurídicos; iv) direitos das vítimas, incluindo o acesso à justiça e à reparação; v) mecanismos e canais de denúncia; vi) instrumentos jurídicos de prevenção e de enfrentamento ao assédio sexual e demais crimes contra a dignidade sexual e a todas as formas de violência sexual disponíveis direito brasileiro (Brasil, 2023).



A breve descrição aqui feita quanto ao conteúdo da Lei nº 14.540/2023 permite observar como a preocupação com a prevenção foi cuidada detalhadamente. A ideia foi permitir a criação de uma efetiva cultura de respeito às pessoas e a mudança do padrão histórico de trato superficial do tema assédio sexual. A despeito de seus avanços, é importante destacar que esta normativa não possui análise específica de gênero para mulheres ou abordagem explicitamente preocupada com o tema da diversidade.

O Decreto nº 12.122/2024, por sua vez, complementa a Lei nº 14.540/2023 ao detalhar como a Administração Pública Federal deve estruturar a sua atuação em termos de política de enfrentamento e prevenção ao assédio sexual.

De acordo com o seu texto, o seu objetivo é instituir o Programa Federal de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação (Brasil, 2022), no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional; dispor sobre o plano federal e os planos setoriais de implementação e monitoramento do Programa; e sobre a criação de comitê gestor e de comitês estaduais de acompanhamento do Programa.

De acordo com o texto do Decreto, o Programa Federal de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação será constituído de plano federal e de planos setoriais de implementação e o monitoramento dessas ações deverá ocorrer de modo a harmonizar, sistematizar e coordenar as atuações do Comitê Gestor e os Comitês Estaduais. Em um país de dimensões continentais, como é o caso do Brasil, com uma Administração Pública Federal tão grande em quantidade de unidades e tão diversa no que tange ao foco de atuação de suas unidades, essa previsão é extremamente importante, principalmente em se tratando da lógica de *compliance* e da busca por efetividade na proteção às pessoas.

O Decreto mencionado é vanguarda não só por pensar o enfrentamento e prevenção ao assédio sexual na perspectiva da



sistematicidade típica de compliance, mas também por tratar do assunto diversidade e mulheres, com genuíno olhar para a necessidade de serem pensadas e concretizadas ações com abordagem isonômica real. Mais à frente abordaremos tal perspectiva, dialogando também sobre o tema da interseccionalidade.

Essas duas normativas (lei e decreto) são um marco fundamental na proteção das pessoas dentro da Administração Pública Federal, principalmente no que diz respeito ao tema do assédio sexual. Elas não apenas estabelecem mecanismos legais mais robustos para prevenir o assédio sexual, como também abrem espaço para a promoção de uma mudança de cultura organizacional, visando à criação de um ambiente mais justo, transparente e livre de abusos.

Ambas as normativas, atualmente, já reverberam em ações concretas, a exemplo das iniciativas recentemente adotadas no âmbito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Através da Resolução n.º 09 de 2023, a UFRN instituiu a sua política de prevenção e enfrentamento ao assédio e a discriminação no âmbito daquela Universidade. Com isso, trouxe para o seu ambiente interno novas unidades administrativas, a exemplo do Comitê UFRN com Diversidade e do Núcleo de Proteção à Pessoa em Situação de Violência. Tais unidades devem, respectivamente, pensar a diversidade em perspectiva de prevenção e acolher e orientar vítimas de violências institucionais, a exemplo do assédio sexual.

Além disso, há na Política da UFRN a previsão de treinamentos periódicos de toda comunidade acadêmica sobre o tema, a elaboração de materiais didáticos sobre esse assunto tão complexo, há também a previsão de divulgação de canais internos de acolhimento e denúncias, dentre outras medidas relevantes. As ações recentemente adotadas por esta instituição federal de ensino são um claro reflexo do novo movimento legislativo aqui mencionado.



Além da UFRN, outras instituições e órgãos federais possuem medidas contra o assédio sexual. A Controladoria Geral da União elaborou e publicou, em 2023, Guia Lilás (Brasil, 2024) que orienta e explica, de forma simples e acessível, sobre os temas do assédio sexual, assédio moral e discriminações. O Tribunal de Contas da União (TCU) também estrutura as suas atividades a partir de tal perspectiva e possui normativas, cartilhas e Política de Prevenção e Combate ao Assédio Moral e Sexual e a Todas as Formas de Violência e Discriminação.

A despeito de tais avanços pontuais, dados divulgados no dia 13 de março de 2025, revelam que muito ainda há de ser feito. No caso do ensino superior, por exemplo, tais dados expõem que pelo menos 60% das Universidades Federais não possuem políticas de enfrentamento e prevenção ao assédio sexual (Agência Brasil, 2024). O dado preocupa e expõe o longo caminho a ser percorrido para que as novas normativas produzam efeitos concretos e efetivamente protejam as pessoas promovendo respeito.

## **2 AS MULHERES COMO VÍTIMAS DE ASSÉDIO SEXUAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL E O NECESSÁRIO RECORTE DE GÊNERO NA ANÁLISE DO TEMA**

A maior parte das vítimas de assédio sexual na Administração Pública Federal é composta por mulheres, especialmente aquelas que estão em cargos ou locais subordinados ou em situação de vínculo laboral precário. Notícia datada de setembro de 2024 expôs que, naquele ano, a CGU havia registrado em seu painel “Resolveu?” 571 denúncias de assédio sexual; dentre as pessoas denunciadas, 75% eram mulheres (Agência Brasil, 2024).



A realidade apresentada pela CGU não parece uma exclusividade de sua área de competência de atuação. As mulheres, no geral, constantemente aparecem em pesquisas como vítimas mais frequentes das violências laborais.

Simone de Beauvoir nos ensina que “Não se nasce mulher, torna-se mulher”. Esta frase, imortalizada em sua literatura, demonstra que nem tudo se liga exclusivamente ao sexo biológico quando tratamos de questões de gênero, pois o “ser mulher” não se limita à fisiologia do corpo, também envolvendo construções culturais, históricas e sociais (Beauvoir, 2019, p. 35).

A sociedade atribui características e distribui tarefas entre os seres humanos conforme pertençam ao sexo masculino ou feminino. Com isso, são criadas expectativas a respeito do que deve corresponder a “ser mulher” ou “ser homem” em determinado recorte de tempo histórico e espaço geográfico. A construção binária do masculino e feminino afeta sobremaneira a presença da mulher no mercado de trabalho, a predispondo, com maior frequência, às violências.

Dados da Organização das Nações Unidas expõem que o Brasil está entre os cinco países que possuem as maiores taxas de feminicídio do mundo (ONU, 2016). Nos últimos anos, mesmo diante da existência de um sistema jurídico especificamente destinado à proteção das mulheres, as agressões e mortes femininas por razões misóginas no Brasil cresceram exponencialmente (Arias, 2019). No Brasil, assédio sexual, importunação sexual e estupro são alguns dos crimes contra a liberdade sexual que carregam a marca da desigualdade de gênero em seus modos de exteriorização e estatísticas.

O patriarcado, sistema que incrementa e mantém as desigualdades entre homens e mulheres através da diferenciação dos papéis de gênero, é uma possível explicação para a persistência dessa cruel e hostil realidade (Federici, 2019). O constante abuso e agressão de mulheres



nesse sistema se liga ao fato de que ele estabelece uma dinâmica de exercício do poder baseada exatamente na hierarquia social de gênero, de modo que a autoridade masculina e seus privilégios tendem a ensejar o domínio, exploração e objetificação constantes dos corpos e existências das mulheres, inclusive em ambiente institucional (Lerner, 2019). Com o patriarcado, há a “banalização” e a institucionalização da distinção artificial de gênero que oprime, explora e assedia (Federici, 2017).

Esse “ser mulher” socialmente construído, muitas vezes idealizado em teoria de modo essencialista, não se externa, no dia a dia, com a marca da universalidade. As mulheres são diversas em seus fenótipos, possuem corpos atravessados por características específicas e muitas vezes marcados por múltiplos fatores de desigualdades.

Se o recorte da violência de gênero abandona a ideia de “mulher universal” e adota o olhar interseccional de raça e classe (Crenshaw, 2021), os números da brutalidade tendem a piorar, pois as mulheres negras e pobres são as brasileiras mais agredidas. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em seu Atlas da Violência de 2020, expõe em números essa realidade ao divulgar que nos últimos anos houve aumento de 12,4% no índice de feminicídios de mulheres negras no país (Bueno; Cerqueira; 2020, p. 37-38).

Na prática, a interseccionalidade aparenta ser mais evidente do que a essencialidade. Observar a interseccionalidade que marca os corpos femininos também é muito relevante quando se intenciona analisar, diante de um caso concreto, o assédio sexual com recorte de gênero.

Viver em uma sociedade que diferencia homens e mulheres a partir dos papéis de gênero e que confere às mulheres posição de subalternidade é fator determinante para as experiências de violências por elas vividas, inclusive em ambiente institucional. Justamente por isso, é essencial haver recorte de gênero interseccional nas ações, políticas e leis que se ocupam de prevenir e enfrentar o assédio sexual.



Nesse sentido, o Decreto 12.122 de 2024 sai à frente ao prever, em seu art. 4º, que “O Programa Federal de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação considerará a proteção de grupos historicamente vulnerabilizados, como mulheres, indígenas, pessoas negras, idosas, com deficiência e LGBTQIA+.”

A despeito do imenso elogio que merece ser tecido a tal pervisão normativa, é importante destacar aqui a inexistência de especificação legal a respeito de como essa consideração isonômica interseccional deverá ser feita na prática. Que ela será obrigatória já há certeza, a dúvida agora é sobre como operacionaliza-la.

Partindo do pressuposto que o trato isonômico de determinados grupos subalternizados não foi uma prática frequente na história da gestão pública, permanece a lacuna quanto às ações específicas a serem realizadas em tal perspectiva. A ausência de referenciais nítidos sobre melhores práticas em tal seara e como agir para atingir esse fim legal é delicada. Será preciso agir para preencher esse espaço com a análise de melhores práticas já aplicadas em espaços públicos, com a realização do diagnóstico de riscos e a determinação de ações concretas vocacionadas para a realidade da Administração Pública Federal no que tange à prevenção e enfrentamento ao assédio sexual em perspectiva isonômica e interseccional.

### **3 COMPLIANCE COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE PROMOÇÃO DA EQUIDADE DE GÊNERO E DOS DIREITOS HUMANOS DAS MULHERES NO ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO AO ASSÉDIO SEXUAL**

O conceito de compliance surgiu nos Estados Unidos, especialmente no setor financeiro, como forma de garantir conformidade



com normas regulatórias e prevenir fraudes empresariais. O escândalo da Enron, no início dos anos 2000, foi um marco para a disseminação do compliance contemporâneo, com a criação de regras mais rígidas e mais bem definidas para a governança corporativa e a transparência financeira. A partir desse momento, a prática do compliance expandiu-se globalmente, sendo adotada por diversos setores econômicos e, mais tarde, incorporada à Administração Pública.

Através do compliance é feita a determinação, estudada e planejada, de ações multidirecionais de curto, médio e longo prazo que são capazes de trazer a determinado ambiente e certa atividade maior e melhor adequação e conformidade à lei, mais precisa e eficiente gestão de riscos, sustentabilidade e confiabilidade.

No Brasil, a ideia de compliance começou a ganhar força no setor público com a promulgação da Lei Anticorrupção, Lei nº 12.846 (Brasil, 2013), que estabeleceu a responsabilização administrativa e civil de empresas por atos contra a Administração Pública. Esse marco normativo não menciona expressamente o termo “compliance”, mas incentiva a criação de programas de integridade no setor público e privado, consolidando o compliance como ferramenta essencial para a governança e a transparência institucional.

A governança pública, segundo o Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017, é o “conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade” (Brasil, 2017).

Já a integridade, por sua vez, corresponde à ideia daquilo que é íntegro, que é inteiro em sua essência, sem fissuras, sem quebras de ordem ética. Na perspectiva da integridade pública, é possível analisar esse conceito como atuação voltada ontologicamente ao respeito à ética, interesse público, sustentabilidade e direitos humanos.



No contexto da Administração Pública, a integridade deve ser entendida como um valor essencial para a sustentabilidade institucional e, conseqüentemente, para a promoção da diversidade e da equidade de gênero.

A integridade não se resume ao ato de seguir normas previstas na legislação para o fim das fraudes e corrupção, ela vai muito além, também envolvendo a incorporação cotidiana de valores éticos, do respeito à justiça, à diversidade e inclusão. Integridade e sustentabilidade com respeito aos direitos humanos devem ser ideias indissociáveis.

Se é verdade que, no passado, havia o entendimento de que para a proteção ao interesse público seria suficiente proteger o patrimônio público e suas regras, igualmente é verdadeiro externar que, na atualidade, manter esse olhar tão restrito é insuficiente, pois desconsiderar a proteção às pessoas no âmbito da ideia de integridade e proteção ao interesse público é precarizar os conceitos em questão.

A integridade se revela em compatibilidade plena com o sistema jurídico ao ser também analisada na ótica do respeito aos direitos humanos e às pessoas. A tríade integridade-governança-compliance só atinge a plenitude do que se propõe se estruturada sem olvidar da sustentabilidade; destacamos aqui os ODS 5, 8,16 e18.

Nesse sentido, compliance, governança e integridade devem ser elementos marcados pelo recorte de gênero, em especial no que diz respeito aos Direitos das Mulheres. As políticas e ações de enfrentamento e prevenção ao assédio sexual na Administração Federal precisam das lentes de gênero e devem ser estruturadas na ótica do tripé compliance-integridade-governança. Códigos de ética e conduta, programas de integridade e ações de compliance devem possuir, como sua marca ontológica e desde a concepção, a preocupação com o recorte de gênero e diversidade.



No Brasil, diante dos avanços legislativos dos últimos anos, tem sido possível notar a aparição de ações e políticas, em diferentes espaços públicos federais, destinadas ao enfrentamento e prevenção ao assédio sexual. Atualmente, essas ações, ainda que elogiáveis e protetivas de pessoas na prática, podem e devem ser refinadas a partir de dois pontos de aperfeiçoamento: recorte de gênero interseccional e isonômico para atenção às mulheres e estruturação planejada mediante a lógica do tripé compliance-integridade-governança.

Muitas vezes criadas de forma tópica, em momentos temporais diferentes, às vezes como respostas imediatas a crises específicas, essas iniciativas de enfrentamento e prevenção ao assédio sexual precisam ser pensadas de forma sistemática, planejada e dialogada, é justamente aí, nesse modo não pontual, disperso ou ocasional de lidar com o tema, que aponta a perspectiva do tripé compliance-integridade-governança. Além disso, a estruturação deste tripé com lentes de gênero para defesa dos Direitos das Mulheres, especialmente em se tratando do assédio sexual, é medida essencial.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

O compliance, quando estruturado a partir de uma abordagem inclusiva e sustentável, pode ser um poderoso instrumento para a promoção dos direitos humanos das mulheres e da diversidade no ambiente institucional, especialmente em se tratando do tema assédio sexual. A Administração Pública Federal, principalmente diante das normativas que impõem a ela dever de agir, tem papel fundamental na implementação de políticas e ações que efetivamente assegurem a equidade de gênero, fortalecendo a governança e a integridade das instituições. O tema do



assédio sexual precisa ser analisado, diagnosticado e ter as suas ações de prevenção e enfrentamento estruturadas a partir de tal perspectiva.

A adoção de programas de compliance sensíveis às questões de gênero é essencial para a construção de espaços mais justos e equitativos. Dessa forma, além de garantir conformidade normativa, a Administração Pública reforça o seu compromisso com os princípios democráticos e com os direitos humanos das mulheres.

A análise da recente implementação da Lei nº 14.540 (Brasil, 2023a) e do Decreto nº 12.122 (Brasil, 2024) revela que a Administração Pública Federal tem avançado significativamente no combate ao assédio sexual, principalmente por meio da institucionalização de programas e ações especificamente ligadas ao assunto. Predominam, em tal contexto, a elaboração e divulgação das cartilhas explicativas, os treinamentos de servidores e a criação de unidades internas para pensar e agir em torno do assunto.

No entanto, mesmo com os avanços concretizados, os dados ainda mostram que o enfrentamento do assédio sexual segue como um desafio, e que é fundamental continuar aprimorando as estratégias de prevenção e suporte às vítimas. O compliance, enquanto ferramenta de integridade institucional, é um instrumento muito eficaz na criação de um ambiente institucional mais seguro, justo e respeitoso, alinhando-se aos direitos humanos das mulheres e à construção de um Estado mais inclusivo.

## REFERÊNCIAS

AGÊNCIA BRASIL. Painel da CGU registra este ano 571 denúncias de assédio sexual. **Agência Brasil**, 06 set. 2024. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2024-09/painel-da-cgu-registra-este-ano-571-denuncias-de-assedio-sexual>. Acesso em: 15 mar. 2025.



ARIAS, Juan. **Sinais do aumento de feminicídios**. Por que elas são mortas? El País, Brasil, 23 out. 2019. Disponível em: [https://brasil.el-pais.com/brasil/2019/10/24/opinion/1571868956\\_647096.html](https://brasil.el-pais.com/brasil/2019/10/24/opinion/1571868956_647096.html). Acesso em: 12 mar. 2025.

BEAUVOIR, Simone. **O segundo sexo**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2019. v. II.

BRASIL. Advocacia-Geral da União. **Parecer n.00001/2023/PG-AS-SEDI0/SUBCONSU/PGF/AGU**. 2023b. Disponível em: <https://www.gov.br/agu/pt-br/comunicacao/noticias/parecer-da-agu-fixa-pena-de-demissao-para-casos-de-assedio-sexual-nas-autarquias-e-fundacoes-publicas-federais/Parecern.01.2023>. Acesso em: 15 mar. 2025.

BRASIL. Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017. Dispõe sobre a política de governança da administração pública federal. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 23 nov. 2017.

BRASIL. Decreto n. 12.122, de 30 de julho de 2024. Institui o Programa Federal de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 31 jul. 2024.

BRASIL. Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 12 dez. 1990.

BRASIL. Lei n. 12.846, de 1º de agosto de 2013. Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 2 ago. 2013.



BRASIL. Lei n. 14.540, de 03 de abril de 2023. Institui o Programa de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Sexual e demais Crimes contra a Dignidade Sexual e à Violência Sexual no âmbito da administração pública, direta e indireta, federal, estadual, distrital e municipal. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 4 abr. 2023.

BUENO, Samira; CERQUEIRA, Daniel (coord.). **Atlas da violência 2020**. Brasília, DF: IPEA, 2020. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/dados-series/142>. Acesso em: 12 mar. 2025.

BRASIL. Controladoria-Geral da União. CGU. **Guia Lilás**: orientações para prevenção e enfrentamento ao assédio moral e sexual e à discriminação no Governo Federal. 2024. Disponível em: [https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/94045/1/Guia\\_Prevencao\\_Assedio\\_2024.pdf](https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/94045/1/Guia_Prevencao_Assedio_2024.pdf). Acesso em: 14 mar. 2025.

BRASIL. Controladoria-Geral da União. CGU. **Estudo temático assédio sexual**: tratamento correicional do assédio sexual no âmbito do sistema de correição do poder executivo federal (SISCOR). 2020. Disponível em: [https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/76960/1/Estudo\\_Tem%C3%A1tico\\_Ass%C3%A9dio\\_Sexual\\_2020.pdf](https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/76960/1/Estudo_Tem%C3%A1tico_Ass%C3%A9dio_Sexual_2020.pdf). Acesso em: 14 mar. 2025.

BRASIL. Controladoria-Geral da União. CGU. **Programa de integridade na administração pública**. Brasília, 2022.

CRENSHAW, Kimberlé. Documento para o encontro de especialistas em aspectos da discriminação racial relativos ao gênero. **Estudos Feministas**, 2002. Disponível em: <https://www.scielo.br>. Acesso em: 15 jan. 2021.

FEDERICI, Silvia. **O calibã e a bruxa**: mulheres, corpo e acumulação primitiva. São Paulo: Elefante, 2017.

FEDERICI, Silvia. **O ponto zero da revolução**: trabalho doméstico, reprodução e luta feminista. São Paulo: Elefante, 2019.



LERNER, Gerda. **A criação do patriarcado**: história da opressão das mulheres pelos homens. São Paulo: Cultrix, 2019.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. ONU: taxa de feminicídios no Brasil é quinta maior do mundo; diretrizes nacionais buscam solução. **Nações Unidas Brasil**, 9 abr. 2016. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/onu-femicidio-brasil-quinto-maior-mundo-diretrizes-nacionais-buscam-solucao/>. Acesso em: 12 mar. 2025.



# O NEOLIBERALISMO E O NEOCONSERVADORISMO COMO FORMA DE SUBJETIVAÇÃO DE GÊNERO NO BRASIL

Riva Sobrado de Freitas<sup>1</sup>

## INTRODUÇÃO

Para que possamos compreender os impactos do neoliberalismo e do neoconservadorismo como formas de subjetivação de gênero, é fundamental que exploremos aspectos da literatura contemporânea que certamente envolvem as análises acuradas de Manuel Castells, Mauricio Bedoya Hernandez e Byung-Chul Han, entre outros de relevância sobre o tema. De outra parte, para capturarmos os impactos promovidos pela emergência do neoconservadorismo religioso em países da América Latina, tais como o Brasil, nos ativemos às pesquisas de Flávia Biroli e JuanVaggione, como referenciais bibliográficos, pela atualidade e profundidade com que analisam as transformações sociais que eles promovem. Este artigo busca investigar como essas correntes ideológicas moldam não apenas as estruturas sociais, mas também as identidades individuais e as relações de poder no contexto contemporâneo.

Manuel Castells, sociólogo espanhol conhecido por suas contribuições sobre a sociedade em rede e as transformações sociais na era da informação, oferece uma perspectiva crucial para entender a ascensão do neoliberalismo e suas implicações para as questões de gênero. Para

<sup>1</sup> Professora aposentada da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”; Atualmente professora da Pós-Graduação em Direitos Fundamentais da Universidade do Oeste de Santa Catarina; Coordenadora do Grupo de Pesquisa Interculturalidade e intersubjetividade: gênero, orientação sexual, raça e etnia. E-mail: rivafreit@gmail.com.



Castells, o neoliberalismo não se limita apenas a uma política econômica, mas constitui uma nova forma de racionalidade dominante que permeia todas as esferas da vida social. Essa racionalidade neoliberal promove a privatização, a flexibilização do trabalho e a competição como valores centrais, reconfigurando as relações sociais e as identidades individuais.

No âmbito de gênero, o neoliberalismo incentiva uma visão individualista e empreendedora do self, onde os indivíduos são incentivados a se verem como empresários de si mesmos, responsáveis por sua própria realização e sucesso. Esse ethos neoliberal, segundo Castells, não apenas enfatiza a autonomia individual, mas também obscurece as estruturas de poder e desigualdade que moldam as oportunidades e os obstáculos enfrentados por diferentes grupos sociais, incluindo mulheres e minorias de gênero.

Mauricio Bedoya Hernandez e Alberto Castrillón Aldana expandem essa análise ao explorar como a racionalidade neoliberal se articula com o conservadorismo de gênero na América Latina. Eles argumentam que o neoliberalismo, ao promover uma lógica de mercado em todos os aspectos da vida social, instrumentaliza pautas conservadoras para manter a estabilidade e a ordem social. Isso se manifesta em políticas que reforçam normas tradicionais de gênero, como a valorização da família nuclear e a restrição dos direitos reprodutivos das mulheres, sob o pretexto de proteger valores morais e sociais.

A análise de Bedoya e Castrillón revela como o neoliberalismo não apenas tolera, mas também se alia ao neoconservadorismo para consolidar uma visão hierárquica e heteronormativa da sociedade. Nesse sentido, as políticas econômicas neoliberais não são neutras em relação ao gênero, mas reforçam dinâmicas que perpetuam a desigualdade e a exclusão de mulheres e minorias de gênero, ao mesmo tempo em que celebram a liberdade individual e o mercado como forças igualadoras.

Flávia Biroli, por sua vez, traz uma análise crítica sobre como o neoconservadorismo cristão, especialmente no contexto brasileiro, promove



um impacto negativo significativo em relação à identidade de gênero e aos direitos conquistados pela comunidade LGBTQI+. Em sua obra, Birolí examina como o discurso religioso conservador penetra nas instituições políticas e jurídicas, influenciando decisões legislativas e judiciais que restringem direitos e promovem uma agenda moralizadora e excludente.

A interseção entre neoliberalismo e neoconservadorismo, segundo Birolí, não é apenas uma coincidência histórica, mas uma aliança estratégica que busca legitimar e perpetuar estruturas de poder patriarcais e heteronormativas. A defesa de valores tradicionais de gênero e sexualidade por parte do neoconservadorismo cristão não apenas contesta avanços progressistas em direitos humanos, mas também serve como uma ferramenta para consolidar a dominação política e cultural de certos grupos sobre outros.

Portanto, este trabalho busca explorar como o neoliberalismo, ao promover uma racionalidade que privilegia o mercado e a individualidade, interage com o neoconservadorismo, que reforça normas de gênero tradicionais e moralidades fixas. A análise dessas correntes ideológicas não só revela suas complexidades e interconexões, mas também destaca os desafios enfrentados pelos movimentos sociais e políticos que buscam resistir e transformar essas estruturas de poder em busca de uma sociedade mais justa, igualitária e inclusiva. Parte superior do formulário Parte inferior do formulário

## 1 SÉCULO XXI: A ASCENÇÃO DO NEOLIBERALISMO E A CRISE DA DEMOCRACIA LIBERAL

Quando miramos o século XXI, observamos dois fenômenos interligados: a ascensão do neoliberalismo e a crise da democracia neoliberal, marcando profundamente a realidade social, promovendo



transformações nas sociedades contemporâneas desde o final do século XX. A narrativa dessa ascensão e a subsequente crise pode ser compreendida dentro de um contexto bem mais amplo, que alcança, para além da globalização, mudanças tecnológicas e políticas econômicas que foram capazes de redefinir a forma como os estados, os mercados e os indivíduos passaram a interagir desde então.

Nesse sentido, observamos o neoliberalismo emergir como uma resposta às crises econômicas dos anos 1970, um período marcado profundamente pela crise mundial do petróleo, por estagnação econômica, inflação e desemprego, demonstrando as contradições e fragilidades da racionalidade de bem-estar social, levada a efeito pelos estados a partir da segunda guerra mundial. Premidos por essas crises e certamente influenciados pelas ideias de economistas como Friedrich Hayek e Milton Friedman, políticos como Margaret Thatcher no Reino Unido e Ronald Reagan nos Estados Unidos adotaram políticas que enfatizavam a desregulamentação, privatização e a redução do papel do estado na economia. O objetivo era revitalizar as economias, promover o crescimento e aumentar a eficiência dos mercados.

Essas políticas neoliberais se espalharam rapidamente pelo mundo, influenciando governos de diferentes orientações políticas. De outra parte, instituições internacionais como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial também adotaram e promoveram políticas dessa natureza, condicionando seus empréstimos a reformas econômicas que deveriam seguir necessariamente os princípios neoliberais. Consequentemente, tais orientações promoveram, em países em desenvolvimento, especialmente na América Latina, África e Ásia, profundas reestruturações econômicas, com consequências muitas vezes danosas.

Observamos, portanto, que o neoliberalismo trouxe consigo uma série de mudanças significativas, entre elas a globalização econômica que promoveu e acelerou, a livre circulação de capitais, mercadorias e, inclusive



em menor grau, a circulação de pessoas. A tecnologia da informação e a comunicação, como sublinha Castells (2017), o poder passou a ser exercido majoritariamente pelos processos de difusão de significados, capaz de converter a infraestrutura comunicacional em principal vetor de transformação econômica e cultural, promovendo acumulação de capital, e por vezes o desemprego, nos casos de substituição da mão de obra por tecnologia. No entanto, enquanto alguns se beneficiaram enormemente dessas mudanças, outros sofreram com a precarização do trabalho, aumento da desigualdade e erosão dos direitos sociais.

Em consequência dessas transformações, a ascensão do neoliberalismo teve um impacto direto sobre a democracia. Nos primeiros anos, parecia haver uma relação harmoniosa entre políticas neoliberais e sistemas democráticos. A liberalização econômica foi acompanhada por uma promessa de maior liberdade individual e participação política. No entanto, ao longo do tempo, tornou-se evidente que o modelo neoliberal também continha sementes de sua própria crise democrática.

A desregulamentação e a privatização, ao promoverem “eficiência econômica”, frequentemente resultaram na concentração de riqueza e poder nas mãos de uma minoria. A desigualdade aumentou significativamente, tanto entre países quanto dentro deles. Este fenômeno corroeu a base social da democracia, sustentada na ideia de uma cidadania igualitária e de um contrato social justo.

Além disso, a influência desproporcional das grandes corporações e do capital financeiro sobre os processos políticos comprometeu a legitimidade das instituições democráticas. A política passou a ser vista como um jogo de elites, distante das preocupações e necessidades da maioria da população. Movimentos sociais e partidos políticos que buscavam alternativas ao modelo neoliberal frequentemente encontraram dificuldade em se estabelecer em um ambiente dominado por interesses econômicos poderosos.



Por outro lado, a crise financeira de 2008 expôs ainda mais as fraquezas do neoliberalismo. O colapso dos mercados financeiros globais levou a uma recessão profunda, e seu impacto foi sentido em todo o mundo. Vários governos foram forçados a intervir massivamente para salvar bancos e empresas, usando recursos públicos para estabilizar a economia. Isso gerou uma profunda desconfiança na capacidade do modelo neoliberal de oferecer estabilidade e prosperidade sustentáveis especialmente para os mais vulneráveis (Castells, 2018).

A resposta a essa crise econômica e a subsequente crise de legitimidade democrática variou entre os países. Em alguns lugares, houve um ressurgimento de movimentos populistas, tanto à direita quanto à esquerda, que capitalizaram a frustração e o descontentamento popular. Esses movimentos frequentemente se apresentaram como antielitistas e prometeram recuperar a soberania popular das mãos de uma elite globalizada. Em outros contextos, surgiram novas formas de autoritarismo que buscavam restringir a liberdade política e controlar a dissidência, frequentemente justificadas como necessárias para garantir a ordem e a segurança em tempos de incerteza econômica (Castells, 2018).

Ao mesmo tempo, podemos observar que houve esforços para repensar e reformular a democracia e também a economia de tal forma que elas pudessem responder aos desafios do século XXI. Nesse sentido, iniciativas buscando implementar a democracia participativa, e a economia solidária, para além da sustentabilidade ambiental buscaram oferecer alternativas ao modelo neoliberal tradicional. Esses esforços significaram uma possibilidade de reconstruir um pacto social mais justo e inclusivo, capaz de enfrentar as desigualdades e as crises que marcaram as últimas décadas.

A ascensão do neoliberalismo e a crise da democracia neoliberal portanto não são fenômenos isolados, mas partes de um processo histórico contínuo (Castells, 2018). Elas revelam as tensões e contradições



inerentes a um modelo econômico que, ao buscar maximizar a liberdade do mercado, frequentemente ignora as necessidades e os direitos da maioria da população. A questão que se coloca para o futuro é a capacidade de aprender com essas crises, construindo uma sociedade capaz de harmonizar os princípios de liberdade na economia com a justiça social, numa proposta de democracia mais inclusiva.

## 2 RACIONALIDADE NEOLIBERAL COMO FORMA DE SUBJETIVAÇÃO E O REFORÇO DAS PAUTAS CONSERVADORAS EM RELAÇÃO À QUESTÕES DE GÊNERO NA AMÉRICA LATINA E NO BRASIL

A racionalidade neoliberal assim como as pautas conservadoras de costumes que emergem no século XXI constituem tecnologias de poder capazes de promover subjetivação significativas em questões de gênero. Tal dinâmica confirma a inflexão descrita por Foucault (1999) ao refletir sobre a passagem de um poder que “fazia morrer ou deixava viver” para aquele que “faz viver e deixa morrer”, convertendo a gestão da vida (biopolítica) em vetor central das estratégias de governo. Esses são temas que emergem como centrais para a compreensão das dinâmicas de poder e controle nas sociedades contemporâneas. Nesse sentido, nos valem das análises propostas por Mauricio Bedoya Hernandez (2020), Alberto Castrillón Aldana (2018) e Byung-Chul Han (2020), que nos oferecem uma perspectiva crítica, capaz de integrar aspectos econômicos, políticos, psicológicos e culturais, revelando, de forma suficientemente nítida como o neoliberalismo molda não apenas as estruturas sociais, mas também constrói os novos sujeitos contemporâneos em suas relações intersubjetivas de gênero.



A racionalidade neoliberal, conforme argumentado anteriormente, é uma forma de governança que se infiltra em todos os aspectos da vida social, quer transformando relações sociais, quer remodelando a subjetividade dos indivíduos (Bedoya, 2018). Nesse processo de subjetivação os indivíduos são incentivados a se ver como empreendedores de si mesmos, responsáveis pelo seu próprio sucesso ou fracasso (Dardot; Laval, 2016). Não requerem para si nenhuma solidariedade, nem por parte do Estado, nem por parte de terceiros, mas também não se responsabilizam pelos mais vulneráveis. Essa atomização promovida entre os indivíduos, para além de retirar das pessoas qualquer perspectiva de cidadania ou compromisso social tem implicações profundas para as questões de gênero, na medida em que “o outro” subalterno ou vulnerável: em razão de gênero, raça ou etnia, não constitui sequer objeto de reflexão em termos de possível inclusão social. Sob a lente de Hernandez e Aldana (2018), essa lógica neoliberal reforça e perpetua desigualdades de gênero, ao mesmo tempo que instrumentaliza pautas conservadoras para manter a ordem social estabelecida.

De outra parte, Byung-Chul Han (2020), em sua obra sobre psicopolítica, argumenta que o neoliberalismo se utiliza de técnicas sutis de controle e manipulação emocional para internalizar formas de dominação e de subjetivação, certamente muito eficientes, buscando controlar o indivíduo de forma direta através de seu aparelho psíquico, mesmo sem que ele tenha consciência disso. Essa abordagem privilegia uma liberdade individual ilimitada (Han, 2020), e alcança profundamente as questões de gênero, onde normas e expectativas tradicionais são reforçadas através de uma combinação de incentivos econômicos e pressões culturais pela competição e desempenho, onde “o outro” é tão somente um competidor a ser vencido.

A psicopolítica neoliberal (Han, 2020), portanto, não apenas perpetua desigualdades de gênero, mas também molda as percepções e



comportamentos dos indivíduos de maneira a sustentar essas desigualdades, encarando-as como falta de competência ou de empenho (Han, 2017). Nesse sentido, Dunker (2017) nos informa que as políticas de sofrimento cotidiano promovem uma “reinvenção da intimidade”, deslocando o mal-estar do plano coletivo para o âmbito privado, responsabilizando o sujeito por gerir, em solitário, suas próprias dores-processo, o que reforça a autogestão afetiva exigida pela racionalidade neoliberal.

No contexto da racionalidade neoliberal, a individualização extrema e a ênfase na autogestão colocam a responsabilidade da desigualdade de gênero sobre os próprios indivíduos. Mulheres e minorias de gênero são incentivadas a “superar” suas circunstâncias através do empreendedorismo e da autossuficiência, sem questionar as estruturas sistêmicas que perpetuam a discriminação e a desigualdade (Dardot; Laval, 2016). Esse discurso de empoderamento individual esconde as barreiras estruturais que dificultam a verdadeira igualdade, transformando a luta por direitos em uma questão de esforço pessoal.

De outra parte, a racionalidade neoliberal instrumentaliza pautas conservadoras para manter a coesão social e a ordem. Movimentos conservadores que promovem visões tradicionais de gênero encontram um terreno fértil no neoliberalismo, para além do neoconservadorismo religioso e vêm na família tradicional (familismo) uma unidade econômica estável e previsível (Bedoya, 2018). A defesa de valores tradicionais de gênero, portanto, não é apenas uma questão cultural, mas também uma estratégia econômica. Essa aliança entre neoliberalismo e conservadorismo reforça normas de gênero que limitam a autonomia e a liberdade das mulheres e das minorias de gênero.

É importante ainda salientar que a psicopolítica neoliberal, mencionada por Han (2020), utiliza ferramentas digitais e a cultura do consumo para perpetuar essas normas. As redes sociais, por exemplo, desempenham um papel crucial na disseminação de ideais de beleza,



comportamento e sucesso que são profundamente enraizados em normas de gênero tradicionais. As expectativas de aparência e comportamento para mulheres são amplificadas por plataformas digitais que promovem um ideal de feminilidade ligado ao consumo e à auto-objetificação. Essas plataformas não apenas refletem, mas também reforçam as desigualdades de gênero, ao moldar as aspirações e os comportamentos dos indivíduos de maneira a sustentar a ordem neoliberal, para além de reforçar a subalternidade do gênero feminino.

Hernandes e Aldana (2018) apontam que essa intersecção entre neoliberalismo e conservadorismo de gênero tem consequências políticas significativas. Em muitos contextos, as políticas neoliberais são acompanhadas por uma retórica conservadora que busca reforçar a ordem social tradicional. Isso se manifesta em políticas que restringem os direitos reprodutivos, limitam a igualdade de casamento e perpetuam a discriminação contra minorias de gênero. A defesa de uma moralidade tradicional é usada como uma ferramenta para desviar a atenção das falhas do neoliberalismo e para consolidar o poder das elites.

Byung-Chul Han (2022) nos lembra de forma extremamente lúcida que a resistência a essa forma de dominação requer uma transformação tanto das estruturas sociais quanto das subjetividades. A luta pela igualdade de gênero não pode ser reduzida a uma questão de ajuste individual, mas deve envolver uma crítica radical às normas e expectativas que sustentam qualquer desigualdade. Isso implica desafiar a lógica neoliberal de autossuficiência e a competição desumana, promovendo valores de solidariedade, cooperação e cuidado.

A resistência às pautas conservadoras de gênero no contexto neoliberal também envolve a criação de espaços e práticas que valorizem a diversidade e a inclusão. Movimentos feministas e LGBTQ+ desempenham um papel crucial na luta por direitos e reconhecimento, mas enfrentam desafios significativos em um ambiente dominado



pela lógica neoliberal. A construção de solidariedades entre diferentes movimentos sociais e a criação de formas alternativas de organização e resistência são essenciais para desafiar o status quo.

Além disso, é fundamental desenvolver uma crítica à instrumentalização da tecnologia na perpetuação das desigualdades de gênero. As plataformas digitais, que prometem empoderamento e conexão, muitas vezes servem para reforçar normas de gênero tradicionais para além de perpetuar a vigilância e o controle. A criação de alternativas digitais que promovam a autonomia e a liberdade verdadeira é uma parte importante da resistência à psicopolítica neoliberal (Han,2020).

Em suma, a racionalidade neoliberal como forma de subjetivação e o reforço às pautas conservadoras em relação a questões de gênero são fenômenos interligados que revelam as profundas contradições e desafios das sociedades contemporâneas. As análises de Mauricio Bedoya Hernandez, Alberto Castrillón Aldana e Byung-Chul Han oferecem uma compreensão crítica das dinâmicas de poder e controle que moldam as subjetividades e as relações de gênero sob o neoliberalismo. A superação dessas desigualdades requer uma transformação radical das estruturas sociais e das subjetividades, promovendo uma sociedade mais justa, inclusiva e livre.

Nesse sentido, é importante salientarmos que a racionalidade neoliberal como forma de subjetivação e o reforço das pautas conservadoras na América Latina, especialmente no Brasil, representam uma convergência crítica dessas dinâmicas econômicas, políticas e culturais. Essa interseção molda as estruturas sociais e as subjetividades, perpetuando desigualdades e limitando a emancipação dos indivíduos.

Na América Latina em geral, observamos que o neoliberalismo penetrou profundamente as esferas públicas e privadas, retomando e reforçando a ideia de que cada indivíduo é responsável por seu próprio destino. Sob essa lógica, a autossuficiência e o empreendedorismo são



exaltados, enquanto as barreiras estruturais que perpetuam a desigualdade são ignoradas. Esse processo de subjetivação transforma os cidadãos em empreendedores de si mesmos, responsáveis por seu sucesso ou fracasso, mascarando a persistência de desigualdades históricas e estruturais.

No Brasil, essa racionalidade neoliberal se alinha com pautas conservadoras, criando uma aliança poderosa entre interesses econômicos e morais. Movimentos conservadores, muitas vezes com forte influência religiosa, promovem uma visão de mundo que reforça normas de gênero tradicionais e discriminações. Essa aliança também instrumentaliza a defesa da família tradicional como uma unidade econômica estável, utilizando-a como um mecanismo para manter a ordem social e desviar a atenção das falhas do neoliberalismo (Bedoya, 2018)

No contexto brasileiro, a resistência a essas dinâmicas é crucial. Movimentos feministas e LGBTQI+ lutam por direitos e reconhecimento em um ambiente adverso, dominado pela lógica neoliberal e conservadora. A construção de solidariedades entre diferentes movimentos sociais e a criação de formas alternativas de organização e resistência são essenciais para desafiar o status quo. Além disso, é fundamental desenvolver uma crítica à instrumentalização da tecnologia na perpetuação das desigualdades de gênero, promovendo alternativas digitais que valorizem a autonomia e a liberdade verdadeira.

Em suma, a racionalidade neoliberal e o conservadorismo na América Latina e no Brasil revelam as contradições e desafios das sociedades contemporâneas. A superação dessas desigualdades requer uma transformação radical das estruturas sociais e das subjetividades, promovendo uma sociedade mais justa (Aldana, 2018).



### 3 O NEOCONSERVADORISMO CRISTÃO E REPERCUSSÕES NEGATIVAS EM RELAÇÃO À IDENTIDADE DE GÊNERO E DIREITOS CONQUISTADOS PELA COMUNIDADE LGBTQI+ (BRASIL)

A ascensão do neoconservadorismo cristão no Brasil tem promovido um impacto negativo significativo nas questões de identidade de gênero e nos direitos conquistados pela comunidade LGBTQI+. Nesse sentido, a análise de Flavia Biroli (2020) nos oferece uma perspectiva crítica sobre como esse movimento, alinhado com a racionalidade neoliberal e pautas conservadoras, tem trabalhado para reverter avanços sociais e perpetuar discriminações estruturais.

O neoconservadorismo cristão no Brasil ganhou força nas últimas décadas, especialmente a partir dos anos 2000, com a ascensão de lideranças religiosas ao cenário político e a crescente influência de grupos evangélicos e católicos conservadores. Esses grupos têm utilizado o discurso religioso para moldar políticas públicas e influenciar a opinião pública, promovendo uma agenda que reforça valores tradicionais de família e sexualidade. Essa movimentação se intensificou com o crescimento das bancadas evangélica e católica no Congresso Nacional, que passaram a ter um papel decisivo na formulação de leis e na direção do debate público (Biroli, 2020).

Um dos pilares do neoconservadorismo cristão é a defesa da “família tradicional”, que, segundo essa visão, é composta por um homem, uma mulher e seus filhos. Essa concepção exclui e marginaliza outras formas de organização familiar e relacionamentos, em particular aqueles que envolvem pessoas LGBTQI+. Ao promover essa visão restritiva de família, o neoconservadorismo cristão não apenas nega a legitimidade das



identidades de gênero e orientações sexuais diversas, mas também trabalha ativamente para minar os direitos dessas comunidades (Biroli, 2020).

No contexto brasileiro, essa ofensiva conservadora teve impactos diretos e negativos sobre a vida das pessoas LGBTQI+. As políticas e retóricas neoconservadoras frequentemente se manifestam em tentativas de revogação de direitos já conquistados, como o casamento igualitário, a adoção por casais homoafetivos e o reconhecimento legal de identidades trans. A influência desses grupos conservadores resultou em projetos de lei e ações judiciais que visam limitar ou reverter esses avanços, colocando em risco os direitos e a segurança da comunidade LGBTQI+ (Vaggione, 2020).

A instrumentalização da religião para justificar discriminação é uma estratégia poderosa do neoconservadorismo cristão. O discurso religioso é usado para naturalizar e legitimar preconceitos, apresentando a heteronormatividade e os papéis de gênero tradicionais como divinamente ordenados. Essa naturalização do preconceito dificulta a contestação e resistência, pois qualquer oposição é frequentemente retratada como um ataque à fé e aos valores morais da sociedade (Biroli, 2020).

A influência neoconservadora não se restringe à esfera legislativa, mas também se manifesta no cotidiano das pessoas LGBTQI+. A retórica conservadora reforça estigmas e alimenta a violência contra essas comunidades. No Brasil, os índices de violência contra pessoas LGBTQI+ são alarmantes, e o discurso de ódio promovido por líderes religiosos e políticos conservadores contribui para a perpetuação desse ciclo de violência e exclusão.

Além disso, o neoconservadorismo cristão tem um impacto negativo sobre a educação e a saúde pública (Biroli, 2020). Em várias ocasiões, houve tentativas de barrar ou modificar diretrizes curriculares que incluíam a discussão sobre gênero e sexualidade nas escolas. Esses movimentos veem a educação inclusiva e progressista como uma ameaça à “moralidade” e à “pureza” das crianças, promovendo uma visão limitada



e discriminatória que perpetua a ignorância e o preconceito. Na área da saúde, a negação de cuidados adequados e respeitosos para pessoas LGBTQI+, especialmente para pessoas trans, é uma consequência direta desse conservadorismo.

Flavia Biroli (2020) aponta que a resistência a essa ofensiva neoconservadora deve ser multifacetada, envolvendo tanto a mobilização política quanto a transformação cultural. A luta pelos direitos LGBTQI+ não pode ser vista apenas como uma questão de políticas públicas, mas deve também englobar a disputa pelos significados culturais e sociais de gênero e sexualidade. Movimentos sociais e organizações da sociedade civil desempenham um papel crucial nesse processo, desafiando a hegemonia conservadora e promovendo uma visão inclusiva e pluralista da sociedade.

A articulação entre neoliberalismo e neoconservadorismo no Brasil também merece atenção. A racionalidade neoliberal, com sua ênfase na autossuficiência e na individualização, frequentemente se alia ao neoconservadorismo para manter a ordem social e econômica. Ambos os discursos promovem a ideia de que as desigualdades são fruto de falhas individuais e não de estruturas sociais, desviando a atenção das críticas sistêmicas e naturalizando a exclusão. Assim, a luta pela igualdade de gênero e pelos direitos LGBTQI+ deve ser entendida como parte de uma luta mais ampla contra as desigualdades estruturais promovidas pelo neoliberalismo.

O neoconservadorismo cristão também se aproveita das crises políticas e econômicas para consolidar seu poder. Em momentos de instabilidade, esses grupos oferecem uma narrativa simplista e moralizadora que promete restaurar a ordem e os “valores tradicionais” (Biroli, 2020). Esse discurso é atraente para muitos, especialmente em contextos de insegurança e incerteza, onde as promessas de estabilidade e moralidade parecem oferecer uma solução para os problemas sociais.



No entanto, a resistência a essa ofensiva conservadora é possível e necessária. A mobilização de movimentos sociais, a criação de alianças entre diferentes grupos progressistas e a promoção de uma educação inclusiva são passos importantes para combater o neoconservadorismo. Além disso, é fundamental desmascarar as contradições e os interesses por trás do discurso conservador, mostrando como ele serve para perpetuar desigualdades e excluir parcelas significativas da população.

A crítica ao neoconservadorismo cristão no Brasil, como articulada por Flavia Biroli, nos convida a uma reflexão profunda sobre os desafios contemporâneos para a igualdade de gênero e os direitos LGBTQI+. É uma chamada à ação para todos aqueles que acreditam em uma sociedade mais justa, inclusiva e democrática. A superação desses desafios requer uma combinação de resistência política, transformação cultural e solidariedade entre todos os que lutam por direitos e reconhecimento.

Em resumo, o impacto negativo do neoconservadorismo cristão no Brasil sobre as questões de identidade de gênero e os direitos da comunidade LGBTQI+ é uma realidade que não pode ser ignorada. A análise de Flavia Biroli oferece um quadro crítico e profundo desse fenômeno, destacando a necessidade urgente de resistência e transformação para garantir uma sociedade mais justa e inclusiva.

## **4 O NEOCONSERVADORISMO RELIGIOSO E O DIREITO NA AMÉRICA LATINA: UMA REALIDADE BRASILEIRA**

Como já mencionamos anteriormente, a ascensão do neoconservadorismo religioso na América Latina está intimamente ligada ao crescimento das igrejas evangélicas e ao fortalecimento do catolicismo conservador. Essas instituições religiosas têm expandido sua influência política, não apenas através de suas congregações, mas também



através da participação direta de seus líderes e fiéis na arena política. Parlamentares e candidatos alinhados com esses grupos religiosos têm sido eleitos para cargos públicos em vários países da região, promovendo uma agenda conservadora que se opõe a direitos reprodutivos, igualdade de gênero e direitos LGBTQI+. À luz de Bourdieu (2007) a expansão das igrejas evangélicas e do catolicismo conservador exprime uma “luta pelo monopólio de capital simbólico”, em que os agentes disputam a autoridade legítima de nomear e classificar o mundo social.

Um dos aspectos mais notáveis desse movimento é a sua capacidade de moldar o discurso jurídico e influenciar a legislação. No Brasil, por exemplo, a Bancada Evangélica tem exercido uma influência significativa no Congresso Nacional, propondo e apoiando leis que restringem o acesso ao aborto, que é permitido apenas em casos específicos, e que limitam o reconhecimento de direitos de pessoas LGBTQI+. Esse impacto legislativo se reflete também em outras partes da América Latina, onde líderes religiosos têm conseguido bloquear ou reverter leis progressistas, utilizando a moralidade religiosa como base argumentativa (Vaggione, 2020).

A influência do neoconservadorismo religioso no direito não se restringe à esfera legislativa. O judiciário também tem sido um campo de batalha crucial. Em vários países, grupos religiosos conservadores têm utilizado ações judiciais para contestar políticas públicas que promovem direitos sexuais e reprodutivos (Vaggione, 2020). No México, por exemplo, a Suprema Corte tem sido chamada a se pronunciar sobre a constitucionalidade de leis estaduais que restringem o aborto, com grupos religiosos ativamente envolvidos no debate judicial. Essas batalhas jurídicas não apenas refletem, mas também reforçam as divisões culturais e políticas em torno dos direitos de gênero e sexualidade.

Nesse sentido observamos o que pontua Vaggione (2020). Ele destaca que o neoconservadorismo religioso se apropria do discurso dos direitos humanos para avançar sua agenda. Paradoxalmente, esses grupos



argumentam que a proteção dos direitos humanos deve incluir a defesa da liberdade religiosa e da “proteção da vida desde a concepção”. Ao reinterpretar os direitos humanos dessa maneira, eles buscam deslegitimar avanços em direitos reprodutivos e direitos LGBTQI+, apresentando-os como uma ameaça aos valores tradicionais e à liberdade religiosa. Essa estratégia tem se mostrado eficaz em mobilizar apoio popular e político, especialmente em contextos onde as instituições democráticas são frágeis e a desconfiança em relação às elites políticas é alta (Vaggione, 2020).

Na arena internacional, o neoconservadorismo religioso na América Latina tem encontrado aliados poderosos. Organizações internacionais e governos que compartilham uma agenda conservadora têm fornecido apoio financeiro e logístico para campanhas contra o aborto e os direitos LGBTQI+. Essa aliança transnacional fortalece os esforços locais para reverter avanços em direitos humanos e cria uma rede de apoio que transcende fronteiras nacionais. O impacto dessa colaboração internacional é particularmente evidente nas estratégias de comunicação e mobilização, que utilizam técnicas sofisticadas de marketing e redes sociais para influenciar a opinião pública.

A resistência ao neoconservadorismo religioso na América Latina, conforme analisado por Vaggione (2020), requer uma abordagem multifacetada que envolve tanto a mobilização social quanto a intervenção jurídica. Movimentos feministas, LGBTQI+ e outros grupos progressistas têm trabalhado para contrapor a narrativa conservadora, promovendo a igualdade de gênero e os direitos sexuais e reprodutivos através de campanhas de conscientização, educação pública e advocacia legal. No entanto, esses movimentos enfrentam desafios significativos, incluindo a necessidade de navegar em um ambiente político e social onde a influência religiosa é profunda e onde os recursos para a mobilização são muitas vezes limitados.



Um exemplo significativo de resistência é a “Marea Verde” na Argentina, (Vaggione, 2020) um movimento massivo que conseguiu mobilizar milhões de pessoas em favor da legalização do aborto. Este movimento não apenas conseguiu mudar a legislação, mas também alterou significativamente o discurso público em torno dos direitos reprodutivos, demonstrando o poder da mobilização social em confrontar o conservadorismo religioso. A vitória da “Marea Verde” serve como um modelo inspirador para outros países da América Latina, mostrando que é possível desafiar e vencer a agenda neoconservadora através da persistência e da solidariedade.

Além da mobilização social, a resistência jurídica é crucial. Advogados e organizações de direitos humanos têm desempenhado um papel vital em defender os direitos conquistados e em contestar juridicamente as tentativas de retrocesso. A formação de redes regionais de defesa dos direitos humanos, que compartilham estratégias e recursos, tem sido uma ferramenta importante para enfrentar os desafios impostos pelo neoconservadorismo religioso. Essas redes permitem uma resposta coordenada e fortalecem a capacidade de resistência frente a uma agenda conservadora bem-organizada e financeiramente sustentada.

## 5 ADVOGADOS E JURISTAS CONFESSIONAIS NO BRASIL

Os advogados e juristas confessionais desempenham um papel crucial na promoção do neoconservadorismo religioso na América Latina. Utilizando-se da linguagem jurídica, esses profissionais reinterpretem os direitos humanos para defender valores religiosos tradicionais, especialmente contra avanços em direitos reprodutivos e LGBTQI+. Ao se posicionarem em tribunais e influenciar políticas públicas, eles retomam o debate jurídico e político, reforçando a agenda conservadora e desafiando



a laicidade do Estado. A atuação desses atores revela a interseção entre fé e direito na luta pelo controle moral e legal (Vaggione, 2020).

Observamos, portanto, que esses advogados e juristas confessionais não são meros atores periféricos, mas sim são players centrais na articulação de um projeto político-religioso que busca reconfigurar o espaço público de acordo com valores religiosos tradicionais. Esse fenômeno se manifesta de maneira evidente em diversas arenas, desde o parlamento até o judiciário, passando por organizações da sociedade civil. Através de suas ações, esses profissionais reinterpretem conceitos jurídicos fundamentais, como os direitos humanos, para justificar a defesa de uma moralidade específica que, em muitos casos, restringe a autonomia e os direitos das mulheres e das minorias sexuais (Vaggione, 2020).

Um aspecto central da atuação dos juristas confessionais é a sua habilidade em utilizar o discurso dos direitos humanos para avançar sua agenda. Paradoxalmente, esses profissionais argumentam que a proteção dos direitos humanos deve incluir a defesa da liberdade religiosa e da “proteção da vida desde a concepção” (Vaggione, 2020). Ao adotar esta postura, eles buscam deslegitimar os avanços em direitos reprodutivos e direitos LGBTQI+, apresentando-os como ameaças aos valores tradicionais e à liberdade religiosa. Essa estratégia é eficaz em mobilizar apoio popular e político, especialmente em contextos onde as instituições democráticas são frágeis e a desconfiança em relação às elites políticas é alta.

A atuação desses juristas também se estende ao campo legislativo, onde influenciam a formulação de políticas públicas que refletem uma moralidade conservadora. No Brasil, por exemplo, a Bancada Evangélica no Congresso Nacional tem sido instrumental na proposição e apoio de leis que restringem o acesso ao aborto e limitam o reconhecimento de direitos de pessoas LGBTQI+. Esse impacto legislativo não se restringe ao Brasil, mas é evidente em outros países da América Latina, onde



lideranças religiosas conseguem bloquear ou reverter leis progressistas através da mobilização de parlamentares e da pressão sobre o executivo.

No judiciário, a influência dos juristas confessionais é igualmente significativa. Em vários países, esses profissionais têm utilizado ações judiciais para contestar políticas públicas que promovem direitos sexuais e reprodutivos. No México, por exemplo, a Suprema Corte tem sido chamada a se pronunciar sobre a constitucionalidade de leis estaduais que restringem o aborto (Vaggione, 2020), com grupos religiosos ativamente envolvidos no debate judicial. Essas batalhas jurídicas não apenas refletem, mas também reforçam as divisões culturais e políticas em torno dos direitos de gênero e sexualidade.

A colaboração entre advogados e juristas confessionais e organizações religiosas é um fator crucial para a eficácia de suas ações. Organizações como a Aliança Defendendo a Liberdade (ADF) têm apoiado financeiramente e logisticamente ações judiciais e campanhas políticas que promovem uma agenda conservadora. Essa aliança transnacional fortalece os esforços locais para reverter avanços em direitos humanos e cria uma rede de apoio que transcende fronteiras nacionais. O impacto dessa colaboração internacional é particularmente evidente nas estratégias de comunicação e mobilização, que utilizam técnicas sofisticadas de marketing e redes sociais para influenciar a opinião pública.

A resistência a essa forma de dominação, por sua vez requer uma abordagem multifacetada que envolve tanto a mobilização social quanto a intervenção jurídica. Movimentos feministas, LGBTQI+ e outros grupos progressistas têm trabalhado para contrapor a narrativa conservadora, promovendo a igualdade de gênero e os direitos sexuais e reprodutivos através de campanhas de conscientização, educação pública e advocacia legal. No entanto, esses movimentos enfrentam desafios significativos, incluindo a necessidade de navegar em um ambiente



político e social onde a influência religiosa é profunda e onde os recursos para a mobilização são escassos.

Além da mobilização social, a resistência jurídica é crucial. Advogados e organizações de direitos humanos têm desempenhado um papel vital em defender os direitos conquistados e em contestar juridicamente as tentativas de retrocesso. A formação de redes regionais de defesa dos direitos humanos, que compartilham estratégias e recursos, tem sido uma ferramenta importante para enfrentar os desafios impostos pelo neoconservadorismo religioso. Essas redes permitem uma resposta coordenada e fortalecem a capacidade de resistência frente a uma agenda conservadora bem-organizada e financeiramente sustentada (Vaggione, 2020).

No entanto, é importante reconhecer que a luta contra o neoconservadorismo religioso não é apenas uma questão de confrontar políticas específicas ou de ganhar batalhas jurídicas. É também uma luta pelo significado e pela interpretação dos direitos humanos, pela definição do espaço público e pela proteção da laicidade do Estado. Advogados e juristas confessionais, ao reinterpretar os direitos humanos através de uma lente religiosa, desafiam os fundamentos laicos da democracia liberal e buscam impor uma moralidade específica sobre a diversidade de crenças e estilos de vida presentes nas sociedades latino-americanas.

A resistência a essa forma de dominação deve, portanto, ser ampla e inclusiva, envolvendo não apenas os movimentos sociais e os profissionais do direito, mas também a sociedade civil em geral. A educação pública sobre os princípios da laicidade e dos direitos humanos é fundamental para contrapor a narrativa conservadora e para promover uma compreensão mais inclusiva e pluralista desses conceitos. Além disso, é crucial fomentar um diálogo inter-religioso que reconheça e respeite a diversidade de crenças, enquanto defende a separação entre religião e Estado como um princípio essencial para a proteção dos direitos de todos os cidadãos.



Em suma, a atuação dos advogados e juristas confessionais na América Latina representa um desafio significativo para a promoção dos direitos humanos e para a manutenção da laicidade do Estado. A análise de Juan Marco Vaggione destaca como esses profissionais utilizam o direito como uma ferramenta para avançar uma agenda conservadora, influenciando tanto a legislação quanto as decisões judiciais. A resistência a essa forma de dominação requer uma abordagem integrada que combine mobilização social, intervenção jurídica e educação pública. Somente através de uma resistência coordenada e persistente será possível defender e avançar os direitos humanos na região, promovendo uma sociedade mais justa, inclusiva e livre.

## 6 NO BRASIL: O PL 1904 DE 2024

O Projeto de Lei 1904/2020, proposto no Congresso Nacional, busca implementar mudanças drásticas na punição para quem pratica o aborto em casos de ilegalidade, elevando a pena de prisão para até 20 anos. Este projeto surge em um contexto político e social já marcado por debates acalorados sobre os direitos reprodutivos das mulheres, e sua análise crítica revela profundas implicações para a saúde pública, direitos humanos e justiça social no Brasil.

Historicamente, o Brasil possui uma das legislações mais restritivas do mundo em relação ao aborto. O Código Penal de 1940 estabelece que o aborto é crime, exceto em três circunstâncias: quando há risco de vida para a gestante, em casos de anencefalia fetal, e quando a gravidez é resultado de estupro. Mesmo nesses casos permitidos, as barreiras para o acesso ao aborto seguro são significativas, incluindo preconceitos sociais, burocracia e a falta de acesso a serviços de saúde de qualidade.



O PL 1904/2020 surge em um contexto em que movimentos conservadores têm ganhado força política, influenciando a agenda legislativa em direção a uma maior criminalização e restrição dos direitos reprodutivos. Esse projeto propõe aumentar drasticamente as penas para quem pratica o aborto em situações ilegais, passando de 1 a 3 anos de detenção para até 20 anos de prisão. Esta mudança radical eleva o aborto ilegal a um nível de punição similar ao de crimes como homicídio qualificado, gerando preocupações significativas sobre suas implicações práticas e éticas.

A elevação das penas propostas pelo PL 1904/2020 pode ter consequências devastadoras para a saúde pública no Brasil. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que a criminalização do aborto não reduz a sua incidência, mas aumenta a taxa de mortalidade e morbidade associada a procedimentos clandestinos e inseguros. Em um cenário onde o aborto é altamente penalizado, as mulheres que não têm recursos para acessar clínicas seguras ou viajar para países onde o procedimento é legal recorrem a métodos arriscados que colocam suas vidas em perigo.

É importante considerar as implicações práticas das políticas públicas. Sob essa lente, o PL 1904/2020, ao promover um aumento nas penas, desconsidera a realidade de milhares de mulheres que, em situação de desespero, que vêm no aborto clandestino sua única saída. Ao invés de proteger a vida, a legislação proposta pode aumentar o número de mortes maternas e complicações de saúde, sobrecarregando ainda mais um sistema de saúde já fragilizado.

O aumento das penas para o aborto ilegal também levanta sérias questões sobre direitos humanos e justiça social, na medida em que políticas punitivas exacerbam as desigualdades sociais, afetando desproporcionalmente as populações mais vulneráveis. No caso do aborto, as mulheres pobres e marginalizadas são as mais impactadas



pela criminalização, uma vez que não possuem os mesmos recursos das mulheres de classes mais altas para acessar procedimentos seguros.

De outra parte, O PL 1904/2020, ao elevar a pena para até 20 anos de prisão, intensifica a criminalização e estigmatização das mulheres que optam pelo aborto. Este projeto ignora as circunstâncias complexas que levam uma mulher a decidir interromper uma gravidez, tratando todas as situações com uma abordagem punitiva extrema. Esta visão simplista e punitivista não resolve as causas subjacentes das gravidezes indesejadas, como a falta de acesso à educação sexual abrangente, contraceptivos e serviços de saúde reprodutiva.

Além das implicações diretas para a saúde e direitos humanos, o PL 1904/2020 também deve ser analisado em termos de seu impacto econômico e social. A criminalização exacerbada do aborto não apenas coloca em risco a vida das mulheres, mas também tem custos econômicos significativos. Os procedimentos clandestinos inseguros geram complicações que requerem tratamentos médicos extensivos, aumentando os custos para o sistema de saúde pública. Além disso, o encarceramento de mulheres por prática de aborto ilegal representa um uso desproporcional de recursos do sistema penal, que poderia ser mais efetivamente direcionado para combater crimes violentos.

Entendemos, pois, que o aumento das penas não resolve os problemas subjacentes das gravidezes indesejadas, nem protege a vida das mulheres. Pelo contrário, intensifica a criminalização e estigmatização, colocando em risco a saúde e a vida das mulheres mais vulneráveis. É crucial que o debate sobre o aborto no Brasil avance para além das medidas punitivas, adotando uma abordagem compassiva e baseada em direitos, que reconheça a complexidade das circunstâncias que levam ao aborto e que promova o acesso a serviços de saúde reprodutiva seguros e de qualidade.



Portanto, em vez de criminalizar ainda mais o aborto, é necessário focar em políticas que garantam o acesso universal à educação sexual, contraceptivos e cuidados de saúde reprodutiva. Só assim será possível promover uma sociedade mais justa e equitativa, onde as mulheres tenham autonomia sobre seus corpos e suas vidas, e onde a saúde e os direitos humanos sejam verdadeiramente respeitados e protegidos.

Isso posto, observamos um retrocesso significativo; quer seja na atividade legislativa e elaboração de leis que tratam dos direitos reprodutivos das mulheres, bem como na sua interpretação e aplicação em sentenças, no poder judiciário. O neoconservadorismo religioso, é necessário constatar, representa uma força poderosa no Brasil e na América Latina, e que busca, de forma reverter, de forma sistemática avanços em direitos humanos, especialmente nas áreas de gênero e sexualidade.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

A interseção entre neoliberalismo e neoconservadorismo na formação da subjetividade de gênero apresenta um panorama complexo e multifacetado, onde as análises de Manuel Castells, Mauricio Bedoya Hernandez, Alberto Castrillón Aldana e Flávia Biroli são cruciais para a compreensão das dinâmicas sociais contemporâneas. Ao final deste exame, emerge uma conclusão crítica sobre como essas correntes ideológicas colaboram para moldar uma realidade que desafia os movimentos progressistas e os direitos das mulheres e minorias de gênero.

Primeiramente, Manuel Castells nos esclarece, com suas reflexões, acerca das transformações sociais levadas a efeito pelo neoliberalismo que abrange, não apenas a economia, mas também a cultura e a identidade dos indivíduos, na medida em que promove, com suas tecnologias de poder a construção de novas subjetividades. Em uma sociedade regida pela lógica



de mercado, os valores de competição, eficiência e individualismo são elevados ao status de “virtudes”, o que condiciona a maneira como as pessoas percebem a si mesmas e aos outros. Essa racionalidade neoliberal promove uma forma de subjetivação onde cada indivíduo é visto como um empreendedor de si mesmo, responsável pelo seu sucesso ou fracasso. Essa visão desconsidera as desigualdades estruturais e as opressões históricas que afetam diferentes grupos sociais, incluindo as mulheres e as minorias de gênero.

No entanto, ao se aliar ao neoconservadorismo, o neoliberalismo encontra uma base sólida para perpetuar e reforçar essas desigualdades. Bedoya Hernandez e Castrillón Aldana elucidam como o conservadorismo de gênero é instrumentalizado para manter a ordem social estabelecida, promovendo uma visão tradicional de família e de papéis de gênero, capaz de promover limites à autonomia decisória das mulheres, assim como a erosão dos seus direitos e os direitos. É importante salientar que essa aliança entre neoliberalismo e conservadorismo não é acidental, mas estratégica: ao promover a estabilidade social através da reafirmação de normas e pautas de costumes tradicionais, o neoliberalismo assegura um terreno favorável para a implementação de suas políticas econômicas.

O impacto dessa aliança é particularmente evidente na América Latina, onde as influências religiosas e culturais conservadoras estão profunda e historicamente enraizadas. Flávia Biroli, ao analisar o contexto brasileiro, pontua como o neoconservadorismo cristão se infiltra nas instituições políticas e jurídicas, buscando adequar leis e políticas públicas de maneira a restringir os direitos reprodutivos e a liberdade sexual. Essa retórica moralizante e excludente do neoconservadorismo cristão não apenas busca reverter os avanços, no tocante aos direitos humanos conquistados pelas mulheres e pela comunidade LGBTQI+, mas também e sobretudo, legitima e procura perpetuar a dominação política e cultural de grupos conservadores.



A conjugação dessas forças ideológicas apresenta sérios desafios para os movimentos feministas e LGBTQI+. Em um cenário onde a racionalidade neoliberal e os valores neoconservadores se reforçam mutuamente, a luta por direitos e reconhecimento se torna mais árdua. As políticas públicas que emergem desse contexto tendem a perpetuar as desigualdades e a marginalizar ainda mais aqueles que já se encontram em posição de vulnerabilidade. As mulheres, especialmente as de baixa renda e as minorias de gênero, enfrentam barreiras crescentes ao acesso a serviços de saúde, educação e justiça.

Contudo, a resistência a essa dominação não é impossível. A análise crítica de Castells, Bedoya Hernandez, Castrillón Aldana e Biroli oferece insights valiosos sobre os pontos de articulação entre neoliberalismo e conservadorismo que podem ser desafiados. Reconhecer a interconexão entre essas correntes ideológicas permite a formulação de estratégias de resistência que abordem não apenas os sintomas, mas as causas profundas da opressão e da desigualdade.

Por exemplo, promover uma educação que desnaturalize as normas de gênero e questione a lógica neoliberal de autossuficiência pode ajudar a construir uma cultura de solidariedade e cooperação. Além disso, políticas públicas orientadas para a justiça social e os direitos humanos, que reconheçam e combatam as desigualdades estruturais, são essenciais para contrapor a agenda neoliberal e conservadora. Movimentos sociais que unam esforços em torno de uma agenda comum de direitos reprodutivos, igualdade de gênero e inclusão social podem criar uma frente poderosa contra a dominação conservadora.

A construção de alianças internacionais e o fortalecimento das redes de apoio entre movimentos feministas e LGBTQI+ também são cruciais. A troca de experiências e a solidariedade global podem fornecer os recursos e o apoio necessários para enfrentar os desafios locais. O fortalecimento dessas redes pode ajudar a pressionar os governos a



adotarem políticas mais inclusivas e a respeitar os direitos humanos, mesmo em contextos politicamente adversos.

Em conclusão, a interseção entre neoliberalismo e neoconservadorismo representa um desafio significativo para a luta por direitos e igualdade de gênero. A análise crítica de Manuel Castells, Mauricio Bedoya Hernandez, Alberto Castrillón Aldana e Flávia Biroli oferece um entendimento profundo das dinâmicas de poder e das estratégias de dominação que moldam a subjetividade e as relações de gênero no mundo contemporâneo. Para superar essas barreiras, é essencial adotar uma abordagem multifacetada que combine crítica teórica, ação política e solidariedade global, promovendo uma sociedade mais justa, igualitária e inclusiva.

## REFERÊNCIAS

BEDOYA-Hernández M, CASTRILLÓN-Aldana A. Psicociencias y gobierno de la subjetividad. **Iatreia**. 2018 Jan-Mar;31(1): 18-28. DOI 10.17533/udea.iatreia.v31n1a02.

BIROLI, Flávia. Gênero, “valores familiares” e democracia *In*: BIROLI, Flavia; MACHADO; Maria Campos das Dores; VAGIONNE, Juan Marcos. **Gênero, neoconservadorismo e democracia**. São Paulo: Boitempo, 2020.

BOURDIEU, Pierre. Gênese e estrutura do campo religioso. *In*: BOURDIEU, P. **economia das trocas simbólicas**. São Paulo: Perspectiva, 2007.

CASTELLS, Manuel. O poder da comunicação. 2ª ed. São Paulo, SP: Editora Paz e Terra, 2017.



CASTELLS, Manuel. *Ruptura A Crise da Democracia Liberal*, 1ª ed. Rio de Janeiro, Editora Zahar, 2018.

DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. **A nova razão do mundo**: ensaio sobre a sociedade neoliberal. São Paulo, SP: Boitempo, 2016. 416 p. (Coleção Estado de Sítio). Tradução de Mariana Echalar.

DUNKER, Christian Ingo Lenz. **Mal-estar, sofrimento e sintoma**: uma psicopatologia do Brasil entre muros. São Paulo, SP: Boitempo, 2015. 416 p. (Coleção Estado de Sítio).

FOUCAULT, Michel. **Em Defesa da Sociedade**: Curso no Collège de France (1975-1976). 1. ed. São Paulo, SP: Martins Fontes, 1999. 386 p. Coleção: Tópicos. Tradução de Maria Ermantina Galvão.

FOUCAULT, Michel. **O nascimento da biopolítica**: Curso dado no Collège de France (1978-1979). São Paulo, SP: Edições 70, 2008. 452 p.

HAN, Byung-Chul. *Psicopolítica: o neoliberalismo e as novas técnicas de poder*. 7. ed. Belo Horizonte, MG: Âyiné, 2020. 124 p. Tradução de Maurício Liesenn.

HAN, Byung-Chul. **Infocracia**: digitalização e a crise da democracia. 1. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2022. 112 p. Tradução de Gabriel S. Philipso.

HAN, Byung-Chul. **Psicopolítica**: o neoliberalismo e as novas técnicas de poder. 7. ed. Belo Horizonte, MG: Âyiné, 2020. 124 p. Tradução de Maurício Liesenn.

HAN, Byung-Chul. **Sociedade do cansaço**. 2. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2017. 136 p.

VAGGIONE, Juan Marco. *A restauração legal: o neoconservadorismo e o direito na América Latina* *In*: BIROLI, Flavia; MACHADO, Maria das Dores Campos; VAGGIONE, Juan Marco **Gênero, neoconservadorismo e democracia**. São Paulo: Boitempo, 2020.



# O SUPERENDIVIDAMENTO COMO UMA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DA CLASSE TRABALHADORA

Rosângela da Silva Almeida<sup>1</sup>

## INTRODUÇÃO

Este capítulo faz uma análise teórica, jurídica e social do superendividamento, complementando-a com dados advindos da experiência profissional em um projeto social no atendimento a famílias nessa situação. Pode-se definir, primeiramente, superendividamento como a impossibilidade global do devedor-pessoa física, consumidor<sup>2</sup>, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo (Marques, 2006). Ampliando-se a compreensão de superendividamento, ele pode ser visto como uma refração da questão social, apreendida como o conjunto das expressões de desigualdades da sociedade capitalista; em sendo desigualdade, é também rebeldia, por envolver sujeitos que vivenciam as desigualdades e a elas resistem e se opõem (Iamamoto, 1999).

O núcleo da questão social são as desigualdades e injustiças que se estruturam na realidade, ocasionadas pelas profundas assimetrias nas relações sociais, expressas principalmente pela concentração de poder e

<sup>1</sup> Doutora e Mestra em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul; Assistente Social; Professora do curso de graduação em Serviço Social e coordenadora do curso de especialização em Direitos Humanos e Políticas Públicas, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos; Integrante do Projeto de Apoio às Famílias em Situação de Superendividamento, da mesma Universidade; Membro da Coordenação da Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos, Região do Estado do Rio Grande do Sul. E-mail: rosangelasilvaa@unisinos.br.

<sup>2</sup> Embora neste trabalho seja usado o termo *consumidor*, utilizado nas legislações, não se faz aqui a análise da pessoa ou família em situação de superendividamento entendendo-a como mera consumidora, uma vez que tal visão reforça a condição dos/as trabalhadores/as de subjugação à classe burguesa e, principalmente, os/as coloca em condição passiva em face do capital financeiro. Opta-se por chamá-los de cidadãos superendividados, respeitando-se, no entanto, o termo *consumidor* nos escritos das leis.



de riqueza em certos setores e classes sociais (Castel *et al.*, 2000). Sendo o superendividamento uma expressão da questão social, é também uma violação dos direitos humanos<sup>3</sup>, pois coloca as pessoas em situação de extrema vulnerabilidade e risco social<sup>4</sup>.

Sabe-se que o superendividamento é uma realidade nas sociedades de capitalismo avançado, onde o crédito passou a ser extremamente facilitado e acessível a quase todos, sendo, na maioria das vezes, até incentivado para a obtenção dos bens de consumo disponíveis no mercado, que nem sempre vêm ao encontro das necessidades imediatas das pessoas. É fenômeno econômico e jurídico que tem intensas consequências sociais e psíquicas na vida de quem se torna superendividado. Trata-se de uma situação mundial, muito agravada com a pandemia de Covid-19, que, no Brasil, acarretou uma grande crise sanitária, econômica, política, cultural e ideológica.

É nessa esteira de compreensão da realidade do superendividamento que se disserta, no primeiro item, sobre superendividamento atrelado à abertura do crédito bancário às camadas mais pobres da população brasileira como estratégia de expansão do capital financeiro e sobre a proteção jurídica ao cidadão brasileiro superendividado. No segundo item, discute-se sobre as decorrências sociais do superendividamento, e apresentam-se algumas orientações para as famílias não se tornarem superendividadas. Por último, trazem-se as considerações finais, evidenciando o risco da naturalização do superendividamento da classe trabalhadora e a importância da criação de uma política pública que

---

<sup>3</sup> Os direitos humanos são um conjunto de valores éticos e políticos, ressignificados e ampliados ao longo do tempo para promover e proteger a dignidade da vida humana de todas as pessoas, sem nenhuma distinção de raça, nacionalidade, religião, gênero, orientação sexual, idade e condição física, social ou cultural (Viola; Zenaide, 2014). São muito recentes na sociedade brasileira. Não se realizaram ainda. Surgiram na luta da sociedade brasileira pela democracia e pela liberdade e contra a Ditadura (c).

<sup>4</sup> São os riscos que o cidadão e suas famílias enfrentam na trajetória de seu ciclo de vida em decorrência de imposições sociais, econômicas e políticas e de ofensas à dignidade humana, quais sejam: risco pessoal, risco social e risco circunstancial.



incorpore o superendividamento como pauta de educação em direitos humanos, uma vez que se entende esse fenômeno como desencadeador de violação de direitos humanos.

## 1 O SUPERENDIVIDAMENTO DA CLASSE TRABALHADORA: COMO GARANTIR OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DIANTE DA ASCENDENTE ABERTURA DE CRÉDITO?

O superendividamento da classe trabalhadora tem sido alvo de preocupação, tanto em âmbito nacional quanto internacional. O Estatuto da Cidadania do Mercosul, tendo como base a Resolução nº 124/1996 do Grupo do Mercado Comum (GMC) (Mercosul, 1996), lista um rol de direitos básicos dos trabalhadores na condição de consumidores. Para tanto, elenca como garantias do consumidor: a proteção da vida, saúde e segurança; o direito à educação e informação sobre o consumo adequado de produtos e serviços; a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva; o direito à efetiva prevenção e reparação de danos; o direito de acesso aos órgãos judiciais e administrativos; o direito de associação em organizações e a uma adequada e eficaz prestação dos serviços públicos ou privados (Vieira; Frainer, 2021).

Para fins deste trabalho, ter-se-ão como definições balizadoras as seguintes: o superendividamento caracteriza-se pela impossibilidade global do devedor em adimplir com suas dívidas vencidas ou vincendas, excluindo-se as alimentares, as com o fisco e as decorrentes de delitos. Subdivide-se em ativo e passivo. O superendividamento ativo é caracterizado pela acumulação inconsiderada de dívidas, ou seja, ocorre quando as pessoas gastam de forma descontrolada e acima de seu padrão financeiro. Há uma subdivisão do superendividamento ativo em consciente e inconsciente. O superendividado ativo consciente é aquele que contrai dívidas tendo



plena certeza de que não poderá honrá-las. Já o superendividado ativo inconsciente é aquele que não realizou o controle dos seus gastos e os fez de forma impulsiva. Aqui, o trabalhador consumidor é vítima das armadilhas do mercado (LOBO; COSTA, 2021). O superendividamento passivo, por sua vez, refere-se à situação em que há uma redução brutal dos recursos devido aos riscos da vida, ou seja, a inadimplência ocorreu de forma involuntária, podendo ter decorrido da perda do emprego ou de problemas de saúde, entre outros fatores (Lobo; Costa, 2021).

No subitem a seguir, traz-se um breve panorama histórico da abertura do crédito bancário às camadas da população brasileira.

## 1.1 A ABERTURA DO CRÉDITO BANCÁRIO À CLASSE TRABALHADORA BRASILEIRA E A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES: COMO EQUILIBRAR ESSA BALANÇA?

No Brasil, nos anos 1980, a década considerada economicamente perdida, mas com presença marcante dos movimentos sociais, houve uma diminuição de recursos para empréstimos. Para se adquirir um cartão de crédito em 1987, era necessária a comprovação de renda com, no mínimo, cinco salários-mínimos. Dez anos mais tarde, já era possível ter um cartão de crédito com renda mensal de R\$ 200,00 e, em alguns casos, sem pagamento de anuidade. Na década de 1980, os principais superendividados eram os pequenos proprietários e agricultores.

Nos anos 1990, com a perspectiva neoliberal (advento do Estado mínimo, da mundialização e financeirização do capital) dos governos Fernando Collor de Melo e Fernando Henrique Cardoso, ocorreu a abertura financeira, dinamizando o Sistema Financeiro Nacional (SFN) e possibilitando a criação e a expansão de uma série de produtos e serviços financeiros, que passaram a ser oferecidos aos estratos da classe



trabalhadora até então “excluídos” do acesso ao crédito. Os anos 2000 seguem a mesma linha da década 1990, entretanto, com ritmo mais acelerado. O processo de crescimento exponencial dos créditos no Brasil deu-se muito mais para o “capital financeiro” do que para o consumo dos trabalhadores. A abertura aos bancos privados, a privatização de bancos regionais, os refinanciamentos das dívidas, as altas taxas de juros que beneficiam as transações bancárias e o incremento dos bancos públicos de investimento, com destaque ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), nos anos 2000, auxiliaram na concentração de capital e potencializaram o deslocamento de excedentes para obras de infraestrutura na segunda metade dessa década.

No Brasil, entre os anos 2000 e 2015, os produtos e serviços financeiros passaram a ser ofertados para as diversas frações de renda dos trabalhadores assalariados. Foi um fenômeno que caracterizou a chamada “bancarização dos indivíduos”, ou seja, o acesso mais efetivo da classe trabalhadora aos financiamentos bancários. Na contramão, crescia a desproteção social, remetendo a população à situação de vulnerabilidade social. Em 2007, o público-alvo das empresas de cartão de crédito era a população urbana, com idade superior a 18 anos e renda mensal mínima de R\$ 250,00, portanto, de baixa renda. No mesmo ano, já existiam 83 milhões de cartões de crédito, sendo 15 milhões para trabalhadores com renda de até R\$ 500,00. O número de trabalhadores com essa renda que tinha adquirido cartão de crédito era 5 milhões no ano 2000 (Barone; Sader, 2008).

Em 2010, mantém-se esse público-alvo, mas há focalização das estratégias nos idosos aposentados ou pensionistas, que hoje são considerados hipervulneráveis<sup>5</sup>. Segundo a Pesquisa de Endividamento

<sup>5</sup> A vulnerabilidade abarca todos os consumidores, mas alguns a expressam de forma acentuada, sendo considerados mais frágeis, ou seja, hipervulneráveis; como exemplo, podemos citar as crianças, os portadores de doença celíaca e os idosos. A hipervulnerabilidade da pessoa idosa, em decorrência de sua condição especial, manifesta-se de diversas maneiras, como na dificuldade de interpretação dos contratos, nas fraudes, na saúde frágil e na publicidade enganosa (Lobo; Costa, 2021). A dificuldade de acesso ao crédito, como se viu, deu lugar a um “marketing agressivo”, constatado atualmente,



e Inadimplência do Consumidor (PEIC) da Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços (CNC), 73,4% das famílias endividadadas tinha algum tipo de dívida com cartão de crédito em março de 2015.

O que se notou é que o crédito, que até certo período era destinado somente às empresas ou cidadãos que apresentavam comprovação de renda ou propriedades, passa a ser também oferecido para frações assalariadas de médio, baixo ou nenhum rendimento. A particularidade brasileira desse crescente endividamento situa-se, principalmente, nos seguintes produtos e serviços financeiros: cartão de crédito; crédito consignado a aposentados e pensionistas, Lei n. 10.820 (Brasil, 2003); crédito imobiliário, priorizando as camadas de rendimentos mais baixos nos anos 2000, principalmente com os recursos disponíveis para o programa Minha Casa, Minha Vida após 2009; e crédito para compra de automóveis. Tal situação difere da de países como os Estados Unidos, em que esse papel predominante está no crédito imobiliário e seus derivativos. O recurso ao crédito rotativo do cartão de crédito é uma armadilha que aprisionou os trabalhadores de rendas mais baixas, estratégia essa que faz parte da política dos grandes bancos.

Atualmente, muitas instituições financeiras focaram suas ofertas de cartão de crédito e créditos consignados a aposentados, pensionistas e famílias que recebem benefícios sociais da Política Nacional de Assistência Social, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC)<sup>6</sup> e o Programa

---

que valoriza “necessidades imaginárias”, com a finalidade de atingir consumidores e incentivá-los a consumir, gerando lucratividade. Dessa forma, os fornecedores passaram a investir nesse tipo de *marketing* tendo em vista os idosos, com a ideia de que consumir é bom e de que contrair empréstimo trará mais conforto e comodidade na terceira idade, mas não deixam claras as reais condições do negócio jurídico, que geralmente tem altas taxas de juros, comprometendo a renda do idoso e pondo-o em situação de risco (Lobo; Costa, 2021).

<sup>6</sup> O Benefício de Prestação Continuada – BPC, previsto na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, é a garantia de um salário-mínimo por mês ao idoso com idade igual ou superior a 65 anos ou à pessoa com deficiência de qualquer idade. No caso da pessoa com deficiência, esta condição tem de ser capaz de lhe causar impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo (com efeitos por pelo menos dois anos), que a impossibilite de participar de forma plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Para ter direito ao BPC, é necessário que a renda por pessoa do grupo familiar seja igual ou menor que 1/4 do salário-



Bolsa Família (PBF)<sup>7</sup>. Há um investimento grande em propagandas dessas instituições para o uso desses benefícios, que até há pouco tempo não podiam ser considerados como renda para adquirir empréstimos ou cartões de crédito por serem benefícios sociais concedidos a pessoas e famílias que já se enquadram em algum tipo de vulnerabilidade social.

Na esteira de garantia ao trabalhador consumidor, no Brasil, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) busca proteger o sujeito, tendo a vulnerabilidade<sup>8</sup> como seu vetor. Descreve, no artigo 4º, que a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo atender às necessidades dos consumidores, respeitar sua dignidade, saúde e segurança, proteger seus interesses econômicos, melhorar sua qualidade de vida, bem como promover a transparência e harmonia das relações de consumo, atendendo a princípios como o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo (princípio I) e a prevenção e tratamento do superendividamento, como forma de evitar a exclusão social do consumidor (princípio X) (Saraiva, 2023). Para a execução dessa política, o art. 5º enuncia que o poder público usará como instrumentos:

VI – instituição de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor pessoa natural (Inciso acrescido pela Lei nº 14.181, de 1º/7/2021) e

---

mínimo (Brasil, 1993).

<sup>7</sup> O Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda do Brasil. O Governo Federal relançou o programa com mais proteção às famílias, com um modelo de benefício que considera o tamanho e as características familiares; as famílias com três ou mais pessoas passarão a receber mais do que uma pessoa que vive sozinha. Para ter direito ao Bolsa Família, a principal regra é que a renda de cada pessoa da família seja de, no máximo, R\$ 218,00 por mês. Para mais informações, consultar o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Disponível em: <https://www.gov.br/mds/pt-br/acoes-e-programas/bolsa-familia>.

<sup>8</sup> A situação de vulnerabilidade do trabalhador consumidor abrange: a vulnerabilidade técnica, que é o desconhecimento acerca dos produtos e serviços (inclui-se aqui a vulnerabilidade informacional); a vulnerabilidade jurídica, que diz respeito à insciência dos contornos jurídicos do negócio e de suas repercussões econômicas; e a vulnerabilidade socioeconômica, consubstanciada na falta de condições sociais e econômicas para fazer face à relação contratual de consumo (Aquino Júnior, 2021).



VII – instituição de núcleos de conciliação e mediação de conflitos oriundos de superendividamento (Inciso acrescido pela Lei nº 14.181, de 1º/7/2021) (Saraiva, 2023).

Nessa linha, a referida legislação enumera, no Art. 6º, os direitos básicos do consumidor:

I – a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

II – a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (Inciso com redação dada pela Lei nº 12.741, de 8/12/2012, publicada no DOU de 10/12/2012).

IV – a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

VI – a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

VII – o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

XIII – a informação acerca dos preços dos produtos por unidade de medida, tal como por quilo, por litro, por

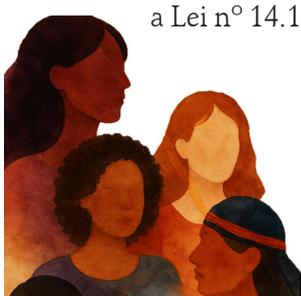


metro ou por outra unidade, conforme o caso. (Inciso acrescido pela Lei nº 14.181, de 1º/7/2021);

Parágrafo único. A informação de que trata o inciso III do caput deste artigo deve ser acessível à pessoa com deficiência, observado o disposto em regulamento. (Parágrafo único acrescido pela Lei nº 13.146, de 6/7/2015, publicada no DOU de 7/7/2015) (Saraiva, 2023).

De acordo com Marques, Lima e Vial (2020), é necessária uma mudança de cultura. Deve-se abandonar a cultura da dívida e da exclusão dos consumidores, em que se ganha com a concessão irresponsável de crédito a pessoas que nem sequer podem pagá-lo, sem lhes entregar cópia do contrato e utilizando-se publicidades enganosas sobre crédito fácil e publicidades abusivas sobre o crédito com juros zero. É preciso passar para a cultura do pagamento, com melhor informação, avaliação da possibilidade de pagamento dos consumidores e responsabilização dos intermediários e agentes bancários, com maior boa-fé e lealdade no mercado de crédito brasileiro.

O Banco Mundial adverte (*Report on the Treatment of the Insolvency of Natural Persons*) que, para países como o Brasil, que ainda não conhecem uma saída legal digna para as pessoas físicas endividadas, a única solução de retomada é aprovarem uma legislação para combater o superendividamento, a qual permita aos consumidores pagarem suas dívidas, após o plano de pagamento que preserve o mínimo existencial. No Brasil, esta “solução”, que inclui dois capítulos novos no Código de Defesa do Consumidor (um de prevenção e outro de tratamento, com plano de pagamento conciliatório em bloco e plano compulsório para os que não conciliaram), era prevista no Projeto de Lei 3515, 2015 (Marques; Lima; Vial, 2020). Depois de muitos anos de discussão, foi aprovada, em 1º de julho de 2021, uma das atualizações do Código de Defesa do Consumidor, a Lei nº 14.181, para a prevenção e o tratamento do superendividamento,



com vistas a evitar a exclusão social e o comprometimento do mínimo existencial do trabalhador consumidor.

O artigo 54-A, Lei nº 14.181, define superendividamento como:

§ 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

A mesma lei descreve, em seu artigo 54-B, que o fornecedor ou o intermediário deverá informar o consumidor, prévia e adequadamente, no momento da oferta, sobre:

I - o custo efetivo total e a descrição dos elementos que o compõem;

II - a taxa efetiva mensal de juros, bem como a taxa dos juros de mora e o total de encargos, de qualquer natureza, previstos para o atraso no pagamento;

III - o montante das prestações e o prazo de validade da oferta, que deve ser, no mínimo, de 2 (dois) dias;

IV - o nome e o endereço, inclusive o eletrônico, do fornecedor;

V - o direito do consumidor à liquidação antecipada e não onerosa do débito, nos termos do § 2º do art. 52 deste Código e da regulamentação em vigor (Brasil, 2021).

No entanto, por meio de pesquisa documental<sup>9</sup> nas fichas de atendimento e relatórios sociais do Projeto Apoio às Famílias em Situação de Superendividamento<sup>10</sup>, que teve como objetivo geral contribuir para a

---

<sup>9</sup> Para maiores informações, consultar: PEREIRA, Letícia Maria; ALMEIDA, Rosângela da Silva. O superendividamento na vida das trabalhadoras e dos trabalhadores: por um olhar para além do aparente. Curitiba: Appris, 2020.

<sup>10</sup> Para mais informações, consultar a rede social: <https://www.instagram.com/projetoapoio.uni.sinos>.



superação da situação de superendividamento, com preservação do mínimo existencial, na perspectiva da garantia de direitos, do fortalecimento da autonomia e dos vínculos familiares e comunitários, vinculado à ação social da Universidade do Vale do Rio do Sinos (UNISINOS), constata-se que a maioria das informações previstas na referida lei não é fornecida de forma clara às pessoas que buscam o crédito ou que são buscadas para adquiri-lo. Na experiência de atendimento de oito anos no Projeto Apoio, percebe-se que a maioria das pessoas acolhidas nem sequer tem cópia do contrato e desconhece, em minúcia, o que contratou. Algumas delas são alheias às formas pelas quais adquiriram cartões de crédito ou créditos consignados. Nessa linha, o CDC (Saraiva, 2023), no art. 39, inciso IV, veda as práticas abusivas dos credores sobre a fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (Saraiva, 2023).

Em contraposição a essas violações de direitos, a nova Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021) prevê, no artigo 104-A, a repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por um juiz ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas. Nessa audiência, o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos, preservado o mínimo existencial.

Diferentemente das audiências de conciliação anteriores a essa lei, os credores são convocados, e não convidados, a comparecer nesse espaço. O não comparecimento acarreta sanções, previstas no artigo 104-A da referida lei:

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da



mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória (Brasil, 2021).

Caso o credor não aceite a proposta, estará sujeito à repactuação judicial da dívida, que pode ser instaurada a pedido do consumidor e terá efeitos sobre todos os credores que não aceitarem o acordo ou não comparecerem em audiência. O credor será intimado para juntar documentos e apresentar uma resposta em 15 dias. Depois disso, o juiz fixará um plano compulsório para pagamento das dívidas que não foram incluídas em acordo (Art. 104-B, CDC, Saraiva, 2023). Essa alteração ao CDC 2023 é o parâmetro legal de proteção ao trabalhador, que historicamente é vítima das decorrências do superendividamento. No entanto, a igualdade de proteção entre trabalhadores e credores, no âmbito jurídico, encontra-se distante, visto que a nova lei do superendividamento ainda não foi aplicada em muitas comarcas do estado do Rio Grande do Sul. Naquelas em que a lei já está sendo aplicada, existem dúvidas e interpretações diferenciadas do sentido atribuído pelas juristas que a escreveram, merecendo um debate mais aprofundado.

## **2 PARA ALÉM DOS ASPECTOS JURÍDICOS E ECONÔMICOS: CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS DO SUPERENDIVIDAMENTO**

É preciso romper com as explicações dominantes e reducionistas que abordam o superendividamento apenas sob a ótica do tratamento econômico ou jurídico. Há um preconceito quando essas situações são analisadas sob os aspectos sociais e estruturais, visto que são tratadas



como problemas, como, por exemplo, problemas de ingerência de dívidas e/ou compulsão a compras – não que esses casos não ocorram, mas não são a maioria. Na verdade, é preciso desmistificar algumas questões, pois, quando se refaz o percurso do superendividamento das famílias, se encontram muitas lacunas e incongruências, que precisam ser examinadas sob os pontos de vista da economia política, da história e da sociologia, só para citar alguns, imprescindíveis para tal entendimento. É impossível trazê-los aqui detalhadamente, mas estarão imersos nas afirmações aqui expostas.

Entende-se que é importante trazer a realidade dos assistidos no Projeto Apoio às Famílias em Situação de Superendividamento. Quanto ao principal motivo do não pagamento da(s) dívida(s), as pessoas atendidas relataram ser por desemprego e doença pessoal e familiar. Em pesquisa realizada nos documentos do Projeto em 2019, 58,9% das pessoas atendidas identificaram essas causas para sua situação de superendividamento (Almeida; Lauxen, Oliveira, 2019). É importante lembrar que, após o período desta pesquisa, a classe trabalhadora vivenciou um cenário de crise sanitária, econômica e política, em decorrência da pandemia do novo coronavírus, que desencadeou o acirramento da terceirização, do teletrabalho, do trabalho por aplicativos (uberização) e da volta do trabalho em domicílio, com adoecimento e mortes em massa, grande desinformação sobre direitos e desproteção social acentuada.

De acordo com o “Boletim Emprego em Pauta”, do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE, 2020), que apresentou os primeiros impactos da pandemia de Covid-19 no mercado de trabalho, 18,5 milhões de brasileiros não trabalharam e não procuraram ocupação devido à pandemia, 19 milhões de pessoas foram afastadas do trabalho, e 30 milhões tiveram alguma redução no rendimento do trabalho. As perdas de rendimento foram maiores entre os ocupados dos serviços, do comércio e da construção e entre



os trabalhadores informais. Também houve reduções expressivas de rendimento entre os ocupados em serviços essenciais na pandemia, como os entregadores e os trabalhadores da saúde e da limpeza. A redução média de rendimento foi de 61% (Boletim em pauta, 2020). Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Bolzani; Martins; Muraro, 2023), 4,7 milhões de pessoas foram afastadas do trabalho devido ao isolamento social (Bolzani; Martins; Muraro, 2023).

Contratos de trabalho foram suspensos, fundamentados na Medida Provisória 936 (Brasil, 2020a), que instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, o qual autorizou os empregadores, temporariamente, a reduzirem salários em percentuais de 25%, 50% ou 75% (por acordo individual ou coletivo) e jornadas de trabalho (por até 90 dias) ou a suspenderem contratos de trabalho (até 60 dias), com direito a estabilidade temporária do empregado e recebimento de benefício emergencial pago pelo governo. As medidas também se aplicaram a empregados domésticos, aprendizes e pessoas com jornadas de trabalho parciais.

A pandemia de Covid-19 colaborou para uma perda média de 12,5% na renda dos trabalhadores da Região Metropolitana de Porto Alegre<sup>11</sup>, sendo a quarta região com maior queda, quando comparada com outras regiões metropolitanas do Brasil, ficando atrás somente de Maceió, Salvador e Recife. A perda da renda na metrópole de Porto Alegre é o dobro da média das demais regiões metropolitanas e do Brasil como um todo (ObservaSinos, 2020).

A Região Metropolitana de Porto Alegre/RS, onde a UNISINOS se situa e desenvolve o Projeto Apoio às Famílias em Situação de Superendividamento, foi uma das regiões do estado que mais tiveram postos de trabalhos formais fechados e onde mais ocorreu queda na renda

---

<sup>11</sup> Município do estado do Rio Grande do Sul, Brasil.



do trabalho durante a **pandemia** do novo coronavírus. Embora mais de 1 milhão de pessoas estivessem recebendo recursos do Auxílio Emergencial<sup>12</sup>, mais de 270 mil pessoas recorreram a empréstimos com instituições financeiras, amigos e parentes. As mulheres foram as que mais buscaram empréstimos no período pandêmico (Observasinos, 2020).

Bucar e Pires (2021) já alertavam sobre a supremacia do endividamento das mulheres, quando fizeram uma análise de estatísticas fornecidas pelo IBGE e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o pedido de alimentos, entre os anos 2016 e 2018. Constataram que as pessoas do gênero feminino são as que mais se encontravam em situação de superendividamento. A análise das estatísticas demonstrou que as faixas etárias em que ocorre expressivo número de endividamento feminino coincidem com os períodos em que sobrevêm o desemprego (em torno dos 34 anos) e o divórcio (dos 30 aos 44 anos). Nos limites do casamento e da divisão sexual do trabalho, das tarefas domésticas e do cuidado dos filhos e da casa, a dependência econômica da mulher em relação ao homem se sobressai. Os autores destacaram que o divórcio impacta o patrimônio do qual a mulher é titular e pode levá-la à insolvência.

Além das consequências da pandemia por Covid-19, o Brasil, especificadamente o Estado do Rio Grande do Sul, foi acometido por uma das maiores enchentes de sua história entre o final de abril e início do mês de maio de 2024, sendo afetado mais de 60% do território estadual. Estima-se que mais de 2,4 milhões de pessoas foram atingidas, ficando desalojadas. Houve 183 mortes confirmadas, sendo a maioria homens acima de 60 anos (ObservaSinós, 2025).

As circunstâncias até aqui apresentadas vêm ao encontro das assertivas de Marques (2006, p. 258), quando afirma que “o

<sup>12</sup> Auxílio emergencial instituído pela Lei 13.982/2020, que previu o repasse de R\$ 600,00 mensais a trabalhadores informais e de baixa renda, microempreendedores individuais e contribuintes individuais do Instituto Nacional de Seguro Social, para enfrentamento da pandemia por Covid-19 (Brasil, 2020b).



superendividamento pode ser causado pelos acidentes da vida, tais como o desemprego, a diminuição de salários, a morte ou doença na família, o divórcio, acidentes, redução de carga horária ou de salário [...]”.

Ademais, diante da situação de superendividamento, pode-se constatar, nas fichas de atendimento e relatórios sociais das pessoas atendidas no Projeto Apoio, que elas sofrem ameaças de perda de patrimônio (como imóveis e automóveis, etc.) e de suspensão do documento de CPF (Comprovante de Situação Cadastral), além de receberem diversas ligações telefônicas de cobrança, que lhes causam extremo constrangimento (visto que o rótulo de “mau pagador” tem repercussão moral) e as põem em situações vexatórias diante da família e dos grupos sociais que frequentam (Pereira; Almeida, 2020). Ressalta-se que, no ordenamento jurídico brasileiro, nem todas as dívidas acarretam perda de patrimônio, salvo as dívidas de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e de valor condominial, ou se os imóveis constam como garantia nas cláusulas de contrato do crédito. Há que se observar que o baixo nível de educação escolarizada contribui para que o cidadão fique mais sujeito às artimanhas do capital financeiro.

Também como consequências sociais, a pessoa superendividada pode sofrer vários tipos de violência, como violência física, violência psicológica e emocional, violência sexual e violência econômica ou patrimonial. É imperioso destacar que as mulheres são as principais representantes das famílias superendividadas a buscarem atendimento, muitas vezes sendo acometidas por situações de violência por parte de familiares ou credores.

Com o não atendimento das necessidades sociais pelas políticas sociais, como, por exemplo, segurança de renda, segurança alimentar, saúde, benefícios assistenciais e previdenciários, só para citar algumas, cresceu o comprometimento do rendimento mensal das famílias. Percebeu-se a conformação de uma sociedade doente, desprotegida, vulnerável e



desinformada sobre a questão da financeirização e das estratégias das empresas de cartão de crédito; uma sociedade que adquiriu empréstimos para garantir as condições básicas de vida, como: alimentação, moradia (aluguel e IPTU), medicações e material de higienização, saneamento básico, luz, água, etc. Configura-se, pois, uma sociedade sem acesso aos direitos considerados fundamentais, descritos na Constituição Federal Brasileira em seu artigo 6º:

São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015) (Brasil, 1988).

O Conselho Nacional de Justiça, na cartilha sobre o tratamento do superendividamento do consumidor, destaca que as questões relacionadas ao superendividamento não se restringem a aspecto meramente técnico-jurídico e pressupõem programas de prevenção e tratamento, calcados em eixos de atuação diversos, a saber: jurídico, pedagógico (educação financeira), psicológico e econômico-social. A atuação do Poder Judiciário, no que se refere à temática, deve conferir ao cidadão um amplo acesso à justiça, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa e à necessidade de preservação do mínimo existencial<sup>13</sup> (CNJ, 2021).

<sup>13</sup> O mínimo existencial é conceito de difícil definição, pois, em cada caso, pode apresentar-se sob um aspecto diferente e em quantidades diferentes, a depender das necessidades e possibilidades de cada pessoa. Muito se discute sobre um percentual para se garantir um mínimo existencial, como 30% da renda. Para fins deste escrito científico, considera-se mínimo existencial o conjunto básico de direitos fundamentais que assegura a cada pessoa uma vida digna, como saúde, alimentação e educação. Portanto, aquele que não tenha condições, por si só ou por sua família, de sustentar-se deverá receber auxílio do Estado e da sociedade. É a fração mínima da renda do cidadão que não pode ser comprometida com dívidas (debitada no consignado ou bloqueada pelo banco, por exemplo). A garantia de preservação do mínimo existencial foi incluída como direito básico do consumidor pela Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que entrou em vigor em 2 de julho de 2021, alterando o Código de Defesa do Consumidor, para disciplinar o fornecimento de crédito responsável e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento (Saraiva, 2023). Para tanto, em 20 de junho de 2023, foi publicado e entrou em vigor o Decreto nº 11.567/2023,



Nessa perspectiva, com o intuito de democratizar as informações para as famílias, resguardar o princípio da dignidade humana e promover a preservação do mínimo existencial, elencaram-se alguns cuidados para as pessoas não se endividarem:

- Não contratar créditos ou empréstimos de credores pouco conhecidos;
- Ler e exigir cópia do contrato das instituições financeiras;
- Solicitar todas as informações sobre o crédito ou empréstimo a ser contratado;
- Considerar a possibilidade de perda de renda, por motivos de aposentadoria, desemprego, redução salarial etc. e de imprevistos em curto, médio e longo prazo;
- Evitar gastar todo o limite do cartão de crédito ou do cheque especial;
- Priorizar gastos básicos, como: alimentação, água, luz e aluguel, entre outros;
- Privilegiar pagar as contas e débitos que concorram para o risco de perder bens patrimoniais, como IPTU e condomínio;
- Evitar várias prestações simultâneas ou parcelamentos de longo prazo;
- Calcular o valor total do crédito ou empréstimo (juros, encargos por atraso etc.), para obter uma contratação consciente;
- Evitar emprestar “o nome” ou o cartão de crédito a familiares e amigos, para dívidas e empréstimos;

---

assinado pelo Presidente Luis Inácio Lula da Silva, para, em relação ao artigo 3º do Decreto nº 11.150/2022, alterar o mínimo existencial de R\$ 303,00 para R\$ 600,00. Segundo Bertonceo (2022), considerada a dimensão como direito de defesa, a preservação do mínimo existencial expressa a necessária proteção do Estado, destinando conteúdo que assegure concretamente a dignidade do consumidor. Para a autora, o mínimo não é menos nem ínfimo. É um conceito apto à construção do razoável e do justo.



- Esquivar-se de fornecer seu cartão e dados a desconhecidos ou a alguém em quem não confia;
- Em caso de dúvida ou citação por superendividamento, procurar auxílio jurídico nas defensorias públicas do município em questão.

As instruções acima são imprescindíveis, mas parcas para dar conta da dimensão e do caráter expansivo do superendividamento da classe trabalhadora mais empobrecida. Há que se pensar em políticas públicas que incorporem o superendividamento na agenda da educação em direitos humanos.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

O superendividamento é uma situação mundial e de preocupação de mesmo âmbito, que pode ter consequências jurídicas, psíquicas e sociais. No Brasil, considerado um país em desenvolvimento, na fase do capitalismo financeiro, o superendividamento da classe trabalhadora, sobretudo da população mais vulnerável, está em ascensão. Destaca-se o superendividamento do tipo passivo, que advém da redução brusca da renda, decorrente, por exemplo, da perda do emprego ou do adoecimento individual e/ou familiar.

Para além da concepção de superendividamento como a impossibilidade de pagamento das dívidas vencidas ou a vencer, entende-se a temática como expressão da questão social, ou seja, como uma refração da desigualdade entre capital e trabalho. Essa disparidade também se expressa na relação contratual entre consumidor e fornecedor, quando



emergem as vulnerabilidades técnicas, jurídicas e socioeconômicas dos trabalhadores.

O objetivo deste capítulo foi fazer uma revisão da temática do superendividamento, ressaltando seus diferentes aspectos e o aparato jurídico protetivo. Chamou-se atenção para as pessoas consideradas vulneráveis e hipervulneráveis, como forma de garantir sua proteção integral. Destaca-se a nova Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021) como um importante dispositivo legal de proteção ao consumidor, ainda precisando ser implementada de fato e mais bem interpretada.

Ressalta-se que o fenômeno do superendividamento é uma questão complexa e requer uma análise histórica, político-econômica, jurídica e social que inclua o não atendimento das necessidades sociais pelas políticas sociais – como, por exemplo, segurança de renda, segurança alimentar, saúde e benefícios assistenciais e previdenciários –, e não somente uma avaliação contratual entre consumidores e credores, o que se mostra importante, mas insuficiente diante da proporção que o superendividamento confere à vida dos trabalhadores.

Conclui-se elucidando o risco da naturalização do superendividamento da classe trabalhadora como se fosse proveniente tão somente de sua forma ativa, ou seja, de ingerência e descontrole das dívidas por parte dos cidadãos. A legislação e os juristas que tratam do tema enfatizam a importância da educação financeira como ferramenta para a prevenção dessa condição. Concorde-se com essa afirmação, mas é preciso uma ação em nível de política pública que incorpore o superendividamento como pauta de educação em direitos humanos, além de uma política de enfrentamento ao superendividamento, para o efetivo exercício da cidadania e para a proteção social dos trabalhadores, em face dos artifícios do capital financeiro e de suas ofertas de crédito fácil e flexível. Reconhece-se a importância da atuação do Ministério Público, com sua prerrogativa de defesa dos direitos sociais, para o



controle das instituições financeiras no que se refere aos abusos de oferta e de disponibilização de empréstimos e cartões de crédito a pessoas vulneráveis e hipervulneráveis.

Pensa-se também ser importante haver espaços de educação em superendividamento, na perspectiva da afirmação em direitos humanos, nas instituições de ensino (como temática transversal) e em instituições com natureza educativa, públicas e privadas, bem como em organizações de educação popular. O desenvolvimento de pesquisas científicas, projetos em gestão, ciclo de debates, oficinas e rodas de conversa sobre o tema são ferramentas importantes a serem usadas para a concretude desses espaços. Acresce-se a esses, a construção de uma frente em defesa das pessoas e famílias vulneráveis em situação de superendividamento. Enquanto não houver um plano de ações do Estado, o superendividamento afetará, de forma drástica, a vida das pessoas mais pobres, provocando a violação dos direitos humanos fundamentais da classe trabalhadora.

## REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Rosângela da Silva; LAUXEN, Rayana; OLIVEIRA, Alice. **O superendividamento da vida das trabalhadoras e dos trabalhadores, que participam do Projeto de Apoio às Famílias Superendividadas**. São Leopoldo/RS: UNISINOS, Relatório de Pesquisa, 2019. Mimeo.

AQUINO JÚNIOR, Geraldo Frazão de. A hipervulnerabilidade do consumidor de serviços financeiros digitais. *In*: EHRHARDT Jr., Marcos; LOBO, Fabíola (org.). **Vulnerabilidade e sua compreensão no Direito brasileiro**. Indaiatuba, São Paulo: Editora Foco, p. 43-64, 2021.



BARONE, Francisco Marcelo; SADER, Emir. Acesso ao crédito no Brasil: evolução e perspectivas. *In: Rev. Adm. Pública* 42 (6), Dez, 2008. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rap/a/TwryKYFwx8r4zRQyKX-5Q8MH/>. Acesso em: 24 ago. 2023.

BERTONCELLO, Káren Rick Danilevicz. **Mínimo existencial deve expressar a necessária proteção do Estado**. Consultor Jurídico - Boletim de notícias Conjur de 30 de julho de 2022. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2022-jul-30/karen-bertoncello-minimo-existencial-expressar-protecao-necessaria>. Acesso em: 20 ago. 2023.

BUCAR, Daniel; PIRES, Caio Ribeiro. Vulnerabilidade, superendividamento e gênero: entre números, problemas e soluções. *In: EHRHARDT Jr., Marcos; LOBO, Fabíola (org.). Vulnerabilidade e sua compreensão no Direito brasileiro*. Indaiatuba, São Paulo: Editora Foco, p.167-180, 2021.

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, n. 191-A, p. 1, 5 out. 1988. Legislação Informatizada – Constituição de 1988 – Publicação Original. Disponível em: [w2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1988/constituicao-1988-5-outubro-1988-322142-publicacaooriginal-1-pl.html](http://w2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1988/constituicao-1988-5-outubro-1988-322142-publicacaooriginal-1-pl.html). Acesso em: 24 ago. 2023.

BRASIL. Lei n. 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. 18769, 8 dez. 1993. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/LEIS/L8742.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8742.htm). Acesso em: 24 ago. 2023.

BRASIL. Lei n. 10.820, de 17 de dezembro de 2003. Dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. 1, 18 dez. 2003. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/2003/L10.820.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.820.htm). Acesso em: 2 ago. 2023.



BRASIL. Medida Provisória nº 936, de 1º de abril de 2020. Institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19), de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. 1, 1 abr. 2020. Brasília, Brasil, 2020a. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv936.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv936.htm). Acesso em: 07 jul. 2023.

BRASIL. Lei n. 13.982, de 2 de abril de 2020. Altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, para dispor sobre parâmetros adicionais de caracterização da situação de vulnerabilidade social para fins de elegibilidade ao benefício de prestação continuada (BPC), e estabelece medidas excepcionais de proteção social a serem adotadas durante o período de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19) responsável pelo surto de 2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. 1, 2 abr. 2020. 2020b. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_Ato2019-2022/2020/Lei/L13982.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13982.htm). Acesso em: 24 ago. 2023.

BRASIL. Lei n. 14.811 de 1º de julho de 2021. Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), e a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. 2, 2 set. 2021. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_Ato2019-2022/2021/Lei/L14181.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14181.htm). Acesso em: 24 ago. 2023.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Bolsa Família. Disponível em: <https://www.gov.br/mds/pt-br/acoes-e-programas/bolsa-familia>. Acesso em: 18 ago. 2023.

CASTEL, Robert *et al.* **Desigualdade e a questão social**. 2. ed. ver. ampl. São Paulo: Educ, 2000.



CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CNJ. **Cartilha sobre o tratamento do superendividamento do consumidor**. Conselho Nacional de Justiça, Brasília: Brasil, 2021. Disponível em: <https://bibliotecadigital.cnj.jus.br/jspui/bitstream/123456789/594/1/cartilha-superendividamento.pdf>. Acesso em 24 de agosto de 2023.

DIEESE. **Boletim em Pauta n. 15**, julho, 2020. Disponível em: <https://www.dieese.org.br/boletimempregoempauta/2020/boletimEmpregoEmPauta15.html>. Acesso em: 24 ago. 2023.

BOLZANI, Isabela; MARTINS, Raphael; MURARO, Cauê. Censo 2022: Brasil tem 203 milhões de habitantes, 4,7 milhões a menos que estimativa do IBGE. G1 Economia. 28 jun. 2023. Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/censo/noticia/2023/06/28/censo-2022-brasil-tem-203-milhoes-de-habitantes-47-milhoes-a-menos-que-estimativa-do-ibge.ghtml>. Acesso em: 20 ago. 2023.

IAMAMOTO. Marilda Vilela. **O Serviço Social na contemporaneidade: trabalho e formação profissional**. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1999.

LOBO, Fabíola Albuquerque; COSTA, Cora Cristina Ramos Barros. A proteção jurídica da hipervulnerabilidade do idoso superendividado na sociedade de consumo. In: EHRHARDT Jr., Marcos; LOBO, Fabíola (org.). **Vulnerabilidade e sua compreensão no Direito brasileiro**. Indaiatuba, São Paulo: Editora Foco, p. 65-95, 2021.

MARQUES, Claudia Lima. Sugestões para uma lei sobre o tratamento do superendividamento de pessoas físicas em contratos de crédito ao consumo: proposições com base em pesquisa empírica de 100 casos no Rio Grande do Sul. In: MARQUES, Claudia Lima; CAVALLAZZI, Rosângela Lunardelli (coord.). **Direitos do consumidor endividado: superendividamento e crédito**. São Paulo: Ed. RT, p. 255, 2006.



MARQUES, Claudia Lima; LIMA, Clarissa Costa de; VIAL, Sophia Martini. Superendividamento dos consumidores no pós-pandemia e a necessária atualização do Código de Defesa do Consumidor. In: **Direito do Consumidor**: reflexões quanto aos impactos da pandemia de Covid-19/Coordenação: Alexandre David Malfatti, Paulo Henrique Ribeiro Garcia e Sérgio Seiji Shimura. São Paulo: Escola Paulista da Magistratura, v. 1. p. 107-144, 2020.

MERCOSUL. **Resolução nº 124/1996 do Grupo do Mercado Comum** (GMC) In: Normativas dos órgãos decisórios do Mercosul. Disponível em: <https://www.mercosur.int/pt-br/documentos-e-normativa/normativa/>. Acesso em: 24 ago. 2023.

OBSERVASINOS. Observatório da realidade e das políticas do Vale do Rio do Sinos. Região Metropolitana de Porto Alegre é uma das que mais perdeu renda do trabalho na pandemia.2025. Disponível em: <https://ihu.unisinos.br/observasinos/acoes/especial-coronavirus/regiao-metropolitana-de-porto-alegre-e-uma-das-que-mais-perdeu-renda-do-trabalho-na-pandemia>. Acesso em: 20 ago. 2023.

PEREIRA, Letícia Maria; ALMEIDA, Rosângela da Silva. **O superendividamento na vida das trabalhadoras e dos trabalhadores**: por um olhar para além do aparente. 1ª ed. Curitiba: Appris, 2020.

SARAIVA. Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). Legislação Saraiva de Bolso. Rio de Janeiro: Saraiva, 1ª edição, 2023.

VIEIRA, Luciane Klein; FRAINER, Victória Maria. O Estatuto da Cidadania do Mercosul: perspectivas para os consumidores mercosulinos. In: MARQUES, Claudia Lima; VIEIRA, Luciane Klein e BAROCELLI, Sergio Sebastián. **Los 30 años del MERCOSUR**: avances, retrocesos y desafíos en materia de protección al consumidor/Dora Szafir [et al.]; 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: IJ Editores, 2021. Libro digital, EPUB.



VIOLA, Solon Eduardo Annes. **Direitos Humanos e Democracia**. Editora da Universidade do Vale do Rio do Sinos: São Leopoldo, 2008.

VIOLA, Solon Eduardo Annes; ZENAIDE, Maria de Nazaré Tavares. A carência de Direitos Humanos e os limites da democracia. *In*: TOSI, Giuseppe; FERREIRA, Lúcia de Fátima Guerra; ZENAIDE, Maria de Nazaré Tavares (org.). **A formação em direitos humanos na educação superior no Brasil**: trajetórias, desafios e perspectivas. João Pessoa: Editora da UFBP, 2014.

